



UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POSGRADO



MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

“El tratamiento probatorio de la declaración del acusado en juicio oral y las contradicciones en los argumentos de defensa según su declaración previa, Juzgados Penales de Chiclayo, año 2018”

TESIS

**Presentada para optar el Grado Académico de
Maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales**

AUTOR:

Abog. Puelles Mauriola, Pedro

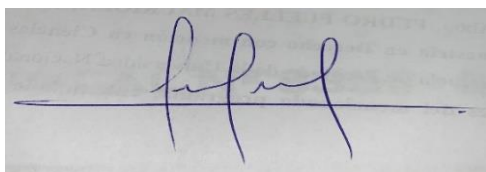
ASESORA:

Mag. Colina Moreno, Mary

LAMBAYEQUE - PERÚ

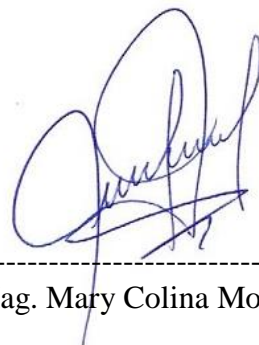
2020

“El tratamiento probatorio de la declaración del acusado en juicio oral y las contradicciones en los argumentos de defensa según su declaración previa, Juzgados Penales de Chiclayo, año 2018”



Abog. Pedro Puellas Mauriola

Autor



Mag. Mary Colina Moreno

Asesora

Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado Académico de: MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

Aprobado por:



PRESIDENTE

Dr. José María Balcazar Zelada
Presidente del Jurado



Dr. Luis Humberto Falla Lamadrid




VOCAL

Mag. Francisco Santiago Delgado Paredes
Vocal del Jurado

Lambayeque, 2020

Acta de sustentación (copia)

 UNPRG <small>UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO</small>	ESCUELA DE POSGRADO <i>M. Sc. Francisco Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS</u>	Pág. 1 de 3	

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS

Siendo la 1:15 p.m. del día lunes 14 de diciembre de 2020, se dio inicio a la Sustentación Virtual de Tesis soportado por el sistema Blackboard Ultra, preparado y controlado por la Unidad de Tele Educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con la participación en la Video Conferencia de los miembros del Jurado, nombrados con Resolución N°519-2020-EPG, de fecha 22 de septiembre de 2020, conformado por:

Dr. JOSE MARIA BALCAZAR ZELADA	Presidente
Dr. LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID	Secretario
M.Sc. FRANCISCO SANTIAGO DELGADO PAREDES	Vocal
M.Sc. MARY ISABEL COLINA MORENO	Asesor


Para evaluar el informe de tesis del tesista PEDRO PUELLES MAURIOLA, candidato a optar el grado de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES con la tesis titulada "EL TRATAMIENTO PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO EN JUICIO ORAL Y LAS CONTRADICCIONES EN LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA SEGUN SU DECLARACIÓN PREVIA, JUZGADOS PENALES DE CHICLAYO, AÑO 2018".

El Sr. Presidente, después de transmitir el saludo a todos los participantes en la Video Conferencia de la Sustentación Virtual ordenó la lectura de la Resolución N°649-2020-EPG de fecha 07 de diciembre de 2020 que autoriza la Sustentación Virtual del Informe de Tesis correspondiente, luego de lo cual autorizó al candidato a efectuar la Sustentación Virtual, otorgándole 45 minutos de tiempo y autorizando también compartir su pantalla.

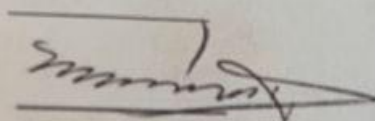
Culminada la exposición del candidato, se procedió a la intervención de los miembros del jurado, exponiendo sus opiniones y observaciones correspondientes, posteriormente se realizaron las preguntas al candidato.

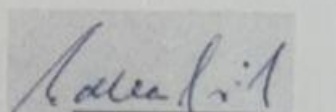
Culminadas las preguntas y respuestas, el Sr. Presidente, autorizó el pase de los miembros del Jurado a la sala de video conferencia reservada para el debate sobre la Sustentación Virtual del Informe de tesis realizada por el candidato, evaluando en base a la rúbrica de sustentación y determinando el resultado total de la tesis con 18 puntos, equivalente a MUY BUENO, quedando el candidato apto para optar el Grado de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES.

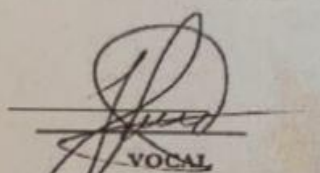
Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI- EPG - UNPRG	Actualización:
--------------------------	-----------------------------	----------------

 UNPRG Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	ESCUELA DE POSGRADO <i>M. Sc. Francis Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS		Pág. 2 de 3

Se retornó a la Video Conferencia de Sustentación Virtual, se dio a conocer el resultado, dando lectura del acta y se culminó con los actos finales en la Video Conferencia de Sustentación Virtual. Siendo las 2:32 p.m. se dio por concluido el acto de Sustentación Virtual.


PRESIDENTE


SECRETARIO


VOCAL

ASESOR

En el Acta de Sustentación se evidencia el proceso de sustentación de tesis. La misma que ha sido refrendada por el jurado conformado por presidente, secretario y vocal, más no, se registra la firma del asesor, cuya labor efectiva es durante el proceso de elaboración de tesis y su presencia en el acto de sustentación de la tesis es voluntaria. Por lo tanto, su ausencia no invalida el acto de sustentación.


El/la sustentante cumple con los requisitos para la emisión de su grado académico correspondiente.

Lambayeque, 15 de febrero de 2021


Dra. TOMASA VALLEJOS SOSA
Directora (e) EPG


Dr. LUIS JAIME COLLANTES SANTISTEBAN
Director Académico

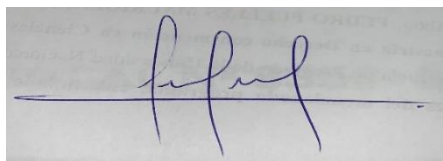
NOTA: La existencia del acta en los archivos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; ha sido verificada por la Sra. Gloria Luisa Carranza Velásquez, quien con su firma da fe de lo mencionado.


Lir. Gloria Luisa Carranza Velásquez
Personal Administrativo

Declaración jurada de originalidad

Yo, Pedro Puelles Mauriola, investigador principal, y Mary Isabel Colina Moreno, asesora del trabajo de investigación **“EL TRATAMIENTO PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO EN JUICIO ORAL Y LAS CONTRADICCIONES EN LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA SEGÚN SU DECLARACIÓN PREVIA, JUZGADOS PENALES DE CHICLAYO, AÑO 2018”**, declaramos bajo juramento que este trabajo no ha sido plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se demostrara lo contrario, asumo responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que hubiere lugar. Que puede conducir a la anulación del título o grado emitido como consecuencia de este informe.

Lambayeque, 28 de octubre de 2020.



Abog. Pedro Puelles Mauriola

Investigador



Mag. Mary Isabel Colina Moreno

Asesora

Dedicatoria

A mi esposa Zully Criss, a mi hija Gia Ainara, a mis padres Pedro Lamberto y Ena Santos, y a mis hermanos Luis Enrique, Elver Antonio y Lesly Thalia; por ser quienes cada día me motivan a emprender caminos de superación personal, familiar y profesional.

Agradecimiento

A los profesores de mi alma mater: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, por las enseñanzas y valores inculcados; y de forma especial, a mi asesora, Mg. Mary Isabel Colina Moreno por la orientación y atención que le mereció mi trabajo de tesis.

Índice General

Acta de sustentación (copia).....	iii
Declaración jurada de originalidad.....	v
Dedicatoria.....	vi
Agradecimiento.....	vii
Índice General.....	viii
Índice de Anexos.....	xii
Resumen.....	xiii
Abstract.....	xv
Introducción.....	17
Capítulo I. Diseño Teórico.....	21
1.1. Antecedentes de la Investigación.....	21
1.2. Bases Teórica.....	27
1.2.1 Sistemas de valoración probatoria.....	27
1.2.1.1 Sistema de prueba legal o tazada.....	29
1.2.1.2 Sistema de libre convicción.....	30
1.2.1.2.1 Íntima convicción.....	30
1.2.1.2.2 La sana crítica.....	31
1.2.1.3 El sistema de valoración probatoria en el modelo procesal penal de 2004.....	33
1.2.2 Criterios de valoración probatoria en el nuevo proceso penal.....	36
1.2.2.1 El examen de la prueba según la lógica.....	40
1.2.2.2 El examen de la prueba según la ciencia.....	41
1.2.2.3 El examen de la prueba según las máximas de la experiencia.....	42
1.2.2.4 Hacia un criterio epistémico de estimación probatoria.....	44
1.2.3 El juicio oral.....	49
1.2.3.1 Actos de investigación.....	52
1.2.3.2 Actos de prueba.....	55
1.2.3.3 La declaración del acusado: ¿acto de investigación o de prueba?.....	56

1.2.3.4 Concepto.....	58
1.2.3.5 Fases del juicio oral.....	59
1.2.3.6 El periodo probatorio.....	60
1.2.3.7 Derecho a declarar y a no hacerlo.....	62
1.2.3.8 Reglas de la declaración del acusado en juicio.....	63
1.2.3.9 Oportunidad de su actuación.....	65
1.2.4 La declaración del acusado en el plenario.....	68
1.2.4.1 Acusado: Uso correcto de su denominación	68
1.2.4.2 La declaración.....	72
1.2.4.3 La declaración del acusado.....	73
1.2.4.4 Naturaleza de la declaración del acusado: ¿Medio de defensa privado de prueba?.....	73
1.2.4.4.1 El sistema inquisitivo.....	74
1.2.4.4.2 El sistema acusatorio.....	76
1.2.4.4.3 El sistema procesal del modelo adjetivo penal de 2004....	77
1.2.4.5 El acusado: ¿sujeto u objeto de derecho?.....	78
1.2.5 La valoración probatoria de la declaración del acusado.....	84
1.2.6 Declaración previa del acusado.....	87
1.2.6.1 Definición de declaración previa.....	87
1.2.6.2 Regulación normativa	88
1.2.6.3 Requisitos de validez.....	89
1.2.6.4 Control de legalidad: ¿existe?.....	92
1.2.6.5 Uso e importancia	95
1.2.6.6 Valor probatorio de las declaraciones previas.....	100
1.2.7 El principio de no autoincriminación.....	103
1.2.7.1 Marco normativo internacional.....	103
1.2.7.2 Marco normativo nacional.....	105
1.2.7.3 Contenido constitucional.....	106
1.2.8 Jurisprudencia	110
1.3. Definiciones Conceptuales.....	118
1.3.1. La Prueba.....	118
1.3.2. Prueba directa, indirecta, corroborada y única.....	119

1.3.3. Prueba lícita.....	119
1.3.4. Estrategia de defensa.....	119
1.4. Operacionalización de Variables.....	120
1.5. Hipótesis.....	121
Capítulo II. Métodos y Materiales.....	122
2.1 Tipo de investigación.....	122
2.2 Método de investigación.....	122
2.3 Diseño de Contrastación.....	124
2.4 Población, Muestra y Muestreo.....	124
2.5 Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos.....	125
2.6 Procesamiento y Análisis de Datos.....	126
Capítulo III. Resultados.....	127
3.1 Presentación de Resultados.....	127
3.1.1 Sentencias.....	128
3.1.2 Presentación de tablas, gráficos estadísticos e interpretación.....	185
3.2 Presentación de la Información.....	200
Capítulo IV. Discusión.....	204
4.1 Motivación inicial.....	204
4.2 Validez interna.....	205
4.3. Validez externa.....	206
4.4 Análisis comparativo.....	207
4.5 Toma de posición.....	212
4.5.1 La declaración del acusado como medio de defensa sui generis.....	212
4.5.2 No autoincriminación y confesión.....	216
4.5.3 No autoincriminación y derecho al silencio.....	219
4.5.4 No autoincriminación y valoración de la declaración del acusado....	229
4.5.5. La valoración contra reo de la declaración del acusado y el ejercicio de su defensa material.....	231

4.6 Discusión de Resultados.....	234
4.7 Contratación de la Hipótesis.....	241
4.8 Propuesta Lege Ferenda.....	242
Conclusiones.....	246
Recomendaciones.....	249
Referencias Bibliográficas.....	250
Anexos.....	254

Índice de Anexos

Anexo 1: Datos Básicos del Problema.....	254
Anexo 2: Instrumentos de Recolección de Datos: Guía de cotejos para el recojo de la información encontrada en las sentencias analizadas.....	257
Anexo 3: Expedientes objeto de muestra, estudio y análisis.....	259

Resumen

El presente trabajo de investigación se hizo con el objetivo de llegar a establecer cuál es el tratamiento probatorio de la declaración del acusado, por parte de los juzgados penales de juzgamiento de Chiclayo, cuando ésta es contrastada con su declaración previa a efectos de evidenciar contradicciones en su defensa. Con dicho fin optamos por utilizar un diseño de investigación de corte descriptivo –explicativo. Empleamos la observación como técnica de investigación, y el análisis de datos y fichaje como instrumentos de acopio de información y síntesis de la misma. Usamos los métodos: descriptivo, explicativo, inductivo, deductivo, analítico y sintético. Nuestra población estuvo constituida por los juzgados penales de juzgamiento de Chiclayo, y nuestra muestra de estudio por veinte sentencias condenatorias. Como resultados hemos encontrado que los jueces de juzgamiento de Chiclayo valoran la aludida declaración desde dos perspectivas: para contradecir la propia versión de defensa que el acusado expone en el desarrollo del juicio oral, y para formar certeza positiva sobre su responsabilidad penal. También hemos llegado a advertir que en ningún caso se activan mecanismos de control previos para garantizar que las declaraciones previas hayan sido obtenidas respetándose las reglas que rigen el desarrollo de la declaración del investigado en sede de investigación preparatoria previstas en los artículos 86 a 89 del Código procesal penal, así como las previstas en el artículo 376 numerales 2 y 3 del mismo cuerpo legal; y tampoco se garantiza el derecho de contradicción al momento que se incorporan las declaraciones previas al plenario a través de su lectura, a efectos de cuestionar la clase de pregunta que se pretende incorporar y que motivó una respuesta por parte del otrora acusado. Concluimos, además, que, el tratamiento que se da a la declaración previa del acusado es como si fuera el de un medio probatorio, esto es, que la respuesta que en audiencia de juzgamiento oral se incorpora al plenario, es asumida por el Juez penal como prueba de responsabilidad. Por ello, terminamos recomendando que de lege ferenda se modifique el

artículo 376 del Código Procesal Penal, a efectos que se incorporen de forma taxativa mecanismos de control de legalidad y de contradicción sobre el uso de las declaraciones previas del acusado en el juicio oral.

Palabras claves: El acusado. Tratamiento probatorio de la declaración del acusado. Uso de declaraciones previas. Criterios de valoración probatoria. La no autoincriminación.

Abstract

This research work was carried out with the objective of establishing what is the probative treatment of the defendant's statement, by the Chiclayo criminal courts, when it is contrasted with his previous statement in order to show contradictions in your defense. To this end, we chose to use a descriptive-explanatory research design. We use observation as a research technique, and data analysis and recording as instruments for gathering information and synthesizing it. We use the methods: descriptive, explanatory, inductive, deductive, analytical and synthetic. Our population was made up of the Chiclayo criminal courts, and our study sample consisted of twenty convictions. As a result, we have found that the Chiclayo trial judges value the aforementioned statement from two perspectives: to contradict the defense version that the accused exposes in the development of the oral trial, and to form positive certainty about their criminal responsibility. We have also come to warn that in no case are previous control mechanisms activated to guarantee that the previous statements have been obtained respecting the rules that govern the development of the statement of the investigated in the preparatory investigation headquarters provided for in articles 86 to 89 of the Code criminal procedure, as well as those provided for in article 376 numerals 2 and 3 of the same legal body; Nor is the right of contradiction guaranteed when the statements prior to the plenary are incorporated through their reading, in order to question the kind of question that is intended to be incorporated and that prompted a response from the former accused. We also conclude that the treatment given to the defendant's previous statement is as if it were an evidentiary means, that is, that the answer that is incorporated into the plenary at the oral trial hearing is assumed by the criminal judge as proof of responsibility. For this reason, we end up recommending that article 376 of the Criminal Procedure Code be amended *de lege ferenda*, in order to strictly incorporate mechanisms to

control legality and contradiction regarding the use of the defendant's previous statements in the oral trial.

Introducción

El artículo 139.3 de nuestra Constitución Política del Perú, reconoce y garantiza el derecho implícito, derivado del debido proceso, a la no autoincriminación, cuya pregonación, cuanto menos teórica, implicaría que bajo ningún argumento podría justificarse el uso del propio testimonio del acusado para sustentar una sentencia condenatoria, sea para dar por probados hechos periféricos o medulares de la imputación.

Un aspecto controversial lo encontramos en nuestra legislación procesal penal de 2004, cuando a través de su artículo 376 numeral 1, tal cual fórmula conminativa, autoriza al órgano jurisdiccional a dar lectura a las declaraciones previas que el acusado haya brindado en sede de investigación preparatoria ante el fiscal, en el supuesto de que aquel ejerza su derecho a guardar silencio en la etapa de juzgamiento.

Incluso, hoy la jurisprudencia nacional se ha pronunciado ampliando el radio de alcance procesal del uso de las denominadas declaraciones previas del acusado (documentadas), al permitir su uso e incorporación al juicio oral, cuando aquel decide dar su versión ante el juez de juzgamiento.

Entonces, frente a la pregonación constitucional del derecho a la no inculpación, y el debido proceso, preexiste en un plano inferior la autorización legal y jurisprudencial para que las declaraciones que el acusado dio ante el fiscal puedan ser utilizadas por el Ministerio Público o el actor civil con la finalidad de evidenciar ante el juez que la versión presentada por el acusado en juicio es mendaz o incompleta.

Lo llamativo es que, pese a estas permisiones, no existe norma procesal alguna que regule un procedimiento de control de legalidad, como filtro previo, sobre el uso de las declaraciones previas a nivel del plenario, como sí ocurre con la normativa referida a los

testigos y peritos, respecto de la cual, incluso, se garantiza el contradictorio como principio básico de formación de la prueba plenaria que sirve para fundar un fallo judicial, y, además, preexisten reglas normativas de procedencia o no de la lectura de dichos actos en caso de inconcurrencia a juicio del testigo o perito.

El escenario presentado nos llevó a formularnos tres interrogantes esenciales: ¿Por qué un elemento de convicción obtenido en la etapa de investigación preparatoria puede ser utilizado en el juicio oral como si se tratase de una prueba preconstituida, y sin sujeción a control de legalidad alguno al momento de ser ingresado al plenario? Yendo más allá: ¿Cómo es tratada probatoriamente la declaración del acusado, cuando se hacen uso de sus declaraciones previas para denotar contradicciones en su defensa? ¿Es utilizada como fundamento de certeza positiva contra reo?

Por ello, estudiar el tratamiento de la declaración del acusado se convierte en un reto, sobre todo cuando hasta el momento preexiste la discusión de si se trata de un medio de defensa o de un medio de prueba, y las amplias repercusiones que cada postura tiene al momento de abordar su tratamiento probatorio.

Por esas razones, tomé la decisión de llevar a cabo la investigación que he titulado: **“EL TRATAMIENTO PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO EN JUICIO ORAL Y LAS CONTRADICCIONES EN LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA SEGÚN SU DECLARACIÓN PREVIA, JUZGADOS PENALES DE CHICLAYO, AÑO 2018”**, a efectos de conocer, desde un enfoque procesal adscrito al derecho penal y constitucional, cómo en la práctica del Distrito Judicial de Lambayeque, propiamente en los juzgados penales de juzgamiento de Chiclayo, se viene tratando probatoriamente la declaración del acusado.

En un plano general, el trabajo que hemos desarrollado versa precisamente sobre la validez de la incorporación al juzgamiento de la declaración del acusado, frente a las garantías que deben observarse con referencia a este aspecto, incidiendo en si su uso vulnera o no el derecho a la no autoinculpación que, qué duda cabe, es el argumento más fuerte para generar una posición constitucional en contra de la posición regulada por nuestra norma procesal penal y por la práctica procesal.

Hipotéticamente, sostengo que: *“Si la declaración del acusado en juicio oral es contrastada con su declaración previa para establecer contradicciones en los argumentos de defensa, entonces, probatoriamente es tratada como fundamento de certeza positiva por los juzgados de juzgamiento penales de Chiclayo para sustentar juicios de responsabilidad penal”*. Para contrastar la hipótesis consideré pertinente estructurar el trabajo siguiendo el Protocolo para la obtención de Grados Académicos en la Escuela de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, aprobado por Resolución N° 041-2019-CD-EPG, del 10 de octubre de 2019, esto es, en cuatro capítulos: Capítulo I: Diseño Teórico, dividido en: Antecedentes de la investigación, base teórica y definiciones conceptuales; Capítulo II: Métodos y Materiales; Capítulo III: Resultados; y Capítulo IV: Discusión, además, de presentar las Conclusiones y Recomendaciones que han merecido, así como las Referencias Bibliográficas y Anexos en los que se sustenta el cuerpo de nuestro trabajo científico, que partiendo de bases teóricas, colige en base a lo práctico.

Asimismo, cabe puntualizar que, como parte del capítulo I, referido a nuestras bases teóricas, hemos desarrollado los siguientes temas: a) Sistemas de valoración probatoria; b) Criterios de valoración probatoria en el nuevo proceso penal; c) El juicio oral; d) La declaración del acusado en el plenario; e) La valoración probatoria de la declaración del acusado; f) Declaración previa del acusado; g) El principio de no autoincriminación; e, i)

Jurisprudencia. Temas cuyo desarrollo no se limita a la realización de citas textuales o parafraseadas.

En el capítulo II, que versa sobre los métodos y materiales, precisamos el tipo de investigación, los métodos que hemos utilizado, el diseño de contrastación de nuestra hipótesis, la población, muestra y muestreo, técnicas, instrumentos, equipos y materiales de datos, y, por último, el procesamiento y análisis de resultados.

En el capítulo III, realizamos la presentación de nuestros resultados a través de tablas con doble entrada, y gráficos estadísticos, obtenidos luego de analizar las 20 sentencias estudiadas y analizadas. Además, ya como parte del tratamiento de datos, presentamos la información que hemos recabado como consecuencia de haber procesado los resultados obtenidos.

En el capítulo IV, abordamos la discusión de los resultados a partir del logro de los objetivos de la investigación, agregando a esto, el tema de la contrastación de la hipótesis que formulamos, y, en base a todo lo obtenido, realizamos una propuesta de lege referenda que incide en la modificación del texto normativo previsto en artículo 376 del Código procesal penal. También presentamos nuestra posición sobre la naturaleza de la declaración del acusado, su tratamiento probatorio, y su vinculación con los derechos a la no autoincriminación y a la defensa material.

Luego, se aluden a las conclusiones y recomendaciones.

Nuestro propósito es, en base al estudio de las sentencias expedidas por los juzgados de juzgamiento de Chiclayo, presentar la realidad procesal de la localidad en la que nos desempeñamos jurídica y laboralmente, pero, además, sentar posición respecto de la viabilidad constitucional del uso o no de las declaraciones previas del acusado a nivel del plenario, sea cuando éste ejerza su derecho a guardar silencio o cuando decide ejercer su

defensa material, así como proponer pautas sobre la necesidad de regular normativamente un control de legalidad sobre el uso de las declaraciones previas del acusado, a efectos de dotar al órgano jurisdiccional y a la defensa, de potestades y herramientas legales – inexistentes a la fecha- respecto de un acto que fue efectuado por el Ministerio Público, que si bien tiene el deber de actuar con objetividad, empero, a nivel del plenario lleva una concepción de responsabilidad penal del acusado y por eso ha actuado en consecuencia formulando acusación y solicitando se le condene, en muchos casos, a penas privativas de libertad o cadena perpetua.

Se pone a consideración de nuestro jurado de tesis el presente trabajo de investigación, expresando que en el mismo se recoge el esfuerzo de estudio, el conocimiento adquirido y las ganas de superación a través de la educación.

EL AUTOR

Capítulo I. Diseño Teórico

1.1. Antecedentes de la investigación

Efectuadas las búsquedas –tesis en estricto– de los trabajos de investigación que preexisten a nuestro tema, y que como tales sirvieran de nuestros antecedentes, encontramos tres trabajos nacionales que recogían y desarrollaban cuanto menos una de las dos variables que desarrollaremos; nos referimos a los trabajos de investigación ejecutados por Malabrigo (2017), Ticona (2018) y Edquen (2020), cuyos aspectos más relevantes precisaremos en las siguientes líneas.

1.1.1. Malabrigo (2017) Criterios de Valoración de la Declaración del Acusado en los Expedientes Penales de la Sede de Corte, Arequipa, 2014¹.

El presente trabajo de tesis, sustentado en la casa de estudios de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, se propuso definir la naturaleza jurídica de la declaración de la persona sujeta a un proceso penal, y los problemas que, a partir de su consideración dogmática, se presentan en la práctica judicial de la Corte de Arequipa.

El autor parte de considerar que el Código procesal penal de 2004 no ha definido claramente la naturaleza jurídica de dicha declaración, y señala que ello sería el problema por el cual los magistrados de Arequipa vienen adoptando diferentes posiciones en torno a la valoración probatoria respecto de la declaración del acusado.

¹

Disponible en:
<http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/6960/88.1552.MG.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Como instrumento de campo, el tesista efectúa un análisis de sentencias expedidas por los despachos penales de Arequipa, año 2014. Para después, concluir, en base a su estudio, que los jueces valoran la prueba de acuerdo a su voluntad, y que ello, por tanto, genera inseguridad jurídica.

Asimismo, sus resultados lo llevaron a advertir que el 71% de los juzgados valoran la declaración del acusado como un medio de prueba, y, por ende, la utilizan para fundamentar su sentencia. Es más, advierte que en el 66% de los casos que analizó, y donde el acusado efectuó una declaración contra sí mismo, ésta fue utilizada como único elemento para sustentar su sentencia contra reo; además, precisa que esto último se refleja en todos los casos que terminan por conclusión anticipada de juicio donde solo se tiene en cuenta su declaración para condenar.

Por último, el trabajo en estudio también llega a concluir que cuando la declaración del imputado se utiliza para justificar su propia condena, entonces, ésta es valorada como medio de prueba; mientras que cuando se utiliza para absolver, es tratada como un medio de defensa.

De otro lado, hemos de precisar que la tesis en cuestión se planteó como **objetivo principal**: *“Identificar la naturaleza jurídica de la declaración del acusado”*. Asimismo, empleó una **metodología** basada en la *“Investigación documental y de campo, en un nivel Descriptiva y correlacional”*; utilizando como instrumentos *“(…) para la recolección de datos.... la técnica de “observación”, dado el empleo y medio para recabar la información.”* Se basó en una **muestra** de “93 expedientes tramitados durante el año 2014 en los Juzgados Penales Unipersonales y Colegiados de la sede

Central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa”, obteniendo como **resultados** los ya mencionados.

1.1.2. Ticona (2018) La declaración del imputado como medio de prueba o medio de defensa Arequipa 2017 -2018².

Ticona (2018) sustentó su trabajo en la Universidad San Agustín de Arequipa. El tesista utilizó dos instrumentos de recolección de datos: análisis de expedientes y entrevistas, a efectos de indagar cómo es considerada la declaración del acusado: si como medio de defensa o como medio de prueba.

De las entrevistas efectuadas, concluye el tesista que los jueces consideran a la declaración del imputado como un medio de defensa; sin embargo, al emitir sus sentencias la valoran como un medio de prueba.

Para el autor es inconstitucional la actual fórmula legislativa regulada en el artículo 376 numeral 1 del Código procesal penal cuyo texto vigente prescribe: “*Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal.*” De ahí la razón de su recomendación de lege erenda. En razón de ello, en la página 118 del aludido trabajo, el autor propone que se modifique el artículo 376.1 del Código adjetivo penal, a efectos que se deje de autorizar la lectura de las declaraciones previas del acusado cuando ejerce su derecho a guardar silencio en el plenario. La fórmula legislativa modificatoria

²Disponible en: [Encontrada en: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/7692](http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/7692)

propuesta es la siguiente: “**1. El acusado puede declarar libremente total o parcialmente, respetando las garantías mínimas de la declaración. (...)**”.

1.1.3. Edquen (2020) La valoración probatoria de las declaraciones previas del imputado frente al derecho a guardar silencio en juicio oral³.

El presente trabajo de investigación fue sustentado en la casa de estudios de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Edquen (2020) parte de considerar que el tenor del artículo 376 numeral 1 del Código procesal penal, contiene una cláusula coercitiva contra el acusado, al prescribir que se oralizarán sus declaraciones previas en caso guarde silencio en la etapa de juzgamiento; razón por la cual, sostiene que el actual texto normativo de la norma glosada violenta el debido proceso, así como los derechos de defensa y a la no autoincriminación.

Precisemos que el objetivo del referido trabajo fue: “*determinar si la oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral vulneraban o no las garantías constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva*”. Utilizó la encuesta como instrumento de recolecciones de datos.

En base a ello, concluye, como aspecto principal, que: “*La oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral se produce en razón del acogimiento al derecho a guardar silencio y en tanto hayan sido postuladas por el fiscal; por lo tanto, al*

³ Disponible en: <http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/8356/BC-4756%20EDQUEN%20GAVIDIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

vulnerar el principio de presunción de inocencia como garantía constitucional alteran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva ”.

Asimismo, el autor, en la página 91 del cuerpo de sus tesis, deja constancia que 49 de los 50 encuestados, afirmaron estar de acuerdo de que, la consecuencia directa del derecho a guardar silencio debe constituirse como el límite que impida la oralización de las declaraciones previas del imputado durante el juicio oral. Además, en la página 93, destaca que 41 de los 50 encuestados indicaron que se vulnera el debido proceso y el derecho de defensa del imputado cuando se considera a sus declaraciones previas como auténticos medios de prueba en el juicio y se propende a su valoración sin que el Fiscal las haya postulado.

De otro lado, el tesista, como parte de la contrastación de su hipótesis, página 109, sostiene que cuando se oralizan las declaraciones previas del imputado, se vulnera el debido proceso en razón del resquebrajamiento de la garantía que otorga el principio de presunción de inocencia, en el caso que éste haya ejercido en juicio su derecho a no declarar (guardar silencio).

Por último, en base a lo mencionado, y en su página 112 de la tesis, el autor termina recomendado que se modifique el artículo 376 inciso 1 del Código Procesal Penal, bajo la siguiente redacción: **“Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que aunque no declare el juicio continuará”.**

Ahora bien. conocidos los tres antecedentes que se encuentran vinculados con el trabajo de investigación que nos hemos propuesto ejecutar, entonces, pasaremos a desarrollar la

estructura principal del mismo con la finalidad de culminar con una propuesta también ligada a la modificatoria del artículo 376 del Código procesal penal pero desde otro enfoque, perspectiva, análisis y contenido.

1.2. Base teórica

1.2.1 Sistemas de valoración probatoria

En principio, hablar de los sistemas de valoración probatoria que existen en los ordenamientos jurídicos procesales, importa, por un lado, y en términos estrictamente conceptuales, conocer qué es valorar la prueba, entendida ésta como actividad exclusivamente jurisdiccional.

Para el escritor español Nieva (2010, p. 34), el juez, al valorar la prueba, efectúa una actividad de percepción en base a las resueltas de la actividad de la prueba realizada en el proceso. Por su parte, para la profesora española Gascón (2010, pp. 140-141) valorar la prueba implica efectuar un trabajo de verificación de los postulados fácticos que se introducen en el proceso por medio de los medios de prueba; pero, además, agrega, implica reconocerle a los mismos un valor de verdad o falsedad respecto de los hechos que son materia de juzgamiento.

De otro lado, el proceso de verificación de los hechos, así como el peso valorativo otorgado a cada uno de los medios de prueba -producto de valorarlos-, responden -siempre- al tipo de modelo o sistema procesal vigente en un determinado ordenamiento; y en ese sentido ha escrito el magistrado supremo Neyra (2015, p. 238), al referir que el acogimiento de un sistema de valoración de la prueba, implica la adhesión a una determinada política adjetiva, que se encarga de establecer las pautas bajo las cuales el magistrado ha de valorar y ponderar la eficacia reveladora de las pruebas que han sido incorporadas por las partes al proceso, y, además, fijan las pautas de cómo el juez debe manifestar sus conclusiones a partir de la valoración probatoria que efectúe.

En el mismo sentido, Arocena (2020, pp. 36-37), refiriéndose a la función de garantía de la prueba y su operatividad real, señala que el proceso de valoración de la prueba, es decir, la forma cómo dar por probados y no probados los enunciados fácticos que se constituyen en el objeto del proceso penal, se subordina al carácter autoritario o democrático del sistema procesal penal y –también– del tipo de Estado en el que se inserta un método determinado de comprobación.

Ahora bien, en cuanto a los tipos de sistemas de valoración probatoria, la literatura procesal peruana, a través de Talavera (2017, pp. 160-164), Neyra (Tomo II, 2015, pp. 238-247), Rosas (2018, pp. 452-456) y Castillo (2014, pp. 35-73), enseñan que existen dos sistemas: el de prueba legal o también llamada tasada, y el de libre convicción; y respecto de este último se precisa que existen dos modelos: la íntima convicción y la sana crítica.

Como parte de la literatura procesal extranjera, la profesora española Gascón (2010, p. 141) sostiene que se pueden establecer dos tipos de diseños de valoración de la prueba, según de que aquel esté o no predeterminado jurídicamente; aludiendo al modelo de prueba legal o tazada y al modelo de prueba libre.

Ahora, sobre cuál fue el sistema que operó inicialmente, Nieva (2010, p. 39) afirma que tuvo que ser el libre, en razón de que, en sus orígenes, el juez no contaba con norma escrita; por tanto, subyace a su lógica, la que por cierto compartimos, que el primer sistema en el mundo fue el libre.

Pero más allá de ello, unánimes son las posturas que sostienen que históricamente existieron, y aún existen, pero en plenitudes diferentes o mixturas, dos modelos o sistemas

de valoración probatoria: el sistema de prueba tazada o legal, y el sistema de libre convicción con sus dos vertientes ya mencionadas.

1.2.1.1 Sistema de prueba legal o tazada

Para Rosas (2018, p. 454), en un sistema de prueba tazada es la ley adjetiva la que se encarga, de forma genérica, de prefijar el valor acreditativo de cada prueba, al punto de establecer de qué forma y bajo qué condiciones el juez debe admitir su convencimiento respecto de la veracidad o no de un hecho (pese a que su subconsciente le diga lo contrario), y a la inversa.

En el mismo sentido, Gascón (2010, p. 141) señala que en un sistema de prueba tazada es el legislador quien se encarga de establecer de forma taxativa el valor que se debe asignar a cada medio de prueba, siendo que el juez sólo debe restringirse a colocar a la prueba el baremo preestablecido por el legislador.

Sin embargo, adoptando un sentido crítico, el profesor Talavera (2017) sostiene que este sistema “No es el más apropiado para llegar a la verdad real, porque la realidad de lo acontecido puede probarse de modo distinto a lo preestablecido probatoriamente por el legislador”. (p. 163)

1.2.1.2 Sistema de libre convicción

El abandono paulatino del sistema de prueba legal o tazada, por las razones expuestas precedentemente, abrió paso a la libre convicción como criterio de valoración probatoria, caracterizada por desterrar a ley de toda implicancia en la determinación valorativa de la prueba.

Para Gascón (2010) la libre convicción de la prueba “propicia la averiguación de la verdad” porque le permite al juez desligarse de cualquier valor de la prueba prefijado por el legislador. (p. 141)

Históricamente han existido dos modelos o formas de pregonar un sistema de libre convicción: la íntima convicción y la sana crítica.

1.2.1.2.1 Íntima convicción

En sus inicios, explica la profesora española Gascón (2010, p. 142), la libertad probatoria –como forma de valorar la prueba- era entendida como un principio que rechazaba a las pruebas tazadas para determinar un fallo judicial; sin embargo, después, la noción conceptual primigenia se desnaturalizó al punto de ser entendida como valoración libre, exenta de regla alguna.

Esta forma de entender la valoración libre de la prueba –sin sujeción a reglas- se denominó: **íntima convicción**.

Desglosando sus alcances conceptuales, Taruffo (2007, pp. 2-3) sostiene que bajo un sistema de íntima convicción –al que también llama irracionalista, retórica o subjetivista-, el juez llega a un estado de persuasión a partir de motivos desconocidos que nacen en su alma, mas no en su mente. Es decir, en un sistema de íntima convicción, como lo sostiene el profesor Rosas (2018, p. 454), no existe pauta alguna que rija el proceso de apreciación de la prueba. Por el contrario, el juez llega a convencerse de si algo es falso o verdadero, en razón de su leal entender y saber. Es más, como señala el profesor Talavera (2017, p. 163), bajo este subsistema no se exige –como regla de validez racional- motivación a la decisión judicial.

Estas características “negativas”, por cuanto el razonamiento derivado de un análisis y valoración de las pruebas escapan de un control racional, abrieron paso al segundo modelo: la sana crítica.

1.2.1.2.2 La sana crítica

Para Taruffo (2007, p. 3) la sana crítica como sistema de libre valoración de la prueba, es racionalista y epistémica (lo que no ocurría con la íntima convicción). Explica el referido autor que valorar de forma libre la prueba implica seguir pautas que aseguren el carácter racional que debe encerrar la misma.

Agrega el referido autor que, bajo este modelo, el juez no busca persuadir a nadie (como ocurría en un sistema de íntima convicción), sino expedir decisiones justas, y para ello debe desarrollar una **concepción epistémica**, racional de la prueba, estructurada en caminos y

procedimientos que puedan estar sujetos a un control comprobable e intersubjetivo. (Taruffo, 2007, p.6)

Por su parte, Stein (1928), citado por Nieva (2010, pp. 84-85), señalaba que la libertad que tenía el juez de valorar la prueba, no implicaba que se encontraba exenta de control alguno; por el contrario, su frontera de libertad de criterio en la apreciación de la prueba se encontraba en el empleo adecuado de las denominadas máximas de la experiencia y en la proscripción de la arbitrariedad.

Si ello es así, claro resulta que la libertad –en el proceso de valoración probatoria- sujeta a un control de racionalidad es aquello que define a un sistema de sana crítica. La **concepción racional de la prueba** surge, entonces, como el modelo que encuentra más aceptación entre quienes se han abocado al estudio de la institución de la valoración de la prueba⁴. Basta expresar lo dicho por el profesor Talavera (2017), respecto de la sana crítica como modelo de valoración probatoria: “exige que las conclusiones a las que se arribe sean el fruto **racional** de las pruebas”. (p. 163)

De lo hasta aquí expuesto, nótese que a diferencia de lo que ocurría con el primer modelo de libre valoración probatoria (de íntima convicción), el peso otorgado a cada medio de prueba, así como el engranaje que conlleva al proceso cognoscitivo de explicación y construcción de los hechos y del derecho aplicable, se constituye en el rasgo particular y distintivo de uno modelo regido por la sana crítica.

⁴ En ese sentido véase: Arocena (2020), Nieva (2010), Gascón (2010), Taruffo (2008), Ferrer (2007), como parte de la literatura procesal extranjera; y como parte de la literatura procesal nacional: San Martín (2015), Neyra (2015), Castillo (2014), Talavera (2017) y Rosas (2018).

Concluyendo, la sana crítica enarbola el modelo “mejorado” de un sistema libre de valoración probatoria, donde valorar y motivar, adecuadamente, son dos tópicos indisolubles entre sí.

1.2.1.3 El sistema de valoración probatoria en el modelo procesal penal de 2004

Dos normas del Código adjetivo Penal de 2004 (en adelante CPP, vigente en el Distrito Judicial de Lambayeque desde el 01 de abril de 2009) nos permite afirmar que se acoge un modelo de sana crítica de valoración probatoria.

Así, el artículo 158° inciso 1 estipula: “En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados”. Y por su parte el artículo 393° inciso 2 prescribe: “la valoración probatoria respetará las reglas de la **sana crítica**, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos”.

La literalidad de la norma -en cuanto al sistema adoptado- ha llevado a autores como Talavera (2009), citado por Castillo Alva (2014, p. 29), a sostener que nuestro modelo procesal continúa el modelo de la libre valoración de la prueba como sistema de valoración probatoria, y, además, que se ha adscrito al modelo de la valoración racional, caracterizado por emplear variadas normas de carácter general y específico que reglan dicho proceso de valoración, al punto de llegar a compatibilizarla con el respeto de los derechos

fundamentales y básicos principios, por ejemplo, como la presunción de inocencia de la persona sujeta a un proceso.

Cabe puntualizar, que el hecho de que hayamos adoptado un sistema de libre convicción basado en un modelo de sana crítica, implica, a su vez, que el juez de forma imperativa debe expresar las razones, que han de nacer solamente de las pruebas lícitas y legítimas, que lo llevaron a adoptar una determinada decisión, precisando, además, el resultado de dicha estimación probatoria y, sobre todo, el proceso deductivo que siguió para arribar a tal conclusión (Neyra, 2015, p. 246). Pues solo de esa forma se podrá evitar que el juez decida en base a su capricho, conjeturas, o a partir de su convencimiento íntimo (Jauchen, 2004, p. 49)

Por ello, punto a resaltar en este apartado es que la fórmula legislativa de nuestro modelo procesal penal vigente, predetermina que la sana crítica debe llevarse a cabo –como regla de validez del razonamiento- bajo las reglas del razonamiento lógico, de los conocimientos científicos y de las llamadas máximas del conocimiento; por lo tanto, son éstos los parámetros legales sobre los que se debe construir la libre, pero siempre racional, valoración probatoria.

En apariencia, ello implicaría que la adopción de este sistema procesal –de sana crítica- no ha proscrito del todo la adopción de pautas legislativas de carácter interpretativo conclusivo en el tratamiento probatorio (propio de un modelo de prueba tazada). Sin embargo, consideramos que ello no es así, por cuanto la vaguedad de las nociones conceptuales –y alcances- de lo que se ha denominado reglas del pensamiento lógico, científico y máximas de la experiencia, no se encuentran predeterminados en norma expresa. Se tratan, pues, de pautas si bien genéricas, pero cuya determinación corresponde ser

desarrollada por la doctrina, y, en mayor medida, por la jurisprudencia a través de sus fallos judiciales.

Pero, así como hemos señalado que las reglas de valoración probatoria son pautas genéricas, no es menos cierto que el legislador también ha insertado pautas particulares de tratamiento probatorio en ciertos casos. Por ejemplo, en el caso de los **testigos de referencia** -también llamados de oídas-, **arrepentidos**, **colaboradores o análogos** (cuyos relatos necesitan corroboración para ser fuente de credibilidad, según prescribe el Art. 158°.2 del CPP, sobre todo para imponer una medida de coerción personal o una sentencia condenatoria); **la confesión sincera** (para cuya validez, como medio de prueba, se impone supuestos taxativos para determinan su eficacia probatoria, así como su irrelevancia -Art. 160°.2 y 161°, respectivamente, del CPP); **y la prueba indiciaria** (respecto de la cual se han precisado criterios normativos de validez probatoria -Art. 158°.3 del CPP, como lo son: indicio probado; inferencia basada en las reglas del conocimiento lógico, científico o las llamadas máximas de la experiencia; pluralidad de indicios de carácter contingentes, concordantes y convergentes; y, por último, inexistencia de contraindicios que sean consistentes).

Pero ello no puede llevarnos a pensar que se trate de un sistema impuro de sana crítica, o compartido con uno de tarifa legal. La razón se centra en que las pautas insertadas en el texto de la norma procesal –como las señaladas-, no son *per se* mandatos específicos respecto de cómo el juez debe dar por cierto o no un determinado enunciado fáctico [aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas], o -lo que a la postre sería el resultado-, el cómo y en qué debe fundarse un fallo judicial; por el contrario, aquellas -por su generalidad y vaguedad- no hacen más que orientar el proceso racional de libre valoración probatoria, pero –

valorar la prueba observando las reglas del conocimiento lógico, científico y las máximas generalizadas⁶, y que, además, debe **exponer los resultados obtenidos y los criterios adoptados**, debemos entender, por criterio, la decisión que se sustenta en un razonamiento racional respetuoso de los principios que el pensamiento lógico, de la ciencia y de las máximas de la experiencia, los que, a decir de Talavera (2017, p. 166) son “**criterios racionales**” necesarios para que el juzgador se construya convencimiento de los hechos objeto del proceso.

Pero, ¿qué implica que el juez observe las reglas del conocimiento lógico, científico y las máximas generalizadas en el razonamiento probatorio? No existe artículo en nuestra legislación que delimite sus conceptos; pero se tratan claramente de los componentes que dan sentido y contenido a la denominada sana crítica como modelo de valoración acogido por nuestro código adjetivo; de ahí la importancia de abordar el tema de “los criterios de valoración probatoria en el nuevo proceso penal”.

Lo peculiar de estos tópicos son su carácter abstracto y hasta cierto punto “ilimitado” en su contenido. Se podría decir que, en tanto facultad de la labor judicial, la determinación de sus límites –máximos y mínimos- es competencia exclusiva del órgano jurisdiccional, y es así, pero con límites derivados de lo que hoy se conoce como **racionalidad en el razonamiento probatorio**, obrar en contrario implicaría operar bajo un criterio distinto al recogido por nuestro legislador.

⁶ Terminología acuñada en 1893 por FREDERICH STEIN en su obra “El conocimiento privado del juez”, a la que definió como reglas generales derivadas inductivamente de la experiencia, suponiendo que la cultura media de la sociedad sintetiza la experiencia de las cosas más diversas en máximas o reglas que toman forma de leyes generales. TARFUFFO, Michele (2008, p. 268)

Si bien la profesora española Gascón (2004, pp. 158-159) sostiene que, en un sistema de libre convicción, y la sana crítica como tal lo es, se omite decir cómo valorar y cómo llegar a aceptar la veracidad o falsedad de una hipótesis; sin embargo, aquella libertad en el proceso de valoración de la prueba, como lo afirma el magistrado supremo Neyra (2015, p. 244), no puede, pues, llevar intrínseco el significado de arbitrariedad o lo absurdo, como también lo expresó Jauchen (2004, p. 49); por el contrario, conforme lo explicamos al abordar el tema de: “Los sistemas de valoración probatoria”, se trata, y así debe entenderse siempre, de una libertad **racional** sujeta a un control cognoscitivo del mismo tipo; y aquí –como herramienta de control- juega un papel muy importante la exigencia a la motivación de las decisiones judiciales y fiscales –al decidir archivar un caso-, que incluso se constituye en una exigencia constitucional para todos los operadores de justicia prevista en el artículo 139 inciso 5 de nuestra Carta Política de 1993.

El carácter abstracto de los conceptos –ya advertido en los párrafos precedentes- justifica la necesidad de reflexionar y advertir que es necesaria la formulación pensada y juiciosa de tópicos, cuanto menos estandarizados, que resulten de aplicación al **proceso de valoración** probatoria [en lo que atañe al tratamiento del testimonio del acusado a nivel del plenario y uso de sus declaraciones previas –obtenidas bajo la dirección del Fiscal como un acto de investigación], sobre cuya base, cuanto menos se predetermine cuáles deben ser las reglas que el juez debe seguir a los efectos de validar el uso valorativo de la declaración del acusado como parte de su análisis probatorio, sea para dar por ciertos hechos centrales o periféricos de la imputación en su contra; máxime si sobre el particular –uso de las declaraciones previas- no existe regulación procedimental en nuestra legislación adjetiva penal vigente; he ahí, por tanto, la finalidad que guía nuestro trabajo de investigación, y a eso nos hemos abocado.

Pero nuestra tarea se vuelve más exigente cuando autores como Nieva (2010, pp. 31-32) y Taruffo (2018, p. 137) expresan –casi a modo de crítica- que un sistema de libre valoración de la prueba, regido por la sana crítica, y nuestro modelo proceso adjetivo penal lo es, carece de estándares que rijan el proceso de valoración de las pruebas; situación que no haría más que denotar la soledad del juez frente a conceptos –que hemos llamado- vagos en su determinación y alcances, pero que necesariamente tendrá que utilizar para poder generarse convicción respecto de la falsedad o veracidad de las hipótesis que las partes procesales le llevan a juicio.

Entonces, estamos ante un tema álgido que hace imperioso construir criterios racionales que controlen el proceso de valoración de la prueba como parte del quehacer laboral judicial, sin que ello implique una intromisión reglada; pues, como enseña Ferrer (2007, p. 66), la declarada libertad en el razonamiento probatorio solo implica excluir conclusiones tasadas, prefijadas por el legislador, por tanto, la valoración bajo un sistema de sana crítica se encuentra restringida por la lógica, la racionalidad, o –en un plano de similitud- los principios generales de la epistemología.

El propósito, como lo señala Arocena (2020, p. 153), es alcanzar un estándar de prueba que viabilice controlar la racionalidad en su aplicación, y sobre todo permita sostener, racionalmente, cuándo sería lícita hablar que una hipótesis debe darse por cierta, y cuando no. (Taruffo, 2007, p. 6). Esta es la finalidad que se busca alcanzar. Pero, ¿cuál debe ser el medio?

El medio para resolver el problema de la generalidad, lo indica el profesor y magistrado supremo nacional San Martín (2015, p. 72), es la jurisprudencia. Para el autor, la jurisprudencia permitiría concretar los criterios judiciales de racionalidad probatoria, conforme a las exigencias que la constitución y la ley exigen; se busca, pues, claridad y seguridad en las decisiones judiciales.

Expuesto ello, y abordando el tema, debemos partir por considerar que la valoración ha sido entendida, en palabras de Cafferata (1994) citado por Arocena (2020, p. 97), como una “operación intelectual”; y definida por Arocena (2020) como un “análisis crítico y razonado” (p. 97) de los medios probatorios que son desahogados en el plenario con el propósito de sustentar la credibilidad o no de las hipótesis que se trasladan a juicio, como son: la culpabilidad y la inocencia del acusado.

Atendiendo a ello, debemos responder: **¿qué implica que el juez observe las reglas del pensamiento lógico, del conocimiento científico y de las máximas de la experiencia en el razonamiento probatorio?** Desde ya, y como primera premisa afirmativa hemos de expresar que tales exigencias conminan a que el resultado del análisis probatorio –en grado de convencimiento sobre las hipótesis llevadas a juicio por las partes procesales- no sean fruto de elementos psicológicos del juez; y así se han pronunciado, entre otros, Talavera (2017, pp. 166, 187), Ferrer (2007, p. 151) y Gascón (2010, p. 37). Tarea difícil de alcanzar por todo el contexto –personal, social, político, cultural, religioso, entre otros-, que encierra al magistrado, pero que debe proscribirse en pro de garantizar la formación de decisiones estrictamente epistemológicas, racionales o lógicas. Y a esto se debe apuntar en el proceso de formación profesional.

Dicho ello, a continuación, efectuaremos precisiones someras respecto de cada uno de los criterios que encierra nuestra interrogante.

1.2.2.1 El examen de la prueba según la lógica

Talavera (2017, pp. 167-168) sostiene que son 4 los principios de la lógica: **a) de identidad**: por el cual, la verdad de un enunciado depende de sí misma; por tanto, dicho enunciado será verdadero sí y solo si tenga tal condición; así, un octágono será idéntico a un octágono, pero no a un pentágono; **b) de no contradicción**: parte de la premisa de que no es correcto que, judicialmente, se afirme, por ejemplo, que el acusado estuvo en el lugar de los hechos, pero considerandos después se sostenga que no se encontró en la escena, o la inversa; la esencia de este principio es que niega la validez lógica de una razonamiento que de por cierto un enunciado y a la vez niegue la veracidad del mismo; he ahí la contradicción; **c) del tercio excluido**: no admite la posibilidad lógica de que dos proposiciones opuestas, en cuanto a sus enunciados, puedan ser falsas o verdaderas a la vez; no da pie a una tercera opción; por tanto, solo una de ellas es verdadera y la otra será falsa, o a la inversa; y, **d) razón suficiente o de verificación**: llamado así porque parte de la comprobación para dar por verdadera una proposición; ergo, la no acreditación de la misma conlleva a negar su veracidad. Su importancia radica en que permite controlar si la motivación que sustenta la decisión judicial, así como el valor probatorio efectuado respecto de los medios de prueba, se encuentran lo suficientemente fundamentados o no; solo así, la motivación y el razonamiento efectuados se considerarán válidos.

1.2.2.2 El examen de la prueba según la ciencia

Sobre el particular, el profesor Talavera (2017) sostiene que el conocimiento científico se adquiere fuera de la ciencia jurídica, y se sustenta - como base de aceptación- en las indagaciones de carácter científico. Sin embargo, precisa, el juez únicamente debe utilizar aquellos cuya aceptabilidad tengan aceptación general. Agrega que, la ciencia que sea utilizada en el proceso como sustento para corroborar la racionalización del razonamiento sobre los hechos, debe responder a patrones de validez científicos, como también ser susceptibles de control, conocimiento y aceptabilidad entra la comunidad científica. (pp. 172-173)

1.2.2.3 El examen de la prueba según las máximas de la experiencia

Talavera (2017, p. 169), define a las máximas de la experiencia como reglas generales que vía inducción se construyen a partir de la experiencia vinculada a ciertos estados de cosas. Estas máximas, refiere el autor, pueden ser utilizadas por el juzgador como pautas para sustentar sus juicios de valor; sea para dar por ciertos o inciertos determinados enunciados fácticos.

Por su parte, Taruffo (2008) llama a la máxima de la experiencia “la ciencia privada del juez”. (p. 271) Y resulta ser privada en la medida que es él quien se encarga de decir qué es una máxima de la experiencia y qué no lo es. Es más, el referido autor se formula una serie de preguntas para, digamos, cuestionar la validez de dicha pauta como regla de cobertura del razonamiento; pues para el profesor, en estos supuestos, el juez no haría más que fungir de brujo para poder llegar a establecer aquello que es una máxima aplicable a un caso; lo que

no ocurre con los conocimientos científicos estandarizados y aceptados por la comunidad especializada. Pero pese a ello, el profesor termina aceptando el recurso a dicho medio para la construcción de inferencias causales, siempre y cuando se haga uso correcto de las mismas. No obstante, finaliza, puntualizando la preeminencia de la ciencia por sobre la máxima (Taruffo, 2008, pp. 267-271)

Sobre la forma cómo se determina o selecciona aquello que califica de máxima de la experiencia, Talavera (2017, p. 168) escribe que es el juez quien de forma libre la escoge y le asigna el valor probatorio. En ese sentido, explica, solo se le debe exigir que sea lógico, prudente y sensible al momento de elegir la regla o pauta que le lleve al descubrimiento de la verdad.

De otro lado, para Stein (1973) citado por Talavera (2017, pp. 169-170) alude que las funciones de las reglas de la experiencia son: a) viabilizar la valoración de las pruebas, b) señalar los indicios; y, por último, c) establecer la imposibilidad de la realización de un supuesto de hecho.

Ahora bien, en función a lo expuesto, una decisión judicial se encontrará dotada de racionalidad, sí y solo si, un juez observa los criterios lógicos, del conocimiento científico, así como las máximas generalizadas, y aplique los mismos al razonamiento probatorio como parte de su actuar funcional. Situación que incluso se encuentra reglada en nuestra normativa adjetiva penal de 2004 a través del artículo 394.3 que, además de una exigencia de motivación sujeta a claridad, logicidad y complitud sobre los postulados fácticos que han sido objeto de acusación y defensa, exige al juez que indique el razonamiento que siguió y

lo llevó a justificar la verdad de una tesis, así como el que siguió para rechazar la tesis opuesta.

Aunque muchas veces la realidad suele desbordar a la teoría, pues, como lo expresa Arocena (2020): “Aun en procesos de decisión que se reputan exhaustivamente deliberados, reflexionados o razonados, como los que se producen en la resolución judicial de un caso penal, existe **contenido inevitable de “intuición”** que, en el contexto de las especulaciones equivale al universo de condicionantes de la subjetividad del juzgador que entran en juego cuando éste valora la prueba”. (p. 125) Es más, agrega el autor, el juez, como sujeto cognoscente, valora la prueba: “Justipreciándola a través de la “lente” suministrada por el **conjunto de valores, preferencias, intuiciones y convicciones que integran su subjetividad** y que se involucran en su “mirada” de las cosas –incluida la prueba- aun cuando él no lo advierta”. (Arocena, 2010, p. 127) Pero como ya lo hemos dicho líneas precedentes, la validez epistémica del razonamiento probatorio no puede ser fruto de elementos psicológicos del juez, ello en pro de garantizar la formación de decisiones estrictamente racionales o lógicas. Y a esto se debe apuntar en el proceso de formación profesional.

1.2.2.4 Hacia un criterio epistémico de estimación probatoria

En las líneas precedentes, además de hacer mención a los tres criterios de valoración que rigen la actividad probatoria que recoge nuestra legislación procesal vigente –y que hemos abordado siguiendo la doctrina desarrollada por el profesor Talavera-, también hemos sostenido que la sana crítica como modelo del sistema de libre valoración probatoria implica que sea racional. Sin embargo, no hemos precisado qué implica o qué es lo que caracteriza

a una valoración epistémica de la prueba. Por ello, de esto nos ocuparemos en las siguientes líneas.

Ferrer (2007), explicando los alcances de una valoración racional de la prueba, nos enseña que existen –en un panorama general- dos concepciones sobre la valoración de la prueba: a) persuasiva, y b) racional. La primera es típica de un sistema de íntima convicción, y la segunda de un sistema de libre valoración.

Sobre la concepción racional de la estimación de la prueba, Ferrer (2007) precisa que una concepción racional de la prueba se caracteriza por cuanto los medios para arribar a la misma son la corroboración y la refutación de las hipótesis postuladas; y la exigencia fuerte de motivación a la decisión que incide sobre los enunciados que componen los hechos; también hace referencia a la debilidad del principio de inmediación, y, por último, a la existencia de recursos que permitan a las partes controlar la decisión a través de su revisión en órganos superiores. (pp. 61-65)

En ese sentido, una sentencia que ampare la tesis de culpabilidad del acusado debe tener la capacidad de dar cuenta, explícitamente, de los datos con los que cuenta y de su coherente integración, así como confirmar el resultado de la existencia de datos nuevos que la misma tesis -que se busca sostener- pueda llevar a formular (tesis alternas); pero, además, tiene que ser capaz de refutar las demás tesis que deriven de los mismos datos que, no obstante, sean compatibles con la tesis contraria: la de la presunción de la inocencia; debiendo, por último, haber excluido las hipótesis especiales que se puedan presentar a partir de los datos con los que se cuenta. (Ferrer, 2007, p. 147)

Solo respetando las exigencias citadas, podrá superarse el hecho de que la motivación que guía el convencimiento explicativo del juez, sea producto de un proceso psicológico. Aquella será, así, el producto de haber cumplido un determinado estándar se prueba sobre la hipótesis que consideró probada, y que a su vez le han permitido rechazar las demás hipótesis alternas. (Ferrer, 2007, p. 151)

En cuando a los estándares de prueba, Ferrer (2007) desarrolla dos tipos de posible aplicación. a) El estándar de la prueba prevaleciente y b) la prueba más allá de toda duda razonable. Por aplicación del primer tipo, explica, se debe escoger la hipótesis dependiendo de su nivel de confirmación, y estos niveles pueden ser: inferior o superior. Por tanto, bajo dicho estándar una hipótesis estará probada si su nivel de confirmación es superior a la hipótesis opuesta. En cambio, en un estándar de prueba más allá de toda duda razonable, propia del ámbito penal, la probanza de una hipótesis no gira en torno a si su grado de confirmación es empíricamente superior respecto de la tesis opuesta (la inocencia); por el contrario, en dicho escenario, aquella duda razonable respecto de la culpabilidad del acusado prevalece. (pp. 47-28)

Sobre el segundo tipo de estándar de prueba desarrollado por Ferrer (2007), el profesor italiano Taruffo (2008, pp. 273-274) afirma que una exigencia de prueba que pueda ser calificado como: “más allá de toda duda razonable”, implica, inexorablemente, que la hipótesis de la culpabilidad tenga que ser probada con un alto nivel de confirmación, equiparable a la certeza.

De otro lado, Nieva (2010, pp. 236-247) se aboca a dedicar un capítulo para explicar el tema de qué es lo que se debe considerar al momento de evaluar la declaración de las partes

que concurren al proceso, entre ellos, los litigantes; término que, aplicado a nuestro trabajo de investigación, equivale a hacer mención al acusado. El autor parte de hacer énfasis en que no podemos descartar –de plano- la importancia de la declaración de las partes, en razón de que son ellos los protagonistas de los hechos que se lleva a litigio; por lo tanto, cuentan con una información de calidad.

En ese sentido, aconseja el autor que al momento de valorar su declaración se debe analizar el grado de contextualización del mismo, según los hechos, y de corroboración con otros medios de prueba. Si ello no es posible, debe sospecharse de la falsedad de lo dicho, o cuanto menos ser descartada por debilidad probatoria. Concluye afirmando que lo único que debe valorarse en la declaración de un litigante es que su versión se encuentre espontáneamente contextualizada y corroborada.

Hasta aquí no solo hemos indicado cuáles son los criterios que integran el proceso de valoración probatoria, sino que, además, siguiendo a Nieva (2010), Taruffo (2008) y Ferrer (2007), hemos expuesto cuál es el camino a seguir para poder controlar que la valoración probatoria sea producto de la racionalidad, esto es, sea epistémica o lógica; sin embargo, no menos ciertas resultan ser las palabras de Arocena al referir que la subjetividad del juzgador siempre estará presente en el proceso de estimación probatoria; sin embargo, debe superarse toda intuición en dicho procedimiento por cuanto escapan al razonamiento lógico, científico y sujeto a las máximas de las generalidades en una sociedad, característico de una valoración probatoria sujeta a una sana crítica.

A lo dicho agreguemos que, la racionalidad exigida a toda actividad valorativa de la prueba, debe, también, comprender ciertas pautas o baremos, independientes de las reglas

del pensamiento lógico, la ciencia y de las máximas comunes que nuestra legislación ha previsto.

Sobre aquellas pautas o baremos, nuestro legislador también ha establecido, a través del artículo 393.2 del CPP, que el juez penal debe apreciar las pruebas de la siguiente forma: primero, debe examinarlas individualmente; y, sólo después, de forma conjunta o global. Esta base normativa da lugar a lo que conocemos como “valoración conjunta” de la prueba para dar por ciertas o no las hipótesis que se trasladan al plenario: la responsabilidad del acusado, o su inocencia. Cabe precisar, además, que la exigencia de estimación global o conjunta de las pruebas actuadas en el plenario, forma parte del contenido esencial del derecho a la prueba, y, por tanto, encuentra protección constitucional; derecho que a su vez deriva del derecho a un proceso debido.

La consecuencia legal de no respetar el procedimiento exigido, y dirijo al juez, para sopesar las pruebas, es su ineficacia probatoria; y así se encuentra regulado en el artículo VIII del T.P del CPP; norma que, además, sanciona de la misma forma el proceso de obtención de la prueba que haya transgredido el núcleo duro de los derechos fundamentales de la persona. Ejemplo, obtener la declaración del acusado haciendo uso de actos de violencia física o psicológica.

Otro aspecto que debemos considerar es lo referido al proceso de incorporación de las pruebas al juicio oral. Y esto es muy importante para el desarrollo de nuestro tema; pues, recuérdese que por mandato del artículo 376 inciso 1 del CPP, las declaraciones previas que el acusado brindó ante el Fiscal en la etapa prejudicial de investigación preparatoria, se incorporarán al plenario como consecuencia de que aquel haya ejercido su derecho a guardar

silencio en dicho acto; incluso, como ahondaremos más adelante, vía lectura también se incorporan al plenario sus versiones previas aun en el supuesto de que haya expresado su voluntad de declarar en el juicio [**supuesto que no está regulado en nuestra norma procesal penal**].

Entonces, ante este escenario resulta importante analizar si el uso de aquellas declaraciones previas [en los dos escenarios planteados] se encuentran, cuanto menos, sometidas a un proceso de control de legalidad previo –de oficio o a petición de parte- para solo así validarse su ingreso al plenario; pues, en atención los ya referidos artículos 376 inciso 1 del CPP, y VIII del T.P del mismo Código adjetivo, solo deben utilizarse para expedir la sentencias los medios de prueba que hayan sido incorporadas al juicio de forma legítima.

Se tratan, pues, de reglas de valoración que, adicionales a los criterios estudiados, rigen la actividad probatoria y que como tales debe ser observados por el órgano jurisdiccional en su delicada labor de administrar justicia.

Concluyendo, sostenemos que, además de los criterios de estimación probatoria regulados en nuestra normativa procesal de 2004: la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, el legislador también ha estipulado pautas específicas de valoración probatoria que también responden a un criterio de racionalidad en la actividad valorativa de la prueba, propia del modelo procesal penal que hemos acogido; y a todas estas se suman, indefectiblemente, las reglas adicionales, pero específicas, que la jurisprudencia suprema se ha encargado de establecer en nuestro país, y reflejo de ello son las directrices de valoración probatoria de los testigos, del testigo-agraviado, y de los coimputados, así

como en los casos de violación sexual, y prueba indiciaria; jurisprudencia de la que haremos mención en los capítulos siguientes y a la que, recuérdese, el profesor San Martín (2015) mencionó como la herramienta necesaria para llegar a estandarizar los criterios de estimación probatoria.

1.2.3 El juicio oral

El CPP, a través de su artículo 356, regula la tercera etapa del proceso: el juicio oral o juzgamiento. El numeral 1 de la norma precitada estipula que el juicio se caracteriza por ser público, salvo las excepciones reguladas en el artículo 357 numerales 1 y 4, y oral. Enfatiza la norma en estudio que es en el proceso de actuación probatoria –esto es, en el periodo probatorio del juzgamiento- donde se gesta la prueba, resultando aplicables las excepciones de prueba anticipada –ante el juez de investigación preparatoria- y de prueba preconstituida –ante el Fiscal-, rigen especialmente los principios, además de los citados, de inmediación y contradicción.

No menos importantes son los principios de continuidad del juicio, juez natural, concentración de los actos procesales, y obligatoria concurrencia del imputado y de su abogado de libre elección a la etapa del proceso en estudio.

Al respecto, no está sujeto a discusión alguna que el juicio sea, de las tres etapas que integran el proceso penal peruano, la más importante. Su importancia estriba en que en su desarrollo –etapa probatoria- se desahogan los medios de prueba que fueron previamente admitidos y ofrecidos por las partes del proceso en la etapa intermedia e incluso en el propio juicio -supuestos de prueba nueva o prueba no admitida en la etapa intermedia-; gestando

así a aquello sobre lo cual se construirá el fallo judicial. Mención particular merecen los supuestos de prueba anticipada y preconstituida, cuya formación se produce antes del juicio oral.

Ahora bien, desahogar o actuar los medios de prueba: personal [testigos: directos, de referencia y técnicos], pericial [explicación pericial], documental [públicos y privados], y material [objetos, vestigios, etc.], de cargo y de descargo, conlleva a que éstos se conviertan en actos de prueba, y consecuentemente en prueba propiamente dicha, cuya valoración resulta exigible al juzgador, sea para determinar la responsabilidad o la inocencia del acusado.

De ahí que por mandato del artículo 393.1 del CPP, el juez no puede sentenciar en base de lo que no fue ingresado al plenario, o que ingresó ilegítimamente (**se resalta la importancia de la etapa probatoria dentro de la fase de juzgamiento**); texto normativo que, en cuanto a la palabra legítimo, corresponde ser concordado con los artículos 159 –que estipula la prohibición de usar los medios de prueba o las fuentes de prueba que hayan sido obtenidas transgrediendo derechos fundamentales de las personas-; y también con el artículo VII, incisos 1 al 3 del T.P del CPP que norman la obligatoriedad de valorar solo aquello que haya sido conseguido e ingresado al plenario siguiendo el procedimiento legítimo constitucional.

E ahí la importancia estelar de la fase de juzgamiento del proceso penal, sobre todo en su estancia probatoria.

Pero antes de pasar a desarrollar de forma medular el tema mencionado, consideramos necesario establecer previamente las diferencias existentes, en términos normativos y doctrinarios, entre: actos de investigación [de formación en las sub etapas de diligencias preliminares e investigación preparatoria propiamente dicha] y actos de prueba [de formación exclusiva en la etapa de juzgamiento]; pues se tratan de dos tópicos que al realizarse en diferentes etapas del proceso –incluso el primero en ausencia del juez-, tienen diferencias que merecen que atendamos a efectos de presentar y conocer el ámbito donde se llevan a cabo las denominadas declaraciones previas.

1.2.3.1 Actos de investigación

La doctrina es unánime, y no existe discusión alguna sobre el particular, al referir que los actos de investigación son propios de la etapa de investigación preparatoria que comprende sus dos sub etapas: diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada; por tanto, son pre jurisdiccionales; pero, además, se señala –como característica distintiva de los actos de investigación- que la conducción de los mismos se encuentran bajo la dirección del Ministerio Público y pueden desarrollarse por dicho ente o, vía delegación, por la Policía Nacional. En ese sentido véase Escobedo y Paucar (2014, p. 304), Alarcón (2010, p. 76) y Castillo Gutiérrez (2014, p. 45).

Ahora bien, si se tratan de actos que se llevan a cabo por disposición del fiscal [se adicionan los supuestos en los que ciertos actos de investigación son ordenados por el juez de la investigación preparatoria en mérito a la solicitud de inadmisibilidad de diligencias preliminares instado por las partes procesales, cuya base normativa está en el artículo 337.5

del CPP], entonces, la finalidad de los mismos es acopiar los elementos de convicción (que en puridad no es prueba propiamente dicha), a efectos de decidir si formula o no requerimiento acusatorio; finalidad recogida por nuestra normativa adjetiva penal en su artículo 321.1.

Asimismo, los actos de investigación que fundan una investigación preparatoria en sentido lato, también tienen por finalidad –como tarea del representante fiscal-: a) determinar si la conducta denunciada y atribuida al denunciado tuvo lugar en el mundo externo, y en su caso, determinar si la misma es o no delito, b) averiguar las circunstancias o los móviles que conllevaron al inculcado a ejecutar la conducta que se le atribuye, c) identificar al autor o a los partícipes del hecho ilícito, así como al agraviado; y d) determinar la existencia de un menoscabo.

Los actos de investigación desplegados por el Ministerio Público –desde la noticia criminal- pueden generar ciertos estándares “de prueba” sobre cuya base fiscalía toma ciertas decisiones que oscilan por diferentes estadios: abrir investigación preliminar, archivar el caso, formalizar la investigación preparatoria, requerir el sobreseimiento o formular acusación [proceso evolutivo de las actuaciones fiscales de impulso propio de un proceso común].

Ahora bien, la Corte Suprema nacional, en la Sentencia Plenaria N° 01-2017 (referente el delito de Lavado de activos, y cuyo debate tuvo como génesis la cuestionada sentencia casatoria N° 92-2017/Arequipa, cuyo juez ponente fue el ex magistrado supremo César Hinostroza Pariachi), ha establecido con el carácter de doctrina legal (según el fundamento jurídico 29) ciertos estándares de prueba que, en esencia, regulan la intensidad progresiva de

los elementos de convicción que acopia fiscalía como parte de los actos de investigación desplegados y que en definitiva le sirven para sustentar sus postulaciones (plasmadas en disposiciones y requerimientos). Así, para: a) abrir investigación preliminar: se requiere sospecha simple, b) formalizar la investigación preparatoria: se exige sospecha reveladora de la comisión del delito, c) requerir prisión preventiva: sospecha fuerte, y d) formular acusación: sospecha suficiente.

A la par con lo dicho, precisemos que los actos de investigación desplegados por el Ministerio Público, producen una gama de elementos de convicción [por ejemplo, declaraciones del agraviado, testigos, actas de constatación, de registro personal, de incautación, informes periciales, entre otros,] que a su vez guían su actuar funcional, entre ellos, el de formular acusación contra el investigado. Ello implica que, desde su concepción, el entonces denunciado ha cometido una conducta sancionable como delito por nuestra legislación penal sustantiva, y por esa razón, solicita al órgano jurisdiccional que se le imponga una sanción penal.

Por último, hemos de referir que los elementos de convicción acopiados por fiscalía, de ningún modo constituyen pruebas o elementos de prueba; consideramos que su uso en dicho estadio es impropio, más allá de la naturaleza que puedan tener las denominadas pruebas preconstituidas –llamadas así por llevar intrínsecas la característica de irreproducibilidad– reconocidas por el artículo 325 del CPP, que si bien es cierto son actos de investigación producidos por fiscalía, y que a diferencia de los demás –por ejemplo, declaraciones, peritajes, entre otros– ingresan al plenario vía lectura –según el tenor de los artículos 325 parte final y 383 numeral 1 literal e) del CPP–, también lo es que para que puedan ser considerados como tales –prueba–, tienen que inexorablemente ingresar al plenario a través

de la oralización de los documentos que los contengan y, así, someterse a los principios que rigen la actividad probatoria: contradicción, inmediación y publicidad.

Lo cierto es que todo acto de investigación que se incorpora al juicio se convierte en un acto de prueba. La mutación se genera sí y solo si, aquellos elementos son ofrecidos como medios de prueba a efectos de sustentar el requerimiento acusatorio fiscal [que *per se* buscan la confirmación de su hipótesis acusatoria], o para respaldar la tesis de la defensa, que si bien parte de la premisa de que al acusado se le presume inocente, sin embargo, ello no limita su derecho de reforzar, con medios de prueba, sus alegaciones; además, le será trasladada la carga de la prueba cuando en su defensa postule, por ejemplo, una causa de justificación o de exculpación.

1.2.3.2 Actos de prueba

A diferencia de los ya estudiados actos de investigación, los actos de prueba son estrictamente jurisdiccionales. En ese sentido, Talavera (2017, p. 32), refiriéndose a su origen de formación, sostiene que los actos de prueba son aquellos practicados en la etapa de juzgamiento —en el plenario. En la misma línea se pronuncia Castillo Gutiérrez (2014, p. 46)

Una característica que debemos destacar para diferenciarlos de los actos de investigación, es la referida a su utilidad. Como lo hemos expuesto en las líneas previas, los actos de investigación sirven tanto al fiscal como al juez de garantías; al primero para expedir las resoluciones propias de su función: acusar, formular requerimientos de prisión preventiva, allanamiento, levantamiento del secreto de las comunicaciones, de la reserva tributaria y

bancaria, entre otros, y al juez de la etapa intermedia para resolver los pedidos que le formulan las partes procesales: fiscal, agraviado o actor civil, procesado y tercero civilmente responsable. Sin embargo, los actos de prueba son más relevantes porque sirven para que el juez de juzgamiento se forme convicción sobre los hechos postulados por las partes procesales y, sólo en base a los mismos, emita su fallo, sea condenatorio o absolutorio; la especial relevancia de éstos respecto de los otros, es que su valoración incide en la cuestión de fondo: la responsabilidad penal o no del acusado, cuya consecuencia llegaría a imponer hasta una pena de cadena perpetua.

Lo dicho es enfatizado por el maestro San Martín (2015, p. 510), para quien los actos de prueba cumplen una función de verificación; función que ha de desplegar el juez de juzgamiento para dictar sentencia.

1.2.3.3 La declaración del acusado: ¿acto de investigación o de prueba?

Hasta aquí, queda muy marcada la diferencia y sobre todo la funcionalidad de un acto de investigación respecto de un acto de prueba. Sin embargo, abordar ambos tópicos desde una posición conceptual y diferenciadora solo tiene sentido, dentro de nuestro trabajo de investigación, cuando lo desarrollado nos permite afirmar, con base, que la declaración del acusado brindada en sede de investigación preparatoria es un acto de investigación, mientras que la rendida en la etapa de juzgamiento –derecho a la defensa material- se constituiría en un acto de prueba.

Nótese, pues, que la declaración de la persona sujeta a un proceso tiene lugar en dos de las tres etapas del proceso penal: a) en la fase de investigación preparatoria -en sentido lato-

, y b) en el juzgamiento. Ahora, cuestión muy distinta será desarrollar lo referente a la naturaleza de dicha declaración. Adelantamos que existen dos tesis: una que considera a la versión del acusado como un medio de prueba –por tanto, pasible de valoración judicial-, y otra que la concibe como medio de defensa, negando, en consecuencia, que sus versiones puedan ser utilizadas por el juez para arribar a juicios de validez o no de la hipótesis acusatoria, sea en sus aspectos periféricos o medulares de la imputación fáctica y jurídica que se traslada al juicio oral. Ambas posturas serán analizadas, con mayor profundidad, más adelante.

Concluyendo, denotamos que, en esencia, la etapa procesal en la cual se genera el acto [en general] permite distinguir ambas concepciones, de importancia al momento de determinar qué es lo que pasará a formar parte del quehacer probatorio sujeto a valoración judicial, y solo los actos de prueba –de producción exclusiva en el juicio oral- tienen esa prerrogativa, por tanto, sirven a los efectos de determinar un fallo condenatorio o absolutorio; a él se suman –como excepción a la regla- las denominadas pruebas preconstituida y anticipada.

La declaración del para entonces investigado, brindada en la etapa de investigación preparatoria, sea en la sub etapa de diligencias preliminares o en la de investigación preparatoria propiamente dicha, es un acto de investigación propiamente dicho [lo reafirmamos], pero no de prueba.

Pero precisemos algo: el hecho de que se trate de un acto de investigación no supone que pueda ser ofrecido por el Ministerio Público como un medio de prueba a los efectos de sustentar el requerimiento acusatorio fiscal, como sí ocurre, por ejemplo, con el testimonio

de un testigo. La misma prohibición aplica al documento que lo contiene. Cuestión muy distinta es que por mandato del art. 136° del CPP, la declaración documentada del acusado pasa a conformar el expediente judicial; y la razón la encontramos en el artículo 376.1 del CPP; texto normativo que autoriza la oralización, y consecuente incorporación al plenario, del documento que contiene su declaración prestada ante el Fiscal; premisa que se aplica, siempre y cuando, el acusado haga uso -en la etapa de juzgamiento- de su derecho a guardar silencio.

Asimismo, pese a no existir regulación normativa expresa que lo faculte, la declaración previa de aquel –el acto de investigación- también suele ser utilizado para refrescar memoria –en caso que el acusado olvide ciertos pasajes de su versión inicial- o para evidenciar contradicciones en la defensa material que aquel ejerce a nivel del plenario; situaciones de uso que se presentan solo en el supuesto que el acusado ejerza en el plenario su derecho a ser oído.

Hechas tales precisiones, pasaremos a desarrollar el tópico que nos hemos propuesto: el juicio oral, poniendo énfasis en la etapa probatoria por la especial relevancia que tiene para el fin de nuestra investigación.

1.2.3.4 Concepto

Neyra (2015) identifica al juicio como el lugar o fase del proceso donde se desarrolla el verdadero debate. (p. 497) Esta posición es unánime y por tanto no amerita mayor abundamiento⁷.

⁷ En ese sentido véanse RAMOS ESPINOZA (2018, p. 287), ORÉ GUARDIA (2016, Tomo III, p.p. 246-249), y SAN MARTIN CASTRO (2015, p. 390).

Una concepción distinta -que en esencia es eminentemente práctica- la sostienen Baytelman y Duce (2007), para quienes el juicio es un ejercicio profundamente estratégico. (p. 43) Y es estratégico en la medida que se acentúa en la construcción y preparación de una teoría del caso adecuada [forjada desde la génesis de la indagación -sede fiscal] y el conocimiento de técnicas de litigación oral [aplicadas -en esencia- en la etapa de juzgamiento].

Por tanto, en el juicio no hay lugar para la improvisación, sea de los abogados [en garantía de una defensa eficaz], o de la judicatura [en garantía de una verdadera impartición de justicia].

En este estadio procesal, el más relevante, tanto fiscalía como la defensa deben acudir a juicio con un alegato que persuada, que convenza al juzgador de que sus historias deben ser acogidas como ciertas. La validación o no de las hipótesis será una decisión que le corresponda tomar al juez de juicio. Es más, Solórzano (2010, p. 125), refiriéndose sobre este aspecto, resalta que las narraciones de las partes no solo están encaminadas a convencer al juzgador, sino que, además, se constituye en la herramienta que le permitirá monitorear y plantear el curso de cada fase del proceso.

En ese sentido, a efectos de conseguir que el juzgador acoja nuestra historia -la que le prometemos probar en los alegatos de apertura-, es importante saber ingresar y controlar la prueba que fue admitida para su actuación en juicio y que respalda nuestra postura, respetando y siguiendo nuestra propuesta expresada a través de nuestros alegatos de apertura o preliminar. El alegato inicial que se aborda en los libros de técnicas de litigación oral, se

concibe como el hilo conductor de nuestra actuación. Para convencer, relevancia excelsa cobran el interrogatorio -también llamado examen directo- y el contrainterrogatorio -también llamado examen cruzado o contraexamen-, en tanto son medios que permiten a las partes controlar la información que los órganos de prueba ingresarán al plenario, y que como tal, serán valorados por el juez para llegar a un convencimiento sobre las tesis iniciales que le han sido postuladas.

1.2.3.5 Fases del juicio oral

Sobre las fases o periodos por las que transcurre el juicio oral, San Martín (2015) distingue tres: periodo inicial, probatorio y decisorio. (pp. 399-400) Gráfica distinta es la presentada por Oré (2016), para quien el juicio transcurre por seis etapas; a saber: etapa inicial, probatoria -calificada por el referido autor como la etapa más importante del juzgamiento-, decisoria, deliberación de la sentencia, correlación entre acusación y sentencia, y sentencia. (pp. 276-325)

Sin embargo, más allá de la forma cómo la doctrina, por cuestiones didácticas, estructura la etapa de juzgamiento, lo importante es destacar la importancia que dentro de ella tiene la denominada etapa probatoria; es la más importante. Y es la más importante por cuanto en su transitar desfilan cada uno de los medios probatorios que las partes ofrecieron para su actuación -*en la etapa intermedia y al término de los alegados preliminares: supuestos de reexamen de prueba no admitida y de prueba nueva*-. Solo aquello que se actúan en dicha fase del juzgamiento servirá para fundar el fallo judicial, sea de corte condenatorio o absolutorio. Se produce una suerte de validación o rechazo de las historias contadas en los alegatos de apertura.

Dicho ello, centraremos nuestro análisis en la etapa probatoria del juzgamiento, por las razones ya dichas.

1.2.3.6 El periodo probatorio

Baytelman y Duce (2007) nos enseñan que la prueba por sí sola no habla, sino a través de los litigantes. (p. 43) Por ello, la regla general es que la prueba ingrese al juicio vía la oralidad: los órganos de prueba –testigos y peritos- deben concurrir a juicio para brindar testimonio de aquello que observaron de forma directa o indirecta, o, en el caso de los peritos, para explicar el informe pericial que elaboraron. Sin embargo, por las circunstancias expresamente previstas en el artículo 383.1 del CPP, excepcionalmente las declaraciones del testigo y/o la explicación pericial pueden introducirse a través de la lectura del documento que los contienen, éstas situaciones son: muerte, enfermedad, ausencia del lugar donde reside, desinformación de su ubicación, o la existencia de causas ajenas a la voluntad de los sujetos procesales.

Ahora, acorde al objeto que guía nuestra investigación, abordaremos el tema de la declaración del acusado en la fase de actuación probatoria; pues aquí yace el meollo de nuestra temática, vinculada al procedimiento legal que se sigue para hacer uso de las declaraciones previas que el otrora acusado brindó en sede fiscal, a efectos de evidenciar contradicciones; asimismo, conocer la forma cómo es valorada por parte del órgano jurisdiccional –sea para establecer juicios positivos de culpabilidad o a la inversa-, y los derechos que –al decidir valorarlas- entran en juego, como son: a la no autoincriminación, a la defensa material, y, por extensión, a un debido proceso.

Sobre el particular, nuestra legislación procesal penal ubica a la declaración del acusado, conjuntamente con los demás medios de pruebas mencionados precedentemente, como parte del periodo probatorio. Es más, de acuerdo al orden probatorio establecido en el artículo 375.1 del CPP, la sitúa como el primero en escena, seguidamente se hace mención a la actuación de los medios de prueba admitidos (órganos de prueba), y, por último, a la oralización de los medios de prueba (documentales).

1.2.3.7 Derecho a declarar y a no hacerlo

A diferencia de lo que sucede con los testigos y peritos, que tienen el deber de declarar bajo juramento -salvo las excepciones previstas en el artículo 163° numerales 2 y 3 del CPP-, el acusado no tiene el mismo deber; por el contrario, ostenta el derecho de hacerlo [autodefensa activa], como también de no hacerlo [derecho a guardar silencio –autodefensa pasiva]. Decidir entre una y otra opción depende de la estrategia de defensa que haya tejido en el decurso del proceso.

Ahora bien, hablar de la declaración del acusado importa ubicarnos hasta en dos situaciones contextuales que pueden presentarse dentro del juicio oral. Primero, que el para entonces investigado renuncie a su derecho a guardar silencio y opte por brindar su testimonio ante el juzgador respecto de los cargos que fiscalía le imputa. Y, segundo, que se acoja a su derecho a guardar silencio.

El primer escenario -tomar la decisión voluntaria de declarar ante el juez de juzgamiento y responder a los cargos postulados en su contra- es el que corresponde desarrollar en extenso

por cuanto subyace al objetivo temático de nuestra investigación. Basta decir que si decide ejercer su derecho a no decir nada se leerán, como consecuencia normativa, las declaraciones previas que hubiese brindado en sede fiscal –cual acto de investigación-, y esto obedece a una relación normativa de causa –no declarar- consecuencia –lectura de sus declaraciones previas- que se encuentra prevista en el artículo 376° numeral 1 del CPP; norma que ha merecido el reciente pronunciamiento de nuestra Corte Suprema a través de la **Casación N° 1462-2017/Lambayeque**, del 15 de febrero de 2018, fundamento jurídico séptimo, para dejar sentado que la doctrina que se recoge en el referido dispositivo legal es aquella que sostiene que lo dicho por el acusado ante el fiscal no es anulado como consecuencia de que aquel ejerza su derecho a guardar silencio en la etapa de juzgamiento; no tiene, dice la jurisprudencia citada, efectos retroactivos que conlleven a anular su declaración previa; pues, sus versiones ya forman parte de la investigación; por ende, solo pueden ser expulsadas afirmándose y corroborándose su ilicitud.

Si ello es así, no tendría viso de inconstitucional alguno el que las partes procesales – básicamente fiscalía y actor civil- hagan uso de las declaraciones previas aún en este supuesto de defensa; pese a que, según el profesor Roxin (2000, p. 358), el juicio oral es la parte del proceso donde la ley ha desarrollado el derecho a ser oído de forma tan amplia, en desmedro de otras etapas.

Por el momento hablemos aquí de: la **versión pura del acusado**, y tendrá esa condición siempre que inexistan declaraciones previas [también llamadas sumariales] desahogadas frente al fiscal en la etapa de investigación preparatoria: diligencias preliminares o investigación preparatoria propiamente dicha.

A continuación, conozcamos las reglas que pautan su actuación y la oportunidad de su deposición.

1.2.3.8 Reglas de la declaración del acusado en juicio

La norma estipulada en el artículo 376 numeral 2 del CPP prescribe –taxativamente- lo que ocurrirá si el acusado decide declarar ante el juez de juzgamiento. En ese escenario, se aplican ciertas reglas –también taxativas- al desarrollo del interrogatorio del acusado. Precisemos que estas reglas no son aplicables al supuesto en el cual aquel ejerce su derecho a no declarar, pues éste está previsto en el numeral 1 de la misma norma, de cuya literalidad se advierte la inexistencia de regla alguna que pueda aplicarse al supuesto en el que se da lectura a la declaración documentada del acusado [que ya hemos abordado de forma genérica en los párrafos precedentes].

De los cuatro literales que conforman el inciso 2 del artículo 376 de la norma adjetiva penal, podemos extraer hasta cinco reglas procedimentales aplicables al desarrollo del interrogatorio:

Primera regla: El acusado aporta de forma libre y oral sus relatos, aclaraciones y explicaciones sobre los hechos que se le atribuyen.

Segunda regla: El fin del interrogatorio es esclarecer las circunstancias del caso y los aspectos vinculados a la fijación de la pena y reparación civil.

Tercera regla: Las preguntas deben ser directas, claras, pertinentes y útiles.

Cuarta regla: Están prohibidas las preguntas respecto de aquello que el acusado ya declaró, salvo que evidente necesidad de que aclare dicho punto [**respuesta aclaratoria**].

Quinta regla: Se prohíben preguntas capciosas, impertinentes y sugestivas [aquellas que sugieren la respuesta].

Una **Sexta Regla** la encontramos en el inciso 4 de la norma glosada: El abogado del acusado pregunta al final. Conocidas las reglas, pasemos al procedimiento.

El interrogatorio se inicia, siempre bajo la dirección de juez de juzgamiento -unipersonal o colegiado-, requiriéndole que brinde sus generales de ley; después, le corresponde exponer libremente sobre el hecho que se le atribuye; y, a continuación, se inicia el interrogatorio propiamente dicho a cargo de las partes procesales. Asimismo, el interrogatorio será realizado, primero, por el Fiscal, a continuación, por los abogados del actor civil [de existir], el tercero civil y, por último, por su abogado defensor. No está sujeto a un contrainterrogatorio.

Al juez le corresponde contralar, de oficio o a requerimiento de parte, la admisibilidad de las preguntas formuladas. Y conforme a la tercera, cuarta y quinta regla, solo son admisibles las preguntas directas, claras, pertinentes y útiles, más no las capciosas, impertinentes, sugestivas y las repetitivas –salvo, en este último caso, la evidente necesidad de formular aclaración-.

Cabe precisar que por regla general, las preguntas sugestivas están proscritas en el examen directo [lo que también abarca al interrogatorio de los testigos y peritos]; se exceptúa

el caso del testigo hostil⁸ [figura desarrollada por la doctrina, y no prevista en nuestro ordenamiento jurídico]

1.2.3.9 Oportunidad de su actuación

En cuanto a su oportunidad, el artículo 375.1 del código adjetivo que regula la etapa probatoria, y que sobre el particular debe concordarse con su artículo 86.3, establece el siguiente orden de actuación de los medios de prueba: **a)** examen del acusado, **b)** actuación de los medios de prueba admitidos -referido a testigos y peritos-, y, **c)** oralización de los medios de prueba -documentales-. Y en cuanto a su formalidad, ésta la encontramos regulada en el artículo 376 numeral 2 del CPP, concordante con las pautas recogidas en el artículo 87 del mismo cuerpo legal.

La literalidad de la norma en comento nos lleva a afirmar que la fase probatoria se inicia con la declaración del acusado. Entonces, después de la finalización de los alegatos de apertura [iniciales o también llamados preliminares], el acusado debe decidir -y responder ante el juez- si optará por declarar o silenciar –ambos son sus derechos que, a su vez, integran su derecho de defensa-. Pero de optar por no hablar en el plenario, se entendería que habría perdido la oportunidad de ejercer su derecho a responder los cargos que fiscalía le ha formulado en su contra.

Si esta última afirmación fuese cierta, diríamos que el orden establecido para la actuación de los medios de prueba constituiría una regla de carácter preclusivo, pero no lo es, porque

⁸ Sobre el particular, léanse DUCE J., Mauricio y BAYTELMAN A. Andrés (2007). Litigación penal, juicio oral y prueba. Ibáñez, Colombia, pp. 189.190. Y, BENAVENTE CHORRES, Hesbert (2015). *La construcción de los interrogatorios desde la teoría del caso*. Bosch editor, España, pp. 274-277.

establecer consecuencias preclusivas a este momento implica vulnerar el derecho a la defensa material o privada del acusado. Por ello, tanto la jurisprudencia como la práctica judicial no admiten discusión alguna en cuanto a que el orden preestablecido en el artículo 375.1 del CPP no es rígido. En ese sentido, el cuándo no se sujeta a cláusula legislativa alguna, sino a la estrategia de defensa que haya formulado su abogado defensor, pero debe ocurrir antes de la culminación de la fase probatoria del juicio oral, dado que la denominada “autodefensa”, al que también tiene derecho el acusado, constituye un acto de la fase final del juicio: la decisión final.

En esa línea de razonamiento, particular atención merece el artículo 386.1 del CPP que al reglar la forma cómo se desarrollará la discusión final⁹, estipula que en cuarto orden el acusado ejercerá su autodefensa a los efectos que alegue lo que considere pertinente a su defensa. Y por autodefensa se entiende el ejercicio de su derecho a la defensa privada, esto es, a responder en primera persona la imputación que el Ministerio Público postula en su contra.

Este acto (que forma parte de los llamados alegatos de clausura), según prescribe el inciso cinco del artículo en mención, finaliza el debate, y da paso lugar a la deliberación de la sentencia; acto que tiene como límite la valoración de las pruebas legítimamente incorporadas en el juicio oral.

La norma en cuestión nos permite cerrar cualquier tipo de debate que se pueda generar –y que se ha generado incluso en la legislación comparada¹⁰– en torno a la oportunidad en la

⁹ La discusión final implica el término del debate probatorio y el inicio de la última fase del proceso penal, esto es, la etapa decisoria la cual se inicia con los alegatos finales, también llamados de cierre o de clausura.

¹⁰ Al respecto, véase RIEGO, Cristian (s.f). La declaración del imputado en el juicio oral.

que el acusado puede ejercer su derecho a la defensa material, y sobre todo al carácter preclusivo de aquel. En ese sentido, y, por tanto, la regla, sin admitir excepción alguna, es que el acusado puede ejercer su derecho a declarar, si es que así lo expresa, al iniciar la etapa probatoria o al finalizar la misma.

Ahora bien, sobre cuándo debe o debería prestar su declaración el acusado, Benavente (2015, p. 50) aconseja que, por estrategia de defensa, la defensa debe incluir la declaración del acusado después de que se han actuado las pruebas de cargo y también de descargo; debe ser el colofón de su estrategia.

Con mayor amplitud, Mayaudón (2004), citado por Rivera (2011, p. 185), señala que, como estrategia de defensa, el acusado puede decidir declarar, al inicio, después de la prueba, después de la actuación de una prueba que haya podido causar impacto en contra de su defensa, y, al terminar el debate probatorio. Refiere el autor que debería declarar al inicio cuando su defensa se sustente en la concurrencia de una causa de justificación o de exclusión de culpabilidad; que, lo debería hacer después de la prueba a efectos de conocer la prueba de su contraparte, y rebatir la misma con su versión; que, inmediatamente después de que se haya actuado en juicio una prueba que haya causado impacto en el juzgador; y, al final cuando la persona del acusado presente condiciones no favorables para brindar su testimonio.

En realidad, no existe una regla rígida y estereotipada que estipule, como cuaderno práctico de litigación oral, cuándo el acusado debe o tiene que brindar su declaración en el plenario; sin embargo, consideramos que será la particularidad de cada proceso –el cómo se está desarrollando- el que “dirá” al abogado de la defensa cuándo solicitar el juez que se

escuche a su patrocinado; quizás ese momento no se presente y lo mejor para su defensa sea guardar silencio.

1.2.4 La declaración del acusado en el plenario

1.2.4.1 Acusado: Uso correcto de su denominación

En principio, Neyra (2015, p. 364) identifica al imputado como la persona sobre quien, en el marco de una indagación, pesa una incriminación de un hecho penal. Admite, a su vez, que también puede denominársele procesado, pero solo será acusado cuando el proceso se encuentre en la fase de juicio oral. En la misma línea conceptual, el profesor San Martín (2015, p. 232), sostiene que imputado es aquella persona que es objeto de incriminación respecto de la comisión de un hecho punible, sea de forma directa o indirecta, de carácter formal o informal.

Ahora bien, más allá de los conceptos que puedan surgir de la semántica de la palabra “imputado”, lo cierto es que nuestra legislación procesal penal utiliza múltiples denominaciones para referirse a la persona sindicada como autor o partícipe de un suceso delictivo o presuntamente delictivo¹¹, **sin observar la etapa procesal en la cual se encuentre el caso penal**, esto es: a) investigación preparatoria en su sentido lato, b) fase intermedia y c) periodo de juzgamiento -juicio oral.

¹¹ Hacemos mención a un hecho presuntamente delictivo porque no todo hecho puesto de conocimiento del Ministerio Público reviste los caracteres de ilícito penal [razones de atipicidad objetiva o subjetiva], y ésta es una de las razones por las cuales la Fiscalía procede a la no formalización y continuación de la investigación preparatoria.

A ese respecto, nuestro Código adjetivo emplea los términos: a) imputado¹², b) acusado, c) procesado, d) agente, y e) denunciado. En mayor medida se recurre a las denominaciones: imputado y acusado. Sin embargo, en la práctica se suelen hacer algunas distinciones -no uniformes- en el uso de los mismos para diferenciar la etapa en la cual se encuentra la investigación.

En la primera etapa: investigación preparatoria, se utilizan las denominaciones: investigado, inculcado -no consideradas por nuestro Código Procesal- y/o imputado; en la segunda: imputado y/o procesado; y en la tercera: acusado, procesado y/o imputado; los dos primeros en mayor medida, y el último con menor frecuencia.

En el plano internacional ocurre la misma situación. La Convención Interamericana de Derechos Humanos emplea las palabras: “persona” [artículos 7°, inciso 4, 5 y 6; y 8° inciso 1], e “inculcado” [artículo 8° incisos 2 literales a), b), c) d) e), 3 y 4]. Mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hace uso de las denominaciones: “persona” [artículos 9° incisos 2, 3, 4 y 5; y 10° inciso 1] y “procesado” [artículo 10° inciso 2, literales a) y b)].

¹² Así pues, encontramos mención a la palabra imputado en los artículos II.1 y VII.2 y 3 del Título Preliminar; artículos 2°; 2° incisos 3, 6 (segundo párrafo), 7 y 9; 5° inciso 2; 8° incisos 3 y 6; 15° inciso 2 literal b); 21° inciso 4; 23° incisos 1 y 3; 34° inciso 1; 40° inciso 1; 53° inciso 1 literal b); 61° inciso 2; 65° inciso 4; 71° incisos 1, 2, 3 y 4; 72° inciso 1 y 2; 74° inciso 1; 76° incisos 1, 2 y 3; 77°; 79°; 81°; 84° inciso 4; 86° incisos 1 y 2; 87° incisos 1, 2 y 3; 88°; 89° incisos 1 y 2; 119-A inciso 1 y 2; 136° inciso 1 literal b); 158° inciso 2; 160° inciso 1; 165° inciso 1; 261° inciso 2; 268 literales a) y c); 269° incisos 1, 3, 4 y 5; 321° inciso 1; 336° inciso 1; 349° inciso 1 literal a), b) y d); 353° inciso 2 literal a) e inciso 3; 360° inciso 2 literal a); 367° incisos 2 y 6; 375° inciso 2), entre otros. Acusado en los artículos 349° inciso 1 literal g); 351° inciso 3; 355° incisos 1 y 4; 359° incisos 3, 4 y 5; 364° incisos 1, 3 y 4; 367° incisos 1, 3, 4 y 5; 370° inciso 1; 371° inciso 1, 2, 3 y 4. Procesado en los artículos VIII.3, 73° inciso 1, 75° incisos 1 y 2; 82°; 85° inciso 1. Agente en los artículos 2° inciso 1 literal a), 2° inciso 2; 259° inciso 1, 2, 3 y 4. Y denunciado en los artículos 2° inciso 1 literal c) y 334° inciso 1.

La diversidad de términos que usa nuestra legislación procesal –incluye a los documentos internacionales citados por aplicación del artículo 55 de nuestra Constitución Política-, denota -y a esto apuntamos- la necesidad de realizar precisiones respecto de su uso técnico correcto, aunque solo sea con fines teóricos y didácticos; lo que no convierte en inútil nuestro propósito pues, como afirmar Nieva (2012), todas estas categorías son “más útiles de lo que pueden parecer en un primer momento, porque sin duda ayudan a identificar la fase procesal en cuya pendencia está el proceso”. (p. 79)

Nuestro trabajo de investigación apunta a indagar el tratamiento probatorio de la declaración del acusado en juicio oral y el uso de sus declaraciones previas para evidenciar contradicciones en su defensa; por lo tanto, diferenciándolo de otras denominaciones posibles -como las anteriormente precisadas-, cuando empleemos la palabra acusado lo haremos para identificar a la persona contra quien el Ministerio Público dirige una acusación, más no en otros contextos procesales.

Procesalmente es el acto que pone fin a la investigación preparatoria y da inicio a la fase intermedia y potencial juicio oral. Cuando nos referimos a un potencial juicio oral queremos dar cuenta que no toda acusación conlleva, necesariamente, a la realización de un plenario, pues existe un filtro previo llamado: control de acusación. En esta etapa el juez de garantías¹³ tiene la facultad, de oficio o a instancia de parte, de declarar el sobreseimiento de la causa, sea porque el hecho inculcado: a) no se realizó, b) no puede atribuírsele al acusado, c) es atípico, d) siendo típico concurre una causa de justificación, e) siendo típico y antijurídico -

¹³ Llamado así por cuanto es el llamado por ley a garantizar el respeto de los derechos fundamentales del investigado, como también de los demás sujetos procesales. Para tal efecto, nuestra legislación procesal regula audiencia de, por ejemplo, tutela de derechos, control de plazos, inadmisibilidad de diligencias preliminares, entre otras.

injusto penal- concurre una causa de inculpabilidad, y f) siendo un injusto penal y culpable concurre una causa de no punibilidad.

Pero si la acusación pasa los filtros de control formal y sustancial a los que se le somete, el juez de la investigación preparatoria, primero, procede a admitir o rechazar los medios de prueba ofrecidos por las partes del proceso para su respectiva actuación en la etapa probatoria del juicio oral, y, después, expide el auto de enjuiciamiento¹⁴, conllevando a que los actuados sean elevados al juez de juicio –unipersonal –si la pena abstracta no supera los 6 años de pena privativa de la libertad- o colegiado, en caso supere aquel tope punitivo fijado por el legislador¹⁵.

Emitido el auto de citación a juicio, en puridad nos encontramos ante un juicio oral, y aquí la categoría a empelar es la de acusado, y no una distinta.

1.2.4.2 La declaración

La Real Academia Española¹⁶ define a la declaración como la manifestación o explicación de lo que otro u otros dudan o ignoran. Una segunda acepción la conceptualiza como la expresión formal que una persona efectúa con efectos legales. Este último concepto es en esencia jurídico.

¹⁴ En un proceso inmediato –especial- tanto el auto de enjuiciamiento como el auto de citación a juicio son expedidos acumulativamente por el juzgado de juzgamiento; ello de conformidad con los artículos 446 y siguientes del CPP.

¹⁵ Artículo 28, inciso 1 y 2, del CPP.

¹⁶ En: <https://dle.rae.es/declaraci%C3%B3n> Visitada el 05 de abril de 2020.

En la práctica jurídica, se usan los términos “versión” o “testimonio” para hacer referencia al mismo significado. En el Código derogado de Procedimientos Penales de 1939 también se empleaba la palabra “instructiva” para referirse a la declaración de la persona procesada.

En ese sentido, podemos definir a la declaración como la respuesta que un sujeto brinda respecto de un acontecimiento que le es propio o ajeno. Lo propio o ajeno, en el ámbito del proceso penal, permite diferenciar la declaración de un investigado -procesado o acusado-, de la de un agraviado o testigo.

1.2.4.3 La declaración del acusado

La estructura tripartita del proceso penal de 2004 nos permite afirmar que la declaración de la persona sindicada como responsable de un hecho delictuoso se puede recibir -siempre a decisión voluntaria de éste y en presencia obligatoria de su abogado defensor- en dos de sus tres etapas: a) fase de investigación preparatoria (entendida en su sentido lato); y b) fase de juzgamiento, más no en la etapa intermedia; pese a que el artículo 86.1 del aludido código estipula que el investigado tiene el derecho de declarar y de ampliar su declaración -bajo exigencia de pertinencia- en todas las etapas del proceso, a fin de responder los cargos formulados en su contra.

Pero, en puridad, se denomina “declaración del acusado” a aquella que -en tal condición procesal- se brinda en la etapa estelar del proceso penal, esto es, en la etapa del juicio oral. No lo será la prestada ante el Fiscal en la etapa de investigación preparatoria, en tanto el uso

de la denominación –para entonces- es impropio de la etapa procesal en la que se encuentra la indagación.

Teniendo en cuenta las etapas procesales, podemos distinguir entre **declaración plenaria**: aquella que el acusado brinda en el juicio oral –frente al juez de juicio-; y **declaración sumarial o indagatoria**: aquella desahogada frente al Fiscal, sea en el marco de las diligencias preliminares o también llamadas iniciales, o en la investigación formalizada.

1.2.4.4 Naturaleza del testimonio del acusado: ¿Medio de defensa privada o de prueba?

En palabras de Armenta (2012):

La función de la prueba se ha referido tradicionalmente al descubrimiento de la verdad como fin natural del proceso, A partir de ahí, **la cuestión es cómo se alcanza dicha verdad, a través de qué medios, y lo que resulta definitivo desde el punto de vista de las garantías procesales, cómo se demuestra en el juicio.** (p. 89)
[resaltado nuestro]

Por ello, abordar el tema propuesto nos lleva a –como antesala- conocer cuál es la óptica concreta que se tiene de la persona sometida a indagación, y la calidad de prueba que se le otorga a su declaración en los sistemas procesales existentes, y sobre todo en el modelo procesal vigente en nuestro país [CPP 2004], sin olvidar que, acorde a lo expresado por el profesor Oré (2016, p. 47), el modelo procesal y el régimen político están íntimamente relacionados.

Ahora bien, sobre el número de sistemas procesales existentes, la profesora española Armenta (2018, p. 35) nos enseña que a la hora de “diseñar” o “construir” el proceso penal han existido tradicionalmente dos grandes sistemas procesales: a) el acusatorio y b) el inquisitivo. Pero también hace referencia a la existencia de un tercer sistema al que denomina: c) acusatorio formal o mixto, caracterizado por combinar los elementos de los sistemas anteriores.

1.2.4.4.1 El sistema inquisitivo

Para Fletcher y Sheppard, citados por Reyna (2015), el modelo inquisitivo es propio de los regímenes no democráticos. (p. 49) Bajo este sistema, señala San Martín (2015), el proceso tiene por finalidad buscar la verdad material (p. 42), es decir, la verdad real, la verdad histórica.

Sobre la verdad, Gascón (2010) diferencia dos clases: verdad objetiva o material: aquella que verdaderamente aconteció en el mundo fáctico; y verdad procesal o formal: aquella cuya descripción deriva del proceso (verdad relativa). (p. 40)

Ore (2016) indica que, en la búsqueda de la verdad real, el sistema de justicia recurría a la coacción del acusado o a su tortura como medio para lograr la prueba de su culpabilidad. (p. 53)

Riego (2015, p. 11), por su parte, comentando la legislación procesal chilena, sostiene, en una línea crítica y evidenciadora, que en un sistema de corte inquisitivo el imputado no

es sujeto del proceso, sino, objeto del mismo; es decir, se encuentra sometido a las urgencias de la investigación. De allí que su versión sobre los hechos se constituye en fuente de información y de prueba del que se sirve el juzgador, para cuya obtención se faculta que la persona sea torturada.

Importante es la reflexión histórica que Morales (2014, p. 2) hace sobre la vigencia del sistema inquisitivo, a partir de un estudio crítico del mismo. El referido autor expresa que el acto de reconocimiento de los derechos del ser humano es visto como obstáculo que impide luchar contra la criminalidad; por lo tanto, consecuentes con esa lógica de pensamiento, la detención, la tortura, así como la obtención de pruebas fuera del margen de la ley, se constituyen en medios para obtener una sentencia condenatoria. Se busca, en puridad, una confesión, a como dé lugar, de responsabilidad sobre los hechos, y en la cual, a su vez, se cimienta la base de obtención de otras pruebas que permitan generar compatibilidad con la versión autoincriminatoria; actos que luego son validados por las autoridades al brindarles mérito valorativo.

Una visión distinta, tanto en lo que respecta a la búsqueda de la verdad como fin del proceso, como al tratamiento del acusado, es aquella que deriva de un modelo procesal de corte acusatorio.

1.2.4.4.2 El sistema acusatorio

En un sistema acusatorio, el proceso penal descarta la búsqueda de la verdad real como fin de su existencia.

El órgano acusador –la Fiscalía- tiene el deber de actuar con objetividad al momento de recabar los medios de prueba. Su fin no es investigar para acusar, sino para determinar la ocurrencia o no del hecho incriminado y la participación que se le atribuye al imputado. Existe pues, cuanto menos en teoría, un deber de actuación imparcial. Y lo mismo ocurre con el juez de juzgamiento.

Un modelo de corte acusatorio se encamina a buscar una verdad procesal o también llamada formal o forense, teniendo como límites el respeto de las garantías fundamentales del acusado, en tanto ser humano, entre ellas, su derecho a la defensa, a presumirle inocente mientras no exista una sentencia con la calidad de firme, y a la no autoincriminación.

Bajo este nuevo sistema, el imputado deja de ser visto y tratado como un objeto del proceso, para ser considerado como sujeto del mismo. En igual sentido, lo ha expresado Neyra (2015, p. 247), y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia recaída en el Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 29 y Caso J. Vs. Perú, párr. 194.

1.2.4.4.3 El sistema procesal del modelo adjetivo penal de 2004

Nuestro modelo adjetivo penal de 2004 se adscribe a uno de tipo acusatorio con rasgos adversariales. Es acusatorio toda vez que los roles de investigar y acusar no recaen sobre una misma persona [Juez como lo era en el sistema inquisitivo derogado]; por el contrario, se destaca la división de funciones, así, por una parte a Fiscalía le corresponde funcionalmente investigar –de forma objetiva- y acusar –cuando tiene sustento para ello-; mientras que al

Juez le compete llevar a cabo el juzgamiento y expedir la sentencia con imparcialidad [esto es la base del sistema]; funciones que se ejercen con sujeción a la ley y a la constitución. También destaca que la carga de la prueba la tiene la parte que acusa [Fiscalía], mientras que el imputado está revestido de su derecho fundamental a la presunción de inocencia. Estos aspectos, a nuestra consideración, son los rasgos más importantes de nuestro actual sistema procesal que lo definen como uno de corte acusatorio, pero no puro.

Admitimos que nuestro sistema procesal presenta ciertos rasgos adversariales, y esto se pone de evidencia en la etapa estelar del proceso: el juicio oral, pues, en dicho estadio se materializada -en mayor medida- la vigencia del principio de contradicción que rige el proceso de construcción y validez de la prueba que será objeto de valoración por parte del juez de juicio al expedir su sentencia [esto garantiza la creación de una prueba de calidad para resolver el fondo del litigio]. Se suman a él el principio de oralidad -que junto al de contradicción generan el enfrentamiento en términos jurídicos de las partes procesales: Fiscalía y abogado de la defensa [los principales], a efectos de convencer al juez de que su tesis es la que debe acogerse.

Estos aspectos denotan, a nuestra consideración, la adversarialidad de nuestro modelo; no obstante, para el profesor San Martín (2015) nuestro modelo se acoge a uno de tipo acusatorio puro, sin matices. Postura opuesta -en cierto sentido- a la tesis que hemos afirmado, y que deriva de nuestro estudio a los temas desarrollados por los profesores Reyna (2015) y Arana (2014); y también a los postulados doctrinarios e históricos realizados por la profesora Armenta (2018).

1.2.4.5 El acusado: ¿sujeto u objeto de derecho?

¿Pero qué implicancias tiene considerar al imputado como sujeto u objeto del proceso?

Para responder, y sobre todo destacar la importancia conceptual y práctica que implica asumir una u otra óptica -y más desde la óptica del quehacer probatorio-, nos remitimos, y analizaremos, a los trabajos realizados por Morales (2014) y Quispe (s.f.).

Morales (2014) parte de una postura clara. Destaca que la declaración del acusado no puede ser considerada como un medio de defensa y a la vez como un medio de prueba, puesto que la primera pretende defender, y la otra aportar pruebas. Se tratan pues de ópticas incompatibles entre sí. (p. 8)

Luego de realizar un estudio previo de los sistemas procesales clásicos: el inquisitivo y el acusatorio, y citar a los autores italianos: Pessina, Manzini y Gianturco, Morales (2014) afirma que una visión inquisitiva del proceso valora la versión del acusado como un medio de prueba, mientras que un modelo de corte acusatorio la trata como el principal medio de defensa. Pero frente a esas dos posturas toma posición por considerarla como un medio de defensa material; lo que, en consecuencia, lo lleva a afirmar que el testimonio del acusado no puede ser utilizada, ni analizada, como prueba de cargo o autoincriminación por el juzgador. (pp. 8-10)

Por su parte, Quispe (s.f.), cita la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español [STC 197/1995] para marcar las diferencias de cómo es tratada la persona -y en esencia su declaración expuesta en juicio- sujeta a un proceso penal bajo un modelo procesal de corte

inquisitivo, respecto de uno de carácter acusatorio; extrayendo de lo sentenciado por el referido Tribunal que un modelo inquisitivo considera al imputado como objeto del proceso penal y busca con su versión que confiese la responsabilidad que se le atribuye, al punto de hacer uso de la tortura como medio para poder arribar a dicho fin; pero esto no ocurre en un proceso acusatorio; aquí, el imputado es visto y tratado como un sujeto del proceso, en consecuencia, su declaración es asumida como una expresión o medio de defensa idóneo; reconociéndole libertad para decidir si declara, y, en caso lo haga, libertad para expresar lo que estime pertinente. (Léase punto 1.3.b)

En base a ello, el autor desataca que la discusión sobre la condición que ostenta la declaración del acusado, esto es, de si se trata de un medio de prueba o de un acto de autodefensa, continúa vigente. Pero toma posición por considerarla como un acto de autodefensa, al resultar -dicha posición- más compatible con la concepción garantista y personalista del proceso penal.

Pero el tema también ha sido abordado por Clariá (2009), quien, en la misma línea que Morales y Quispe, sostiene que la declaración del acusado no es un medio de prueba, sino **“un medio de defensa material que se le otorga para que pueda ejercitar su defensa”**. (p. 303)

La doctrina nacional también se ha pronunciado sobre el particular. Así, para Peña (2007, p. 360), la versión del investigado no puede ser un medio utilizable para obtener información; tampoco puede ser tomada en cuenta en un sentido incriminatorio; por el contrario, se trata de un medio de defensa que deriva de su posición adversarial respecto de la postura de fiscalía.

En la misma línea, el reconocido abogado litigante Espinoza (2018, pp. 338-339), abordando el tema a detalle, precisa que, si bien la declaración del acusado en el juicio es la oportunidad para que se defienda, sin embargo, **no se trata propiamente de un acto de prueba.**

Si esto es así, como lo expresa el referido autor, se entiende que las consecuencias prácticas de no considerarla como un acto de prueba, por mandato del artículo 393.1 del CPP y según la noción que hemos desarrollado de “acto de prueba”, conllevaría, indefectiblemente, a la imposibilidad jurídica de que la versión del acusado en juicio pueda ser valorada por la judicatura, sea de forma positiva -para determinar su responsabilidad- o negativamente – para negar la misma-; pues, solo pueden formar parte del quehacer probatorio los denominados actos de prueba, y solo en base a éstos, se puede elaborar la decisión del órgano jurisdiccional.

De otro lado, Benavente (2015, p. 46), apelando a la autonomía que tiene imputado al momento de decidir si declara u opta por no hacerlo -derecho al silencio-, sostiene que si el imputado decide declarar –entonces- su declaración se convierte en un medio de prueba; por tanto, lo que diga en el juzgamiento tiene que ser valorado por los jueces al momento de emitir su sentencia. El autor también sostiene que sobre la base de la regla de libertad de prueba el juzgador tiene la potestad de examinar la exactitud o inexactitud de lo declarado a efectos de arribar a conclusiones pertinentes que le lleven a formar convicción en el caso concreto.

Es decir, -a diferencia de lo que sostienen los autores antes citados-, el profesor mexicano valida la tesis por la cual se le reconoce al juez -en un plano de legalidad- la plena potestad de valorar el testimonio que el acusado brinda en el acto de juzgamiento, sea para determinar su responsabilidad penal o para absolverlo; es más, también llega al punto de admitir que la judicatura puede enlazar sus dichos con el universo probatorio actuado e incorporado legítimamente en juicio, o analizarlo aisladamente para -de ser falaz- atribuir fortaleza a la tesis del acusador. Se produciría una suerte de consecuencia a la mentira que emane de la versión del acusado.

Postura particular es la asumida por el profesor Hermosilla¹⁷ (2012), citado por Oré (2016), para quien si bien la declaración del acusado es un medio de autodefensa; sin embargo, precisa que, el hecho de que la versión del encausado no sea un medio de prueba, “sino un medio de defensa **no obsta a que de los hechos declarados por este puedan obtenerse elementos de incriminación o exculpación que el Tribunal, en su momento, puede valorar**”. (p. 288)

El profesor chileno Riego (2014, p. 12) es otro de los autores que aborda el tema, y se suma a la tesis de Benavente (2015). Para él, en principio, el testimonio del encausado es un medio de defensa; sin embargo, precisa, al reconocérsele autonomía plena al imputado para que decida si declara o no lo hace, entonces, su decisión voluntaria de hacerlo en el acto de juzgamiento convierte a su versión en un medio de prueba. Por tanto, brinda información que la judicatura deberá estimar en la sentencia, al punto de tener la facultad de desentrañar

¹⁷ HERMOSILLA IRIARTE, Francisco. ¿Puede el acusado negarse a contestar las preguntas del Fiscal y/o querellante? En: MIRANDA ESTRANPES/CERDA SAN MARTIN/HERMOSILLA IRIARTE. *Práctica de la prueba en juicio oral: su valoración y el estándar del “más allá de toda duda razonable”*, Librotecnia, Santiago, 2012, pp. 35-42.

si sus dichos son creíbles o no; y si ello es así, muy bien pueden extraer de lo declarado información que los ayude a formarse convicción sobre los hechos que han sido materia de juzgamiento.

En la literatura procesal peruana, una postura idéntica a la de Riego (2014) y de Benavente (2015), es la desarrollada por el maestro San Martín (2015, p. 522). Para el autor la declaración del imputado es un acto complejo que expresa una función principal de defensa, cuyo ejercicio expresa una declaración de conocimiento respecto de aquello que se le atribuye; garantizando así su autodefensa. Sin embargo, ello no impide que, de lo declarado por el imputado, fiscalía pueda extraer información, datos que sirvan para los fines de su investigación, y, eventualmente, la misma declaración puede también ser de utilidad para el órgano jurisdiccional y servirle para generar convicción sobre la verdad o no de los hechos que son materia de juicio.

En suma, resulta claro que la actual doctrina que ha abordado el tema de la declaración del imputado no es unánime a la hora de determinar si es un medio de defensa o un medio de prueba. Hemos podido advertir que para algunos autores no existe vinculación estricta de causa-consecuencia entre la naturaleza de la declaración del acusado y su mérito probatorio. E incluso, para algunos profesores el hecho de reconocer que se trata de un verdadero medio de defensa no enerva la posibilidad de que el órgano jurisdiccional valore su versión al momento de expedir su fallo judicial. Pero también existen otros que descartan aquella posibilidad.

Hasta aquí, no ha sido ocioso dar a conocer la aún vigente discusión que existe en la doctrina en torno a la naturaleza que ostenta la declaración del acusado desahogada en el

juicio oral, sujeta a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; pues, nos ha permitido conocer que la idea de concebir a aquella como un medio de prueba no es exclusivo de un sistema procesal de corte inquisitivo, sino que aún subyace en los ordenamientos procesales latinoamericanos reformados de corte acusatorio -Perú, Argentina, Panamá, Chile, México, Colombia, entre otros¹⁸-, donde se admite la posibilidad -cuanto menos teórica- de valorarla como tal al momento de dictarse el fallo judicial, sea en favor del deponente o en su contra.

Sin embargo, los aspectos de relevancia derivados de asumir una u otra posición, merecen ser estudiados a partir de la valoración probatoria práctica que se le otorga a la declaración del acusado en el juicio oral; pues solo así podremos analizar en qué medida -el actuar jurisdiccional- respeta, restringe o infringe las garantías básicas del acusado, entre ellas, a ejercer su derecho de defensa [material o autodefensa en estricto], a su no incriminación y a presumirle inocente, como integrantes del derecho continente llamado debido proceso.

Dicho ello, pasemos a abordar lo referente al aspecto de la prueba que, a nuestra consideración, es el más importante, sin que ello implica que los actos previos a la misma no lo sean.

1.2.5 La valoración probatoria de la declaración del acusado

¹⁸ Al respecto léase DUCE J. Maricio. “DERECHO A CONFRONTACIÓN Y USO DE DECLARACIONES EMITIDAS EN UN JUICIO PREVIO ANULADO”. En. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000100004 Visitada el 20 de julio de 2020.

En nuestra doctrina y jurisprudencia no existe, llamémosle, un manual o guía de valoración probatoria en el que, cuanto menos, **se hayan fijado criterios o reglas estandarizadas de cómo el juez debe valorar el testimonio del acusado rendido en el acto del juicio oral, o cómo deben ser ingresadas las declaraciones previas de aquel en caso ejerza su derecho a silenciar y se aplique la consecuencia prevista en el artículo 376.1 del CPP –oralización del documento que lo contiene-**, [que es lo que importa a los efectos del presente trabajo de investigación], más allá de la pregonación teórica del respeto de sus derechos a, entre muchos otros, un proceso debido, y dentro de él, a la defensa, presunción de inocencia, a no declarar ligado al principio de prohibición de su autoincriminación.

El único atisbo vinculado a la declaración del acusado en materia de estimación probatoria, ha nacido de la casuística de la Sala Penal Nacional. En dicha sede se discutió y debatió si era posible incorporar las declaraciones previas [sumariales] al debate oral a los efectos de evidenciar contradicción en el relato del acusado. Un sector consideraba que era perfectamente posible, mientras que otro no, porque afectaba el derecho a la no autoincriminación y a la naturaleza de medio de defensa que tiene la declaración del procesado.

Al final, mediante el acuerdo plenario N° 03-2018-SPN, del 01 de diciembre de 2018, se fijó como pauta interpretativa que la declaración previa del acusado –la rendida en sede fiscal- puede ser utilizada con la finalidad de dar cuenta de una contradicción en la versión que aquel brinda en juicio oral.

Mención aparte merecen las reglas establecidas por la Corte Suprema en otros campos de la actividad valorativa de la prueba. Así, por ejemplo, a través del acuerdo plenario N° 2-2005/CJ-116, del 30 de septiembre de 2005, se han desarrollado criterios de valoración probatoria respecto de las declaraciones de coimputados, testigos y agraviados. Asimismo, mediante el acuerdo plenario N° 1-2006/ESV-22, del 13 de octubre de 2006, que a su vez recoge y otorga la calidad de precedente vinculante al fundamento jurídico cuarto del Recurso de Nulidad N° 1912-2005-Piura, se reglan los presupuestos materiales de la prueba indiciaria para enervar la presunción de inocencia del acusado. Y, mediante el acuerdo plenario N° 1-2011/CJ-116, del 06 de diciembre de 2011, se aborda el tema de la valoración de la prueba –en sus aspectos esenciales- en los ilícitos penales de actos de violación sexual, resaltándose la preponderancia –al momento de determinarse la responsabilidad del acusado- de la versión de la agraviada.

Por lo tanto, ante la ausencia de precisión jurisprudencial –expresa- que haya abordado y abarque los temas que nos atañen, esto es, la versión del acusado, su naturaleza, y uso –en el plenario- de sus testimoniales anteriores brindadas ante fiscalía para evidenciar contradicciones en su autodefensa; entonces, se hace necesario abordar la temática de la valoración de la declaración del acusado en juicio oral -declaración plenaria- acudiendo a la doctrina.

En primer término, resulta necesario tomar posición respecto de si el testimonio del acusado es un medio de prueba [como sí lo es su confesión según el artículo 160 del CPP], o si, por el contrario, sólo se trata de un medio de defensa material. Pero el tema no se agota ahí, sino que nos conlleva necesariamente a efectuar, en segundo y último término, un análisis sobre las incidencias que una u otra opción generarían al momento de determinar si

los dichos de aquel deben o pueden ser considerados por el juez de juicio cuando ha de valorar la prueba y sentenciar, sea para dar por ciertos aspectos periféricos o medulares de la imputación en su contra.

En principio, no existe norma expresa que califique a la declaración plenaria del acusado como un medio de prueba, menos a su declaración sumarial [desahogada en la investigación preparatoria].

Aunque, es de señalar, en el mencionado acuerdo plenario N° 03-2018-SPN, sin postular una frase afirmativa, se dice que “suele otorgársele un doble carácter”: como medio de investigación y como acto de defensa privada¹⁹; sin embargo, ello no resuelve nuestro problema; pues, recordemos que al tratar la naturaleza probatoria de la declaración del acusado en el juicio oral, se dio a conocer la aún vigente discusión que existía en torno a dicha temática; y la afirmación hecha en el plenario no hace más que confirmar la vigencia de aquel debate que hemos generado entre los autores que citamos. Pero, ha llegado el momento de tomar postura.

1.2.6 Declaración previa del acusado

1.2.6.1 Definición de declaración previa

Baytelman y Duce (2007), desde la óptica de la legislación chilena, definen a la declaración previa como “cualquier exteriorización de voluntad del sujeto, como sea que

¹⁹ F.j. 13° del acuerdo plenario N° 03-2018-SPN.

haya quedado registrada”. (p. 213) En el mismo sentido se pronunciada el profesor y magistrado Almanza (2015, p. 115), para quien las declaraciones previas son, en puridad, las brindadas por el investigado, incluso por los testigos, antes de la etapa de juzgamiento, sin importar donde se encuentren registradas.

En términos coloquiales, y para los efectos del presente trabajo, diríamos que se denomina declaración previa a aquella que el imputado –sujeto a una investigación preliminar o preparatoria propiamente dicha- brinda ante el representante del Ministerio Público, y como tal se encuentra documentada.

1.2.6.2 Regulación normativa

La figura procesal en estudio no encuentra regulación expresa dentro de nuestra normativa procesal penal vigente; entiéndase como “declaraciones previas” o “uso de declaraciones previas del acusado”, como sí lo hay, por ejemplo, respecto de las declaraciones de los testigos y peritos, que no solo tienen regulación expresa a través del art. 378. 6 del CPP, y también en el numeral 8 del mismo cuerpo de leyes, sino que, además, el legislador se ha encargado de señalar cuáles son las finalidades que se persigue con el uso de esta clase de declaraciones previas; a saber: **a) refrescar memoria, y b) advertir contradicciones.**

Sin embargo, su relevancia como instituto procesal, y su denominación, lo encontramos en el artículo 376 numeral 1 del CPP, cuyo texto prescribe que en caso el acusado, en el plenario, se rehúsa, parcial o totalmente, a declarar, el juez le efectuará una advertencia que, entre comillas implica decirle lo siguiente: **“si no declaras, el juicio sigue y se procede a**

dar lectura a tus declaraciones previas”. Esto, a todas luces, es una cláusula conminativa cuya ilegalidad no ha sido cuestionada.

Por ello, no entraremos a analizar la constitucionalidad de la conminación que el legislador le realiza al acusado al emplear en la redacción de la norma la expresión: “si te rehúsas”, como requisito previo para que se dé lectura a las declaraciones anteriores que el acusado brindó ante el Fiscal, pues, no es el finalidad de nuestro trabajo estudiar los alcances y la naturaleza de dicho término, tampoco su constitucionalidad; basta con señalar que en la práctica se entiende por rehusar, no un sentido conminativo, sino el solo hecho de que el acusado exprese en juicio, ante la pregunta del juez de juicio, que ejercerá su derecho a no declarar.

Lo cierto es que el instituto de las declaraciones previas, y de su uso, deriva de la regulación normativa contemplada en el artículo 376 numeral 1 del CPP. Por último, respecto del instituto procesal en estudio, hemos de precisar que no existe mención alguna, ni siquiera indirecta, en nuestra Constitución Política; únicamente está regulado en dicha norma; asimismo, tampoco existe en toda nuestra normativa adjetiva penal postulado legal que regule su introducción a juicio.

1.2.6.3 Requisitos de validez

Al tratarse de una declaración que el otrora acusado brinda en sede de investigación preparatoria, ante el Fiscal, y en presencia obligatoria de su abogado de libre elección, y en ausencia de este, de un defensor público, rige lo normado en los artículos 86 a 89 del CPP,

pues, son éstos textos legales los que se encargan de regular el tratamiento de la declaración del imputado.

Las normas citadas le reconocen derechos al imputado, pero también imponen deberes a la autoridad Fiscal. Por lo tanto, sólo el cumplimiento de los mismos puede avalar el uso de las declaraciones previas a nivel del plenario, sea como consecuencia de haberse abstenido a declarar (según lo prevé el art. 376.1 del CPP), o cuando se pretenda hacer uso de las mismas para revelar contradicciones en su versión de defensa; esto en caso se admita —y jurisprudencialmente se hace— el uso de aquellas para tal fin, y también para refrescar memoria; finalidades de uso que derivan por aplicación supletoria del artículo 378 numerales 6 y 8 del CPP.

Así, de acuerdo a las normas citadas, el investigado tiene los siguientes derechos que, por cuestiones didácticas enumeraremos:

- i) declarar y ampliar su declaración a fin que despliegue su defensa y responda a los cargos que le son atribuidos (art. 86.1);
- ii) declarar ante el Fiscal y en presencia de su abogado defensor (art. 86.2);
- iii) se le comunique a detalle el hecho que se le atribuye, así como la existencia de los medios de convicción y de las pruebas que existan en la indagación; también, las disposiciones penales que se consideren aplicables, antes del inicio de su declaración (art. 87.1);
- iv) ser advertido que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esta decisión no puede, ni podrá utilizarse en su perjuicio (art. 87.2);
- v) ser informado de que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba (art. 87.3);

- vi) precisar las aclaraciones que estime necesarias durante el desarrollo de la diligencia (art. 87.3);
- vii) dictar su declaración (art. 87.3);
- viii) declarar cuanto tenga por conveniente (art. 88.2);
- ix) precisar los actos de investigación o de prueba cuya práctica demande (art. 88.2);
- x) ser interrogado solo por el Fiscal y su abogado, en etapa de investigación preparatoria (art. 88.3);
- xi) se le formulen preguntas claras y precisas (art. 88.4);
- xii) no se le plantee, menos responder, preguntas ambiguas, capciosas o subjetivas (art. 88.4);
- xiii) no ser coartado en modo alguno, ni inducido para que declare contra su voluntad o confiese (art. 88.4);
- xiv) no se le hagan cargos o reconvenciones con la finalidad de obtener su confesión (art. 88.4);
- xv) se suspenda la declaración por signos de fatiga de su parte (art. 88.6);
- xvi) se consigne en el acta el motivo por el cual se niega o rehúsa a firmar el acta que contiene su declaración (art. 88.7); y.
- xvii) declarar de forma libre y sin el uso de las esposas o de otros medios de seguridad.

De otro lado, fiscalía tiene el deber de velar por el respeto de cada uno de los derechos antes citados, pues solo así, consideramos, podrá: **i) leer en juicio la declaración brindada en sede fiscal; ii) usarlas, en la etapa de juzgamiento, a efectos de evidenciar**

contradicciones en la defensa del acusado; o iii) usarlas con fines de refresco de memoria.

Se tratan, los referidos derechos del imputado, de condiciones previas cuya evaluación – de cumplimiento- corresponde ser efectuada por el juzgador u observada –a modo de objeción- por la defensa, aunque a la fecha no exista regulación normativa que así lo prescriba.

1.2.6.4 Control de legalidad: ¿existe?

Nuestra legislación adjetiva penal, no prevé regla normativa alguna que prescriba un control de legalidad previo, como condición, para que se aplique la cláusula normativa prevista en el artículo 376 numeral 1 del CPP; esto es, para que se dé lectura a la documental que contiene el testimonio del acusado, esto, como consecuencia de haber decidido ejercer su derecho a no hablar; pero, además, tampoco existen mecanismos taxativos de control de legalidad, respecto del uso de las declaraciones previas, para: **i) leer en juicio la declaración brindada en sede fiscal; ii) usarlas, en la etapa de juzgamiento, a efectos de evidenciar contradicciones en la defensa del acusado; o iii) usarlas con fines de refresco de memoria.**

Cuestión distinta ocurre con la lectura de las documentales que contienen las versiones de los órganos de prueba: peritos y testigos, que también fueron recabadas –como actos de investigación- por fiscalía. Ocurre que en estos supuestos sí se hace, por cuanto está regulado

expresamente, un control de legalidad que incide en el derecho de defensa al contradictorio que tiene el acusado.

Así, el artículo 383 numeral 1 del CPP estipula que para que se puedan incorporar –usar- las declaraciones brindadas - en sede fiscal- por los referidos órganos de prueba, necesariamente se tiene que hacer un control previo, cual es, corroborar de los actuados –la carpeta fiscal- que dichas declaraciones hayan sido efectuadas con la concurrencia de la defensa o, en su defecto, cuanto menos haberle emplazado, notificado válidamente; por ende, si el juez de juzgamiento corrobora de los autos fiscales que ni siquiera se ha realizado el debido emplazamiento a la parte acusada, entonces, prohíbe que se de lectura, y, por ende, su incorporación al plenario.

Las reglas taxativas de control incorporadas para la lectura en el plenario de las declaraciones de peritos y/o testigos, impone una exigencia vinculada al derecho –cuanto menos potencial- de contradecir que tiene el para entonces imputado. Ese es su sentido teleológico: **salvaguardar el derecho de defensa**; pues, solo al ser emplazado con la programación de la diligencia en sede fiscal, tendrá, cuanto menos potencialmente, el derecho de acudir representado por su defensa técnica para ejercer el control del acto de la declaración del testigo o del perito; y, también en grado de potencialidad, poder efectuar el contradictorio respectivo [**formular preguntas**], principio fundamental de toda actividad probatoria.

Tales potestades le son reconocidas, como parte de su derecho a la defensa letrada, por el artículo 84 numeral 2 del CPP, cuyo texto prescribe estipula que el abogado defensor tiene el derecho a preguntar de forma directa: **i) a su cliente, ii) a los testigos, y iii) a los peritos.**

No puede, en sede de investigación preparatoria, participar, menos preguntar, en la diligencia que programa la declaración de los coimputados. Solo podrá hacerlo en la etapa de juzgamiento.

Entonces, el respecto del derecho a la defensa y a contradecir la prueba, se constituyen en requisitos *sine qua non* para que, ante la incomparecencia del testigo o perito al plenario [regla], se puedan introducir sus declaraciones vía oralización [excepción]; tal cual se trataría de un prueba documental, cuando en puridad no lo es; pues por esencia misma de la estructura de nuestro modelo procesal, los órganos de prueba deben –por regla- acudir al juzgamiento para que puedan convertirse en actos de prueba, y así pasar a formar parte del acervo probatorio que ha de sustentar el fallo judicial de fondo, sea condenatorio o absolutorio.

Por lo tanto, si se recurre –como lo hace el plenario N° 03-2018-SPN, en su fundamento jurídico diecisiete- a una interpretación supletoria del artículo 378 numerales 6 y 8 del CPP (referente al uso de las declaraciones previas de los testigos y peritos, sea para refrescar memoria o para evidenciar contradicciones: **utilidades expresas**), con la finalidad de justificar el uso de las declaraciones previas **del acusado** a nivel del plenario con fines de refresco o de evidencia contradicción; entonces, consideramos que resulta necesario que se efectúe una regulación legal que controle la legalidad del uso y la incorporación de las declaraciones previas del otrora acusado al acta de juzgamiento.

Nuestro análisis pone en evidencia que existe ausencia de previsión normativa que faculte al juez de juicio ejercer un control de legalidad sobre la declaración que el acusado brindó en sede fiscal; por ejemplo, control sobre el tipo de preguntas que le formularon y que

derivan en el ingreso de información en la documental que la contiene; ya que recuérdese que de acuerdo al artículo 88.4 del CPP, está prohibido que se le hagan preguntas ambiguas, capciosas o subjetivas.

Por lo tanto, el respecto de los derechos del entonces imputado: a la defensa, a su no autoinculpación (salvo la voluntaria y respetándose las exigencias formales contempladas en el artículo 160 del CPP) y al contradictorio, deben ser requisitos *sine qua non* para que pueda aplicarse, **primero**, la cláusula normativa prevista en el artículo 376 numeral 1 del CPP [**oralización de la declaración previa a consecuencia de que decidió en juicio no declarar**], y, **segundo**, para validar el uso de las declaraciones previas con fines de refresco o de evidenciar contradicciones en la defensa material que el acusado ejerce a nivel del plenario.

Se hace, pues, imperativo la existencia de regulación normativa que estipule –a modo de reglas imperativas de control- cuándo pueden ser introducidas las declaraciones previas del acusado al juicio; dado que sólo así será exigible que el juez de juzgamiento controle la actividad fiscal en sede prejurisdiccional, y que, tal cual prueba documental, se pretende introducir al plenario.

1.2.6.5 Uso e importancia

El profesor y fiscal superior Almanza (2015, p. 113), haciendo referencia al tratamiento procesal de las declaraciones previas de los testigos y peritos, señala que su uso en juicio se constituye en una “herramienta básica y muy importante dentro de la litigación oral”, por cuanto posibilita que los abogados cuenten con material que evoca lo que muy

probablemente depondrán en el juicio, de tal forma que, sabiendo ello, están en condiciones de diseñar su estrategia para obtener, mediante el directo o indirecto, información que beneficie a su teoría del caso.

Duce (2014), luego de citar las normas de las legislaciones norteamericana, alemana, italiana, argentina, así como la legislación de América Latina, entre ellas la peruana, resalta implícitamente que el uso de las declaraciones previas de los peritos y testigos responde a dos fines: 1.- para evidenciar contradicciones, y, 2.- para evidenciar inconsistencias en la declaración. De forma explícita el autor también señala que su uso “**son considerados elementos claves para el ejercicio de un derecho a un pleno y efectivo contraexamen**”. (punto 2.1, párrafo 11)

En la misma línea, pero esta vez abordando el tema del uso de las declaraciones previas brindadas **por el acusado**, Escobedo y Paucar (2014, pp. 309-310), sostienen que su utilización no solo ocurre cuando el acusado expresa su negativa a declarar, sino también cuando ejercer su derecho a declarar en el juicio oral, en cuyo caso, “**es posible su empleo como ayuda memoria o para revelar inconsistencias, a pesar de que nuestra normativa procesal penal no desarrolle ello textualmente**”; sin embargo, condicionan su utilización al cumplimiento de tres exigencias: 1) que la declaración brindada por el acusado haya sido realizada de forma libre y voluntaria; 2) que previo a su deposición, se le haya instruido de cada uno de los derechos que en tal condición procesal le asisten; y, 3) que haya declarado en presencia obligatoria de su abogado de libre elección.

Lo señalado por los referidos autores es muy cierto. Nuestra legislación adjetiva penal de 2004 no regula nada respecto del uso de las testimoniales previas del acusado en el plenario,

ya sea como consecuencia de su negativa a declarar [situación prevista en el artículo 376 numeral 1 del CPP], o, incluso, cuando expresa ante el juez de juicio que sí responderá los cargos que le son imputados.

Es más, la norma, la única: artículo 376 del CPP, tampoco hace mención a los fines de su uso, como sí ocurre cuando se encarga de normar el uso de las declaraciones previas de los peritos y testigos.

Pero pese a la ausencia de regulación, nuestra Corte Suprema de Justicia, como lo veremos al tratar lo relativo a la jurisprudencia existente a la fecha sobre nuestro tema de fondo, viene pronunciándose afirmando que está permitido el uso en el juicio de las declaraciones anteriores del inculcado, sea para refresco de memoria o para evidenciar contradicciones en lo depuesto por aquel, precisando que dicha práctica no vulnera en lo absoluto el derecho a la no autoinculpación del acusado [Casación 1462-2017 /Lambayeque, fundamento jurídico séptimo].

Si ello es así, no existe óbice normativo alguno para que el uso de la declaración previa del acusado sea tratado, en términos procedimentales, tal cual fuese una declaración testimonial o pericial, al menos eso es lo que viene sosteniendo nuestra jurisprudencia. Pero el problema no sería ese, sino la falta de regulación que incida –a modo de mandato imperativo- en el control de legalidad previo al que ha de someterse, en estricto, el documento que contiene la declaración del acusado que se pretende ingresar al plenario a través de su oralización, cualquiera que sea el supuesto de su incorporación; pues, a nuestra consideración, la ausencia de regulación expresa que viabilice un control de ese tipo, por parte del juzgador de juicio, puede conllevar a que se vulnere el derecho a un debido proceso

del otrora acusado, y también a su derecho de contradicción respecto de aquello que no se ajustaría a las exigencias que, a nuestra consideración, derivan de la aplicación de los artículos 86 a 89 del CPP y también del artículo 376 numeral 2 del mismo código adjetivo penal.

Y como lo hemos adelantado al abordar temas precedentes, el control que se debe efectuar a de girar en torno al tipo de preguntas que la fiscalía le formuló en sede fiscal; pues, recuérdese que de acuerdo al artículo 376.2 del CPP [**que regula el interrogatorio en instancia de juzgamiento**] y el artículo 88.4 del mismo cuerpo legal [**que regula la declaración en sede de investigación preparatoria**], solo está permitido el uso de preguntas directas, claras, pertinentes y útiles, pero no preguntas repetitivas, salvo que sea evidente la necesidad de que aclare dicho punto [respuesta aclaratoria]; asimismo, están prohibidas preguntas capciosas, impertinentes y sugestivas [aquellas que sugieren la respuesta].

Además, el control judicial –antes de su ingreso al plenario a través de su lectura- también debe abarcar un estudio retrospectivo, ligado a analizar –de la vista del documento- la forma cómo se obtuvo esa declaración: esto es, si consta que el Fiscal le hizo saber al imputado sus derechos a abstenerse a declarar y que dicha decisión no podía ser usada en su contra [art. 87.2 del CPP]; a efectuar aclaraciones y dictar su declaración [art. 87.3]; como también se verifique que dicha declaración fue brindada en presencia –real, sin admitirse regularización de firma por parte de los letrados, sobre todo públicos- de su abogado de elección libre.

Pero, aunado al problema de la ausencia de regulación normativa que controle el ingreso de las declaraciones previas [**que implica aceptar su uso pero exigiendo el cumplimiento**

previo de un control de legalidad], existen posturas que se oponen a validar la posición de Escobedo y Paucar (2014, p. 310), quienes, recuérdese, sostienen que no existe impedimento alguno para que las declaraciones previas del acusado sean utilizadas de la misma manera como se utilizan las declaraciones previas de los peritos y testigos; esto es, para refresco de memoria o para evidenciar contradicciones de la propia defensa.

En ese sentido, el juez superior Mendoza (2020), se opone a que el acusado, en el marco del interrogatorio a nivel del juicio oral, sea interrogado bajo las mismas reglas procesales que las de un testigo o perito, y, en consecuencia, se utilicen sus declaraciones previas para refrescar su memoria o para confrontarlo con su declaración plenaria. Basa su negación argumentando en que dicha regla procesal es exclusiva de los peritos y testigos, y que la normativa es muy clara al respecto. Por tanto, a modo de reto, sostiene que aquellos que pretendan ampliar dicha regla a la declaración del acusado deberán brindar razones suficientes de carácter constitucional para solo así realizar la integración analógica contra reo, prohibida de forma taxativa por mandato del artículo 139.9 de nuestra Constitución Política.

Ahora bien, si el argumento para admitir el uso de las declaraciones previas del acusado, para refresco de memoria y para evidenciar contradicciones en el relato que el propio acusado brinda en la etapa de juzgamiento, es la existente regulación normativa respecto de los peritos y testigos; entonces, debemos citar al profesor chileno Duce (2014) que nos brinda una explicación teleológica de su uso vinculado al sistema acusatorio, que, como lo hemos dicho, es propio de nuestro código. El autor, refiriéndose al uso de las declaraciones previas de los testigos y peritos, sostiene que **“la lógica que subyace a los sistemas acusatorios y los valores que justifican al derecho de confrontación suponen la posibilidad de utilizar**

esa declaración para controlar el contenido de las declaraciones actuales”. (quinto párrafo, punto 2.1)

Si se admite que la justificación de fondo, que deriva del sistema acusatorio que acoge el código, no es otra que “**controlar el contenido**” del relato vertido por el acusado a nivel del plenario [en su defensa]; entonces, consideramos que se asume, a su vez, la idea de que aquello que se declara en instancia fiscal tendría una especie de inmutable; sobre todo cuando se enfatiza a la “**demonstración de contradicción de la autodefensa**” como una de las finalidades del uso de las declaraciones previas del acusado. Casi como la imposición de una coartada sin salida, ni alternativas, que al ser tal, llevaría al juzgador a “determinar” que la versión del acusado es mendaz; sin embargo, la verdad o falsedad de su testimonio exculpatario –por lo general- debe ser analizado y determinado teniendo en cuenta en el conjunto de los demás actos de prueba que se hayan incorporado al plenario; se requiere, pues, una exigencia de corroboración y de contextualización de las versiones, aunque sean contradictorias, el acusado.

1.2.6.6 Valor probatorio de las declaraciones previas

Este es un aspecto muy importante: ¿tienen valor probatorio las declaraciones previas del acusado? Y si ello es así, ¿cuál es su valor probatorio? Para San Martín (2015, p. 613) es innegable que las declaraciones previas –a la que también llama sumariales o indagatorias- tienen **eficacia probatoria**, pese a que, en principio, las declaraciones plenariales reflejan mayor veracidad o fidelidad respecto de aquellas, por haberse encontrado sometidas a los principios que rigen el juicio oral.

San Martín (2015), incluso, admite que las declaraciones indagatorias pueden llegar a reemplazar –como actos de valoración judicial- a las declaraciones que se brindan en el acto de juzgamiento por la misma persona, pero para ello exige el cumplimiento inexorablemente de dos requisitos: primero, que la declaración sumarial se haya efectuado en sede fiscal bajo el cumplimiento de todas las formalidades que la ley prescribe para dicho acto, enfatizando, sobre todo, en el respeto del derecho de defensa, concretamente, en la posibilidad que ha de tener el acusado de contradecir; aunado a la supervisión de su asistencia letrada en dicho acto; y, segundo, que esa declaración –la previa- haya sido objeto del contradictorio a nivel del plenario.

Solo así, concluye el autor, se sujeta a comprobación su contenido y se eliminan las discordancias que existan a efectos de recabar de forma directa una conclusión con validez respecto de la verosimilitud de una y otra. (San Martín, 2015, p. 613)

Como último paso, y el más importante, el magistrado supremo también se ha encargado de escribir cuáles deben ser las pautas para evaluar –**valorar**- una u otra declaración, esto es, la brindada ante el fiscal –introducida al plenario- y la declaración en juicio oral; así, señala que rige en este episodio el principio de valoración global o conjunta de la prueba, en consecuencia, el juzgador puede optar por una u otra declaración, sea de forma parcial o total, con el deber de asumir, eventualmente, las previas en razón a su mayor fiabilidad; sin perjuicio de fundamentar su elección en base a dos conceptos: **verosimilitud y fiabilidad**. Agrega el autor, que para fundamentar la elección de la declaración previa por sobre la plenaria, el juez debe alegar la existencia de situaciones fácticas o indiciarias, periféricas o externas, que le hayan llevado a colegir que la misma se encuentre dotada de bastante objetividad, para, solo así, hacer razonable su elección frente a la declaración plenaria que

se prestó en el juzgamiento, efectuada bajo el principio de inmediación. (San Martín, 2015, p. 613)

En la doctrina internacional, la profesora española Duerto (s.f.) recoge la Sentencia número 297/2006, de fecha 4 de octubre, del Tribunal Supremo Español, para dar cuenta situaciones de retractación que no dejan de presentarse en un caso penal, caracterizado por haber expresado, el acusado, una línea de aceptación de cargos en sede de fiscalía, pero que luego guarda silencio o incluso responder de forma evasiva en juicio. En estos casos, para el Tribunal Español, lo dicho en aquellas declaraciones previas se constituyen en datos que tienen valor probatorio contra reo contextualizados con los demás elementos probatorios actuados en el proceso. Es más, para el Tribunal, del silencio en juicio del acusado, puede deducirse un acto de ratificación del tenor incriminatorio que derivan de otros elementos de prueba. (p. 8)

Asimismo, el Tribunal Supremo Español, a través de la sentencia de fecha 12 de febrero, recurso número 11139/2009, ha expresado que las declaraciones previas deben tratarse como verdaderos medios de prueba; siempre y cuando, hayan sido introducidas al plenario bajo las exigencias de los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción. (Duerto, s/f, p. 8)

Entonces, ¿tienen valor probatorio las declaraciones previas del acusado? Sí, siempre y cuando: **i)** hayan sido obtenidas respetándose los artículos 86 a 89 del CPP [**formalidades que debe respetar el acto fiscal**], y, concordantemente, el artículo 376 numeral 2 del mismo código adjetivo penal; **ii)** se introduzcan, vía la oralización del documento que los contiene, al juicio oral; y, **iii)** se garantice, en el plenario, como consecuencia de su oralización, el

contradictorio al acusado; y, **iv)** tiene que ser más verosímil y fiable que la declaración plenarial.

Ahora bien, a la pregunta **¿cuál es su valor probatorio?** En principio, la declaración previa se diferencia de la plenaria por cuanto solo la segunda se sujeta al principio de inmediación [contacto directo entre el declarante y el juez de juzgamiento], publicidad y oralidad. Lo que no ocurre con la declaración documentada y obtenida en la instancia prejurisdiccional. Sin embargo, de cumplir la declaración sumarial o indagatoria con las exigencias planteadas en el punto anterior, no existe impedimento legal ni constitucional para sea valorada como elemento positivo o negativo de certeza por parte de la judicatura, sea para dar por ciertos aspectos fácticos periféricos o medulares de la acusación en su contra, también para rechazarlos, pero para ello deberá ser valorada en conjunto con los demás actos de prueba actuados en el plenario, y prevalecer frente a la declaración brindada por la misma persona –el acusado– en el juicio oral.

En ambos supuestos, no se admite, bajo ningún supuesto, que la sola versión del acusado puede ser utilizada para fundar un fallo de corte condenatorio; pues, ni su propia confesión autoincriminatoria es suficiente para estimar la validez de una sentencia condenatoria; rige la regla de que solo la exigencia de corroboración adicional puede desvirtuar su presunción de inocencia.

1.2.7 El principio de no autoincriminación

1.2.7.1 Marco normativo internacional

La Convención Interamericana de Derechos Humanos, estipula en su artículo 8.1, literal g), que durante el proceso no se puede obligar a la persona a que declare contra sí mismo, ni a que declare su culpabilidad.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, norma en su artículo 3, literal g), que la persona acusada de un ilícito tendrá, en plena igualdad, derecho a no ser obligado a autoinculparse, tampoco a confesar su culpabilidad.

A su vez, el derecho a la no autoincriminación también se encuentra reconocido por el artículo 40.2 literal a) de la Convención sobre los derechos del niño; artículo 99 del Convenio de Ginebra III; artículo 75 punto 4 literal f) del Protocolo I que se adiciona al Convenio de Ginebra, y por el artículo 67 del Estatuto de Roma.

Existe, pues, un claro reconocimiento mundial del derecho a la no autoinculpación que podemos definir en términos comunes como el derecho que tiene toda persona de no asumir responsabilidad por los hechos de carácter delictivo que le atribuyen. La regla es que corresponde a fiscalía probar, más allá de toda duda razonable, que el acusado es responsable del ilícito que se le atribuye; postulado que conocemos como “el deber de la carga de la prueba”.

Pero el reconocimiento del derecho en estudio, en el sentido de no declararse culpable o no reconocer culpabilidad, no obsta a que la persona sujeta a un proceso penal opte por aceptar su responsabilidad, por cuanto éste acto también es su derecho, expresión de su defensa y acogido por el estado bajo una política criminal propia de un derecho penal

premio, siempre y cuando, se cumplan las exigencias formales y sustanciales previstas en nuestra legislación adjetiva penal.

1.2.7.2 Marco normativo nacional

Nuestra Carta Política no estipula de manera expresa el derecho a la no autoincriminación, también llamado a la no autoinculpación o a no autoconfesar responsabilidad por el hecho atribuido. Sin embargo, su reconocimiento lo encontramos implícitamente en el derecho fundamental a un proceso debido y justo reconocido por el artículo 139.3 de la Magna Carta.

Sin embargo, a partir de lo estipulado en el artículo 2 inciso 24 literal h) de la Constitución Política, también puede hablarse de un reconocimiento indirecto por cuanto, como lo expondremos, el ámbito de protección del derecho en estudio proscribió, como lo hace la norma citada, la utilización de la violencia, en todas sus expresiones: moral, psíquica o física, así como la tortura o inhumanos o humillantes tratos para obtener una declaración, al punto de sancionar con ineficacia valorativa probatoria las declaraciones obtenidas en tales escenarios²⁰.

En el plano legal, el IX artículo del TP del CPP de 2004 estipula, en su numeral 2, que ninguna persona podrá ser inducido u obligado a brindar su testimonio o autoinculparse [se exceptúa su confesión corroborada, según lo estipulado en el artículo 160 y siguientes del

²⁰ En la legislación comparada, en cambio, el principio de no autoincriminación sí se encuentra expresamente consagrada. Así, el artículo 33 de la Constitución Colombiana establece que: “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

CPP]. A su vez, el artículo 71.2 del adjetivo código norma que el imputado tiene el derecho de no declarar, y en caso decida hacerlo, a que cuente con la presencia y asesoría de un abogado de su elección libre.

En el mismo sentido, el artículo 87.2 del mismo Código estipula –como parte del procedimiento fijado para recibir la versión del inculcado, en sede de investigación preparatoria, que antes de recibirse su declaración se le debe advertir que tiene derecho a no brindar su declaración, y que, además, dicha decisión no puede ser usada en contra de sus intereses. El artículo 88.4 del Código en estudio también estipula que está prohibido coartar al declarante, de cualquier forma, durante el desarrollo de la diligencia fiscal; asimismo, prohíbe que pueda ser inducido o determinado a rendir su declaración en contra de su voluntad; y, por último, prohíbe la formulación de preguntas ambiguas, capciosas o sugestivas.

A ello se suma que, a diferencia de lo que ocurre con los demás órganos de prueba: peritos y testigos, el imputado o acusado no tiene el deber de prestar juramento como antesala de su declaración.

1.2.7.3 Contenido constitucional

El TC peruano, en el exp. N° 03-2005-PI/TC²¹, ha desarrollado en extenso el derecho a la no autoincriminación, sosteniendo que si bien no es un derecho reconocido expresamente

²¹ F.j. 2.3 de la sentencia del 20 de junio de 2014 recaída en el Expediente N.º 03021-2013-PHC/TC, TACNA En. <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/03021-2013-HC.html> Recuperado el 28 de julio de 2020.

por nuestra Carta Política; sin embargo, reconoce que estamos frente a un derecho de carácter fundamental y de orden procesal que se desprende del cúmulo de derechos implícitos que conforman el proceso penal debido estipulado expresamente en el texto normativo del art. 139 numeral 3.

También ha expresado, el TC, que su condición de derecho implícito también se infiere a partir de su reconocimiento por parte de los tratados aprobados y ratificados por el estado peruano; documentos internacionales a los que nos hemos referido al iniciar el desarrollo normativo del derecho en estudio.

Expresa el Tribunal, además, que las garantías que se desprenden del derecho en estudio, vistas desde la persona, derivan de una prohibición, como acto contra la persona, de obligación en sentido lato. Así, bajo el amparo del derecho a la no autoinculpación, ninguna persona puede ser obligada a: **i)** descubrirse contra sí misma; **y ii)** declarar o acusarse en su contra. Pero también implica que tiene el pleno derecho de no prestar declaración ante la autoridad que lo convoca en calidad de investigado.

De otro lado, el Tribunal también enfatiza que el reconocimiento del derecho en estudio importa que el Estado se sujete a determinadas cargas de abstención. De ahí que, en tutela del derecho a la no autoincriminación, prohíba tres cosas: **i)** no ejercer violencia psicológica contra la persona investigada o acusada; **ii)** no ejercer violencia contra la integridad física del inculcado o acusado; **y iii)** no valerse de medios engañosos o de símil naturaleza contra el inculcado o acusado; todo, con el fin de obtener su declaración inculpativa sobre los hechos que se le imputan.

El TC, en la ya mencionada sentencia, también ha reglado el actuar de los órganos jurisdiccionales en relación al respeto del derecho a la no autoinculpación. En ese sentido, expresa el TC, que los jueces y tribunales están obligados a: **i)** no colegir del silencio del acusado una tácita aceptación de culpabilidad; **ii) no valorar** aquellas declaraciones que hayan sido obtenidas sin la voluntad de la persona investigada o acusada, como consecuencia de los actos de violencia en su contra; y, **iii)** no imponer pena basándose únicamente en la autoincriminación.

Sobre el silencio, y el sentido interpretativo que puede derivar de él, hemos de puntualizar que el TC autoriza a que los órganos jurisdiccionales le otorguen un sentido interpretativo que pueda ser útil en la averiguación de los hechos. Pero **¿qué utilidad, en la búsqueda de la verdad judicial, se puede obtener del silencio?** En apariencia ninguno. Pero, muchas veces, al menos en el ámbito de nuestras relaciones comunes, se recurre al adagio popular: “el que calla otorga”. Pero **¿qué sentido interpretativo de responsabilidad se puede inferir del mismo?** Si tenemos en cuenta que de acuerdo al artículo 87.2 del CPP, el hecho de que el investigado se abstenga de brindar su declaración, esto es, guarde silencio ante los cargos que le formulan, no tienen repercusión peyorativa en el grado de certeza que se le pueda dar a la imputación. Sin embargo, basta decir, por el momento, que existe jurisprudencia internacional que, por inusual que parezca, otorga mérito probatorio al silencio, lógicamente establece ciertos contextos de prueba. Por ello, abordaremos este punto con mayor amplitud al desarrollar el tema que hemos titulado: “No autoincriminación y silencio”.

Continuando y concluyendo, podemos extraer de la posición de nuestro máximo intérprete de nuestra Constitución y de las leyes, que lo que se busca con el reconocimiento

del derecho a la no autoincriminación es impedir que las autoridades se valgan del empleo de medios que atenten contra la integridad física o psíquica de la persona, o, en su defecto, del empleo de engaños con el fin de conseguir –arrancar- la declaración de responsabilidad penal del procesado o acusado. Tal es el ámbito de protección que, si ello llegara a pasar, nuestra carta fundamental, y también nuestra normativa ordinaria, sanciona con ineficacia probatoria tanto la declaración obtenida por la autoridad, como también los medios de prueba adicionales que a partir de dicha versión se hayan podido obtener; se pregoná así, la ilicitud de la prueba por afectación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona como un remedio procesal.

Sin embargo, el reconocimiento constitucional del derecho a la no autoinculpación, debe ser analizado, y entendido, a la par y de forma sistemática con otro derecho fundamental del acusado: **el derecho de defensa**, en sus dos versiones: material y técnica, en cuyo mérito se le está permitido declarar confesando su responsabilidad -autoinculpándose- o, en su defecto, postular una tesis de negación de cargos.

1.2.8 Jurisprudencia

<p>1.- Acuerdo plenario 03-2018-SPN</p> <p>JUECES SUPERIORES DE LA SALA</p> <p>PENAL NACIONAL</p>	<p>Finalidad y legalidad del uso de la declaración previa del acusado en el juicio oral:</p> <p>a) para desacreditar la versión exculpatoria,</p> <p>o,</p> <p>b) cuestionar la credibilidad del acusado que declara en su defensa.</p>
--	---

La Sala Penal Nacional, se reunió en pleno con el propósito de tomar posición, como ente, respecto de la legalidad o no del uso de las declaraciones previas del acusado en el acto de juicio oral. Dada la posición dual de los integrantes del Pleno de Sala, pues, existían unos que legitimaban su uso y otros que se opusieron bajo el argumento de que hacerlo transgredía del derecho a la no autoincriminación, se invitó al maestro San Martín Castro a efectos de que participe en el desarrollo del mismo; luego del debate se llegó a concluir, en el fundamento jurídico 17, que:

*“A tenor de lo dispuesto en el artículo 376°.1 del CPP es posible la lectura de la declaración previa del imputado, en caso este se rehúse a declarar en el plenario, en esa línea de razonamiento, **nada obsta a que se pueda utilizar esa misma declaración previa, con la finalidad de evidenciar una contradicción con una declaración en juicio oral, prestada en virtud de un acto derivado de la autonomía del imputado***

como sujeto procesal, y que además tienen la oportunidad latente de guardar silencio en ejercicio de esa libertad. Es menester precisar que, una declaración prestada en la investigación, sin coacción, no trae como consecuencia necesaria una declaración contra reo. Correlativamente, el pedido de cotejar una declaración previa de un imputado con la vertida en juicio, por presuntas contradicciones entre las mismas, es perfectamente razonable, dada la facultad interpelatoria que tienen las partes procesales, lo cual no afecta de manera alguna al derecho a la no autoincriminación. Negar dicha práctica por parte del órgano jurisdiccional, excluye el escrutinio de información relevante (que no es suficiente para condenar sin prueba periférica) para adoptar una decisión (...)". [Subrayado y resaltado nuestro]

Además, consideramos relevante extraer el fundamento jurídico 15 del referido acuerdo plenario, pues, se ha establece una condición para el uso de las declaraciones previas en el juicio oral. Leamos:

"La declaración indagatoria si ha sido obtenida con las garantías que la ley prevé, puede incorporarse al juicio oral, de este modo el acusado tiene la oportunidad de aclarar o explicar la contradicción real o aparente y ello permitirá al juez formarse una convicción en función a una versión o versiones del acusado (valoración individual) y a los demás elementos de prueba corroborantes (valoración conjunta). Esta posición permite un mejor escenario

epistémico para verificar si los enunciados de hecho de la acusación o la defensa se corresponden con la verdad. [Subrayado y resaltado nuestro]

Asimismo, en el fundamento jurídico 14 del acuerdo en plenario en estudio, se cita la ponencia dictada por el magistrado supremo San Martín Castro (2018) titulada “*La declaración del imputado*”; ponencia presentada en el II Pleno Jurisdiccional de la Sala Penal Nacional, y en la que el referido magistrado supremo emite pronunciamiento académico respecto de cuáles debe ser requisitos a cumplirse para que se otorgue mérito probatorio a la declaración indagatoria –previa- y la plenaria. Leamos:

*14. (...) la declaración indagatoria y la plenaria, a efectos de su apreciación, **no tiene valor vinculante, pero contribuye a formar la convicción del juez conforme a la sana crítica judicial** (...) más allá del análisis que merecerá que un imputado declare en sede sumarial y no lo haga en sede plenaria, o que en ambas sedes proporcione declaraciones contradictorias, **lo esencial es (i) la presencia del imputado en el acto oral y (ii) que se le proporcione la oportunidad de pronunciarse sobre los cargos y/o sobre sus declaraciones anteriores o sumariales –se denomina a esta operación “requisitos de valorabilidad”-.** Cubiertas estas posibilidades, **la valoración de las declaraciones del imputado resulta necesaria y permitirá al juez formarse, en concordancia con los demás elementos de prueba, una firme convicción sobre los cargos***

<p>2.- Casación N° 1462-2017-Lambayeque</p> <p>Ponente: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO</p>	<p>Clase de prueba de la declaración del acusado y efectos de no declarar en juicio oral:</p> <p>a) La declaración del acusado oralizada en juicio es prueba documentada.</p> <p>b) El ejercicio del derecho a guardar silencio en juicio oral no anula a las declaraciones previas.</p>
---	--

En el presente pronunciamiento casatorio se instó a mérito del recurso de casación interpuesto por la defensa del encausado Geiner Antonio Palacios García, condenado como coautor de delito de Robo en grado de tentativa, y llevó a la Corte Suprema pronunciarse respecto de la calidad de prueba que tiene la declaración autoincriminatoria del acusado que vía lectura ingresa al juicio oral. Claro resulta, al leer los considerandos quinto y sexto de la Casación N° 1462-2017-Lambayeque, que para nuestra Corte Suprema no constituye infracción alguna el que los jueces de instancia sustenten una sentencia condenatoria en base a la propia declaración previa autoinculpatória del propio imputado que ingresó al plenario **como prueba documentada**, siempre y cuando ésta se haya efectuado ante el fiscal y en presencia de su abogado defensor, y, además, haya sido valorada conjuntamente con otros medios de prueba (acta de ocurrencia de calle de Serenazgo y explicación pericial del certificado médico legal número 00351-L del agraviado).

De lo desarrollado por la Suprema podemos concluir tres cosas: **a)** que no existe impedimento alguno para que los jueces valoren la declaración previa del acusado, aun

siendo autoincriminatoria, que vía lectura ingresa al plenario por aplicación del artículo 376.1 del CPP; **b)** que la declaración del acusado es prueba, por tanto, valorable incluso para fundar su condena, siempre y cuando haya sido recabada con todas las formalidades que exige la ley para este acto; **c)** que la declaración del acusado por sí sola no es suficiente para condenarlo, sino que es exigible prueba adicional que pueda corroborar su incriminación; y, **d)** que la declaración previa del acusado que ingresa al plenario vía lectura se convierte en **prueba documentada**.

Por último, la Suprema, en el fundamento jurídico séptimo, se pronuncia rechazando que el ejercicio del derecho al silencio a nivel del plenario por parte del acusado, pueda tener efecto invalidatorio respecto de las testimoniales previas que haya brindado ante fiscalía. Es enfática al sostener que la única vía para excluir su lectura en juicio, conforme lo prevé el artículo 376.1 del CPP, es su ilicitud, y que la doctrina recogida en la referida norma no vulnera el derecho a la no autoincriminación.

<p>3.- R.N. N° 1666-2019-Lima</p> <p>PONENTE: SEQUEIROS VARGAS</p>	<p>La declaración del acusado es un medio de defensa</p>
--	--

El presente pronunciamiento de la Corte Suprema, de fecha 27 de julio de 2020, se instó a mérito al recurso de nulidad interpuesto por el abogado de la defensa de la sentencia a 5 años de pena privativa de la libertad, Evelin Dora Rojas Chávez y otra, por el delito de robo agravado, en agravio de Evelin Dora Rojas Chávez; pronunciamiento que si bien no alude al uso de las testimoniales previas de la acusada –o de sus coencausados- que hayan podido

ser oralizados en el plenario; sin embargo, al dar respuesta a los agravios expuesto por el letrado de la encausada, llega a sostener que la recurrente sí estuvo presente en el lugar de los hechos y que si bien no efectuó conducta activa alguna, sin embargo, su participación dentro del iter fue el de elemento de contención o campana [últimas líneas del fundamento jurídico 6.5]; por lo tanto, precisa la Suprema en el fundamento jurídico 6.6, “(...) **sus agravios deben tomarse como mecanismos de defensa a fin de evadir su responsabilidad en los hechos materia de imputación**”. [Subrayado y resaltado es nuestro]

Esta Casación, precisemos, no habla en estricto de nuestras variables [**Tratamiento probatorio de la declaración del acusado en juicio oral, o del uso de las declaraciones previas para evidenciar contradicciones**], pero marca una posición sobre la calidad de medio de defensa que, en este caso, se le confiere a la declaración exculpatoria de la declaración de la acusada.

<p style="text-align: center;">4.- R.N. N° 1879-2018-Lima</p> <p style="text-align: center;">PONENTE: PACHECHO HUANCAS</p>	<p>Valor probatorio de una declaración autoinculpatoria del procesado:</p> <p>a) Declaración preliminar del acusado sin abogado defensor no puede sustentar una sentencia condenatoria.</p> <p>b) La sola declaración del acusado no puede sustentar condena.</p>
--	---

En razón del recurso de nulidad interpuesto por Alexis Jonny Castro Julca, contra la sentencia emitida por la Cuarta Sala Penal para procesos con Reos en Cárcel de la CSJ de Lima, que lo condenó como autor del delito de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de Fryda Cristina Gonzales Vásquez, la Suprema expidió el R. N. 1879-2018-Lima.

En principio, se lee del fundamento 3.1 de la referida sentencia suprema que, entre los agravios postulados por el acusado sentenciado, se sostenía que en el desarrollo de su declaración previa no participó el fiscal y que, además, había sido golpeado para que firme su declaración. Por lo tanto, alegaba, aquella declaración no podía tener validez probatoria.

En respuesta a ello, la suprema, primero, precisa y delimita los agravios en el fundamento jurídico 6; luego en el 7 recoge textualmente la declaración que brindó el recurrente –y cuya invalidez alega; y en el fundamento 8 rechaza lo cuestionado por cuanto en el desarrollo de su declaración también participó el efectivo policial Dante Pastor Bocangel, así como el representante del Ministerio Público, no siendo el color de tinta disímil un argumento válido para negar la participación de fiscalía, como lo dijo el impugnante.

No obstante, sobre el mismo punto, la suprema pasa a analizar la declaración preliminar y la que el acusado dio ante el juez y el Colegiado Superior, para en los fundamentos jurídicos 9 y 10 desarrollar el contenido normativo del derecho fundamental a la no autoincriminación que prohíbe la valoración probatoria obtenida con violencia, y, además, llegar a afirmar que la declaración preliminar del acusado **se llevó a cabo sin la presencia de abogado defensor; y que, en consecuencia, una declaración obtenida en tales condiciones no puede llegar a sustentar una sentencia condenatoria. Refuerza su tesis**

citando la Sentencia Casatoria N° 375-2011-Lambayeque y la jurisprudencia española recaída en la STC N°. 165/20174, fundamento cuarto.

<p>5.- Casación N° 375-2011-Lambayeque</p> <p>PONENTE: VILLA STEIN</p>	<p>a) El acusado como sujeto, y no como objeto, del proceso.</p> <p>b) Posición privilegiada del acusado para realizar aportes probatorios.</p>
--	---

En la casación 375-2011, emitida el 18 de junio de 2013, se resalta la posición privilegiada que tiene el imputado, por su condición de tal, de realizar aportes probatorios respecto del hecho que se le imputa [tal cual lo refería Nieva, 2010]; sin embargo, se deja sentada que su colaboración sólo puede obtenerse de forma voluntaria en tanto esto es lo que garantiza nuestro actual modelo procesal, a diferencia del modelo inquisitivo donde el objetivo principal de la actividad jurisdiccional era obtener la confesión del acusado [fundamento jurídico noveno]. También se precisa, al inicio del referido fundamento, que el imputado es sujeto del proceso y ya no como objeto del mismo; de ahí el reconocimiento de sus derechos y garantías, entre ellas, declarar de forma voluntaria; cuestión ligada a su derecho a no declarar contra sí mismo.

<p>6.- R.N. N° 665-2017-Lima Sur</p> <p>PONENTE: CASTAÑEDA ESPINOZA</p>	<p>Declaraciones inconsistentes del acusado solo son argumentos de defensa; se exige corroboración y uniformidad para su mérito probatorio a su favor.</p>
---	--

Al igual que en el R.N. N° 1666-2019-Lima, donde se destaca que la declaración del acusado es un medio de defensa, en la R.N. N° 665-2017, del 24 de setiembre de 2018, ocurre lo mismo. Se destaca nuevamente que la versión del acusado –sobre todo exculpatoria- es un medio de defensa; pero, además, se realiza un aporte adicional. Así, en el fundamento jurídico 7.5, se precisa que el cambio de versión de los inculpados – la brindada en sede policial ante fiscal y aquella depuesta en el juicio oral-, denota la contrariedad de la misma y falta de uniformidad, por lo tanto, vistos así los mismos deben ser tratados como argumentos de defensa; tanto más si a la parte existe prueba suficiente que justifica su condena, en este caso, por el delito de trata de personas.

1.3. Definiciones conceptuales

1.3.1. La Prueba

Prueba en un sentido amplio, es todo aquello que nos permite acreditar o desmentir la realización de un hecho.

Procesalmente es utilizada por las partes procesales para generar convicción en el juzgador.

Así, la Fiscalía buscará demostrar la participación del acusado en el hecho delictivo, y la defensa, desvirtuar la imputación o en su caso generar duda razonable.

La prueba a ofrecer para su posterior actuación en juicio y valoración por parte del juzgador, puede ser, dentro de sus variantes, directa, indirecta, corroborada y única.

1.3.2. Prueba directa, indirecta, corroborada y única

Se le denomina directa porque apreció la realización del hecho delictivo. Se le llama indirecta porque pese a no encontrarse presente en la perpetración del suceso, tomó conocimiento del mismo a través de un tercero. Se denomina prueba corroborada en la medida que su veracidad se encuentra respaldada por otros medios de pruebas, convirtiéndola en confiable. Por su parte, prueba única es aquella que no cuenta con respaldo alguno, por lo que su apreciación deberá ser merituada por el juzgador a efectos de determinar si desvirtúa o no la presunción de inocencia.

De acuerdo al momento de su producción, la prueba se clasifica en preconstituida, anticipada y plenaria. Las dos primeras se producen antes del juicio oral, y la tercera, se genera exclusivamente en el desarrollo del juzgamiento.

1.3.3. Prueba lícita

Es aquella obtenida e incorporada al proceso en estricto respecto de los derechos constitucionales de la persona. No lo será, por ejemplo, la declaración que se obtiene mediante amenaza o tortura, por vulnerar el contenido esencial del derecho al debido proceso [prueba ilícita]. Concepto distinto es el que encierra a la denominada prueba irregular, en tanto, en este caso, la vulneración incide en una norma de carácter legal, más no constitucional.

1.3.4. Estrategia de defensa

Un juicio es principalmente estratégico. En un plano general, elaborar una estrategia de defensa a nivel del juicio oral implica estructurar el cómo se ha de responder, desde la óptica de la defensa del acusado, a la acusación que formula la Fiscalía, o la inversa. En un plano particular, la estrategia de defensa implica construir la forma cómo se puede desacreditar el testimonio -o la persona- del testigo y/o perito que la Fiscalía, o la defensa, actuará en el juicio. El cuándo prescindir de un medio de prueba, también forma parte de la estrategia. También lo es el decidir si el acusado debe o no declarar en el juicio oral; y si se opta por un sí, también determinarse en qué momento de la fase probatoria debe hacerlo –al inicio, intermedia o final-.

1.4. Operacionalización de variables

Variables	Definición de la Variable	Dimensión	Indicadores	Instrumento
<p><u>Variable independiente</u></p> <p>Tratamiento probatorio de la declaración del acusado en juicio oral.</p>	Debe ser entendida como el valor probatorio que el juez penal da a la declaración del acusado durante el juicio oral.	Teórica: -- Derecho procesal probatorio	<p>-Prueba directa</p> <p>-Prueba corroborada</p> <p>-Prueba única</p> <p>-Prueba indirecta</p>	<p>-Análisis de datos</p> <p>-Fichaje</p>
<p><u>Variable dependiente</u></p> <p>Empleo de las declaraciones previas para establecer contradicciones en los argumentos de defensa.</p>	Debe ser entendida como el uso de las declaraciones previas dadas por el acusado, con el objetivo de contradecir el argumento de defensa.	<p>Teórico-práctico:</p> <p>Estrategias de Litigación oral penal</p>	<p>-Ausencia de declaración</p> <p>-Declaración corroborada</p> <p>-Declaración contradictoria</p> <p>-Declaración de refresco</p>	<p>-Análisis de datos</p> <p>-Fichaje</p>

1.5. Hipótesis

Si la declaración del acusado en juicio oral es contrastada con su declaración previa para establecer contradicciones en los argumentos de defensa, entonces, probatoriamente es tratada como fundamento de certeza positiva por los juzgados de juzgamiento penales de Chiclayo para sustentar juicios de responsabilidad penal.

Capítulo II. Métodos y Materiales

2.1. Tipo de Investigación

Un estudio de ese tipo conlleva a que la de investigación a desarrollar sea de Tipo **Descriptivo – Explicativo**, ubicada dentro de la línea de investigación del Derecho procesal penal.

2.2. Método de Investigación

2.2.1. Método descriptivo

Permitió describir la información porcentual necesaria para la fundamentación de la variable independiente que es objeto de estudio.

2.2.2. Método explicativo

Este método permitirá establecer cuál es el contenido de la utilización de la declaración previa, y la forma cómo es que son valoradas para formar criterio de condena por parte de los señores jueces penales de juzgamiento, en las sentencias que se analizarán.

2.2.3. Método inductivo

Este método permitirá analizar los datos que serán el instrumento de cotejo, luego de analizar cada aspecto de la valoración que realice el juez penal en su sentencia, al valorar el contenido de la declaración del acusado en el proceso.

2.2.4. Método deductivo

Este método permitirá ir de lo general a lo específico, y operará cuando de las conclusiones a las que se arribarán con el tratamiento de los datos, vayamos a comprobar la hipótesis que hemos planteado en el presente trabajo de investigación.

2.2.5. Método analítico

Se aplicará cuando corresponda analizar cada sentencia que forma parte de la muestra, lo cual permitirá pormenorizar los criterios de tratamiento probatorio de los jueces de juzgamiento penales al momento de resolver los casos que se les presentan.

2.2.6. Método de síntesis

Mediante el empleo de este método se puede llegar a conclusiones parciales a partir del análisis de las sentencias condenatorias, para luego establecer aquellas características comunes que permitirán arribar a conclusiones generales, como parte del trabajo de investigación.

2.3. Diseño de Contrastación

Se considera el diseño descriptivo o de una sola casilla

$$M1 = O1$$

$$M2 = O2$$

Donde,

M: es el conjunto de información que se recogerá de las sentencias y decisiones adoptadas, de la bibliografía y normas jurídicas.

O: es la Ficha de análisis que se aplicará para recoger la información.

= Es la relación que se establecerá a partir de la comparación entre las muestras.

2.4. Población, Muestra y Muestreo

La población está formada por el total de sentencias condenatorias impuestas durante el año 2018 en los juzgados penales de juzgamiento de Chiclayo.

De dicha cantidad, se está seleccionando una muestra ascendente a 20 casos distribuidos de la siguiente manera:

- Sentencias condenatorias, que contengan declaraciones del sentenciado en juicio oral, uso de declaraciones previas y tratamiento probatorio de dichas actuaciones procesales.

TABLA N° 01:

MUESTRA A LA QUE SE VA APLICAR LA FICHA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Aspectos Casos	Frecuencia	Porcentaje
Declaración del acusado	10	20
Empleo de declaraciones previas	10	20
Total	20	100

Año: 2020

Fuente: De investigación

2.5. Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos

2.5.1. Técnica del Fichaje

Mediante esta técnica se recogerá los datos teóricos, de opinión y de comentario de los textos nacionales y extranjeros.

Se usarán como instrumentos las fichas bibliográficas, textuales y de comentarios, fichas linkográficas, entre otros.

2.5.2. Técnica del Análisis de Documento

Esta técnica se ha de emplear para cotejar la información teórica con el contenido de las sentencias que se van a analizar. El instrumento se expresará mediante una ficha de cotejo.

2.6. Procesamiento y Análisis de Datos

Para este trabajo de investigación, se considera tratar los datos aplicando frecuencias simples y frecuencias porcentuales, y esto debido a la cantidad de la muestra que se pretende estudiar.

Capítulo III. Resultados

3.1. Presentación de resultados

Teniendo en cuenta nuestro problema, objetivo principal y la hipótesis postulada, corresponde ahora presentar nuestro análisis de las 20 sentencias expedidas por los juzgados penales de juzgamiento de Chiclayo, Corte Superior de Justicia de Lambayeque, correspondientes al año 2018, en los que se han incorporado (hecho uso) las declaraciones previas al plenario que el acusado brindó ante fiscalía como parte de la etapa de investigación preparatoria.

Cabe precisar que para la data de las sentencias (2018) hemos considerado de forma indistinta dos aspectos: a) fecha de expediente (2018), o b) fecha de emisión de la sentencia (2018); ambos rubros validarán el año que delimita temporalmente nuestro trabajo de investigación.

Para la esquematización de este capítulo dividiremos su estudio en dos aspectos: el primero referido a las sentencias propiamente dichas [que sirven de muestra para nuestro estudio], y el segundo, referido a la presentación de tablas, gráficos estadísticos y descripción de los mismos.

3.1.1 Sentencias

En ese sub capítulo haremos precisión de los siguientes datos: a) número de expediente, b) nombre del juez o jueces, y nombre del despacho al que pertenece, c) delito, d) acto y fecha, e) decisión, f) motivo por el cual se hace uso de la declaración previa en el juicio, g) si se corrió o no traslado de la declaración previa a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario, h) parte procesal que ingresa la declaración previa, i) tratamiento probatorio otorgado a la declaración previa introducida al plenario, j) control de legalidad efectuado antes del ingreso de la declaración previa, k) extracto expreso de la parte de la sentencia donde consta la declaración previa ingresada al juicio oral, y, por último, l) extracto de la sentencia donde el órgano jurisdiccional realiza el análisis probatorio de la declaración previa introducida al plenario.

CASO N° 01: Expediente	06499-2014-33-1706-JR-PE-08
Juez / Juzgado	Rene Santos Zelada Flores / Octavo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial De Chiclayo Y Ferreñafe
Delito	Usurpación agravada
Acto / Fecha	Sentencia / 10-01-2018
Fallo	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el juez a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba para corroborar hechos imputados; valorados conjuntamente con otros medios de prueba.
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Extractos de las declaraciones previas ingresadas al plenario con fines de contradicción

“(...) 4.5. Examen del acusado HERNÁN IBAÑEZ SAAVEDRA. (...) Narración libre y espontánea de los hechos: No tiene nada que ver con los hechos señalados por el Fiscal. A las preguntas del representante del Ministerio Público: (...) Respecto al terreno, el cementerio tenía su perímetro formado, es decir cercado de adobe, y el resto de área estaba libre porque a los lados había desmonte, al lado derecho había una ladrillera en estado de abandono (...) Conoce a José Luis Díaz Ayala porque es de Chongoyape (Introducción de declaración previa por contradicción, de fecha 18 de julio de 2014. Pregunta 11: Declarante diga Ud. si tiene conocimiento que el señor José Luis Díaz Ayala tenía en posesión una ladrillera que se ubica en la parte posterior del Cementerio El Ángel del Distrito de Chongoyape, el cual venía poseyendo desde hace 14 años. Dijo: Que si tengo conocimiento de dicha ladrillera. El señor José Luis Díaz Ayala venía poseyendo hace años pero actualmente lo va a ubicar en otro lugar), no le está preguntando si el señor Díaz Ayala tenía la ladrillera, sino que la ladrillera estaba en estado de abandono no ha dicho que estaba abandonada, ello porque no veía personal trabajando cuando pasaba para irse a trabajar. Incluso no había cerco perimétrico; si tenía conocimiento que el señor José Luis Díaz Ayala poseía la ladrillera. (...) 4.8. Examen de la -acusada SUSSAN JANNET MONTEZA MONTENEGRO. Narración libre y espontánea de los hechos: (...) Recuerda que ingresaron pacíficamente al área de terreno materia de investigación (...). A las preguntas del representante del Ministerio Público: El día 14 de febrero ingresaron 64 personas, ingresaron pacíficamente no cortaron ningún cerco perimétrico, solo ingresaron con palanas para limpiar el área de desmontes y piedras, incluso contrataron maquinaria para realizar la limpieza general de todo el terreno. No había ninguna construcción en el lugar (Introducción de declaración previa de fecha 18 de junio de 2014. Pregunta 9: Declarante diga Ud. si tiene conocimiento de que el señor José Díaz Ayala tenía en posesión una ladrillera que se ubica en la parte posterior del Cementerio El Ángel, el cual venía poseyendo desde hace 14 años. Dijo: Que yo he visto una ladrillera que se veía abandonada, no se de quien era, jamás lo vi al denunciante en esa ladrillera), entendió la pregunta si había una casa; cuando ingresaron solo habían paredes abandonadas de ladrillo, el señor Díaz sacó el material y lo trasladó (...)”.

b) Tratamiento probatorio

“TERCERO. 3.1. (...) Que, los acusados (...) Carlos Erico Carrasco Vallejos, Sussan Jannet Monteza Montenegro, Víctor Montenegro Sánchez, Luz Angélica Cabrera Hoyos, Zuleika Elizabeth Cabrera Tequen, Lelis Tello Montalvo, Yovany Corrales Díaz, Teodolinda Vásquez Farro, Marco Antonio Sánchez Díaz, Anshela

Melissa Sánchez Julca, Martha Gallardo Osore, Flor de María Cabrera Tequen, Rosa Obdulia Hoyos Saavedra, María Emilia Cabrera Mendo y Elsa Petronila Cabrera Hoyos, y Yovani Corrales Díaz **han aceptado haber participado de la invasión del terreno materia de juicio, conforme se desprende de sus declaraciones brindadas en juicio o las brindadas a nivel de investigación, oralizadas en juicio.**

“(…) QUINTO.- 5.1. Por otro lado la vinculación de los acusados con los hechos, emana de los siguientes medios de prueba actuados en juicio: (…) 5.3.1. **CARLOS ERICO CARRASCO VALLEJOS**, está vinculado con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** 5.3.2. **SUSSAN JANNET MONTEZA MONTENEGRO**, está vinculada con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** 5.3.4. **VICTOR MONTENEGRO SÁNCHEZ**, está vinculado con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** (…) **5.3.6. LUZ ANGELICA CABRERA HOYOS**, está vinculada con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** 5.3.7. **ZULEIKA ELIZABETH CABRERA TEQUEN**, está vinculada con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** 5.3.8. **LELIS TELLO MONTALVO**, está vinculado con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** 5.3.9. **YOVANY CORRALES DÍAZ**, está vinculada con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** (…) **5.3.11. TEODOLINDA VASQUEZ FARRO**, está vinculada con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** 5.3.12. **MARCO ANTONIO SANCHEZ DÍAZ**, está vinculado con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** 5.3.13. **ANSHELA MELISSA SANCHEZ JULCA**, está vinculada con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** (…) **5.3.15. MARTHA GALLARDO OSORES**, está vinculada con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** 5.3.16. **FLOR DE MARIA CABRERA TEQUEN**, está vinculada con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** (…) **5.3.18. EDWN GABRIEL VIERA HOYOS**, está vinculado con el Acta de Constatación Policial de fecha 28 de mayo del 2014, **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** (…) **5.3.20. ROSA OBDULIA HOYOS SAAVEDRA**, está vinculada con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** (…) **5.3.22. MARIA EMILIA CABRERA MENDO**, está vinculada con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración.** 5.3.23. **ELSA PETRONILA CABRERA HOYOS**, está vinculado con (…) **habiendo aceptado finalmente su participación conforme se desprende de su declaración (…)”.**

CASO ° 02: Expediente	3500-2017-28-1706-JR-PE-01
Jueces / Juzgado	Rosa Amelia Vera Melendez; Gerardo gálvez rodríguez (d. d.); y, Elia Jovanny Vargaz Ruiz / Primer Juzgado Penal Colegiado De Chiclayo
Delito	Robo agravado y otros
Acto / Fecha	Sentencia / 17-10-2018
Fallo	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Silencio del acusado
Parte procesal que oraliza la declaración previa	No se advierte
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de defensa natural
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Lectura de declaraciones previas de los acusados por ejercicio del derecho al silencio

“(...) 1.1. Actividad Probatoria (...) 1.4.1. Examen del acusado José Luis Salazar Santisteban. El acusado, previa consulta con su abogado defensor, manifestó su decisión de abstenerse de declarar, haciéndoseles conocer que conforme al artículo 376 inciso 1° del Código Procesal Penal, en la estación correspondiente se oralizarían sus declaraciones prestadas en sede fiscal. SE ORALIZÓ SU DECLARACIÓN, que realizo en sede Fiscal. 1.4.2. Examen de la acusado Kevin Jonatan Murga Rojas. La acusada, previa consulta con su abogado defensor, manifestó su decisión de abstenerse de declarar, haciéndoseles conocer que conforme al artículo 376 inciso 1° del Código Procesal Penal, en la estación correspondiente se oralizarían sus declaraciones prestadas en sede fiscal. SE ORALIZÓ SU DECLARACIÓN, que realizó en sede Fiscal. (...)”

b) Tratamiento probatorio

“(...) 4.7. Los acusados en sus declaraciones rendidas a nivel fiscal incorporadas a juicio oral ha negado los cargos manifestando que fueron intervenidos por efectivos

policiales en circunstancias que venían de un baile popular y se dirigían a sus domicilios, negando haber intervenido en los hechos. El colegiado considera que son argumentos de defensa natural, los mismos que se desvanecen con los medios de prueba actuados en juicio oral que vinculan a los acusados con el evento criminal, como se ha analizado precedentemente. (...)”.

CASO N° 03: Expediente	02085-2018-4-1706-JR-PE04
Juez / Juzgado	Severino Vargas Calderón / Noveno Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
Delito	Falsedad ideológica
Acto / Fecha	Sentencia / 24-10-2019
Fallo	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía y actor civil
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Ninguno
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción

“(...) 3.I. De la declaración de los imputados

a) Declaración del Acusado Álvaro Renato Calderón Segura, con DNI N° 16693600:

Manifestó, que a raíz de los problemas que tuvo con la señora Zelmira, se originaron problemas judiciales aparte del presente, sobre nulidad de acto jurídico, donde le han embargado siete propiedades y en el divorcio cuatro propiedades más que fueron objeto de embargo. Asimismo, indica que los documentos aportados fueron realizados a través de una notaría como la vigencia del poder.

A las preguntas del representante del Ministerio Público dijo:

Que, para realizar la transferencia de los inmuebles materia del presente proceso siempre se ha comunicado con su ex esposa, siempre ha manejado el negocio inmobiliario, ya que su ex esposa estudiaba derecho, pero no ejercía. Le brinda un poder en el año 2011 por su propia voluntad, en su sano juicio y circunstancias en las que llega proveniente de los Estados Unidos, haciendo uso de este poder para comprar y vender inmuebles que corresponden a diferentes negocios familiares.

Respecto a la transferencia de los siete inmuebles, contaba con un préstamo de S/. 60.00.00. de caja Piura, - cuyo préstamo es a nombre de los dos haciendo referencia a su ex esposa) y para asumir los gastos de la educación de sus hijos; de su familia, realizaban las ventas; por lo que su ex esposa tenía pleno conocimiento de las transferencias.

Respecto a las transferencias de otros inmuebles con la participación de su ex esposa que en el negocio inmobiliario cuando se vende una propiedad en cualquier parte del país el vendedor está a lo que requiere el cliente, si el cliente requiere de la venta mediante un poder específico se hace la venta con ese poder específico, el dinero recibía por esas ventas era para destinarlos al gasto familiar. Aclara además que esas transferencias participa su ex esposa es en mérito a la presente física de su ex esposa.

*Respecto a la entrega de dinero producto de la transferencia de los inmuebles material del presente proceso, dijo que sí lo hizo y además canceló las deudas por concepto de educación de sus hijos, incluida operaciones de cirugías estéticas a favor de su ex esposa. **La representante del Ministerio Público introduce pregunta N° 09 por contradictoria.***

Respecto a la posesión efectiva de los inmuebles transferidos dijo: que a la fecha son poseídos por sus propietarios, quienes entraron en posesión al momento de efectuarse la compra-venta. La representante del Ministerio Público introduce pregunta N° 15 por contradictoria.

A las preguntas del actor civil dijo:

*-Que el inmueble Mz K-Lote 07 consta de cinco pisos, más azoteas, quien se encarga de realizar las inscripciones registrales era su empresa, dentro del patrimonio desconoce la existencia de un open house. **El abogado del actor civil introduce pregunta N° 08 por contradictoria.** No conoce al señor César Seclén Ruiz. (...)*

b) Tratamiento probatorio

Ninguno. Leída la sentencia, no se hace mención, en el análisis probatorio, a las declaraciones previas ingresadas al plenario, tampoco a aquellas que brindó en el juicio oral.

CASO N° 04: Expediente	3955-2015-86
Jueces / Juzgado	Rosa Amelia Vera Melendez; Gerardo gálvez rodríguez (d. d.); y, Elia Jovanny Vargaz Ruiz / Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
Delito	Robo agravado
Acto / Fecha	Sentencia / 13-04-2018
Fallo	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba para corroborar hechos imputados; valorados conjuntamente con otros medios de prueba.
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad.	No / No

a) Extractos de las declaraciones previas ingresadas al plenario con fines de contradicción

“(…) 1.5.3.- EXAMEN DEL ACUSADO RONAL OMAR PISCOYA PACHERRES: Libre y Voluntariamente: Señaló, que cuando salió de la discoteca, jamás se acercó a robarle o golpearlo, lo único que hizo, cuando escuchó bulla en la esquina, fue acercarse, refiere, que estaba mareado, allí se percató que dejó el celular tirado, todos estaban corriendo, capaz uno de sus amigos, lo han visto recogiendo el celular; pero no sabe cuál de ellos, luego han estado preguntando, indagando y le han echado la culpa a él, nunca ha tenido problemas, lo cual, lo perjudica, mas aún, que su esposa está embarazada. Al interrogatorio de la Representante del Ministerio Público: Expresó, que cuando se encontró el celular, estaba solo y se dirigía a su casa. Se introduce su declaración ampliatoria, rendida a nivel Fiscal, de fecha treinta de noviembre, pregunta N° 02, párrafo sexto y séptimo. Preguntado diga, en que sentido quiere ampliar su declaración de fecha 05 de febrero de 2015, obrante a folios 22-24?. Dijo: “... Foca lo agarra de su mano y aprovechando ese momento, yo le quité el celular que lo tenía en su bolsillo del polo y luego de ello, yo me fui...”. Pregunta N° 03, párrafo cuarto. Preguntado

*para que diga, es cierto lo que dice el denunciante en su declaración ampliatoria, respecto a su persona, habría sido la que en un inicio le solicitó dinero y al ver que no le dio, lo procede a patear y al tumbarlo le procedió a quitar el celular del bolsillo derecho?. Dijo: “Que yo solo le quité el celular; pero no lo he pateado, los amigos de la foca lo han pateado”. Manifiesta, que depositó doscientos cincuenta soles, a favor del agraviado, porque le llegó una notificación, consultó con un Abogado, el cual lo asesoró mal, por ello hizo una mala declaración en la ampliación que realizó, ese dinero lo depositó, con la finalidad de salir del problema y era el valor del celular. Precizando, que no es responsable del delito de robo, sino de hurto agravado, porque él no golpeó al agraviado. **Al interrogatorio de su Abogado Defensor:** Expresó, que cuando se dirigía a su casa, estaba mareado, al llegar a su domicilio, se percató, que estaban asaltando al joven, se acercó a la esquina, se quedó observando y cuando todos estaban corriendo, el celular se quedó tirado, por ello, se acercó y lo recogió; pero no lo hizo con la finalidad de agarrarlo, sino que cuando lo cogió preguntaba si lo conocían, tenía pensado devolvérselo, luego se fue a la playa, perdió su mochila, porque la robaron. (...)”.*

b) Tratamiento probatorio

“3.1. HECHOS PROBADOS: Respecto de los hechos objeto de imputación, del debate probatorio se ha llegado a acreditar lo siguiente: 1. Se ha acreditado, que con fecha 13 de Noviembre de 2014, a las 10:12 horas, el agraviado Oscar Christian Fabián Quispe Montalvo, se presentó ante la Comisaría de Ferreñafe, con la finalidad de denunciar, que el día 09 de Noviembre del año 2014 a las 2:15 horas, fue víctima de la sustracción de su teléfono celular N° 979251958, marca Nextel 5200, valorizado en doscientos veinte soles, aproximadamente, refiriendo que lo llevaba en el bolsillo derecho de su pantalón y que el hecho fue cometido por cuatro sujetos, precisando que, uno de ellos vivía en la calle veinticuatro de Marzo número doscientos ochenta y cinco de la Unidad Vecinal San Juan Bosco de Ferreñafe, además de indicar el nombre del hoy acusado Ronal Omar Piscoya Pacherrres, indicando que le solicitaron dinero y que al negarle le rebuscaron los bolsillos, que al resistirse le propinaron puñadas y puntapiés, derribándolo al piso, dándose a la fuga, conforme a su declaración efectuada en juicio oral; **así como, con la declaración en juicio del propio acusado, en cuanto no niega su presencia en el lugar de los hechos y el haber cogido el celular” (...)** 6.1. Se determina la intervención del acusado, en el evento delictivo realizado con fecha 09 de Noviembre de 2014, a las 2:15 horas, **con su propia ampliación de declaración rendida a nivel preliminar, con fecha trece de Noviembre a las 15 horas, específicamente los párrafos sexto y séptimo de la pregunta 2 y pregunta 3, las cuales ingresaron por contradicción, al momento, que el acusado Piscoya Pacherrres ha declarado en juzgamiento y si bien, ha sostenido que únicamente recogió el celular, también es cierto, que con la declaración del agraviado Quispe Montalvo, quien ha sido contundente en indicar en su declaración en juicio oral, que fue el acusado Piscoya**

Pacherres, quien lo pateo y que sustrae su teléfono celular del bolsillo derecho de su pantalón, lo cual también señaló al momento de interponer la denuncia ante la Comisaría de Ferreñafe, razón por la cual, el dicho del acusado, se toma como argumento de defensa, al que tiene derecho todo imputado”. (...)”.

CASO N° 05: Expediente	1103-2017-53
Jueces / Juzgado	Rosa Amelia Vera Melendez; Gerardo Gálvez Rodríguez (d. d.); y, Elia Jovanny Vargaz Ruiz / Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
Delito	Violación sexual
Acto / Fecha	Sentencia / 13-06-2018
Fallo	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Silencio del acusado
Parte procesal que oraliza la declaración previa	Fiscal
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Ninguno
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Lectura de declaraciones previas de los acusados por ejercicio del derecho al silencio

“(...) 7.1. EXAMEN DEL ACUSADO: La Representante del Ministerio Público, oralizó la declaración rendida a nivel preliminar (...)”.

b) Tratamiento probatorio

Ninguno. Leída la sentencia, no se hace mención, en el análisis probatorio, a las declaraciones previas ingresadas al plenario.

CASO N° 06: Expediente	972-2015-81
Jueces / Juzgado	Vera Meléndez; Gálvez Rodríguez; Vargas Ruiz (d. d.) / Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
Delito	Violación sexual
Acto / Fecha	Sentencia / 30-11-2018
Fallo	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Extractos de las declaraciones previas ingresadas al plenario con fines de contradicción

“1.5.- EXAMEN DEL ACUSADO IRVING MANUEL SANDOVAL SIESQUÉN. Libre y Voluntariamente, manifestó, que no ha violado a la agraviada, es por ello, que se ha presentado en juicio, no es verdad que la haya ultrajado y agredido físicamente, que efectivamente se fueron al lugar de los hechos; pero no tuvieron relaciones sexuales, solo conversaron, se besaron, se abrazaron, el día seis de agosto de dos mil catorce, a horas tres y media de la tarde; durante el tiempo que conversaron, como estaban buscando a la agraviada, tuvo que ir a dejarla al parquecito “Mi Karina”, ubicado en 28 de Julio, en una esquina, la menor agraviada se bajó de la mototaxi, lo abrazó, lo besó y se retiró tranquila, es así, que el día nueve de agosto de dos mil catorce, le llegó una notificación de denuncia, por lo que, lo estaban buscando. Después, ya no supo nada más de la agraviada, no la veía; pero sabía que se iba al colegio con su mamá, dado a que, el declarante manejaba mototaxi y frecuentaba el paradero de mototaxis, por donde pasaba la agraviada. Precisa, que la agraviada y el declarante, viven en Santa Rosa; pero no son vecinos. Al interrogatorio de la Fiscal: Manifestó, que conoció a la menor agraviada, cuando trabajaba en la mototaxi, desde que empezó el colegio, en el año dos mil doce, fueron enamorados durante un mes y días, la menor cursaba el sexto grado de primaria, le decía la agraviada que tenía quince años; el día de los hechos, el declarante estaba trabajando en la mototaxi, la cual, se le malogró, se dirigió al taller, en ese momento, le llegó un mensaje a su celular, no sabía quién era, a lo que

responde el mensaje, preguntando quien era y la agraviada, era quien le envió el mensaje, respondiéndole: “soy Anayeli, quiero verte”, por lo que, acuerdan verse a las tres de la tarde, llegó a la hora pactada; pero no la encontró en el paradero, es así, que salió con pasajeros y como a las tres y media de la tarde, la menor estaba al frente del internet “Diana”, por lo que, el declarante, se condujo hasta allá, cuadrando la mototaxi, en eso, la menor agraviada lo llama, el declarante fue como conductor y ella subió, le preguntó a dónde quería ir, siendo que, la menor, le dijo, que la llevara donde nadie los viera, por lo que, se trasladaron a La Bombonera, al lado del cementerio, donde estuvieron desde las tres y media de la tarde hasta las seis de la tarde, conversando, abrazándose, besándose como enamorados, la conversación, se refería a la madre de la menor agraviada, quien mucho la pegaba, maltrataba y también de sus hermanos, toda vez, que la menor, se encontraba aburrida y quería irse con el declarante de su casa, pidiéndole ella, que la sacara como su mujer, por lo cual, é le manifestó que sería en otra oportunidad, pidiéndole que se vaya a su casa, entonces la agraviada, le hizo caso, indicando, que estuvieron, desde las la tres y media de la tarde hasta las cinco y media de la tarde, después se fue a dejarla en el parquecito, donde conversaron y las cinco, casi para las seis de la tarde, se fue a su casa, en el lugar donde se encontraron, no intentaron tener relaciones sexuales. **Se incorpora su declaración, rendida a nivel preliminar,** de fecha ocho de mayo de dos mil quince, Pregunta N°03.- ¿Qué es lo que usted tiene que decir, respecto a los hechos que se le imputan, materia de la presente investigación? (...) Yo le dije que si quería tener algo más que enamorados conmigo, es decir, relaciones sexuales, primero se quedó callada y luego le dijo que ya, yo le insistí y le dije dime cuántos años tienes, yo le dije que tenía veintiún años, ella me dijo que no de verdad, yo tengo quince años; pero yo le creía, porque estaba en primaria, ella me dijo que había repetido de grado y ahí comenzamos a conversar, yo le preguntaba por qué estaba en colegio de primaria, si tenía quince años y que debía estar en secundaria, ella me dijo que ya para tener relaciones, entonces yo me bajé el pantalón hasta las rodillas, ella también se bajó el pantalón jean, ella me dijo bájame el pantalón y lo bajé hasta sus radillas nada más, igual que con la ropa interior, yo me eché encima de ella; pero no logré introducir mi pene a su vagina, me temblaba, no logré introducir, no le introduje nada, ni hacerlo a la fuerza, nos besábamos, ella me decía que me quería, me amaba, que se quería ir conmigo y no quería regresar a su casa, habrá durado veinte minutos en el acto sexual, que no hubo, no eyaculé, no sangró, si la intenté penetrar; pero no llegué, ella estaba echada en la moto y yo encima de ella, ella no opuso ninguna resistencia, no hubo sexo oral, no le besé los senos; yo luego de eso tuve miedo, me agarró como miedo, de no sé qué, me temblaba y le dije vamos, ella me dijo ya vamos; pero ella, no quería ir a su casa, que se iba conmigo, cada uno se subió su ropa y de allí yo arranqué la moto, que tiene puertas, las puertas estaban cerradas en ese momento y la fui a dejar por el lado de “Mi Karina”, que es un parque, que queda casi a la vuelta de su casa, como a dos cuadras, ella no quería bajar de la moto, después ahí me preguntó ella si tenía mujer e hijo, yo le pregunté quién le había dicho, ella solo quería que le responda y yo le dije que sí; pero que estaba con problemas con ella; pero le decía

que la quería, la amaba y que no estaba jugando con sus sentimientos de ella y agarró ella estaba allí, cuando yo le dije que sí tenía, ella agarró y se fue a su casa, eran como seis de la tarde; después al siguiente día, llegó un papel de la Comisaría, que yo estaba denunciado, llegó a mi casa, yo no sabía por qué era, luego me dijeron que era por Anayeli, porque la había violado a la fuerza; pero era mentira, me dijo Aracely, que la había encontrado que su mamá le estaba pegando, entonces yo pensé, que lo que ella me dijo era verdad, que su mamá le pegaba bien feo y allí fue todo y de allí no la vi nunca más a Anayeli ni volví a tener comunicación con ella”.

Pregunta N° 15.- *¿Cuándo la menor estaba desnuda, ella estaba abierta de piernas, cómo fue? Dijo: Ella estaba echada normal, yo logré poner el pene en su vagina; pero no introducirlo, mi pene estaba parado, yo me detuve, como dije, porque me agarró la tembladera”. (...).*

b) Tratamiento probatorio

*“(...) 5.5.- En ese, sentido, abona a lo antes expuesto, **la declaración del propio acusado Irving Manuel Sandoval Siesquén**, quien si bien, en un primer momento, **al deponer en juicio**, señaló que solo concurrió con la menor agraviada, hasta el lugar denominado La Bombonera, donde habrían conversado, abrazado y besado, **al incorporarse por contradicción, parte de la pregunta número 03 y la pregunta 15, de su declaración vertida, a nivel preliminar**, no tuvo mas remedio, que señalar, que la versión primigenia brindada era la correcta; pero que no había penetrado su pene en la vagina de la agraviada, lo cual, se toma como un argumento de defensa, al que tiene derecho todo imputado, por cuanto, la prueba de cargo, ofrecida por la Fiscalía, desvanece tal afirmación.”*

CASO N 07: Expediente	7369-2016-47
Jueces / Juzgado	Gálvez Rodríguez Vargas Ruíz (d.d) Domínguez Huamán / Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
Delito	Robo
Acto / Fecha	Sentencia / 04-10-2018
Fallo	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de defensa
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Extractos de las declaraciones previas ingresadas al plenario con fines de contradicción

“1.5. EXAMEN DEL ACUSADO JOSÉ ARMANDO AQUINO ESPINOZA: Libre y voluntariamente: Manifestó, que es inocente de todos los cargos, que se le están imputando y que todo, conforme lo narra el Fiscal, es totalmente falso, pues en ningún momento, ha tenido un arma, tampoco tiene licencia para portar estas. **Al interrogatorio del representante del Ministerio Público:** Señaló, que el acusado Eberth Jimmy Samillán Senmache, es su cuñado, hace diez años, siendo que, a la fecha, en que ocurrieron los hechos, vivían juntos. Refiriendo, que al agraviado Pablo Humberto Medina Campos, lo conoce y sabe que es el hijo del señor Humberto Angaspilco. Manifestando, que con el señor Pablo Humberto Medina Campos, tuvo rencillas, a raíz de la denuncia que formuló, por cuanto, denunció a su padre, no recordando la fecha de la denuncia, la misma que la efectuó en la Comisaría del distrito de José Leonardo Ortiz, siendo el motivo de esta, el secuestro de la madre del acusado, siendo que, el autor de ello, habría sido, el papá del señor Humberto Medina Campos, don Humberto Angaspilco. Respecto a la denuncia, indica, que el motivo, fue porque el señor Angaspilco y su hijo raptaron a la madre del acusado, señalando, que dicha denuncia, fue realizada en el año 2015; sin embargo, no

recuerda la fecha. Indica, que el día de los hechos, esto es, el día 10 de abril de 2016, el acusado, estaba esperando a su primo, dado a que habían quedado, para que lo acompañara a sufragar, quien llegó a verlo, a las tres y media de la tarde, aproximadamente, siendo que, cuando se encontraban por las calles Roma y Conquista, observaron un tumulto de gente, peleándose entre bandos, tirándose botellas, piedras, logrando el declarante, observar al señor Pablo Medina Campos y a su padre el señor Angaspilco, peleando con otro bando, habiéndose quedado, el declarante, en aquel lugar, un aproximado de cinco a diez minutos, que cuando escuchó un disparo, por miedo a que le pueda caer una bala perdida, procedió a retirarse del lugar, dirigiéndose a sufragar. Señala, que cuando narra, que estuvo con su primo, se refiere a su primo David Herrera Espinoza, que se encontraba caminando, siendo que, aquella situación narrada, la observó a la distancia, de cincuenta metros, a una cuadra aproximadamente, refiriendo, que sólo observó lo que ha detallado. Señala, que desconoce si Pablo Humberto Medina Campos, tenía o tiene algún vehículo. **INGRESA POR CONTRADICCIÓN SU DECLARACIÓN RENDIDA A NIVEL PRELIMINAR: PREGUNTA NÚMERO 06: “Preguntado para qué diga: Por qué motivos y/o razones, cree usted, que la persona de Humberto Medina Angaspilco, lo denuncia directamente como el presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en agravio de su hijo Pablo Humberto Medina Campos. Dijo: Creo que esa persona, me denuncia por venganza, toda vez, que entre el denunciante y mi señora madre, existe un problema familiar y cree que denunciándome, mi señora madre, va ir a suplicarle para que retire la denuncia y regrese con él”. (...)”.**

b) Tratamiento probatorio:

“(…) 6.2. En el presente caso, el Colegiado considera que concurren las tres garantías de certeza antes anotadas, pues, respecto a la **ausencia de incredibilidad subjetiva**, no se advierte que entre el acusado y el agraviado, exista algún odio u otro sentimiento negativo que haga parcializarlo en su declaración”. En consecuencia, no se puede concluir que el agraviado, haya efectuado la imputación contra el acusado por odio, resentimiento, enemistad o algún móvil subalterno, por cuanto, si bien, la teoría del caso del abogado de la defensa del acusado, se basó, en que los hechos, materia de juzgamiento, se habrían suscitado, producto de una gresca y que su patrocinado, no tendría participación alguna, ya que se habría desplazado por el lugar, de forma circunstancial y que la denuncia contra él, se debería a que el padre del agraviado, don Humberto Medina Angaspilco, tendría rencillas con el acusado, toda vez, que al ser su exconviviente de la madre de éste, siendo que, no encontrándose de acuerdo con la relación sentimental entre ambos, también es cierto, que conforme se puede advertir, no solo de la documental actuada, como es el acta de denuncia, presentada por la testigo Dionicia Madeleyne Espinoza Díaz y su propia declaración en juicio, es decir, a quien denunció fue al padre del agraviado, por violencia familiar, esto no resulta ser suficiente, como para que este

Colegiado, considere que no se cumpliría con este primer presupuesto, ya que si bien, la denuncia no fue en contra del agraviado, tampoco podríamos considerar, que producto de ello, se habría denunciado al acusado, de un hecho tan grave e incluso, lo que declaró el acusado en juicio oral, que siempre se habría interpuesto en la relación que tenía su madre con el padre del agraviado y que considera, que por venganza, sería la denuncia en su contra, se toma como un argumento de defensa, al que tiene derecho.”(...)”.

CASO N° 08: Expediente	05688-2015- 40-1708-JR-PE-01
Jueces / Juzgado	Rosa Amelia Vera Meléndez (d.d.) Gerardo Gálvez Rodríguez Elia Jovanny Vargas Ruiz / Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
Delito	Violación sexual
Acto / Fecha	Sentencia / 11-12-2018
Fallo	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Silencio del acusado
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba; afianza la acusación fiscal conjuntamente con otros actos de prueba
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Contenido de la declaración previa ingresada al plenario por ejercicio del derecho a guardar silencio del acusado

*“(…) **1.5.-DECLARACION DEL ACUSADO:** A través de su abogado defensor, indica que declarará antes que culmine la actividad probatoria. (...) **1.7.- DECLARACIÓN DEL ACUSADO:** (TRANSCRIPCION DE DECLARACION) El representante del Ministerio Público oraliza la declaración del acusado en sede de investigación, conforme a lo establecido por el artículo 376 del Código Procesal Penal. 1.- **PREGUNTADO PARA QUE DIGA:** ¿para que diga a que se dedica, cuanto percibe por ello, con qué persona vive? Dijo que era comunicador social, también se dedica a la animación y tiene un ingreso mensual aprox., de S/500.00*

soles mensuales, y vive con sus padres Luis Alipio Aguirre Tineo y María Beatriz Gutiérrez Contreras. 2.- **PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿Que es lo que tiene que decir con respecto a los hechos que se le atribuyen?** Dijo que ese día que se menciona, fue a comer a ese restaurante aprox., ubicado cerca al mercadito de la Unión entre Soledad y otra calle que no recuerda, ha sido a eso de las 08:00 de la noche, llegó ahí en su motocicleta y pidió una salchipapa, siendo que a los tres minutos, llega un menor se sienta frente a el, con un periódico en la mano, en aparentemente estaba que lo veía, pero no bajaba y me miraba constantemente, el cómo es como es comunicador y hace denuncias de corrupción, pensó que podía ser mandado por alguien un sicario, era sospechoso, ya luego al momento de que la señora le sirva, el antes de eso le levantó la mirada y le hace una señal con la mano que si quería comer, se paró, le da su plato de comida, pidió una gaseosa y se retira a su domicilio eso ha sido todo, al día siguiente ha viajado por unos cables que faltaba para el sonido, y su padre lo llama sorprendido que le habían ido a ver que había una denuncia, estas personas eran el padre del muchacho y dos efectivos policiales diciendo que querían arreglar, algo así, el preciso que estaba en Chiclayo en aquel momento y eso le decía su padre por teléfono, y eso ha sido todo. 3.- **PREGUNTADO PARA QUE DIGA ¿Si usted lo conoce al señor Jorge Luis Velásquez Valerio; y al menor de iniciales J.R.V.G?** Dice que al señor no lo conoce, al menor solo lo vió, como lo ha indicado ese día. 4.- **PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿Precise usted si tiene alguna vivienda a la altura de la Carretera Panamericana Norte Antigua, pasando por el Grifo Gran Alex?** Dijo que no, ahí hay una casa de su mamá que en aquella fecha estaba habitada por su hermana Libertad Aguirre Gutiérrez, madre dos niños.(...)”.

b) Tratamiento probatorio

“(...) 2.3.- **DE LA AUTODEFENSA.** No concurrió el acusado, para ejercer su derecho de autodefensa. (...) **TERCERO: VALORACION JUDICIAL DE LA PRUEBA. 3.1.- HECHOS PROBADOS.** 1.- Se ha acreditado que el día 12 de mayo del 2015, a las 17:00 horas aproximadamente, el menor agraviado de iniciales J.C.V.G. (15) años junto con su hermano de iniciales L.A.V.G (17) años salieron del caserío Pueblo Nuevo del Distrito de Motupe y se dirigieron al centro de la ciudad con la finalidad de cenar y llevar cena a su papá, luego fueron a jugar a unas cabinas de internet y el menor se quedó en las inmediaciones del Mercado de la Unión, entre la calle Soledad y otra calle, conforme lo ha referido el menor y el testigo padre del menor don JORGE LUIS VELASQUEZ VALERIO, en audiencia de juicio oral y lo ha reconocido el mismo acusado, en su declaración efectuada el día 07 de diciembre del año 2015, y leída en juicio oral en virtud de lo establecido por el artículo 376 del Código Procesal Penal, corroborado con el acta de denuncia verbal de fecha trece de mayo del 2015, oralizada en juicio. 2.- Se ha acreditado que en circunstancias que el hermano del agraviado lo dejó por las inmediaciones del mercado, el acusado se le acerca al menor agraviado de iniciales J.R.V.G. le invita

un salchipollo, le dice que suba a su motocicleta, (color negro) para que le invite galletas y plátanos, hace que el menor suba a la motocicleta para llevarlo a una vivienda ubicado en la carretera Panamericana Norte Antigua a la altura de un grifo (Gran Alex), conforme lo ha referido el agraviado tanto en la audiencia de juicio oral como en la entrevista única, que ha sido visualizada en juicio y **lo ha reconocido en parte el acusado en su declaración efectuada el siete de diciembre del 2015 en la etapa de investigación.** 3.- Se ha acreditado que el acusado hace ingresar al menor agraviado al inmueble ubicado cerca de un grifo, y luego a una habitación, donde le dio de beber, bebidas alcohólicas, (cerveza y vino), conforme lo ha referido el menor agraviado en juicio, y lo ha referido en el acta de entrevista, la misma que ha sido visualizada en juicio oral. 4.- Se ha acreditado que el acusado le indicó al menor agraviado que se bajara el buzo, y aun con la negativa del menor, el acusado lo bajó a la fuerza, además de besarle en la boca, lo hizo echarse en la cama, asimismo a pesar que este quería salir del lugar, porque su papá lo estaba esperando, ello no fue escuchado por el imputado quien continuó procediendo a masturbarse con las nalgas y en el recto del menor y le hizo que le practicara sexo oral (acceso carnal por vía oral) bajo la negativa del menor agraviado, ello con la versión del agraviado tanto en la audiencia de juicio oral como en la entrevista única, que ha sido visualizada en juicio. 5.- Se ha acreditado que el acusado luego de limpiarse, hizo que el menor hiciera lo mismo, le dijo que saliera de su casa, indicándole que no dijera nada a nadie y le colocó 20 soles en su bolsillo, conforme lo ha referido el agraviado tanto en la audiencia de juicio oral como en la entrevista única, que ha sido visualizada en juicio. 6.- Se ha acreditado que el menor agraviado sale a la pista y llega hasta el grifo el Gran Alex, y es atendido por el trabajador Juan Carlos Contreras Vélchez, quien se percata del aliento alcohólico y luego se percata que quiere cambiar el billete de veinte soles, conforme lo ha manifestado el testigo Juan Carlos Contreras Vélchez y lo señalado el menor en juicio oral. 7.- Se ha acreditado que el acusado presenta características de la personalidad con rasgos narcisistas, en relación a su perfil psicosexual se PRESUME CONFLICTO SEXUAL, y se le recomienda derivar a psiquiatría por presuntos conflictos en el área sexual, conforme consta en el protocolo de **Pericia Psicológica N° 199-2016** cuyo examen se ha realizado a través del perito **EFREN GABRIEL CASTILLO HIDALGO.** 8.- Se ha acreditado la existencia del domicilio, donde el acusado trasladó al menor agraviado, conforme al acta fiscal de fecha diecinueve de mayo del 2015 y acta fiscal de fecha dieciséis de febrero del 2015, y fotos oralizadas en juicio oral. 9.- Se ha acreditado la existencia de la motocicleta de color negra donde ha sido trasladado el menor conforme a la búsqueda de la SUNARP, en la que se indica que la propietaria es doña MARIA BEATRIZ GUTIERREZ CONTRERAS, madre del acusado, documento que ha sido oralizado en juicio. **3.2.- HECHOS NO PROBADOS:** No se ha acreditado, la teoría del caso del abogado de la defensa del acusado, en cuanto a la inocencia de su patrocinado por insuficiencia probatoria. (...)."

CASO N° 09: Expediente	13112-2018-6-1708-JR-PE-01
Jueces / Juzgado	Ingrid Janet Merino Gonzales, Shilling Martín Castañeda Salazar (d.d.), Ronald Ruiz Vásquez / Segundo Juzgado Colegiado Penal de Chiclayo
Delito	Robo agravado y otros
Acto / Fecha	Sentencia / 01-10-2020
Fallo	Condena / absolución
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Silencio
Parte procesal que ingresa la declaración previa	No se precisa
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) **Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción**

“(…) 1.3.- POSICIÓN DE LOS ACUSADOS FRENTE A LA ACUSACIÓN

Luego que se les explicara sus derechos que les asiste en juicio y la posibilidad que la presente causa pueda terminar mediante conclusión anticipada, los acusados previa consulta con sus abogados defensores, manifestaron que **no se consideran responsables del delito materia de acusación, ni aceptan la pena ni reparación civil.**

(…)

DECLARACION DE KEVIN WAGNER CUSMA ILATOMA, de fecha 20 de noviembre del 2019. **(Se oralizó)**

Observación del abogado defensor Cayotopa Vásquez por el acusado Kevin Wagner Cusma Ilatoma: Respecto a la pregunta seis, sobre los hechos ocurridos el día 07 de noviembre del 2018, su patrocinado además indicó qué pruebas solicitaba a la Fiscalía para que se practicará a fin de recabar información y desvirtuar la imputación o en su defecto asegurar que estaba diciendo la verdad; sin embargo, la Fiscalía no realizó esos actos a pesar que se había solicitado.

Observación del abogado defensor Leonardo Carrillo por el acusado José Luis Saavedra Herrera: Señaló que el acusado Kevin Cusma se ha referido a José Pretel Chamochohumbi.

Examen del acusado JOSÉ LUIS IDELSO PRETEL CHAMOCHUMBI, identificado con DNI N°42170886.

Libre y voluntariamente dijo que (...)”.

(...)

2.5.- AUTODEFENSA

· DEL ACUSADO KEVIN WAGNER CUSMA ILATOMA:

Refirió que está conforme con la defensa de su abogado defensor; se declara inocente de todo lo que se le acusa por parte del Ministerio Público.

· DEL ACUSADO JOSÉ LUIS PRETEL CHAMOCHUMBI

Refirió que está conforme con la defensa de su abogado defensor; se declara inocente de los cargos imputados; no ha participado de esos hechos; tampoco ha comprado esos vehículos; no está involucrado en esos delitos; su error fue estar en la hora y lugar

equivocado.

(...)”.

b) Tratamiento probatorio

“(…) **TERCERO.- VALORACION JUDICIAL DE LAS PRUEBAS.**

3.1.- HECHOS PROBADOS:

Respecto de los hechos objeto de imputación, del debate probatorio se ha llegado acreditar lo siguiente:

(...)

3.1.4.- Está probado que el día 11 de noviembre del 2018 personal policial perteneciente a la unidad de prevención e investigación de robo de vehículos PNP-Chiclayo, tomaron conocimiento por información de inteligencia que se iban a comercializar vehículos robados, por lo que se montó un operativo policial y al encontrarse a la altura del KM. 778 (Frente al grifo Sudamérica)- Lambayeque, divisaron dos vehículos (automóviles), (...)constatándose que en el interior del vehículo (automóvil) con placa de rodaje M2M-413, marca Hyundai, modelo EON, color plata, se encontraba el acusado José Luis Saavedra Herrera, y detrás de él, se encontraba el vehículo (automóvil) con placa de rodaje AMT -397, marca Hyundai, modelo GRAND I10, color plata, en cuyo interior estaba el coacusado José Luis Pretel Chamochumbi, luego ingresaron al sistema SIRDIC, y se obtuvo como resultado que el segundo vehículo (AMT -397), presentaba requisitoria motivo “asalto y robo” de fecha 10 de noviembre del 2018 según denuncia verbal N°1057-2018, interpuesta por Víctor Hugo Flores Manosalva, por lo que procedieron a la detención de ambos sujetos, *los mismos que señalaron que el sujeto apodado “BILLY” se encontraba en camino, debido a que habían acordado encontrarse en el lugar de la intervención, ya que tenía planeado comercializar dos (02) vehículos automóviles (robados)*, esperaron un plazo prudencial y en el transcurso de 10 minutos, se aproximaron los vehículos automotores, uno de ellos de placa de rodaje M2Q-092, marca Hyundai, modelo EON, color plata, el mismo que era conducido por el coacusado Kevin Wagner Cusma Ilatoma alias “BILLY”, en cuyo interior (asiento copiloto) se encontraba la persona de Dayma Cecilia Valle Veray en el asiento posterior al sentenciado Aledis Omar Zurita Huanangue, de igual forma se intervino de manera simultánea al vehículo automóvil con placa de rodaje M4I-056, marca Hyundai, modelo Grand I10, color gris conducido por el sentenciado Diego Rafael Landaeta Ojeda, asimismo se ingresó al sistema SIRDIC, y se obtuvo como resultado que el segundo vehículo (M4I-056), presentaba requisitoria motivo “asalto y robo” de fecha 07 de noviembre del 2018 según denuncia verbal N°1043-2018,

interpuesta por Jibán Tenazoa Rivera, procedieron de igual manera a detenerlos. Asimismo, por medidas de seguridad y en salvaguarda de la integridad física del personal policial se trasladaron a los intervenidos y vehículos recuperados hasta las instalaciones de la unidad especializada a fin de realizar los actos urgentes de investigación y actas correspondientes; conforme se acredita con el acta de intervención policial (...); ***asimismo en parte con la declaración del acusado José Luis Pretel Chamochumbi y Kevin Wagner Cusma Ilatoma (...)***
(...)

3.1.22.- Está probado que en uno de los ambientes del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, el acusado Kevin Wagner Cusma Ilatoma procedió a rendir su declaración, refiriendo que el día 11 de noviembre del 2018 a las 05:00 de la tarde aproximadamente, estaba en el vehículo de placa M2Q-092 y fue intervenido por la policía por el grifo Sudamérica; ***conforme se acredita con su declaración de fecha 20 de noviembre del 2019, la misma que fue oralizada, y suscrita por la representante Fiscal Giovanna Mariel Miñope Gonzales y el acusado.***
(...)

6.17.- ***Así mismo, vincula al acusado José Luis Idelso Pretel Chamochumbi lo consignado en el acta de intervención policial, en el sentido que él y José Luis Saavedra Herrera confesaron que el sujeto que el sujeto apodado “Billy” se encontraba en camino debido a que habían acordado encontrarse en el lugar de la intervención, ya que tenía planeado comercializar dos vehículos automóviles robados, de lo que se colige que se dedicaban a esa ilícita actividad. Cabe precisar que la referida acta se encuentra debidamente suscrita por el acusado Pretel Chamochumbi,*** lo que se corrobora también con las testimoniales de los efectivos policiales Rogger Artieda Vásquez y Josué Alberto Hernández Rosales.
(...)

6.22.- La defensa del acusado Pretel Chamochumbi cuestiona que en el acta de visualización de celulares incautados a su patrocinado no existe registro de llamadas, mensajes ni aparece registrado como contacto los sentenciados Landaeta Ojeda y Zurita Huanague ni su coacusado José Luis Herrera Saavedra. Si bien es cierta tal afirmación, ello no lo desvincula del delito de receptación agravada, por cuanto en su celular incautado 933952976 se le encontraron llamadas salientes y perdidas con el celular 988854701 incautado al coacusado Kevin Wagner Cusma Ilatoma del mismo día de los hechos, con quien se iba a reunir para comercializar autos robados, desvirtuándose que concurrió al lugar donde fue intervenido por haber sido citado por su coacusado José Luis Saavedra Herrera para que le muestre un vehículo para adquirirlo como alquiler venta, ya por reglas de la lógica y las máximas de la experiencia no se concurre a un lugar desolado y alejado de la ciudad para realizar una transacción comercial, máxime que suscribió el acta de intervención policial en donde se consignó que conjuntamente con el coacusado José Luis Herrera Saavedra estaban esperando a tal “Billy” para comercializar autos robados, ***y además porque el coacusado José Luis Saavedra Herrera al ejercer su defensa material señaló que no hizo ningún negocio con José Luis Pretel Chamochumbi, nunca lo ha llamado ni le ha ofrecido ningún carro en alquiler venta.***

6.24.- ***El acusado José Luis Idelso Pretel Chamochumbi incurrió en indicios de mala justificación*** al reconocer que cuando lo intervinieron solo estaba con Herrera Saavedra, pero que no conocía a las demás personas intervenidas. Ello ha sido completamente desvirtuado ya que en el celular 933952976 que se le incautó se le encontraron llamadas salientes y perdidas al celular incautado al coacusado Kevin Wagner Cusma Ilatoma, además el testigo impropio Aledis Omar Zurita Huanague

refirió que había hecho coordinaciones con Pretel Chamocho y que fue éste el que le dijo que vaya al lugar donde fueron intervenidos y que ya le había entregado un vehículo robado, por lo que no resulta verosímil que lo haya involucrado en los hechos por no haberle dado dinero en el penal al testigo impropio –conforme lo sostuvo Pretel Chamocho–, *constituyendo solo argumentos de defensa para tratar de enervar su responsabilidad penal. (...)”*.

CASO N° 10: Expediente	0981-2018-91-1706-JR-PE-01
Jueces / Juzgado	Rosa Amelia Vera Meléndez (d.d) Gerardo Gálvez Rodríguez Elia Jovanny Vargas Ruiz / Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
Delito	Feminicidio
Acto / Fecha	Sentencia / 31-10-2018
Fallo	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Ninguno
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción

“(…) 1.7 DECLARACIÓN DEL ACUSADO:

1.7.1.- ACUSADO: MODESTO CALLE VEGAS,

Las declaraciones que le da su señora y su hija, tiene 5 hijas, 3 hijas mayores de edad, es de la sierra, llega a Chiclayo con la finalidad de darle una buena educación a sus hijas.

El salía a las 5 am a su trabajo y regresaba a su casa a las 7 pm, el cuando llegaba las encontraba discutiendo, y les decía que pasa, el se ponía a reclamarle, no les gustaba y eso había siempre escuchaba que le decía a sus hijas, porque llegaba tarde del colegio, un día su hija se quedó en el colegio llegó a las 9 pm, del día de los hechos, ese día a las 7 pm llega las encuentra discutiendo, el les reclamo y les

dijo que va proceder a darle su pencazo y ella dijo que ella ya es mayor, y como son sus hijas, viven dentro de su casa, discuten por la plata que no había pagado al banco, han discutido, al otro día que salieron al trabajo a las 5 am, y justo por el camino hay un taller de mecánica, hay unos perros, antes de pasar al taller, su señora le dice lleva algo para defenderse de los perros y coge algo el no vio si fue un palo o una varilla de construcción tipo lapicero, su señora y su hija se apegan a su lado, se le nubla la mente de miedo, se han rodado hacia el dren y el ha estado adentro, él le jala a su esposa, la ve sangrando y ella se va a su casa y su hija se va al trabajo y ella se regresa, eran las 6.00 am, su esposa se va a su casa, las vecinas la ven, y le dicen te ha pegado tu esposo, diciendo ella que se había caído a un dren por defenderse de unos perros, ella luego dice que él le ha dado con el fierro y luego su hija se regresa, de su trabajo la hayan por los arrozales, se va donde estaba, con sus dos hijas van, el lleva un frasco de veneno en forma de té, el veneno iba compuesto con agua, y el señor quería para curar las plantas, estaba esperando al señor para darle el veneno, el se cambia su camisa, porque estaba de sangre de su esposa, la boto ahí, viene su hija, le dice vamos a la casa, se toma el veneno pensando que era el té de su desayuno se sintió mal se sentó a esperarlo, y llegan sus dos hijas, el no quiere irse, llegaron los policías y lo llevaron al hospital. Su esposa le denuncia diciendo que le ha dado con el fierro, pero eso ha sido porque han discutido por la razón de una cuenta que tenían que pagar al Banco, ella pensaba que la plata la había malversado, el es padre responsable de sus hijas, dándole educación.

Al interrogatorio de la fiscal

Indica que con su esposa Gladys, han vivido bien, no ha habido ningún disgusto, sus hijas son solteras, se llevaban bien. Con su hija Maritza, ella no le gustaba cuando le reclamaba, porque ella se quedaba en el colegio, el llegaba a las 7, el le decía que pasa a su hija no le gustaba, cualquier día lo voy a denunciar, porque soy joven, usted no tiene que ver conmigo, él le decía que está viviendo en su casa bajo techo y no puede venir a la hora que se le dé la gana.

Maritza vivía en su casa, pero él es que trabajaba, pero desde el problema, ella es la que trabaja.

Ella ahora es el sustento de la casa, antes de ingresar al penal, él sustentaba la casa, a su hija Maritza también.

Recuerda que ha dado declaraciones en la fiscalía, dice que si recuerda, el dice que él estaba con su mente nublada, porque salieron los perros, no sabe cómo han caído los tres al dren y no recuerda más de lo sucedido. **(Le leen su declaración pregunta 4)**

El salió del hospital a las 3:00 pm y lo llevaron a la Fiscalía donde le toman la declaración se le nubla la mente y procedió a golpear a su esposa, se sentía mal de su mente, no tenía abogado en ese momento, el llego cuando estaba por la mitad de declaración, él dijo yo no voy a declarar y lo sacaron de la carceleta a la fuerza.

Esta mal de su mente, él le dijo que no recuerda, que es lo que paso, el cómo esposo de su señora y su hija, los tres se han caído al dren.

Respecto de celos no ha habido problemas, para que va hablar lo que no es, han tenido disgustos, pero no ha habido más que las discusiones de sus hijas, nunca ha sido un hombre ocioso. **(Leen la declaración de la pregunta N°5)**. En cuanto a las preguntas el preguntaba a las horas que indica, hay veces que su señora le reclamaba a él, él no le reclamaba, ella tenía dudas y le reclamaba.

Existen contradicciones en su declaración.

- Ingresa la pregunta N° 4, 5 y 7 de su declaración dada en etapa de investigación preparatoria. (...)”.

b) Tratamiento probatorio

Ninguno. Las declaraciones previas ingresadas al plenario, vía contradicción, así como la brindada por el acusado en el juicio oral, no fueron tenidas en cuenta al momento de efectuarse de la valoración de los hechos que sustentaban la acusación fiscal.

CASO N° 11: Expediente	5357-2016-28-1706-JR-PR-01
Jueces / Juzgado	Rosa Amelia Vera Meléndez (d.d) Gerardo Galvez Rodriguez Elia Jovanny Vargas Ruiz / Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
Delito	Extorsión
Acto / Fecha	Sentencia / 17-04-2019
Fallo	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Silencio de la acusada
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Juez - Por mandato del artículo 376.1 del CPP
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción

“(...) 1.7.- LECTURA DE LA DECLARACION DE LAS ACUSADAS. En etapa de investigación preparatoria las acusadas declararon, por lo que en virtud de lo

establecido por el artículo 376 del Código Procesal Penal, se procede a su lectura (...)”.

b) Tratamiento probatorio

“(…) TERCERO: DE LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LAS PRUEBAS.

3.1. HECHOS PROBADOS.

1. Está acreditado, que el día 20 de junio del 2016 a horas 20.20, se presentó ante la División de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio – Sección Anti – Extorsiones – DIVICAJ/PF-Chiclayo, el agraviado ANTONIO CERCADO CABRERA, con la finalidad de denunciar que sujetos en proceso de identificación, mediante llamadas y mensajes de texto desde la línea celular 954322199 y 954322185 le vienen exigiendo veinte mil dólares (\$20,000.00) a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia, y que ha realizado tres depósitos a una cuenta bancaria BCP enviada por mensaje de texto por los malhechores, de la fecha del veinte de junio en horas de la mañana por la suma de veinte soles cada uno, ello con el acta de denuncia verbal N°108-2016-REGPOL-LAMB/DIVICAJ-DEPINCRI-EXT y acta de recepción de bouchers, ambas oralizadas en juicio, corroborado con la testimonial del efectivo policial LUIS ALBERTO BALLENA CHAFLOQUE en juicio oral quien indica que “cuando llegó el señor estaba preocupado, temeroso por los actos que estaba siendo víctima, se recepcionó la denuncia, y el acta de visualización de mensajes de texto y se coordinó con Lima, con la finalidad de verificar de donde provenían las llamadas telefónicas, se determinaron que esas llamadas estaban proviniendo del penal de Juliaca de la ciudad de Puno, toda vez que habrían otras denuncias que provenían de ese penal, el señor agraviado acudió en dos oportunidades a la DIVINCRI, a él los extorsionadores le proporcionaron un número de cuenta, y se hizo un deposito mínimo con la finalidad de verificar quien era el titular, eso se hizo con fines de identificarlo”. Agregando además que “Los extorsionadores, siempre se autodenominan como una banda u organización criminal para atemorizar a su víctima y pueda acceder a las exigencias económicas”, agrega inclusive que “hubo un efectivo policial encargado de reemplazar la identidad del agraviado, hizo las veces que él podía pagar, pero no la cantidad de los S/20.000.00 (veinte mil soles)”.

(...)

5. Con el movimiento de cuenta bancaria N°405-34985039-0-10 firmado por la acusada MAYRA SONAPO CALDERON, se verifican los tres depósitos efectuados con fechas veinte de junio del año 2016, y retirados el veintiséis de junio del mismo año, conforme a la oralización de este documento en juicio, el mismo que corroborado con la documental “acta de recepción de Boucher oralizada en juicio se verifica que la titular de la cuenta es la acusada MAYRA SONAPO CALDERON, ello corroborado además con las declaraciones de las acusadas efectuadas a nivel preliminar y leídas en juicio.

(...)

7. Se ha acreditado, el concierto de voluntades entre la acusada ANGELA LORELEN MORENO BARRERA y un tercer sujeto o sujetos para un propósito común, el cual quedó en grado de consumado, con las propias declaraciones de la acusada ANGELA LORELEN MORENO BARRERA, (declaración leída en juicio oral), quien reconoce conocer al agraviado ANTONIO CERCADO CABRERA, e

incluso señala que ha sido su pareja, conoce de sus negocios e inclusive su número telefónico, e inclusive ha hecho uso de la cuenta 40534985039010, señalada por quienes mandaron los mensajes para los depósitos de la extorsión, al retirar la suma de treinta y siete soles (S/.37.00), aun cuando su defensa indique que lo hicieron para comer, e inclusive ha inducido a la acusada MAYRA SONAPO CARBONEL, para que saque una cuenta de ahorro, no resultando verosímil que indique que ha sido EBELIO TORRES VILLALOBOS quien le pidió un número de cuenta para que le deposite a fin de que le mande dinero, cuando muy bien sabía que estaba preso en el penal de Juliaca, ni menos es creíble la versión de este testigo, EBELIO TORRES VILLALOBOS cuando indica que son otras las personas que estuvieron a cargo de esto.

(...)

9.- *Se ha acreditado con el oficio 156-2016-INPE/24.811-JSI de fecha 25 de agosto del 2016 que anexa el informe 013-2016 -INPE/24.811-G-01-JCM Y EL CUADRO ESTADÍSTICO DE LA RELACION DE VISITAS A INTERNOS, que la acusada ANGELA LORELEN MORENO BARRERA (esposa) con DNI 75366314 ha ingresado al PENAL DE JULIACA, los días 25 y 29 de junio del año 2016 ha visitar a MARCOS CALDERON PEREZ o JOSE LUIS PEREZ CONDORI, documentales que han sido oralizadas en juicio y corroboradas con las declaraciones de las acusadas ANGELA LORELEN MORENO BARRERA y MAYRA SONAPO CARBONEL, las mismas que han sido oralizadas en juicio.*

10.- *Se ha acreditado que las acusadas ANGELA LORELEN MORENO BARRERA y MAYRA SONAPO CARBONEL, se conocen desde antes de los hechos delictivos, y que ambas han viajado juntas a la ciudad de Juliaca, habiendo solventado los gastos, la acusada ANGELA LORELEN MORENO BARRERA, ello con las declaraciones de las mismas acusadas, que se han dado lectura en juicio al amparo de lo establecido por el artículo 376 del Código Procesal Penal, y del reporte de la cuenta bancaria efectuada en la ciudad de Juliaca conforme al documento Movimientos de la cuenta oralizado en juicio.*

(...)

SETIMO: RAZONES QUE VINCULAN A LA ACUSADA ANGELA LORELEN MORENO BARRERA CON EL HECHO MATERIA DE JUICIO.

*Analizada la condición de la acusada ANGELA LORELEN MORENO BARRERA y habiéndose determinado que la conducta desplegada por éstos se encuadra en la tipificación de la norma sustantiva antes citada, pasamos a analizar la vinculación de la misma, señalando que para enervar la presunción de inocencia que le asiste a la acusada, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales, **siendo que, en el presente caso, ha quedado acreditada:***

(...)

2. *Porque, posteriormente de realizadas las negociaciones entre el sujeto que le efectuaba las llamadas al celular del agraviado, éste efectuó el depósito de la suma de sesenta soles a la cuenta bancaria que se le indicó, monto que fue retirado por la acusada ANGELA LORELEN MORENO BARRERA, conforme lo ha referido en su declaración ingresada a juicio a través de su lectura, “las dos hicimos el retiro, porque yo no trabajaba todavía allí, porque recién estaba buscando un local... las dos hicimos el retiro porque Evelio dijo que me iba a mandar para la comida”*

3. *Porque, si bien es cierto, la acusada ANGELA LORELEN MORENO BARRERA, ha manifestado en su declaración leída en juicio oral que fue sorprendida por EVELIO TORRES, quien le pidió un número de cuenta para hacerle depósitos*

para ella y sus hijas, y que debe haber sido él quien ha extorsionado al agraviado; también es cierto que ser así, y al ser mayor de edad no necesitó de su amiga, la co-acusada SONAPO CARBONEL, para abrir una cuenta bancaria, por lo que no resulta creíble, su versión, dado que incluso ha cancelado los gastos de su coacusada SONAPO CARBONEL para que pueda viajar y aperturar una cuenta en la ciudad de Juliaca.

4. Porque se ha acreditado que ella era la única que conocía al agraviado al haber bailado en el NIGHT CLUB, de propiedad del agraviado, con su misma declaración leída en juicio, por lo tanto se infiere que es la que ha proporcionado el número del agraviado a la gente de Juliaca para que realicen las llamadas extorsivas.

(...) 6. Consecuentemente, de la actividad probatoria desplegada a través del plenario, se concluye, que efectivamente la acusada y un tercer sujeto, han realizado en concierto de voluntades, para un propósito común, el cual quedó en grado de consumado, con la correspondiente repartición de roles, es decir, la acusada se encargó de dar el dato del agraviado con su correspondiente número y además de buscar una cuenta bancaria para que se realice el depósito de la suma de dinero pertinente, por parte del agraviado y el retiro de la misma y un tercer sujeto, era quien realizaba las llamadas y mensajes de texto de carácter amenazante.

7. Por las consideraciones anotadas y habiéndose probado, más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de la acusada ANGELA LORELEN MORENO BARRERA por el delito materia de juicio, debe condenársele por los cargos imputados en su contra. (...)."

CASO N° 12: Expediente	10834-2018-21-1706-JR-PE-01
Jueces / Juzgado	Rosa Amelia Vera Meléndez (d.d); Elia Jovanny Vargas Ruiz; María Mercedes Domínguez Huamán / Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
Delito	Parricidio /Homicidio calificado
Acto / Fecha	Sentencia / 08-08-2019
Fallo	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Silencio de la acusada
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Juez - Por mandato del artículo 376.1 del CPP
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción

“(…) 1.3. POSICIÓN DEL ACUSADO FRENTE A LA ACUSACIÓN

Luego que se le explicara los derechos que le asistían en juicio, dado que para este tipo de delito no figura la conclusión anticipada, por lo que continua el juicio. El acusado previa consulta con su abogado defensor manifiesta;

NO ADMITE los cargos; atribuidos por el representante del Ministerio Público, ni el pago de la reparación civil.

(…)

1.5.-DECLARACIÓN DEL ACUSADO:

- *Indica que no va a declarar.*

(…)

1.7.- DECLARACION DEL ACUSADO.- *De conformidad con lo establecido por el artículo 376, se dio lectura a las declaraciones efectuadas por el acusado en etapa de investigación al haberse abstenido de declarar en juicio.*

(…)

2.4.- AUTODEFENSA DEL ACUSADO. *Indica que está de acuerdo con lo manifestado con su Abogado Defensor. “(…)”*

b) Tratamiento probatorio

“(…) TERCERO: DE LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LAS PRUEBAS.

3.1. HECHOS PROBADOS.

1. Se ha acreditado, que el día 17 de setiembre del 2018, el acusado aproximadamente a las 07:40 de la noche, recoge a las víctimas por las inmediaciones del paradero de Incahuasi, los recoge en un vehículo de propiedad de su hermano, de placa de Rodaje M4E-957, en el que realizaba el servicio de transporte en la zona y los conduce desde Ferreñafe hacia Pítipo, indicando en su declaración realizada a nivel de investigación “a media cuadra vi a la señora JULIANA REYES con mi hijo WJDR (seis años) y la llamé y le dije sube y ella subió y después me fui con ella por la calle Tacna conversando sobre la notificación de la pensión de mi hijo y le dije que nuevamente me ha llegado una notificación de S/5,000”, produciéndose una discusión, por el pago de una liquidación de S/5,975.88 soles, que el Juzgado Mixto de Ferreñafe había expedido, por alimentos, para que el imputado acuda a favor de su menor hijo WILLIAM JESÚS DÍAZ REYES (fallecido), el acusado pretendía pagar por partes, lo que no ha sido aceptado por la víctima, conforme lo ha reconocido el mismo acusado al momento de su declaración en etapa de investigación (17.00 horas del 18 de setiembre del 2018), la misma que se ha dado lectura en juicio, al haberse negado a declarar.
2. Se ha acreditado que la agraviada y su menor hijo bajaron del vehículo, conforme lo ha reconocido el acusado al momento de su declaración en etapa de investigación (17.00 horas del 18 de setiembre del 2018), la misma que se ha dado lectura en juicio, señalando que “nos regresamos en la combi y di la vuelta con destino a Ferreñafe y veníamos conversando y antes del museo de Ferreñafe doy la vuelta para salir nuevamente de Ferreñafe y yo paré y ella baja a la criatura y ella había bajado y yo le dije sube sube, vamos te dejo a tu casa y ella sube y yo arranco y me voy dejando a la criatura parado y me fui avanzando y doy la vuelta para recoger a la criatura estaba en la pista”, indicando a su vez que iba “conduciendo el vehículo a toda velocidad hasta la curva denominada PAISIG, donde ingresé hacia la derecha por el camino carrozable que conduce a Luzfaque, por un aproximado de trescientos metros, siempre a velocidad, donde ella me pidió bajar, pero yo seguía conduciendo a velocidad, donde ella abre la puerta del copiloto y se arroja del vehículo, luego seguí conduciendo por unos veinte metros aproximadamente, donde di la vuelta y regrese hasta donde se encontraba la señora Juliana, descendiendo del vehículo observando a JULIANA tendida en el suelo sangrando por la cabeza, en este acto pensé *Que un accidente de tránsito antes de dejarla lisiada, preferible era dejarla muerta y pagar una indemnización antes de mantenerla con vida lisiada*, por lo que obté en retroceder el vehículo unos metros y luego le pasé las llantas delantera y posterior del vehículo desconociendo porque lugar del cuerpo pasaron dichas llantas con la finalidad que JULIANA REYES VIDES, quede completamente muerta”.
3. Se ha acreditado que, como consecuencia de bajar del vehículo del acusado, se ha producido la muerte de los agraviados por atropellamiento (con carro) esto se produce a la altura del Dren Mill, en la zona comprendida de Ferreñafe entre el Museo Sicán y la que se denomina la Finca o el terreno agrícola de un señor llamado Mickey Plaza, conforme lo ha reconocido el acusado en su declaración efectuada a nivel preliminar e ingresada a juicio a través de su lectura.
4. Se ha acreditado, que el acusado pretendió pasar este hecho como un accidente de tránsito, conforme lo ha reconocido en su declaración efectuada a nivel de

investigación e ingresada a juicio a través de su lectura, “luego procedí a subirla abrazándola de la parte del pecho...y dejarla detrás del asiento del chofer, luego seguí conduciendo hasta llegar a unos metros de la carretera (curva Paisig) donde estacioné nuevamente el vehículo, colocando frenos de manos, con el fin de pasar el cuerpo de Juliana a la parte de atrás, hacia el asiento del copiloto...hasta antes del primer puente (frontis del museo Sicán) en un aproximado de treinta metros, donde estacione la combi al lado derecho de la vía con dirección a Ferreñafe, baje y luego baje a Juliana y la coloque a un lado derecho de la vía (de Pítipo a Ferreñafe)”

5. Se ha acreditado, que **el acusado ha reconocido a través de su declaración efectuada a nivel preliminar e ingresada a juicio, para su lectura que el menor ha sido trasladado con su madre**, en la combi que manejaba el acusado, luego ha sido bajado de la misma, “llegando hasta el primer puente (dren 1700 frontis del museo Sicán), observo que el niño se encontraba tirado en medio de la pista, pero solo me limite a pasar por el lugar, sin estacionar el vehículo” (...).”

CASO N° 13: Expediente	6794-2018-94-1708-JR-PE-01
Jueces / Juzgado	Rosa Amelia Vera Meléndez (d.d); Gerardo Galvez Rodriguez; María Mercedes Domínguez Huamán / Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
Delito	Robo agravado
Acto / Fecha	Sentencia / 15-03-2019
Decisión	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de defensa
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) **Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción**

“(…) 1.3.- POSICIÓN DE LOS ACUSADOS, JORGE ALEJANDRO SANGINEZ CHERO y ALEX MOGOLLÓN SANDOVAL, FRENTE A LA ACUSACIÓN.

- *Luego que se le explicaran los derechos que le asistían en juicio y la posibilidad que la presente causa termine mediante conclusión anticipada, los acusados, previa consulta con sus abogados defensores, preguntado a los acusados.*
 - *Los acusados NO ACEPTARON los CARGOS atribuidos por la Representante del Ministerio Público, ni el pago de la reparación civil, por lo que se continuará con el juicio.*
- (…)

1.5.-DECLARACION DEL ACUSADO: JORGE ALEJANDRO SANGINEZ CHERO

Indica que ese día, era el día del padre, él salió a bordo en su mototaxi a su centro de trabajo, él es mecánico y regresó a la una de la tarde, su esposa la atendió, almorzaron juntos se tomaron dos cervezas, por ser el día del padre y en ese momento se va descansar, y a eso de las 03 o 04 de la tarde su esposa, lo levanta

para que vaya a trabajar en su mototaxi, él se ha levantado de su cama, se alistó y salió a bordo en su mototaxi y en la esquina de Túpac Amaru y Los Sauces, encuentra a su amigo OMAR ROJAS TUÑOQUE, quien lo conoce hace 05 años, su amigo le para la moto, él se para y su amigo le dice tomate un vaso de cerveza por el día del padre, le dijo como vas trabajar siendo el día del padre, su amigo le dijo que baje para tomar con sus amigos, él le dijo que no porque tenía que trabajar, él ha bajado de su moto le presenta a sus amigos, y es allí donde le presenta al señor ALEX MOGOLLÓN SANDOVAL, quien lo conocía de vista y a su hermano JUAN MOGOLLÓN SANDOVAL, y otro chico que no recuerda su nombre, parece que se llama JESÚS, entonces él ha bajado de su moto, se ha quedado en la reunión y a una aproximadamente a las 05:15 pm, baja su esposa y su mamá, lo cual llegan al lugar y lo llamaron a un costado de la reunión y su esposa le empezó a reclamar de porque se había quedado a tomar en la esquina, de que él le había dicho que se iba a trabajar, y en ese momento se acerca su amigo OMAR ROJAS TUÑOQUE, y le dice "señito" yo le dije que se quede, como es el día del padre y cómo es posible que trabaje, entonces su esposa le empieza reclamar y él le dijo que lo deje tomar con sus amigos un rato, su esposa en un primer momento no quería, él le insistió a su esposa hasta que en un momento su esposa se quedó y se sentó en la parte posterior de su moto, y su mamá también se quedó, se quedaron estuvieron allí, y a eso de las 07 de la noche llega un patrullero baja 02 policías, y le empiezan a pedir documentos a todos los que estaban allí, en ese momento él (acusado) no tenía su documento de identidad, se le había olvidado en su casa, entonces su mamá va a traer su DNI, y el policía no quiso esperar le pidió la tarjeta de propiedad y su licencia de conducir, le dijo que allí estaba el numero de su DNI, pero le dijeron que lo acompañe a la comisaría, y como él no tiene ningún problema policial para nada, él ha manejado su mototaxi, y en la parte posterior iba su esposa y un policía, y se percató que en el patrullero llevaban al señor ALEX MOGOLLÓN SANDOVAL, quien tampoco tenía DNI, y eso fue lo que pasó ese día.

INTERROGATORIO DE LA FISCAL

Indica que al momento de la intervención no recuerda como estaba vestido, su corte de cabello era normal, como el que tiene en ese momento, no vio quien llegó después que llego la policía, solo bajaron 02 policías y empezaron a pedir documentos a todos, la placa de su mototaxi es 3785-5M, era de color negro con azul, estaba completo con toda la carpa,

- ***Ingresa la declaración del acusado respecto a la pregunta N°06, por contradicción.***
Estaba vestido de polo negro y con gorra blanca, solo era una gorra blanca, con puntos negros en los bordes, Túpac Amaru con los Sauces, las calles donde lo intervinieron, y el encontró a su amigo OMAR ROJAS TUÑOQUE,
- ***Ingresa la declaración del acusado respecto a la pregunta N°10 por contradicción,***
- *Su moto no tenía parabrisas. (...)."*

b) Tratamiento probatorio

“(…) SEXTO: VINCULACIÓN DE LOS ACUSADOS CON EL HECHO DELICTIVO.

En cuanto a la vinculación de este hecho ilícito con los acusados ALEX MOGOLLÓN SANDOVAL, y JORGE ALEJANDRO SANGINEZ CHERO debemos señalar que sí existe prueba suficiente que sustenta la incriminación fiscal en su contra por el delito de robo agravado, en agravio de MARIA ADA SAMAME YERREN, dándose por acreditada su vinculación con el delito, por las siguientes razones:

“(…) k) Consecuentemente, este Colegiado, considera que la prueba de cargo actuada en juicio oral, es la que ha generado convicción, en cuanto a la violencia ejercida por los acusados al momento de cometer el hecho delictivo y lo que además permite concluir en condenarlos, tanto más, si su declaración exculpatoria, no resulta creíble, versión que debe ser tomada únicamente como un argumento de defensa al que tienen derecho. (…)”.

Caso N° 14: Expediente	N° 9675-2018-55
Jueces / Juzgado	Rojas Cruz; Ruíz Vásquez; Vargas Ruíz (d.d) / Juzgado Penal Colegiado Vacacional de Chiclayo
Delito	Sicariato
Acto / Fecha	Sentencia / 19-03-2019
Decisión	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Refresco de memoria Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción

“(…) 1.8.- EXAMEN DE LOS ACUSADOS:

a.- DEL ACUSADO OSIEL BENAVIDES JULCA:

Libre y voluntariamente, manifestó (...) **Al interrogatorio del representante del Ministerio Público:** Señaló, que labora como efectivo policial desde hace once años y dos meses, indica, que ha trabajado en diferentes unidades, por ejemplo, cuando salió de la escuela, ha estado en Santa Cruz, luego en la división de patrullaje a pie, posteriormente en Monsefú; en lo que es patrullaje a pie aclara, que en este distrito, utilizaba el uniforme tropical en el día y en la noche, utilizaba el uniforme de faena, el uniforme tropical, consiste en camisa beige, pantalón verde de vestir y zapatos bajo – Colfa. No recuerda que actividades realizó el día 10 de junio del año 2015, señala, que siempre ha utilizado una sola línea telefónica, la cual era un RPM de número *028864, después han sido líneas de números largos que no recuerda, cuándo fue intervenido, entregó el celular al personal de la DIVINCRI, con toda la facultad para que abran y vean los mensajes e imágenes, posteriormente, cuando le devuelven, mediante un beneficio cambió por otro equipo y otra línea, no recuerda cuando hizo el cambio de línea, **se le pone a la vista su declaración para que recuerde**, continuando con el interrogatorio, manifestó que en su declaración no dice desde cuándo cambio de línea, **contradicción, Declaración de Osiel Benavides Julca, en la ciudad Chiclayo, siendo las 12:00 horas del día 14 de noviembre de 2016, presente ante el instructor sub oficial superior PNP Elmer Cubas Cubas. Pregunta número 6, para que diga ¿Cuántas líneas usted tuvo en posesión y que usos le dio el 10 de junio del 2015?, cuyo número es 978156539 o RMP *028864, respondió: que luego de la muerte de mi suegra le di de baja; pero luego de la muerte de mi suegra; pero, no recuerdo la fecha exacta estaba registrada a mi nombre.**

No recuerda desde cuándo convive con Mary Paola, **se le pone a la vista su declaración para que recuerde**, refiere que conocía a Mary Paola, en el año 2008, se volvieron enamorados en el año 2010; señala, que la diferencia entre enamoramiento y convivencia es que, el enamoramiento es verse de manera eventual, mientras, que la convivencia es vivir bajo un mismo techo.

Manifestó, que conoce a Eva Benavides Julca, Emérita Benavides Julca, por ser sus hermanas, a Mary Paola la conoció en el año 2008, cuando fue a trabajar a Catache – Santa Cruz, a las demás personas las ha conocido cuando ya han estado detenidos, el señor Gallardo, vive al lado de la casa de sus padres, a éste, lo ha conocido porque en la DIVINCRI, le venían preguntando por el señor, le decían que era su vecino, a lo que contestaba será mi vecino; pero siempre me he dedicado a mi trabajo en la Sierra. Con frecuencia, le preguntaban por el señor Gallardo, no sabe si tiene un sobrenombre o no, queda registrado en audio que **se le pone a la vista su declaración para que recuerde**, el nombre de su vecino es Luis Alberto Gallardo, no conoce su alias, los policías preguntan por alias; pero no lo conoce por alias, le decían “vive al costado de tu casa”, a éste, lo conoce después de los hechos suscitados, se dirige a la casa de su padre ubicada, en la calle Los Laureles N° 759 José Leonardo Ortiz, el señor vive cerca al domicilio de su señor padre; pero, no lo conoce con ningún apelativo, no tiene amistad o enemistad, con el antes señalado, éste, pasaba por la calle muchas veces con su perrito; pero, recalca que no tiene ningún lazo de amistad o enemistad, **contradicción, Declaración de Osiel Benavides Julca, en la ciudad Chiclayo, siendo las 12:00 horas del día 14 de noviembre del 2016, presente ante el instructor sub oficial superior PNP Elmer Cubas Cubas. Pregunta número 10, ¿Para que diga si conoce a las personas que se detallan; Mary Paola Fernández Ugaz, Emérita Benavides Julca, Eva Benavides Julca, Silvia Ricardina Francia Sánchez (negra Silvia), Epifanio Justo Sánchez Coronel (Mario), Santos Hernández Sánchez Coronel (gato), Hernández Sánchez Coronel (burro), David**

Ángel Guerrero Rodríguez (ñoño), a Rafael Guerrero Flores (Rafa) Jeyson Paredes (chiquillo Dany), Alejandro Goicochea Vega (coya), Walter Alberto Rodas Gallardo (diablo), Fredy Miguel Mejía Vega (FM), Oscar Bustamante Idrogo (zorro), Moisés Cubas Quiroz (viejo cubas), Danilo Santisteban Chávez (Danilo), Santos Hermes Sánchez Coronel, de ser así indique que grado de amistad enemistad o parentesco le une, dijo: a Walter Alberto Rodas Gallardo (diablo) lo conozco desde el mes de julio del año 2015.

Refiere, que desconoce la relación de sus hermanas con Lita, no sabe si tienen indiferencias o no, porque estas se han conocido, mucho antes de haber conocido a Lita, cuando tuvieron conocimiento de su relación, se opusieron, es así, que Lita sale embarazada y les dijo, que no se metan en su relación, además, iba asumir su responsabilidad. Finalmente, volvió a ver a Mary Paola Fernández Ugaz en abril o mayo del 2016; pero, le escribía mensajes, y ella había tomado la decisión de alejarse.

El abogado defensor de la acusada Eva Benavides Julca: No formuló interrogatorio. **El abogado defensor de la acusada Mary Paola Fernández Ugaz:** No formuló interrogatorio. **El abogado defensor del acusado David Ángel Guerrero Rodríguez:** No formuló interrogatorio. **El abogado defensor del acusado Rafael Guerrero Flores:** No formuló interrogatorio. **El abogado defensor del acusado Oscar Bustamante Idrogo:** No formuló interrogatorio. **El abogado defensor del acusado Errol Danilo Santisteban Chávez:** No formuló interrogatorio. **El abogado defensor del acusado Fredy Miguel Mejía Vega:** No formuló interrogatorio. **El abogado defensor del acusado Walter Alberto Rodas Gallardo:** No formuló interrogatorio. **El abogado defensor de la acusada Silvia Ricardina Francia Sánchez:** No formuló interrogatorio. **Al Interrogatorio de su abogado defensor:** Manifestó, que llegaron a la comisión policial de Cajamarca, luego los hicieron formar en filas, después dispusieron que los trasladen a Bambamarca, el policía que los tenía a cargo era un teniente; pero, la disposición, vino de un coronel o comandante, la disposición puede ser de forma escrita o verbal, ambas tienen el mismo valor. Señala, que no le negó a la policía que tenía dos relaciones, tomaron conocimiento cuando abrieron la cuenta Facebook, donde tenía conversaciones con Mary Paola y Lita, siendo esta última con quien convivía en el domicilio ubicado en la manzana “R” lote 45 - Salamanca, donde se habían suscitado los hechos. En el embarazo, ha estado con Lita, hasta que le dieron de alta, a sus hijos los viene manteniendo, porque tiene una medida cautelar de dos años, por un Juzgado de Paz Letrado de Pimentel, pasa el 50% de sus haberes como efectivo policial. No recuerda la fecha exacta de cuando trabajó en la USE; pero, en el mes de mayo del 2015, dispusieron que vaya a la USE como apoyo, ahí dispusieron que viaje a Arequipa, no recuerda hasta cuándo trabajo en la unidad (USE).

b.- DE LA ACUSADA EMÉRITA BENAVIDES JULCA

Libre y Voluntariamente, manifestó (...). Al interrogatorio del representante del Ministerio Público

c.- DEL ACUSADO RAFAEL GUERRERO FLORES:

Libre y Voluntariamente, manifestó (...). Al interrogatorio del representante del Ministerio Público (...)

d.- DE LA ACUSADA MARY PAOLA FERNÁNDEZ UGAZ.

Libre y Voluntariamente, manifestó (...) Al interrogatorio del representante del Ministerio Público

(...)

e.- DEL ACUSADO ERROL DANILO SANTISTEBAN CHÁVEZ:

Libre y Voluntariamente, manifestó (...) Al interrogatorio del representante del Ministerio Público: Señala, que de los co-acusados, conoce al señor David Ángel Guerrero Rodríguez, cuando fue a la ciudad de Picsi, para ver unos lotes de terrenos, éste, se encontraba con otras personas más, refiere, que quería adquirir esos terrenos, con la finalidad de venderlos con posterioridad y así poder sustentar a su familia, se ha reunido de seis a siete veces con el antes mencionado, en el periodo de uno a dos meses; asimismo, cuando iba a ver al acusado David Ángel Guerrero Rodríguez, se trasladaba en su moto lineal hasta la ciudad de Picsi, las características de la moto lineal, es de 250, alta, moto cros, además es fanático de las motos altas, indica, que no tiene otro vehículo; así también, conoce a la señora Silvia Ricardina, debido a que en el año 2013 y 2014, en la galería “El Rosado”, tenía un Stand A-1, en el que arreglaba celulares y computadoras, ésta, vendía en la parte externa, después del año 2014, dejó el negocio de arreglar celulares. **Se le pone a la vista la pregunta N° 09 para refrescar memoria, en cuanto a la pregunta formulada, si tiene automóvil:** Respondiendo, que tiene un automóvil; pero, lo compró a nombre de sus padres, ese automóvil lo compró en el mes de agosto, para vender pescado, el cual compraba en “Copinsa” y los vendía en los restaurantes, es un automóvil viejo, indica que es del año 78, marca Forzar Ster, color plomo, de dos puertas, no recuerda la placa, este carro, se lo compró a su amigo de la universidad, de nombre Luis Guevara. La última vez que vio a David Ángel Guerrero Rodríguez, fue en el mes de agosto del año 2015, no ha tenido animadversión con esta persona, sólo lo conoció en el mes de agosto, tampoco ha visto a la señora Silvia Ricardina Francia Sánchez, desde el año 2014, *Contradicción, Declaración de Errol Danilo Santisteban Chávez, en la ciudad de Chiclayo, siendo las 18:25 horas, del día 11 de noviembre del año 2016, presente en una de las secciones de investigación de delitos contra la vida el cuerpo y la salud, de esta DIVINCRI, pregunta 42: declarante diga ¿tiene algo más que variar, cambiar en su declaración?, dijo, que la última vez que vi a la “negra Silvia”, fue hace cuatro meses y no hace un año y cuatro meses como se indica en la pregunta que se me hizo. (...)*

f.- DE EVA BENAVIDES JULCA. Se oralizó su declaración, vertida a nivel preliminar.

g.- DE DAVID ANGEL GUERRERO RODRÍGUEZ.- Se oralizó su declaración y la ampliación de su declaración, vertida a nivel preliminar.

h.- DE OSCAR BUSTAMANTE IDROGO.- Se oralizó su declaración, vertida a nivel preliminar.

i.- DE FREDY MIGUEL MEJÍA VEGA. (NO DECLARÓ A NIVEL FISCAL NI JUDICIAL).

j.- DE WALTER ALBERTO RODAS GALLARDO.- Se oralizó su declaración, vertida a nivel preliminar.

k.- DE SILVIA RICARDINA FRANCIA SÁNCHEZ.- Se oralizó su declaración, vertida a nivel preliminar.

(...)”

b) Tratamiento probatorio

“(…) TERCERO.- VALORACION JUDICIAL DE LAS PRUEBAS.

3.1.- HECHOS PROBADOS:

Respecto de los hechos objeto de imputación, del debate probatorio se ha llegado acreditar lo siguiente:

(...)

3.1.2.- Se ha acreditado, que la acusada Mary Paola Fernández Ugaz, mantenía una relación sentimental con el acusado Osiel Benavides Julca, quien era conviviente de Lita Yovani García Flores, la misma que se encontraba embarazada y yerno de la occisa Teodosia Flores Vásquez y como tal, al ser amiga de las hermanas del acusado Osiel Benavides Julca, esto es, de las acusadas Eva Benavides Julca y Emérita Benavides Julca, debido a los problemas suscitados entre éstas con Lita Yovani García Flores, es que también intervino en la planificación del asesinato de Lita Yovani García Flores, orden y pago del mismo, toda vez, que además, esto facilitaba su relación con el acusado Osiel Benavides Julca, quitándola del camino a ella y a su bebé, conforme al acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz, respecto de la acusada Mary Paola Fernández Ugaz, cuando menciona: *“Que la señora que estaba vestida con un saco, tipo eternada al parecer abogada, estuvo en casa de la “Negra Silvia”, al momento que dieron el dinero para el asesinato de la señora Teodosia y conversaba con la “COJA”, la “NEGRA SILVIA” y el hombre que estaba vestido de civil con zapatos de policía”*; conforme a la declaración de Lita Yovani García Flores en la audiencia de juzgamiento y *la propia declaración de la acusada Mary Paola Fernández Ugaz, en cuanto a los reclamos que Lita Yovani García Flores, le hacía, en cuanto a que se había metido con su conviviente Osiel Benavides Julca; (...) corroborado con la ampliación de la declaración del acusado David Ángel Guerrero Rodríguez, brindada a nivel Fiscal, de fecha 07 de Septiembre del año 2015, en la pregunta N° 01 y respuesta (desde la línea 04 hasta la 06), oralizada en juicio oral, en la que señala “... que fue la amante del policía, quien les pagó para matar a la señora que estaba embarazada y de la cual sabía que era esposa del policía”*; con la declaración testimonial de la acusada Eva Benavides Julca, rendida a nivel Fiscal, de fecha 12 de Junio del año 2015, en la pregunta 4 y respuesta en la línea 4, en la que manifiesta que *“Paola Fernández Ugaz, era pareja sentimental de mi hermano Osiel y como la visitaba, porque había surgido una amistad entre ellas, dicha situación le incomodaba y con la propia declaración en la audiencia de juzgamiento de la acusada Mary Paola Fernández Ugaz, en la que precisó que mantiene una relación sentimental con el acusado Osiel Benavides Julca (...)*

3.1.4.- Se ha acreditado, que la acusada Eva Benavides Julca (instigadora), recibía la visita del acusado Walter Alberto Rodas Gallardo (cómplice primario), quien llegaba con el propósito de recoger desperdicios para alimentar a sus chanchos y es en esas circunstancias, en que tomó conocimiento de los problemas que tenían ésta con la conviviente de su hermano Osiel Benavides Julca, doña Lita Yovani García Flores, lo que conllevó, a que posteriormente, el acusado Rodas Gallardo, contacte al acusado David Ángel Guerrero Rodríguez (cómplice primario) y a su vez, ambos, contactaran al sentenciado Cristhian Jeyson Paredes Bustamante (ejecutor material), a quien le ofrecieron, la suma de mil quinientos soles, a fin de dar muerte a Lita Yovani García Flores, *conforme a la pregunta N° 10 y respuesta, de la declaración rendida a nivel preliminar del acusado Walter Alberto Rodas Gallardo, de fecha 19 de Abril de 2016, línea 6 hasta la línea 8, en lo que corresponde; así mismo, es de advertir, conforme a la declaración rendida en juicio oral de la acusada Emérita Benavides Julca, en cuanto precisa, que su hermana Eva Benavides Julca, tenía un restaurante en la casa de su padre, cuya dirección era Los Laureles N° 759 y la dirección del acusado Walter Alberto Rodas Gallardo, es en la calle Los Laureles N° 785 del*

Centro Poblado Menor de San Lorenzo del distrito de José Leonardo Ortiz, que aparece en su Ficha de Reniec (**folio 1146 del cuaderno de medios probatorios del acusado Osiel Benavides Julca**), lo que acredita que eran vecinos (...)

3.1.5.- Se ha acreditado, que la acusada Eva Benavides Julca, hermana del acusado Osiel Benavides Julca, era amiga de la acusada Mary Paola Fernández Ugaz, es decir “la amante” de su hermano Osiel Benavides Julca y mantenían una relación de conflicto permanente con Lita Yovani García Flores, teniendo mayor afinidad y amistad con la acusada Mary Paola Fernández Ugaz, conforme al examen al psicólogo Ronald Chilón Quiroz, respecto a la Pericia Psicológica N° 1628-2015-PSC, de fecha 06 de Julio del año 2015, *practicada a la acusada Eva Benavides Julca y con la declaración de la acusada Eva Benavides Julca rendida a nivel Fiscal, de fecha 12 de Junio del año 2015, en las preguntas N°3 y respuesta, N°6 respuesta en la línea 2 y 3, corroborado con su declaración ampliatoria rendida a nivel Fiscal, de fecha 24 de Junio del año 2015 en las preguntas N°10 respuesta en la línea 2, N°11, actuado en juicio oral.*

3.1.6.- Se ha acreditado, que la acusada Emérita Benavides Julca (instigadora), hermana del acusado Osiel Benavides Julca, también está implicada en el hecho ilícito, que se planificó, ordenó y pagó, para que se cometiera el día 10 de Junio del año 2015, ya que además de ser amiga de la acusada Mary Paola Fernández Ugaz, quien era “la amante” de su hermano, mantenían una relación de conflicto permanente con Lita Yovani García Flores, teniendo mayor afinidad y amistad con la acusada Mary Paola Fernández Ugaz, conforme (...), *además con su declaración, vertida a nivel de juicio oral, la propia acusada manifestó, que de cariño le decían “Mery” y que no la trataban por su discapacidad, con lo que, se corrobora la versión del colaborador eficaz, en cuanto a la persona que reconoció con el alias “Coja”, corroborado además, con la pregunta N° 10 y respuesta de la declaración rendida a nivel preliminar del acusado Walter Alberto Rodas Gallardo, de fecha 19 de Abril de 2016, línea 6 hasta la línea 8, en cuanto al reconocimiento que realizó de la acusada Emérita Benavides Julca y si bien, en un primer momento señaló en otra pregunta anterior no conocerla, también es cierto, que cuando se le pone a la vista las fichas de Reniec, reconoció a cuatro personas, dentro de ellas a la mencionada acusada, indicando que desconocía sus nombres; pero se le informó, en cuanto al nombre, toda vez, que precisó que tanto ella como la acusada Eva Benavides Julca y Osiel Benavides Julca, vivían en el restaurante “El Rinconcito”, que quedaba de tres a cuatro puertas de su domicilio, ubicado en Los Laureles N° 785; con el acta de recepción de mensajes impresos, de fecha 27 de Septiembre del año 2016, entregados por Lita Yovani García Flores, a la Oficina de la Sección de Investigación de Homicidios de la DEPINCRI (...) y además la propia acusada Emérita Benavides Julca, al rendir su declaración en la audiencia de juzgamiento, precisó que su domicilio real quedaba en la calle Unión - Salamanca y que la vivienda de Lita Yovani García Flores, quedaba cerca a la de ella y que por esta razón siempre la veía.*

3.1.7.- Se ha acreditado, que los acusados Osiel Benavides Julca, Eva Benavides Julca, Emérita Benavides Julca y Mary Paola Fernández Ugaz, intervinieron en el ilícito penal (planificando, ordenando y pagando para ello), impulsados por su relación incompatible y adversa con Lita Yovani García Flores, conforme (...) y *declaración de la acusada Eva Benavides Julca rendida a nivel Fiscal, de fecha 12 de Junio del año 2015, en las preguntas N° 03, N° 06, N° 07, N°09 y respuestas, corroborado con su declaración ampliatoria rendida a nivel Fiscal, de fecha 24 de Junio del año 2015, en la pregunta N° 10, N° 11, N° 13 y respuestas, actuado en*

juicio oral; con la declaración de la acusada Mary Paola Fernández Ugaz y con la declaración testimonial de Lita Yovani García Flores en juicio oral.

3.1.8.- Se ha acreditado, que el acusado **Walter Alberto Rodas Gallardo (cómplice primario)**, cuando llegaba a la casa de la acusada **Eva Benavides Julca (instigadora)**, con el propósito de recoger desperdicios para alimentar a sus chanchos, tomó conocimiento de los problemas que tenían la acusada antes citada con la conviviente de su hermano **Osiel Benavides Julca**, doña **Lita Yovani García Flores**, es así, **que el acusado Rodas Gallardo, contactó al acusado David Ángel Guerrero Rodríguez (cómplice primario) y a su vez, ambos, contactaron al sentenciado Cristhian Jeyson Paredes Bustamante (ejecutor material)**, a quien le ofrecieron, la suma de mil quinientos soles, a fin de dar muerte a **Lita Yovani García Flores**, *conforme a la pregunta N° 10 y respuesta, de la declaración rendida a nivel preliminar del acusado Walter Alberto Rodas Gallardo, de fecha 19 de Abril de 2016, línea 6 hasta la línea 8, en lo que corresponde; así mismo, es de advertir, conforme a la declaración rendida en juicio oral de la acusada Emérita Benavides Julca, en cuanto precisa, que su hermana Eva Benavides Julca, tenía un restaurante en la casa de su padre, cuya dirección era Los Laureles N° 759 y la dirección del acusado Walter Alberto Rodas Gallardo, es en la calle Los Laureles N° 785 del Centro Poblado Menor de San Lorenzo del distrito de José Leonardo Ortiz, que aparece en su Ficha de Reniec (...) corroborado con la ampliación de la declaración del acusado David Ángel Guerrero Rodríguez, brindada a nivel Fiscal, de fecha 07 de Septiembre del año 2015, en la pregunta N° 01 y respuesta (desde la línea 02 hasta la 04); así mismo en la pregunta N° 02 y respuesta, en la que le preguntan por las características físicas del sujeto que conoce como “Diablo”, oralizada en juicio oral, corroborado además con la declaración de la acusada Silvia Ricardina Francia Sánchez, de su declaración vertida a nivel fiscal, específicamente en su pregunta N° 03 y 13 desde la línea 12 a 14, en donde también lo menciona con el apelativo “Diablo”.*

(...)

3.1.10.- Ha quedado acreditado, que el día 10 de Junio del año 2015, a las 19 y 41 horas, **el acusado David Ángel Guerrero Rodríguez, mantuvo comunicación, a través del teléfono celular número 971830436,** con el sentenciado **Cristhian Jeyson Paredes Bustamante (Sicario)** (...) *así como de la propia declaración del acusado David Angel Guerrero Rodríguez, brindada a nivel Fiscal, de fecha 05 de Septiembre del año 2015, en las preguntas y respuestas N° 20, 21 y 22; así mismo, en la ampliación de su declaración de fecha 07 de Septiembre de 2015, desde la línea 15, hasta la línea 18, de la pregunta N° 01, oralizada en juicio oral, por haber ejercido su derecho a abstenerse de declarar.*

3.1.11.- Se ha acreditado, **que el acusado Errol Danilo Santisteban Chávez (cómplice primario), fue el sujeto que proporcionó la motolineal, para el traslado del sentenciado Cristhian Jeyson Paredes Bustamante,** hasta la vivienda de la señora **Lita Yovani García Flores**, el día 10 de junio del año 2015, conforme a la declaración del acusado **David Ángel Guerrero Rodríguez**, brindada a nivel Fiscal, de fecha 05 de Septiembre del año 2015, en las preguntas y respuestas N° 15 y 19, oralizada en juicio oral, corroborado con el Acta de Reconocimiento fotográfico, realizada por el colaborador eficaz, de fecha 04 de Octubre del año 2016, que corresponde a la identificación del acusado **Errol Danilo Santisteban Chávez (folios 1167 a 1168 del cuaderno de medios probatorios del acusado Errol Danilo Santisteban Chávez)** y con su propia declaración en la audiencia de juzgamiento, cuando señala que tiene una motolineal en la que se trasladaba hasta la ciudad de

Picsi; así mismo, de su declaración rendida a nivel Fiscal, de fecha 11 de Noviembre del año 2016, incorporada para refrescar memoria en juicio oral, esto es, pregunta N° 09 y respuesta, habiendo manifestado en juicio oral, que efectivamente tiene un automóvil que compró a nombre de sus padres, con lo cual, se refuerza la versión, tanto del colaborador eficaz como además del acusado David Angel Guerrero Flores, en el sentido, que efectivamente, contaba con otro vehículo además de la motolineal.

(...)

3.1.14.- Se ha acreditado, que la acusada Silvia Ricardina Francia Sánchez, proporcionó su casa donde se llevó a cabo la reunión antes del asesinato, ocurrido el 10 de junio del año 2015, ubicada en la Calle María Parado de Bellido N° 192 - Urbanización Santa Rosa - Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, conforme (...) *así también, en su declaración oralizada en juzgamiento, por haberse acogido a su derecho de abstenerse a declarar, en sus generales de ley, brindó información con fecha 11 de noviembre de 2016, como domicilio real, el antes descrito; así como en la respuesta a la pregunta N° 10, en la última parte.*

3.1.15.- Se ha acreditado, que los acusados David Ángel Guerrero Rodríguez, Errol Danilo Santisteban Chávez, Rafael Guerrero Flores, Walter Alberto Rodas Gallardo y Silvia Ricardina Francia Sánchez, accedieron a planear y ejecutar el asesinato de Lita Yovani García Flores, teniendo como móvil el lucro, conforme a la declaración de la acusada Eva Benavides Julca rendida a nivel Fiscal, de fecha 12 de Junio del año 2015, en la pregunta N° 07 y respuesta 05 últimas líneas, en la declaración ampliatoria de ésta, rendida a nivel Fiscal, de fecha 24 de Junio del año 2015, en la pregunta N°14 y respuesta de la línea 19 hasta la 21, N° 16 respuesta en las 04 últimas líneas, oralizada en juicio oral, al haberse acogido a su derecho de no declarar (...)

(...)

3.1.29.- Se ha acreditado, que la acusada Eva Benavides Julca (instigadora), con la finalidad de inmolarse, sostuvo que tuvo un problema con Lita Yovani Flores García y por ello, se presentó ante el Ministerio Público, refiriendo ser la autora intelectual del asesinato en agravio de Teodosia Flores Vásquez, alegando que tenía una relación de odio con su cuñada Lita Yovani García Flores, quien era conviviente de su hermano Osiel Benavides Julca, mediante su declaración rendida a nivel Fiscal, de fecha 12 de Julio del año 2015 y con su declaración ampliatoria rendida a nivel Fiscal, de fecha 24 de junio del año 2015, oralizadas en la audiencia de juzgamiento, al haberse acogido a su derecho a no declarar.

3.1.30.- Se ha acreditado, que el objetivo era asesinar a la señora Lita Yovani García Flores y no a la occisa doña Teodosia Flores Vásquez (madre de ésta), conforme con la declaración de la acusada Eva Benavides Julca, rendida a nivel Fiscal, de fecha 12 de Junio del año 2015, en las preguntas N° 06, última línea, N° 7, N° 10 y N° 13 última línea, con declaración ampliatoria de la acusada Eva Benavides Julca, rendida a nivel Fiscal, de fecha 12 de Junio del año 2015, en la pregunta N° 20 y respuesta, en la línea 8 hasta la 11, de igual forma con el acta de constatación y recorrido, de fecha treinta de Junio del año 2015, página 4, línea 20 y 21 (folios 1015 a 1020 del cuaderno de medios probatorios del acusado Osiel Benavides Julca); corroborado con la declaración del acusado David Ángel Guerrero Rodríguez, brindada a nivel Fiscal, de fecha 05 de Septiembre del año 2015, en la pregunta N° 18 y respuesta en la línea 2 hasta la 5. (...).

CASO N° 15: Expediente	11712-2018-63-1706-JP-RE-08
Jueces / Juzgado	Vera Meléndez (d.d); Vargas Rúiz; Neciosup Chancafe / Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo / Primer Juzgado Colegiado Penal de Chiclayo
Delito	Robo
Acto / Fecha	Sentencia / 02-10-2020
Decisión	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción

“(…) 1.7.-DECLARACIÓN DEL ACUSADO: LUIS ALBERTO FACUNDO GUERRERO

Indica que en esa fecha estuvo en una discoteca Tarima, ubicada por la universidad Cesar Vallejo se fue con sus promociones de SENCICO, se retiró plan de 3 o 4 de la mañana para ir a sus prácticas en la municipalidad de Eten para irse a la 05 de la mañana porque tenía que llegar a las 06:30, entonces a las 04:00 de la mañana su promoción de SENCICO JORGE LUIS JULCA JULCA le insistía llamando, llamando decidió ir a verlo a la discoteca TARIMA, conversó con él sobre sus prácticas y unos temas de unas cosas pendientes sobre la elaboración de un proyecto de estudios, decidido retirarse con destino a la municipalidad de Eten, y por la calle Salaverry observó bastantes policías y gente que estaba, por curiosidad se paró a mirar todo lo que estaba pasando, se aproximan policías le dicen de quien es esta moto, le dicen queda detenido porque está implicado en un robo, él le dijo jefe me acabo de estacionar a observar, se negó de los cargos le golpearon le dijeron que si había actuado en un robo, en ningún momento le cogen con las cosas de los agraviados, él es una persona con estudios profesionales y no tiene necesidad de estar robando, él niega totalmente los cargos que se le imputan, le asesoraron unos abogados que le estafaron, le dictaron una prisión preventiva, a los muchachos

ni los conoce, recién los conoce, y los enviaron a una prisión, con engaños le dijo que aceptara los cargos, el abogado le engañó que aceptara los cargos y él le dijo si yo no he hecho nada, no hijo acepta nomas, para que te den tu libertad en ningún momento ha estado relacionado con una cosa así, él no sabía qué hacer, estando encerrado es un lugar de tormento y ver que su familia que estaba sufriendo tomó la decisión para aceptar cargos sobre un delito que no había cometido, decidido aceptar un robo que no había cometido, después de cumplir con la prisión preventiva estuvo trabajando como topógrafo y nuevamente lo involucraron, él ha colaborado con la justicia, lo acaban de absolver de un delito de asesinato, no es culpable de un delito, es inocente de los delitos.

INTERROGATORIO DE LA FISCAL

Indica que, si ha sido intervenido en la avenida Salaverry, esa avenida es toda la recta de la SENATI, de la discoteca TARIMA, que toda la avenida es Salaverry, porque él conoce Chiclayo, cuando estaba en la discoteca decidió retirarse, observó adelante a la policía observó a la gente, y decidió acercarse poniendo candado a su moto, de pronto viene la policía y lo interviene. El 06 de octubre del 2018 en horas de la madrugada, con sus promociones de SENCICO y JULCA JULCA, no le dijo porque nunca le preguntó nada, solo le dijeron acepta cargos. Manifestó porque el abogado se vendió, lo estafó, y le dijo que le dijo que le iban a dar la libertad, y él le dijo de cómo iba aceptar los hechos si él no ha cometido, y grande es Dios que le dieron libertad. El en ningún momento ha referido que se entrevistó con ROMARIO, por temor que le den una sentencia de doce años, no estuvo asesorado que lo haya defendido. Indica que no ha sido copiloto de ningún vehículo, a él le han encontrado la moto de su madre. El en algún momento aceptó y el abogado le dijo que aceptara. Ingresa la declaración del acusado rendida en sede fiscal, respecto a la **PREGUNTA N°03** al existir contradicción: **¿PRECISE USTED Si su persona con quien estaba el día 06 de octubre del 2018, a horas 04:00 de la mañana y si tuvo participación en el robo de motocicleta de placa de rodaje N°4884-km, de propiedad del agraviado Calderón Calderón? DIJO:** Me encontraba con ROMARIO en su casa ubicado en el Nuevo Progreso y nos reunimos con SERGIO ROMARIO, **nos reunimos para salir a delinquir** por lo que al salir a la calle en la Avenida Salaverry, observo a una persona que se encontraba en una moto lineal y yo conjuntamente con el negro no recuerdo su nombre dimos la vuelta en la moto lineal ya que Yo era el copiloto ya que ROMARIO y RAFAEL ROSAS ya se habían adelantado de la moto lineal por lo que el negro se estacionó y mi persona quitó la llave del agraviado y arranqué la moto y nos quitamos sustrayéndole la moto lineal, asimismo agrega que no hizo uso de un armamento agregando que desea acogerse a una terminación anticipada del proceso, ofrezco mi declaración, estoy colaborando con la justicia.

Indica que el día de los hechos no estaba manejando la moto, sino la dejó estacionada, él la estacionó, él la estacionó plan de 05.30 de la mañana, porque había bastante gente. Él la dejó estacionada porque se acercó a observar lo que estaba pasando, en su vivienda sino la dejó la moto estacionada por curiosidad se acercó a observar lo que estaba observando, no tenía placa, esta nueva la moto, la moto está a nombre de su mamá JUANA OVIEDA GUERRERO.

Indica que son personas como los van a nombrar sino tienen nada que ver. (...).

b) Tratamiento probatorio

“(…) SEXTO: VINCULACIÓN DEL ACUSADO CON EL HECHO DELICTIVO Y RAZONES QUE DESVIRTUAN LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA:

*(…) (vii) Porque la explicación del acusado respecto de su presencia en el lugar de la intervención es inverosímil, dado que como podría una persona después de estar en una discoteca hasta las 3 o 4 de la mañana regresar nuevamente a la discoteca urgentemente al llamado de su compañero de estudios (a quien no ha ofrecido para que corrobore su versión, ni ha indicado su nombre en la etapa de investigación), para que a esa hora de la madrugada coordine sobre algunos proyectos de estudios, entendiéndose que en dicho lugar se asiste para bailar y tomar unos tragos, entonces como se podría coordinar sobre proyectos de estudios, cuando se ha tomado bebidas alcohólicas, y posterior a ello, irse con destino a sus prácticas a la Municipalidad de Eten, habiendo ingerido algunas bebidas alcohólicas como lo ha referido en juicio y se ha parado y estacionado la moto de propiedad de su madre en la avenida Salaverry solo por curiosidad que había muchos policías y gente, para ver qué pasaba, **cuando en juicio se ha probado que la intervención no ha sido en la avenida Salaverry sino algunas cuadras hacia el PPJJ Ampliación Nuevo Progreso**, versión que debe entenderse como un **argumento de defensa**, máxime si no existe ningún cuestionamiento por parte de su defensa a su declaración efectuada ante la fiscal en el penal de Pícsi, **donde aceptó cargos**, en etapa de investigación cuestionándola recién en juicio, **cuando ha ingresado una pregunta por contradicción**. (...)”.*

CASO N° 16: Expediente	3911-2018-20-1706-JP-RE-08
Jueces / Juzgado	Ingrid Janet Merino Gonzales, Shilling Martín Castañeda Salazar (d.d.), Ronald Erik Ruiz Vásquez / Segundo Juzgado Colegiado Penal de Chiclayo
Delito	Violación sexual
Acto / Fecha	Sentencia / 21-11-2019
Decisión	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	-Silencio - Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción

“(…) 1.3. POSICIÓN DE LOS ACUSADOS FRENTE A LA ACUSACIÓN.

Luego que se le explicaran los derechos que les asistían en juicio, los acusados previa consulta con sus abogados defensores, manifestaron que **no se consideran responsables del delito materia de acusación ni aceptaron la pena ni la reparación civil.**

(…)

1.5. EXAMEN DE LOS ACUSADOS

Manifestaron a través de su defensa que se reservaran por el momento.

(…)

C.12.- DECLARACIÓN AMPLIATORIA DE JHON ANDERSON CORDOVA REYES (20) de fecha 19 de abril del 2018. (Se oralizó)

Aporte de la defensa del acusado José Rubén Cercado Idrogo: Se acredita que este testigo refirió la situación cómo se encontraba uno de los familiares, en este caso la prima de la señora Abigaíl.

DECLARACION DE JOSÉ RUBEN CERCADO IDROGO, de fecha 26 de setiembre del 2018. (Se oralizó)

Aporte del Fiscal: Con esta documental, se desvirtúa la información vertida por su coacusado Cristian Claudio Rodríguez Cobeñas; asimismo acredita que el día de los hechos el acusado José Rubén Cercado Idrogo tenía como propiedad

una mototaxi de color roja, y que el día 17 de agosto en horas de la madrugada acudió al bar Jack Sparrow ubicado en calle Grau 305- Chiclayo, también trasladó a las menores junto con el coacusado a un inmueble ubicado en la calle Mesones Muro, y acredita la indicación respecto a las características de ese inmueble referido por las menores, que contaba con dos puertas, una puerta de ingreso de metal, existencia de escaleras, también que alquilaba un cuarto y tenía un televisor, una cama de plaza media, y que estuvo con la menor de iniciales A.A.V.C.

Examen del acusado **CRISTIAN CLAUDIO RODRÍGUEZ COBEÑAS**, identificado con DNI N°72672240.

Libre y voluntariamente, dijo que: ha venido a hablar la verdad; las agraviadas lo acusan de todo, que las ha forzado, que ha tenido relaciones a la fuerza con ella, indicando que eso es totalmente falso.

Al interrogatorio del Fiscal: Sí conoce a la menor de iniciales M.R.C.C., es su prima; y también conoce a la menor de iniciales A.A.V.C. que es su prima. A la fecha 16 de agosto del 2017, sí era el titular de la línea telefónica con número N°932860031. No conoce a José Rubén Cercado Idrogo. No ha tenido ningún problema con las menores agraviadas antes del día 16 de agosto del 2017. El día 17 de agosto del 2017 sí fue intervenido por personal policial, pero no recuerda la hora exacta, y se encontraba en compañía de las menores de iniciales M.R.C.C y A.A.V.C., estaba en posesión de equipos celulares, de los cuales dos eran que propiedad de las menores agraviadas y uno era de él. El día 17 de agosto del 2017 en horas de la madrugada realizó una llamada telefónica estando en la comisaría, pero que no realizó llamadas antes de estar en la comisaría. En la intervención policial, las menores agraviadas no estaban tan mareadas, estaban conscientes, no se caían; de la agraviada Mirian, estaba con su pantalón sucio, señalando que eso no era consecuencia de caídas. *-Fiscal introduce contradicción en la Declaración de Rodríguez Cobeñas Cristian Claudio DNI N°72672240 (25 AÑOS) de fecha 31 de mayo del 2018, respecto a la pregunta N°7: “PARA QUE DIGA UD. SI EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2017 FUE INTERVENIDO EN COMPAÑÍA DE LAS AGRAVIADAS? (...) y me preguntaron porque mi prima de 15 años, (...) y le dije como estaba mareada, y si se caía es por eso (...). Personal policial no le preguntaron porque su prima de quince años de edad (agraviada) estaba sucia. –Fiscal introduce contradicción en la Declaración de Rodríguez Cobeñas Cristian Claudio DNI N°72672240 (25 AÑOS) de fecha 31 de mayo del 2018, respecto a la pregunta 7: y me preguntaron porque mi prima de 15 años sucia y le dije como estaba mareada, y si se caía es por eso (...). No ha tenido ninguna relación sentimental con alguna de las menores de iniciales M.R.C.C y A.A.V.C. No ha tenido ningún tipo de comunicación con alguna de las agraviadas antes de los hechos. Al momento de la intervención, la menor de iniciales M.R.C.C .estaba vestida con un pantalón de hombre, el cual estaba al revés, no conocía a quien le pertenecía ese pantalón. El día 16 de agosto del 2017 a las 06:00 pm. aproximadamente, no estaba en compañía de las menores agraviadas. El día 16 de agosto del 2017, sí se encontraba en la ciudad de Saltur; ese día exactamente por celular no se comunicó con las menores agraviadas, sino que éstas se le acercaron para conversar, ellas le dijeron para ir al parque de Saltur para que vayan a comer hamburguesas, era de noche, no vio la hora; sí se fueron al parque de Saltur, pero no comieron hamburguesas, él les iba a invitar las hamburguesas, pero ellas no quisieron; ellas le dijeron para que vayan a Chiclayo, porque él no conocía; se fueron al Real Plaza- Chiclayo a un cajero a sacar dinero, tenía en ese momento un aproximado de 20 a 40.00 Soles, indicando que sacó del*

cajero la suma de S/.50.00 Soles más. Después de ir a Real Plaza, se fueron a un bar. Antes de ingresar al bar, las agraviadas sí tenían sus equipos celulares; él no les pidió sus equipos celulares. Dentro del bar, las agraviadas sí tomaron cervezas, indicando que ellas solas se servían; no recuerda cuántas cervezas tomaron las menores agraviadas; ellas mandaban a pedir cervezas para que él lo pagará, refiriendo que primero estuvieron en el primer nivel, en donde tomaron dos cervezas y él los pagó; después subieron al segundo piso, en donde ellas pidieron las cervezas, él ya no pidió, luego llegaron unos amigos por parte de ellas, señalando que antes de subir al segundo nivel, ellas estaban con sus celulares marcando, es decir hablaban por celular; después que llegaron sus amigos, ellas le entregaron sus equipos celulares, el supone que quizás para que no se les caiga o pierda; no recuerda hasta qué hora estuvieron en el bar, solo señaló que era de madrugada; las agraviadas estaban mareadas, ninguna de ellas se quedó dormida en el interior del bar; él se encontraba en regular estado de ebriedad. Cuando salieron del bar, abordaron una moto, porque la agraviada de menor de edad dijo que tenían una amistad; la mototaxi era de color rojo; no recuerda exactamente cuánto de dinero tenía cuando salió del bar, solo tenía un “sencillo”, es decir entre billetes y monedas. No pidió permiso a ningún familiar, porque ellas le manifestaron que pedirían el permiso; reiteró que a ningún familiar pidió permiso para que las menores salieran de Saltur. No le pidió permiso a ningún familiar para que salieran al parque de Saltur. ***-Fiscal introduce contradicción en la Declaración de Rodríguez Cobeñas Cristhian Claudio DNI N°72672240 (25 AÑOS) de fecha 31 de mayo del 2018, respecto a la pregunta N°9:*** porque motivo ud. se encontraba en compañía de sus primas (agraviadas) el día 17 de agosto del 2017? (...) le pedí permiso a mi tío Anselmo Cobeñas para que le deje salir a mi prima de 14 años. No le comunicó a ningún familiar que iban a ir a la ciudad de Chiclayo con las menores agraviadas, porque ellas le dijeron que se iban a encargar del permiso, y que no se preocuparan por eso. Vinieron en auto desde Saltur hacia Chiclayo, les cobró como pasaje, no recuerda la cantidad. Él es de la ciudad de Lima; cuando viene no va a Saltur sino a la casa de su abuela, ubicado en Pampa grande, y le cobran S/.4.00 Soles. Llegaron a la discoteca a las 07:30 pm. a 08:00 pm. aproximadamente. En el trayecto de Saltur hacia Chiclayo, sus primas (agraviadas) enviaban audios por Whatsapp, desconocía a qué persona. No le decía nada a sus primas de porqué tomaban cervezas; la menor de sus primas le dijo que tenía dieciséis años de edad, y la otra agraviada no sabía su edad, pero tenía conocimiento que era mayor que la otra menor. Al salir de la discoteca, no se dirigieron a Saltur; refirió que salieron de la discoteca porque ellas se le insinuaron y le dijeron que querían hacer el amor, eran conscientes de lo que estaban haciendo, quedaron para irse a un hotel, pero una de ellas (refiriéndose a la agraviada menor) tenía su amigo, pero luego indicó que las dos agraviadas conocían a ese muchacho, a ese amigo que sabía a donde las conducía, se le insinuaron, y fueron a un cuarto que él desconocía, no sabe si el cuarto era del mototaxista, las agraviadas les dijeron para que vayan a ese lugar, al parecer ellas ya lo conocían, eso le dijeron cuando salieron de la discoteca, no conocía al mototaxista; la puerta de ingreso de ese inmueble estaba junta (semiabierta), sin llave y ambos (el mototaxista y la menor agraviada) empujaron la puerta; no recuerda las características de ese inmueble, porque era de noche, lo único que recuerda, fue que era un descampado, abandonado, tenía escaleras, había un colchón tirado en el suelo del inmueble, el cual estaba dentro de un cuarto, el cual parecía que era abandonado, había un televisor; él ingresó a ese cuarto con la menor de iniciales M.R.C.C., y la otra menor agraviada se fue con el otro muchacho (mototaxista). Antes de salir del bar, una de las agraviadas (su prima

menor) estaba borracha, pero sí podía caminar. En el interior de ese cuarto sí mantuvo relaciones sexuales con la menor de iniciales M.R.C.C.; pero no con la menor de iniciales A.A.V.C. No recuerda a qué hora salieron del cuarto, pero era entre día y noche; en ningún momento se quedaron dormidos, reiterando que no se quedó dormido desde que ingresaron al cuarto hasta que salieron, y tampoco ellas. - **Fiscal introduce contradicción en la Declaración de Rodríguez Cobeñas Cristhian Claudio DNI N°72672240 (25 AÑOS) de fecha 31 de mayo del 2018, respecto a la respuesta de la pregunta N°9:** (...) luego me despierto alrededor de las 04:00 de la mañana en un cuarto con divisiones de triplay (...). – Sí conoce a que se refiere una relación sexual; la relación sexual que mantuvo con la menor fue “por atrás”, porque ella no quería que lo haga por adelante, indicando que pretendió realizarlo por adelante, pero ella le manifestó que no. Señaló que mientras estaba con la menor de iniciales M.R.C.C. en ningún momento ingresó la otra agraviada de iniciales A.A.V.C.; ese cuarto tenía una sola puerta, la cual se encontraba semicerrada. – **Fiscal introduce contradicción en la Declaración de Rodríguez Cobeñas Cristhian Claudio DNI N°72672240 (25 AÑOS) de fecha 31 de mayo del 2018, respecto a la respuesta de la pregunta N°9:** (...) la puerta estaba cerrada. La otra agraviada de iniciales A.A.V.C abrió la puerta del cuarto, para que él ingresara. Antes de salir del cuarto, la menor de iniciales M.R.C.C., estaba vestida, y llevaba un pantalón de hombre, pero se percató de eso cuando salió del cuarto, asimismo al salir del cuarto, la otra agraviada de iniciales A.A.V.C. estaba normal, no se encontraba alterada. - **Fiscal introduce contradicción en la Declaración de Rodríguez Cobeñas Cristhian Claudio DNI N°72672240 (25 AÑOS) de fecha 31 de mayo del 2018, respecto a la respuesta de la pregunta N°9:** (...) en eso mi prima de 15 años salió de otro cuarto a la calle alterada. –Reiteró que dicha menor no gritaba, estaba normal, sí estaba mareada, pero no gritaba, no se jalaba de los pelos; la menor de iniciales A.A.V.C., estaba vestida normal antes de salir del cuarto. Cuando salió del cuarto, ya no vio al mototaxista. En ningún momento le pagó por la carrera al mototaxista. Recuerda que en el bar, abajo tomaron dos cervezas y cuando estaban arriba, los amigos de ellas ponían las cervezas, señaló que habrían tomado su persona con las agraviadas un aproximado de seis cervezas, pero cuando llegaron los amigos de ellas, éstos ponían las cervezas, indicando que será entre nueve a diez cervezas; precisando que esa cantidad de nueve a diez cervezas fue en general o conjunto. Cuando estuvieron en el segundo nivel del bar, sí grabó a las menores agraviadas, indicando que era con el fin de divertirse, solo grabó a las agraviadas y no ha enviado esa grabación a ninguna red social, solo quedó en él. Preciso que se trató de un video de las menores agraviadas, las grabó en el segundo nivel, antes que llegaran sus amigos. Refirió que él salió primero de la discoteca con la menor de iniciales M.R.C.C. de catorce años de edad, caminando, normal y atrás venía la otra menor agraviada con el muchacho; él subió primero con la menor a la mototaxi, pero la otra menor agraviada Abigail se quedó afuera de la discoteca conversando con el muchacho.

Al contrainterrogatorio del abogado defensor del acusado José Rubén Cercado Idrogo: Señaló que (...)

Al contraexamen del abogado defensor del acusado Cristian Claudio Rodríguez Cobeñas: Llegó a tener relaciones sexuales con la menor “Mirian”, puesto que sí se pusieron de acuerdo (...)

Repregunta del Fiscal: No se cuidó para tener esa relación sexual, indicando que no llegó a eyacular. (...)

b) Tratamiento probatorio

“(…)

TERCERO: DE LA VALORACION JUDICIAL DE LAS PRUEBAS

3.1. HECHOS PROBADOS

Efectuada la valoración de la prueba, este Colegiado considera que se ha logrado acreditar lo siguiente:

3.1.1.- Está probado que la agraviada de iniciales A.A.V.C. cuando tenía 15 años y cuatro meses de edad aproximadamente fue accedida sexualmente vía anal por el acusado José Rubén Cercado Idrogo (...) conforme se acredita con las declaraciones testimoniales en juicio oral de las menores de iniciales M.R.C.C. y A.A.V.C, quienes sindicaron a los acusados como sus agresores sexuales, respectivamente; *asimismo con la declaración del acusado Cristian Claudio Rodríguez Cobeñas, quien reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la agraviada de iniciales M.R.C.C.*

(…)

3.1.3.- Está probado que el día 17 de agosto del 2017 a horas 05:00 am. aproximadamente, a la altura de las intersecciones de la Av. Jorge Chávez con Av. Nicolás de Piérola (ref. empresa de transportes “Ángel Divino”), personal policial intervino al acusado Cristian Claudio Rodríguez Cobeñas y a las menores de iniciales M.R.C.C y A.A.V.C., presentando síntomas de ebriedad, por lo que fueron conducidos a la CPNP-Campodónico; conforme se acredita con el acta de intervención policial de fecha 17 de agosto del 2017, **asimismo con las declaraciones de** las referidas menores agraviadas, *del acusado Cristian Claudio Rodríguez Cobeñas*, de María Isabel Cobeñas Yovera y de Marleny Suyon de Cobeñas.

3.1.4.- Está probado que el día 17 de agosto del 2017 a horas 06:08 aproximadamente, al ser intervenido policialmente el acusado Cristian Claudio Rodríguez Cobeñas, se procedió a realizársele el registro personal, encontrándosele tres celulares: UN (01) celular marca LG, color blanco, con IMEI N°357989-07-268419-7; UN (01) celular marca LG, color blanco- negro con la pantalla rayada, con IMEI N°351521-07-410862-2; UN (01) celular marca SAMSUNG, color plomo-negro, en regular estado, con IMEI N°356004/06/031709/8; **conforme se acredita con el acta** de registro personal de la referida fecha, *y la declaración del acusado Cristian Claudio Rodríguez Cobeñas*; indicándose que los dos últimos celulares antes mencionados fueron incautados; conforme se acredita con el acta de incautación.

(…)

3.1.20.- Está probado que en las oficinas de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, ante el Dr. Héctor Manuel López Popuche se recibió la declaración de Jhon Anderson Córdova Reyes, quien al ser preguntado (Pregunta N°6): PARA QUE DIGA: El día que usted se encontraba al interior del pub bar Jack Sparrow, y observó a las menores de iniciales A.A.V.C y M.R.C.C. indique quiénes eran los acompañantes de las mismas? Dijo, que cuando yo llegué las dos menores estaban con un chico, que era alto, no tan agraciado, presuntamente era su familiar conforme me contó Vanesa, con él estaban Abigail y su prima, bailando y tomando normal; posteriormente yo estaba distraído y apareció otro chico en su grupo, que era mayor que ellas, era de contextura un poco gruesa, de estatura baja, cabello corto, con él estaban tomando y bailando las dos, es decir Abigail bailaba con su familiar y la prima bailaba con el mototaxista, éste último es el mototaxista que conducía la moto que llevó a las menores con el primer chico, asimismo, observé que el mototaxista se besaba con la prima de Abigail, (...); **conforme se acredita con la declaración ampliatoria de Jhon Anderson Córdova Reyes (20) de fecha 19 de abril del 2018.**

3.1.21.- Está probado que estando en las oficinas del Quinto despacho de investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, ante el Dr. Héctor Manuel López Popuche se recibió la declaración del acusado José Rubén Cercado Idrogo, quien refirió que la pregunta N°5: “ (...) el día de los hechos yo me encontraba en el bar Jack Sparrow desde la 01:00 am, fui a bordo en mi mototaxi roja, (...) estuvo en el segundo piso, observó que las agraviadas se encontraban con un chico en el segundo piso pero en otra mesa, tomando y bailando, a eso de las 02:00 de la mañana ellos se unen a nuestro grupo (...) a eso de las 03:00 de la mañana aproximadamente las agraviadas salen del local en compañía de su primo, yo bajo solo para irme a mi casa y al estar afuera veo a la menor de las agraviadas sentada en mi moto vomitando, (...) me pide que lo lleve a Saltur, (...) la mayor de las primas junto con el primo me dicen que no tenían donde quedarse (...) ellos me piden que les dé posada, yo les digo vamos ps ahí tengo un cuarto frente a mi casa, se subieron los tres a la mototaxi (...) luego llegamos a la casa donde alquilo mi cuarto, subimos al segundo piso los 4 (...) y salen los tres de mi cuarto a eso de las 04:30 de la mañana (...)”, Pregunta N° 12: “(...) Que si una sola, como José Luis Cercado Hidrogo, esta cuenta la creó hace muchos años, la creó con el nombre de Luis porque me gusta ese nombre y aparece como Hidrogo debido a que yo no lo cree sino una ex enamorada de nombre Milagros Guevara Cubas; en la pregunta 13: (...) reconoció es una conversación que mantuvo con una de las agraviadas, yo le escribí a los 3 días de haberse sucedido este hecho; *conforme se acredita con la oralización de la declaración de José Rubén Cercado Idrogo, de fecha 26 de setiembre del 2018.*

(...)

6.6.- Además, en el presente caso, concurren las tres garantías de certeza que señala el **Acuerdo Plenario 2-2005**, pues, respecto: a) **Ausencia de incredibilidad subjetiva**, no se advierte que entre los acusados y las agraviadas, mantengan relaciones que estén basadas en odio u otro sentimiento negativo que haga parcializar a la parte agraviada en sus declaraciones, claro está, que este sentimiento negativo o de odio debe ser anterior a los hechos materia de juicio. En consecuencia, no se puede concluir que las agraviadas, hayan efectuado la imputación contra los acusados por odio, resentimiento, enemistad o algún móvil subalterno, máxime que el acusado Crithian Claudio Rodriguez Cobeñas refirió que no ha tenido ningún problema con las menores agraviadas antes del día de los hechos, *mientras que el acusado José Rubén Cercado Idrogo en su declaración oralizada refirió que no las conocía.* b) **Verosimilitud**, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. En tal sentido las declaraciones de las agraviadas, están corroborada con (...). *Por otro lado, el acusado Crithian Claudio Rodriguez Cobeñas reconoció haber tenido relaciones sexuales con la agraviada M.R.C.C., consecuentemente resulta un hecho incuestionable que la accedió carnalmente.* (...)

(...)

6.8.- Por ello, consideramos que el acusado Crithian Claudio Rodriguez Cobeñas al haber solicitado mediante engaños el permiso para sacar a las menores agraviadas a comer hamburguesas al parque de Saltur, en realidad tuvo la finalidad de llevarlas a un bar de la ciudad de Chiclayo para hacerlas ingerir cerveza, para que cuando se encuentre en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir pueda acceder sexualmente a la menor M.R.C.C., objetivo que logró, ya que la menor se encontraba en estado de inconsciencia por la ingesta de cervezas, *lo cual ha sido corroborado con la declaración oralizada de Jhon Anderson Córdova Reyes “la chica que estaba más ebria y como dormida en el sofá, era la prima de Abigail, quienes la sacaron del local, (...)”, es decir, se refería a la menor M.R.C.C. (...)*

(...)"

CASO N° 17: Expediente	4384-2016-52-1706-JR-PE-06
Jueces / Juzgado	Gerardo Gálvez Rodríguez; Carlos Larios Manay (d.d.), y Janet Cecilia Sánchez Cajo / Primer Juzgado Penal Colegiado Permanente de Chiclayo
Delito	Actos contra el pudor
Acto / Fecha	Sentencia / 15-01-2018
Decisión	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Silencio del acusado
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscal
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción

“(…)

1.3.- POSICIÓN DE LOS ACUSADO FRENTE A LA ACUSACIÓN

Luego que se les explicara los derechos que le asisten en juicio y la posibilidad de que la presente causa termine mediante conclusión anticipada, el acusado **César Miguel Cassaro Muro** previa consulta con su abogado defensor, manifestó que **se considera inocente y no acepta los cargos.**

(…)

1.4.3.- ORALIZACION DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO

La representante del Ministerio Público procedió a oralizar la declaración escrita del acusado César Miguel Cassaro Muro de fecha veintiséis de agosto de año dos mil quince rendida en investigación preparatoria, debido a que el acusado se abstuvo de declarar en juicio oral.

b) Tratamiento probatorio

**“(…) TERCERO: DE LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LAS PRUEBAS
3.1.- HECHOS PROBADOS**

De la actuación probatoria en juicio oral, se ha llegado a demostrar la siguiente:

3.1.1.- Está probado que la menor de iniciales C.C.R. durante los años dos mil doce al dos mil quince domiciliaba en la calle El Trigo N° 175 del Pueblo Joven la Primera de la ciudad de Chiclayo, conjuntamente con su madre Jakqueline Mercedes Ramos Mendoza, su hermana Rashira Sheyla Cornejo Ramos, el acusado César Miguel Cassaro Muro y la menor de iniciales T.C.R conforme lo señaló la agraviada, su madre y su hermana en juicio oral *y también el acusado en la respuesta a la pregunta número cuatro de la declaración escrita ingresada al plenario de fecha veintiséis de agosto del año dos mil quince.*

3.1.2.- Está probado que el acusado tenía una relación convivencial con la hermana de la agraviada Rashira Sheyla Cornejo Ramos, en virtud del cual residían en el inmueble citado en el párrafo precedente, conforme lo señaló Rashira Sheyla Cornejo Ramos en juicio oral *también el acusado en la respuesta a la pregunta número cuatro de la declaración escrita ingresada a juicio oral de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince.*

(…)

5.3.- Siendo así considera el Colegiado que en el presente juicio la declaración de la menor agraviada iniciales C.C.R. es prueba de cargo suficiente para determinar la responsabilidad penal del acusado Cesar Miguel Cassaro Muro debido a que concurren las tres garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, siendo que respecto a la (...) **Verosimilitud** (...) *incluso con la del propio acusado quien lo señaló en la respuesta a la pregunta número cuatro de su declaración escrita de fecha veintiséis de agosto del dos mil quince, ingresada a juicio oral. (...)*”.

(…)

5.6.- En consecuencia el Colegiado valorando la prueba en forma individual y luego en forma conjunta conforme lo prescribe el artículo 393°.1 del Código Procesal Penal, ha llegado a la conclusión que se han probado los hechos imputados a Cesar Miguel Cassaro Muro (...). ”.

CASO N° 18: Expediente	1080-2017-75-1706-JR-PE-02
Jueces / Juzgado	Julio Renato Gamarra Luna Victoria / Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
Delito	Homicidio culposo
Acto / Fecha	Sentencia / 05-09-2018
Decisión	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción

“(…)

2.4. Posición del Acusado Frente a la Imputación

Luego que se le explicaran sus derechos y la posibilidad que la presente causa pueda terminar mediante Conclusión Anticipada, **NO ADMITIÓ** los cargos. Por cuanto se prosiguió con el desarrollo del juzgamiento.

3.- EXAMEN DEL ACUSADO.

3.1. Examen de Dan Jhonson Córdova Arias. Para empezar quiero decirles a los señores familiares que siento mucho el deceso de la señora Marisa; el día del accidente yo recuerdo que recién había egresado de la escuela, tenía siete meses de servicio, y me designaron para el Departamento de Transito y estaba de patrullaje en mi moto lineal y ese día me encontraba de servicio de 15 a 23 horas y me tocaba por el tanque elevado de Chinchaysuyo con Víctor Raúl y recibí una llamada de mi base que me dirija para allá lo más antes posible porque me iban a designar otro puesto y a la vez pasar mi alimentos y cuando me encontraba por la calle Piura y Buen Día. Yo venía manejando mi motocicleta con normalidad con mis señales audibles y visibles prendidas, circulinas y serena; al momento de cruzar las intercepciones de Piura y Buen Dia minoré la velocidad a 30 o 35 Kilómetros y en el punto de impacto no percate que estaba cruzando la señora, por motivo que n en lugar hacía falta lo que es la luz artificial, estaba totalmente oscuro, y la señora Marisa vestía con un vestido color negro, por la vestimenta y la oscuridad no la pude ver que estaba

cruzando. Cuando me percate tuve como reacción realizar una maniobra evasiva, con la finalidad de esquivar a la señora, pero me fue imposible por la cercanía en la que se encontraba; es ahí donde impacto a la señora y los dos caemos al piso, me levante rápidamente y acudí a realizarle los primeros auxilios a la señora y la vez llamar a mi base para que me apoye con el llamado de una ambulancia para trasladar a la señora a un hospital más cercano. Posteriormente, quiero mencionar que me considero inocente de los cargos que me están imputando, ya que no es como dice el señor Fiscal que me encontraba circulando a mucha velocidad.

A las Preguntas del Ministerio Público.

Labore en la DETRAN Chiclayo Desde el 01 de Enero del 2016 hasta septiembre de ese mismo año, de ahí me cambiaron, debido a lo sucedido y me pusieron de apoyo a la guardia y luego me cambiaron a otra unidad. Fui a mi base, porque ya eran casi las 7, y me valla porque iba a cambiar a puesto de aceleramiento para acelerar el tránsito y tuve que ir a mi base rápidamente, pero no me especificaron si era una emergencia. Venía con las señales audibles y visibles prendidas porque es una disposición de mi comando que todos los vehículos oficiales estén con la circulinas prendidas, eso está estipulado en todas las bases; lo dice el Jefe de Unidad, desconozco que este establecido en algún Reglamento. No me percate, mis luces si estaban prendidas; me percate de la presencia de la agraviada a menos de Dos Metros, toda moto policial cuenta con una mica y la circulinas expide una luz roja que refleja con la mica e impide un poco la visión, y si minore mi velocidad a casi 32 kilómetros, no recuerdo a cuanta velocidad estaba No recuerdo en que parte de la pista estaba la agraviada, *(Se ingresa una contradicción de la última línea de la pregunta 6 en la Declaración del Acusado, respecto de la visualización de la agraviada.)* trate de esquivar a la señora, esa fue la maniobra evasiva que utilicé. (...)”

b) Tratamiento probatorio

“(...)”

5.8 Estando a lo antes señalado, entonces, siendo que la razonabilidad de la conducción del vehículo se sujeta inexorablemente al Reglamento de Tránsito y al Deber de Cuidado vinculado con la prevención en la conducción, contenido ello conforme el artículo 6 del Decreto Supremo 21-2001; al momento de los hechos no existió racionalmente una situación vinculada con la valoración concreta de situación crítica evidenciada. Entonces, ello sujetó inexorablemente al conductor de la móvil, que correspondía a la Policía Nacional del Perú, en la persona de **Dan Jhonson Córdova Arias**; al Deber de Cuidado que las Reglas de Tránsito para este exigen, como son la conducción con el ciudad debido, bajo el análisis de la situación o contexto en el cual este se desplaza. Ello para evidenciar prudencia en la conducción de un vehículo y que para el caso en particular no aconteció, toda vez que a pesar de resultar en una zona con poca visibilidad, *y en términos del propio acusado, contar con un “reflejo en el parabrisas del vehículo”* que este conducía, *que le impedida advertir de forma plena y natural que o quién se encontraba delante*; el mismo no guardo las previsiones del caso vinculadas con las Reglas Técnicas De Conducción.

“(...)”

5.11 (...) A ello se aúna, conforme la postura del persecutor se tiene, que *fue el propio acusado quien refiere que al momento de los hechos, cercano al impacto este redujo la velocidad a 30 kilómetros por hora; por lo tanto bajo ese mismo argumento, se advierte una coincidencia en cuanto a los 4 metros de proyección expuestos pericialmente; (...)*

5.12 La primera se vincula con el hecho que, inexorablemente, para reducir a 30 kilómetros por hora, la velocidad del procesado debió ser superior a esta; y dadas las circunstancias, ello infringe el deber de cuidado; considerando así el desarrollo de una velocidad inapropiada, conforme incluso el propio perito de descargo lo refirió, en atención al lugar y la zona, advirtiéndose la poca visibilidad y el reflejo que la propia luz daba en la ventana del parabrisas; *conforme se tiene de lo vertido por el acusado Dan Jhonson Córdova Arias*". (..)".

CASO N° 19: Expediente	8735-2016-94-1706-JR-PE-02
Jueces / Juzgado	Julio Renato Gamarra Luna Victoria / Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
Delito	Hurto agravado
Acto / Fecha	Sentencia / 05-11-2018
Decisión	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

- a) **Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción**

“(…)

3.- EXAMEN DE LA ACUSADA.

3.1. Examen de la acusada Laura Santamaría Coronado. Todo sucedió conforme la señora dice, pero ella fue quien me dio las joyas, yo no he cogido nada; me dijo que me daba por los 11 años de mis servicios que me debía y yo le dije que sí y nos pusimos de acuerdo; después ella con su esposos le dio un enfoque diferente, que ellos ya me querían botar hace tiempo y concurre todo esto, diciendo que yo lo he hurtado; pero si hubiera sido así lo hubiera hecho desde hace 11 años y no lo voy a hacer ahorita que yo le estaba pidiendo todo lo que me debía. Además ella me pregunto donde lo había vendido y yo le dije que en el modelo y la joyería Silvana y yo lo he llevado con el mismo policía; además la señora dice que me entrego 3 joyas y otro que yo lo encontré lavando yo le entregue en sus manos y me dijo que se lo de al policía y eso fue lo que hice.

A las preguntas del fiscal. La señora me entrego las joyas. Yo no entrado en ninguna posesión, sino que la señora me los entrego en pago de mis beneficios. La señora no me pagaba mis pagos mensuales, me daba a su disposición de ella y cuando me salí no me dio por un mes y medio. *Se introduce una serie de contradicciones mencionadas en Juicio Oral que difiere de la Declaración de la imputada en Sede Policial.* La señora es la que se encargaba y tenía las llaves del inmueble.

A la pregunta de la Defensa Técnica. Yo no conozco al abogado, la señora fue la que hizo todo eso. (..)”

b) Tratamiento probatorio

“(.) **4. RESPECTO DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.** (...) *Respecto del hecho imputado.*

4.3. Entiéndase que el delito de hurto en cuanto a sustracción de un bien ajeno se tiene debe evidenciar el desapoderamiento de los bienes por parte de la víctima y la preexistencia de estos, previamente en atención a poder así advertir que lo efectivamente denunciado como sustraído existió, en el caso en particular se tiene

que la propia parte acusada ha declarado en efectividad la sustracción de los bienes, las declaraciones incorporadas en juicio oral ha cumplido con las formalidades previstas el Código Procesal Penal Vigente; entiéndase que la acusada deviene en una persona que sabe leer, escribir, con capacidad de discernimiento evidenciada a partir del Principio de Inmediación, por lo que traer a colación la tesis de que fue sorprendida con esta declaración debidamente asistida por un Abogado defensor ante la Policía y que los hechos no acontecieron como primigeniamente se vierte, contravendría si mínimamente la Lógica y Seguridad Procesal.

(...)

6.4. Por lo tanto, se tiene corroborado el acto típico desplegado, la relación laboral de la hoy acusada y sostener por parte de la defensa que el empleo de las joyas en cuestión por parte de la acusada convino en el pago de Derechos Laborales, no resulta razonable ni siquiera en el monto, porque con conocimiento liminar de naturaleza laboral sabemos que aun trabajador le corresponde un sueldo por cada año laborado, siendo así la suma de las joyas en lo que esta ultima refiere haberlo vendido no llega ni siquiera a 1,100.00 soles; por lo tanto, no resulta entendible que esta venta hubiese abonado al pago de derecho alguno; *máxime si en la declaración asistida por el abogado defensor de esta última se tiene que efectivamente refiere que no existe deuda de tal naturaleza, para con la parte agraviada;* argumento de defensa que cae objetivamente y que debe compelerlos a entender que la Presunción de Inocencia ha resultado vencida, el hecho aconteció, los bienes preexistieron únicamente en los términos de la propia exposición del acusado y téngase en consideración que existe un falencia por parte de la propia agraviada quien no aportado medios idóneos que acrediten, no la preexistencia, pero si el valor de los sustraído”.

CASO N° 20: Expediente	11703-2018-40-1708-JR-PE-01
Jueces / Juzgado	Ingrid Janet Merino Gonzales, Shilling Martín Castañeda Salazar (d.d.), Ronald Erik Ruiz Vásquez / Segundo Juzgado Colegiado Penal de Chiclayo
Delito	Actos contra el pudor
Acto / Fecha	Sentencia / 06-11-2019
Decisión	Condena
Motivo del uso de la declaración previa en el juicio	Evidenciar contradicción
Parte procesal que ingresa la declaración previa	Fiscalía
Se corre traslado a la defensa técnica antes de su ingreso al plenario	No
Tratamiento probatorio otorgado por el colegiado a la declaración previa introducida al plenario	Medio de prueba
Se efectuó control de legalidad antes de ingresar la declaración previa a juicio a través de su lectura / La defensa solicitó control de legalidad previo por visos de ilegalidad	No / No

a) Contenido de la declaración previa ingresada al plenario para evidenciar contradicción

“(…)

1.3. POSICIÓN DE LOS ACUSADOS FRENTE A LA ACUSACIÓN.

Luego que se les explicará los derechos que les asiste en juicio, los acusados Manuel Ayala Lorenzo y Santos Ayala Carlos previa consulta con su abogado defensor, manifestaron que **no se consideran responsables del delito materia de acusación ni aceptan la pena ni la reparación civil.**

(…)

Examen del acusado SANTOS AYALA CARLOS.

Libre y voluntariamente dijo que no ha cometido ninguno de esos hechos. **Al interrogatorio del Fiscal:** La menor de iniciales Y.A.L. es su nieta, es su hija; Manuel Ayala Lorenzo es su hijo, Yobana López Reyes es su nuera, con ellos se lleva tranquilo, normal; Susana López Reyes, sí la conoce, no ha tenido ninguna discusión; Benita Reyes Castro es su consuegra, se llevaba bien, tampoco no ha discutido. Vive en el sector Barranco- Centro Poblado Colaya; vive con su esposa: Marcelina Lorenzo Barrios, sus hijos: Manuel Ayala Lorenzo, Santos Ayala Lorenzo y Asunciona Ayala Lorenzo, también Yovana vivía allí, al igual que la menor agraviada. Su vivienda es de adobe, su cocina es de quincha, techo de plástico, tiene un cuarto para él y dos cuartos para sus hijos; la agraviada tenía otro cuartito aparte para dormir con su papá y mamá. Trabaja en arroz, hierba de café, es decir como

agricultor, siembra maíz, trigo, habas, frejoles; gana veinte soles, trabaja de 08:00 a 12:00 m., almuerza y sale a las 04:00 pm. De su casa al lugar donde trabaja se llega en media hora. El colegio de la menor de iniciales Y.A.L. estaba a una hora de camino. Refirió que no sabe por qué la menor agraviada lo incrimina en que él haya puesto su pene en su vagina.

_ Examen del acusado MANUEL AYALA LORENZO. Libre y voluntariamente dijo que lo que se le acusa no es verdad; no sabe por qué han hecho esas cosas. **Al interrogatorio del Fiscal:** La menor es su hija; Yobana López Reyes es su esposa, su relación es excelente, viven tranquilos; Susana López Reyes es su cuñada, se llevaba bien hasta que estuvo en Colaya, no ha tenido problemas; Benita Reyes Castro es su suegra, no se pueden ver por qué ella quería que le regale a su hija. La menor agraviada Página vivió con la abuelita Benita debido a que a los nueve meses se enfermó y allí le dijo que quería que le regalara a su hija. A los cinco años de la menor, le pidió de favor a su abuela para que la dejara a la referida menor, por motivo que estaba más cerca al colegio (Pronoi), estuvo dos meses hasta el mes de junio, entonces luego su esposa fue a recoger a su hija y los señores se molestaron; volvió en el mes de agosto de nuevo fue a recoger a su hija, debido a que la estaban castigando, hablaron con ellos para que se llevaran a su hija (agraviada); necesitaba recuperar a su niña, y no denunció por los referidos maltratos de los abuelos de la agraviada, porque consideraban que eran sus familiares. La incriminación de su hija es por qué le habrían aconsejado, por su suegra quien quiere quitarle a su hija; ya que no quiso regalarle a su hija ni separarse de su esposa.
(...)"

c) Tratamiento probatorio

"(...)

TERCERO: DE LA VALORACION JUDICIAL DE LAS PRUEBAS.

3.1. HECHOS PROBADOS.

Efectuada la valoración de la prueba, este Colegiado considera que se ha logrado acreditar lo siguiente:

(...) **3.1.2.- Se ha probado que** la menor agraviada de iniciales Y.A.L vivía con el acusado Manuel Ayala Lorenzo (su papá), su madre Yobana López Reyes, sus abuelos: Marcelina, el coacusado Santos Ayala Carlos y con Asunciona Ayala Lorenzo, en el inmueble ubicado en el caserío Barranco- Centro Poblado de Colaya –Distrito de Salas- Lambayeque; **conforme se acredita con las declaraciones** de la menor agraviada, de la testigo Yobana López Reyes, Benita Reyes Castro, Susana López Reyes, Asunciona Ayala Lorenzo **y de los acusados Manuel Ayala Lorenzo y Santos Ayala Carlos.**

3.1.3.- Se ha probado el grado de consanguinidad- vínculo familiar, es decir que la menor agraviada es hija del acusado Manuel Ayala Lorenzo y es nieta del coacusado Santos Ayala Carlos; **conforme se acredita con las declaraciones** testimoniales de la menor agraviada, Yobana López Reyes, Benita Reyes Castro, Susana López Reyes, Asunciona Ayala Lorenzo **y con las declaraciones de los acusados Manuel Ayala Lorenzo y Santos Ayala Carlos.** (...)"

3.1.2 Presentación de tablas, gráficos estadísticos e interpretación

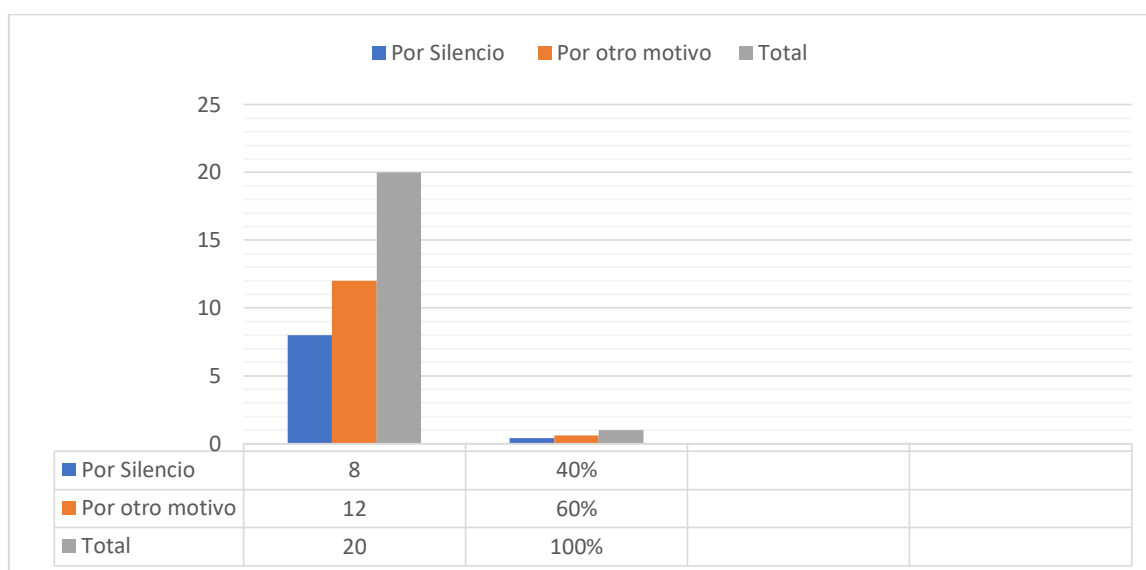
Tabla N° 02

Incorporación de la declaración previa del acusado por ejercicio de su derecho a guardar silencio

Casos	Frecuencia	Porcentaje
Se incorpora:		
a) Por uso de su derecho a guardar silencio	8	40%
b) Por otro motivo	12	60%
Total	20	100%

Año: 2020

Fuente: De investigación

Gráfico N° 01**Interpretación**

De las 20 sentencias analizadas, advertimos que en sólo 8 de ellas la incorporación de la declaración previa del acusado en el juicio oral ocurre debido a que ejerce su derecho a guardar silencio, lo cual constituye una consecuencia normativa prevista en el artículo 376 numeral 1 del Código procesal penal. Asimismo, en 12 casos restantes la declaración previa del acusado fue ingresada al plenario pero bajo premisas normativas no reguladas taxativamente.

Sobre este punto, ingreso de las declaraciones previas por aplicación del artículo 376.1 del Código procesal penal, las investigaciones que han servido de antecedentes de investigación, han realizado sugerencias de lege ferenda que busca modificar el texto de la norma en cuestión; prescribiendo, que cuando el acusado guarda silencio en el juzgamiento

nunca se ingresen sus declaraciones previas. Sin embargo, nuestra posición es totalmente opuesta, y la expondremos al discutir nuestros resultados.

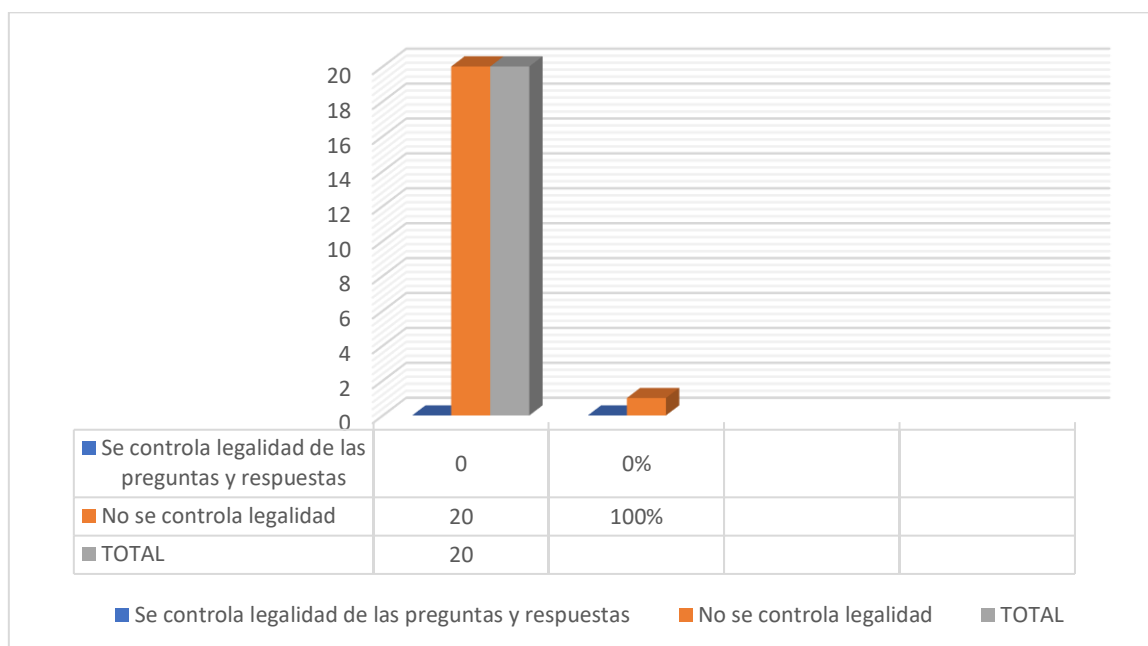
Tabla N° 03

Control de legalidad, por parte del Juez Penal o de la defensa técnica del acusado, sobre la declaración previa que se ingresa al plenario por silencio, contradicción o refresco de memoria

Casos	Frecuencia	Porcentaje
- Se controla legalidad de preguntas y respuestas	0	00
- No se controla legalidad	20	100%
Total	20	100%

Año: 2020

Fuente: De investigación

Gráfico N° 02

Interpretación

Los datos presentados a través de la Tabla N° 03, dan cuenta que en el 100% de los casos estudiados no se hizo un control de legalidad, sea de oficio por el juez o los jueces de juzgamiento, o a pedido de la defensa técnica del acusado; cuestionamientos que pueden incidir, en estricto, al cómo se llevó a cabo la declaración previa [presencia de abogado, conocimiento de su derecho a no declarar y que éste comportamiento no puede perjudicarlo, así como de los hechos que se le imputan y de los elementos de convicción que existen en su contra].

Tampoco se controló la clase de preguntas que fiscalía formuló en sede de investigación preparatoria y que, en consecuencia, fueron respondidas por el entonces investigado, para en el plenario ser ingresadas como vía su lectura; exigencias que resultan de cumplimiento al

amparo de los artículos 86 a 89 del Código procesal penal, concordado con el artículo 376 numerales 2 y 3 del mismo código; tenores que prohíben la formulación de preguntas capciosas, impertinentes y sugestivas, pero sí autorizan aquellas que directas, claras, pertinentes y útiles.

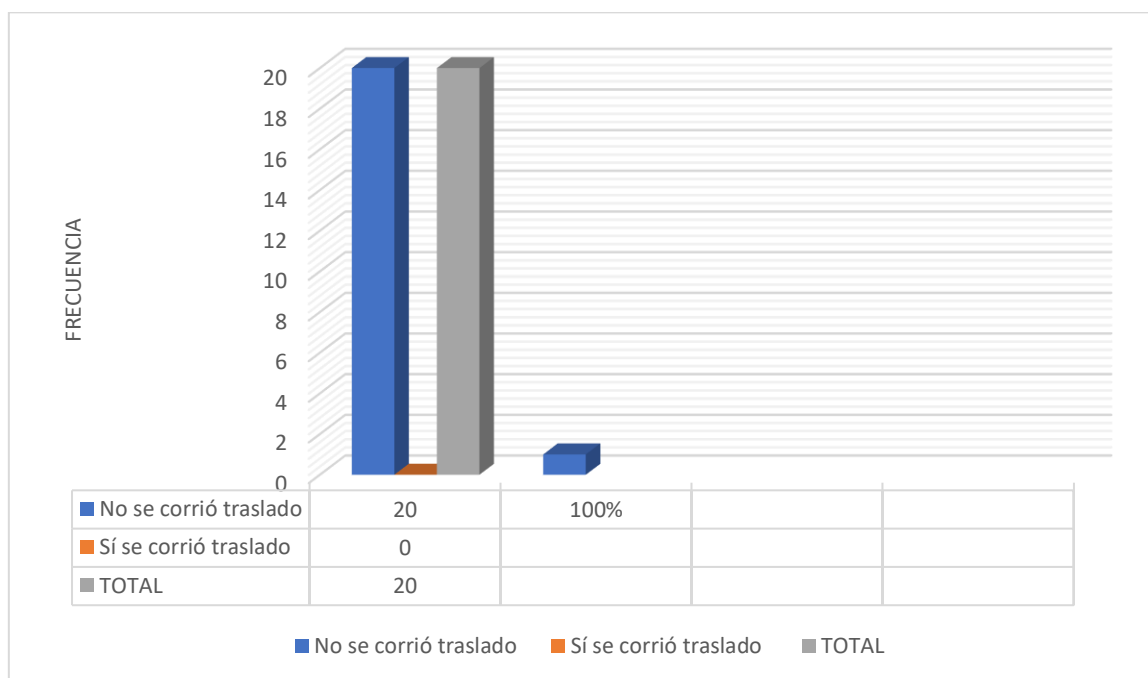
Tabla N° 04

Se corre traslado previo, a la defensa técnica del acusado, la declaración previa que será ingresada al plenario

Casos	Frecuencia	Porcentaje
- Se corre traslado	0	00
- No se corre traslado	20	100%
Total	20	100%
	20	100%

Año: 2020

Fuente: De investigación

Gráfico N° 03

Interpretación

Bajo el contenido de la Tabla N° 04, observamos que, de las 20 sentencias estudiadas, que equivalen al 100% de nuestra muestra, en ninguna de ellas, como acto previo a la introducción o lectura en el plenario de la declaración previa del acusado brindada ante el fiscal, se corre traslado a la parte contraria –la defensa en esencia- para que ésta tenga –cuanto menos potencialmente- el derecho de establecer si es que objeta la lectura de la misma o no lo hace.

Tales prerrogativas –de objeción a la lectura total o parcial de las preguntas- se deben tutelar por cuanto también constituye un mecanismo de control para garantizar: **a)** que la declaración previa haya sido obtenida de manera lícita, **b)** que haya sido obtenida con todas

las garantías de ley, como por ejemplo en presencia de su abogado defensor, **c)** que las preguntas, y respuestas que de ella derivaron, hayan sido efectuadas conforme al contenido del artículo 376 inciso 2 del Código Procesal Penal, y también del artículo 87 y 88 del mismo Código adjetivo, **d)** que se exponga lo referido al contexto en el que se desarrolló el interrogatorio durante la investigación preparatoria, y, **e)** que se tenga en cuenta lo opinado por la parte contraria, para que el Juez pueda decidir respecto a la legalidad de su incorporación al plenario.

Proceder de manera distinta, sería asumir una actitud en la que se afecte el derecho de defensa, pues, no debemos olvidar que es deber del Juez Penal escuchar el argumento de la parte contraria a fin de decidir teniendo en cuenta el fundamento de propuesta y el argumento de oposición que fuera expuesto, pues, se va a analizar una declaración dada por el acusado y que pertenece a diferente estado procesal, en el que la finalidad resultaba ser diferente.

A ello se suma que no existe, en las sentencias estudiadas, objeción alguna que haya sido formulada por el abogado de la defensa. Estimamos que ello se debe a una falta de regulación normativa que prescriba mecanismos taxativos de control de legalidad respecto del ingreso al plenario de las declaraciones previas, como sí ocurre, pero para garantizar la defensa del acusado, respecto de las lecturas de las declaraciones del testigo y perito que no concurren al acto de juzgamiento; situaciones previstas en el artículo 383° numeral 1 literal c) y e) del Código Procesal Penal.

Tabla N° 05

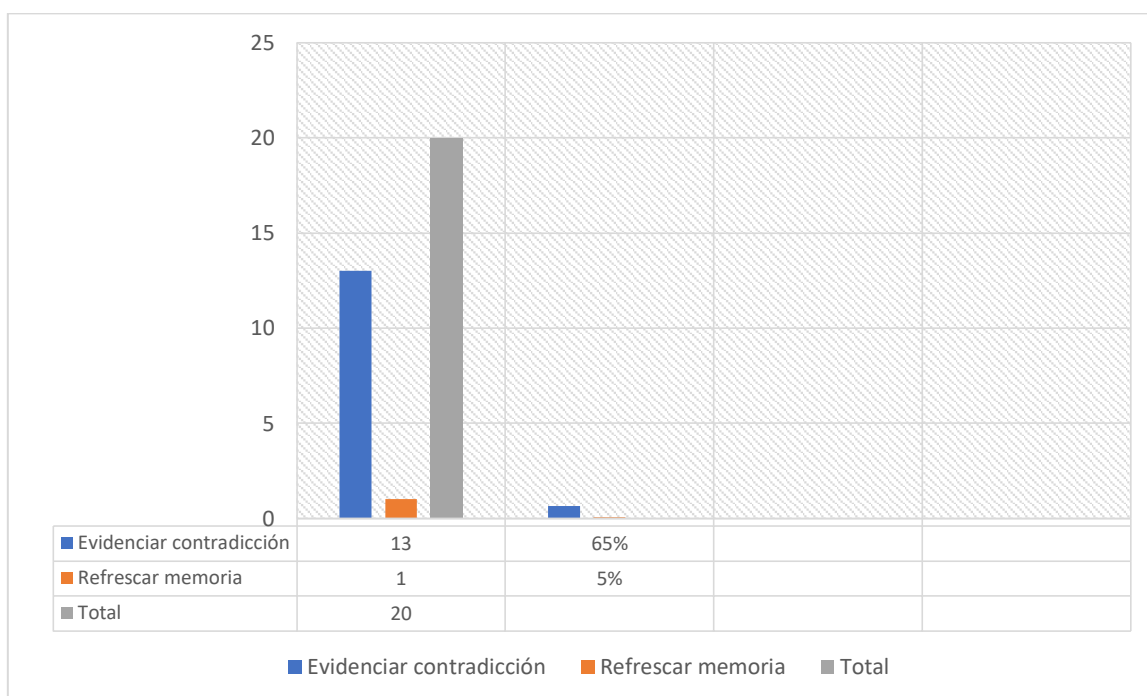
Finalidad de la declaración previa

Casos	Frecuencia	Porcentaje
- Establecer contradicciones	13	65%
- Refrescar la memoria	1	5%
Total	20	100%

Año: 2020

Fuente: De investigación

Gráfico N° 04



Interpretación

En principio, de los 20 casos estudiados, denotamos que en 1 de ellos la declaración previa fue ingresada al plenario con más de una finalidad, y esto ocurrió en el Caso N° 14, en el que fue ingresada para evidenciar contradicción y también para refrescar la memoria del acusado. Asimismo, por la pluralidad de acusados, en uno de los 20 casos, esto es, en el Caso N° 16 se ingresó la declaración previa por aplicación del artículo 376.1 del Código Procesal Penal [por silencio del acusado], pero también con la finalidad de evidenciar contradicción de uno de los acusados que decidió dar su declaración en la etapa de juzgamiento. Por esa razón, al sumatoria de lo obtenido no es 20 [sentencias estudiadas] de 20 [posibilidades].

Ahora bien, pasando al análisis de lo obtenido se tiene que, en el 65%, equivalente a 13 sentencias, las declaraciones previas del acusado fueron utilizadas para establecer contradicciones con relación a lo que el acusado se encontraba declarando en el acto de juicio oral; y solo en un %, 5%, equivalente a 1 sentencia [Caso N° 14], se usó para refrescar la memoria del acusado al haber alegado olvido al responder la pregunta que le formuló fiscalía.

Al respecto, es evidente que lo que se busca con la práctica procesal de hacer uso de las declaraciones previas del acusado, es desprestigiar la declaración del acusado [como persona], así como del contenido de su declaración plenarial; permitiéndole a fiscalía presentarlo ante el Juzgador como una persona que miente con el fin de liberarse de los cargos que se le atribuyen y por los cuales se le pide sanción penal, sin importar la manera cómo lo haga, ni cómo lo exprese.

De otro lado, en un número de 1 sentencia estudiada, equivalente a un 5%, se introdujo la declaración previa para refrescar la memoria del acusado [Caso N° 14], a efectos de que pueda recordar algo que previamente declaró ante el Fiscal en la etapa de investigación preparatoria, y que, se entiende, resulta de interés para la tesis acusatoria de fiscalía que dicha información se introduzca en al plenario; pues, por regla general, solo lo que legítimamente se ingresa al plenario será objeto de valoración al momento que el juez emita sentencia.

A este tipo de fin, se recurre cuando el acusado trata de omitir la revelación de un hecho del cual ya informó durante la investigación preparatoria, ya que en el juzgamiento refiere olvidar o expone no haberlo dicho de la forma cómo se le indica (alude descontextualización de su versión previa).

Lo interesante de esta finalidad es la de tratar de incorporar información –que sale del acusado- con el propósito –no solo al que hemos mencionado precedentemente, sino también para crear en el Magistrado que no existe olvido, sino una clara intención de no revelar alusiones a hechos que puedan comprometer su defensa.

En todo esto, se tiene que la valoración que confiera el juez de juicio a la declaración conjunta del acusado ha de ser necesariamente una de carácter probatoria, de ahí los fines para los que, en la práctica, pues no está normatizado, se recurre a la introducción de sus declaraciones previas.

Consideramos que en ambos casos debe exigirse que la versión incorporada deba encontrarse mínimamente corroborada, con otros medios de prueba aportados al juicio, para solo así servir de fundamento de certeza positiva en la sentencia a expedir, en caso sea utilizada por el juez penal.

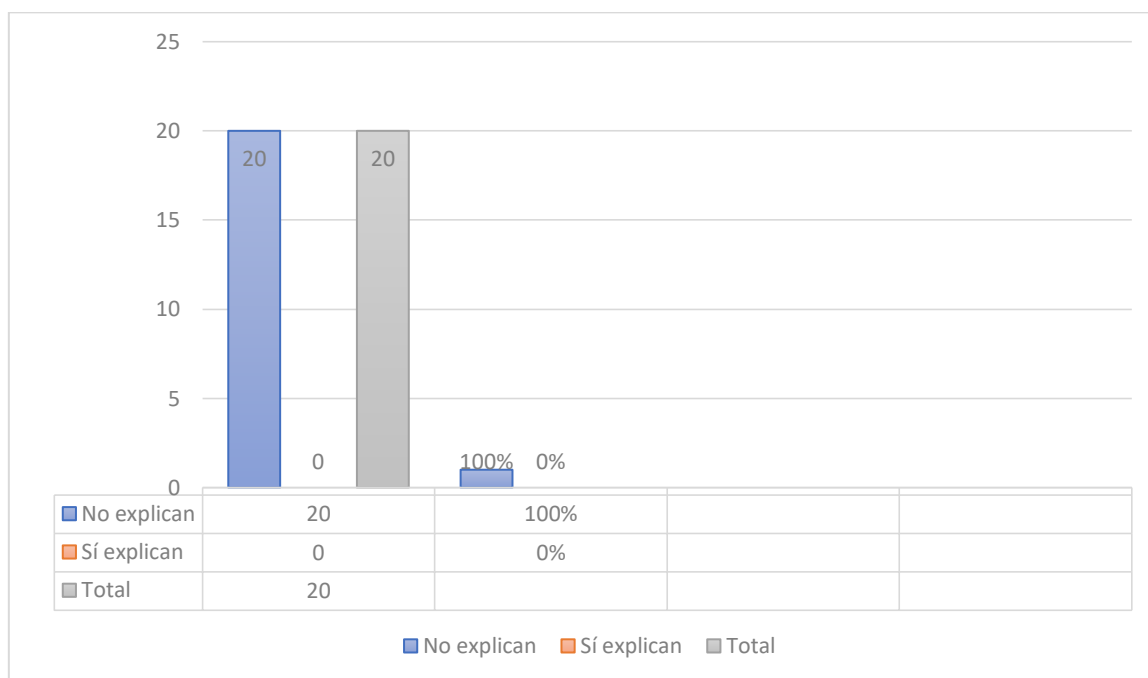
Tabla N° 06

Explican la naturaleza del silencio del acusado y la relación con la declaración previa

Casos	Frecuencia	Porcentaje
- No explican	20	100%
- Sí explican	0	0%
Total	20	100

Año: 2020

Fuente: De investigación

Gráfico N° 05

Interpretación

Desde la perspectiva de la Tabla N° 06, se advierte que de las 8 sentencias en las que, según Tabla N° 02, se ingresa la declaración previa por mandato del artículo 376 numeral 1 del Código procesal penal, el juez de juzgamiento no explica las razones por las que a pesar de guardar silencio el acusado dispone su incorporación de las declaraciones previas al plenario por medio de su oralización. Ello implica, que existe un asentimiento respecto de la incuestionable constitucionalidad que, para los jueces, encierra el tenor del numeral 1 de la norma citada; de ahí se explica que no recurran a ejercer su potestad de ejercer control difuso conforme al artículo 138 de nuestra Constitución Política del Perú; implica, a su vez, que existe de su parte la adopción de una interpretación literal y mecánica del artículo 376 numeral 1 del Código Procesal Penal.

Esta omisión argumentativa –para explicar la naturaleza del silencio del acusado y la relación con la declaración previa-, nos lleva a la conclusión de que, en los órganos jurisdiccionales penales de Chiclayo, existe un cumplimiento tajante al texto normativo del artículo 376 numeral 1 del Código Procesal Penal que estipula, como consecuencia del silencio del acusado en el plenario, oralizar sus declaraciones dadas ante el Fiscal en la etapa de investigación preparatoria.

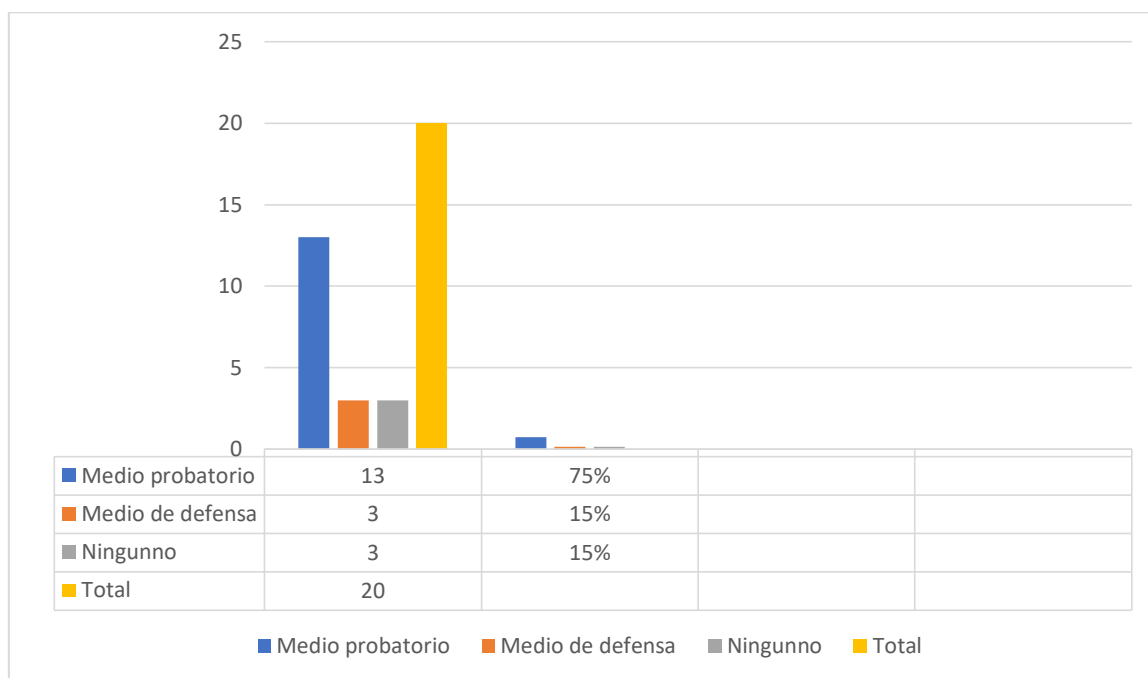
Tabla N° 07

Tratamiento probatorio de la declaración previa ingresara al plenario vía oralización

Casos	Frecuencia	Porcentaje
- Como medio probatorio	14	70%
- Como medio de defensa	3	15%
- Ninguno	3	15%
Total	20	100%

Año: 2020

Fuente: De investigación

Gráfico N° 06

Interpretación

De la Tabla N° 07, referida a la tratamiento o valoración probatoria de la declaración previa ingresada al plenario mediante lectura, entiéndase en el desarrollo de hecho probados y no probados expuestos en cada una de las sentencias estudiadas, hemos podido advertir que el tratamiento probatorio es muy variado, oscilando hasta tres posiciones: a) como medio de prueba, utilizada para dar por ciertos hechos que fundan la imputación fiscal, b) como medio de defensa natural del acusado, por ende, no se utilizada para el referido fin, y, c) ninguno, es decir, no se utiliza en el análisis probatorio, se trata, pues, en este último supuesto, de posturas que niegan cualquier calificación a la declaración previa ingresada al plenario.

Estadísticamente se tiene que en un 75%, equivalente a 13 casos, fue utilizada como medio de prueba; ello quiere decir que, a partir de la lectura que se haga en el juzgamiento oral, la declaración del acusado se utiliza para formar valoración positiva sobre su propia responsabilidad [contra reo], de tal manera que se procura su incorporación al plenario como un elemento que suma a la valoración conjunta que realiza el juez penal para a la postre fundar la acreditación de los hechos expuestos por fiscalía, y así, concluir la responsabilidad penal del acusado.

Si bien es cierto que la declaración previa del acusado puede ser incorporada al juicio oral; empero, consideramos que para ser considerada como elemento probatorio –sui generis–, la exigencia, para su ingreso como documental, además del control de legalidad previo, debe ser superior; es decir, **se debe considerar mínimamente el cotejo o análisis de corroboración de lo relatado**, pues no debe olvidarse que la declaración del acusado por naturaleza nace y se presenta siempre como elemento de defensa [ésta es su génesis de reconocimiento legal e internacional –tratados–].

3.2. Presentación de la información

Producto de haber presentado la información ya procesada, advertida en las tablas y gráficos estadísticos que hemos expuesto y detallado con anterioridad, hemos llegamos a establecer lo siguiente:

- a. Las declaraciones previas del acusado ingresan al plenario mediante su oralización, tal cual documental.
- b. Se recurre a su uso, por aplicación del artículo 376 numeral 1 del Código procesal penal, en cuyo caso, ante el silencio del acusado en el plenario, el juez ordena que el fiscal dé lectura a las declaraciones previas, si las hubiera. Pero también se hace uso de las mismas a petición del fiscal, con frecuencia casi exclusiva, y del actor civil, en menor frecuencia, con la finalidad de evidenciar contradicción en el relato que el acusado brinda en el juicio oral, y/o, en su caso, para refrescar su memoria debido al olvido que pueda referir en juicio. Estos dos últimos supuestos no están contemplados en la ley procesal penal.
- c. Los juzgados de juzgamiento de Chiclayo, ante el silencio del acusado durante el juzgamiento oral, proceden a incorporar su declaración previa, sin reparar en la constitucionalidad o no del texto normativo que lo autoriza, esto es, del artículo 376 numeral 1 del Código procesal penal.
- d. En el plenario, luego de los alegatos de apertura de las partes procesales, el Juez Penal solo se limita a referir al acusado que de guardar silencio se procederá a dar lectura a las declaraciones previas que hubiese brindado en la etapa de investigación preparatoria ante el fiscal, mas no le hace mención a si las mismas serán utilizadas o no en su propio perjuicio; esto es, si pasarán a formar parte –su información- del

acervo probatorio a valorar para determinar incluso su responsabilidad respecto de los hechos que el Ministerio Público le atribuye.

- e. Si bien es cierto que la incorporación de la declaración previa del acusado es un acto procesal que se encuentra permitido por el artículo 376.1 del Código procesal penal, incluso sin la exigencia de control legal alguno, sea formal o material alguna que se encuentre prescrita en el referido texto o en el código en su conjunto; también lo es que el juez de juzgamiento no es un simple aplicador del derecho; debe, en su rol de administrar justicia, procurar salvaguardar el respeto del debido proceso y la defensa de las partes. En ese sentido, le corresponde ejercer, o permitir a la defensa hacerlo –corriendo traslado de la declaración previa que se va a oralizar en el plenario–, un control de legalidad previo que incida en el respeto de los textos normativos previstos en el artículo 86 a 89 del Código procesal penal, y, también, del artículo 376 numeral 2 del mismo Código.
- f. Se advierte que el juez penal que incorpora la declaración previa, se limita a que se cumpla la lectura del contenido de la misma, sin establecer el control de la legalidad del contenido de los documentos, esto es, no se controla ni las preguntas, tampoco las respuestas que aparecen consignadas en las declaraciones previas, incumpliendo con esto el contenido del artículo 376 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 86 a 89 del mismo Código, al que se obliga todo Magistrado del Poder Judicial.
- g. De la práctica procesal estudiada, podemos sostener que en los juzgados de juzgamiento de Chiclayo existe una posición mixta al momento de analizar, desde el punto de vista probatorio, la declaración que el acusado brinda en la etapa de investigación preparatoria, sea a consecuencia de la ley o para los fines ya indicados en el literal b). Así, oscila de considerarla como un medio de prueba, por tanto,

valorarle como tal; también como un medio de defensa natural, y, como tal, niega su valoración probatoria; e incluso también existe una línea de no considerarla ni como medio de prueba, ni como de defensa.

- h.** Si bien es cierto que en ninguno de los 20 casos estudiados hemos advertido que la declaración del acusado se haya utilizado como único elemento probatorio para fundar una condena en su contra; sin embargo, su valoración, sea en su favor o en su contra, debe sujetarse a corroboración previa con otros medios probatorios ingresados al plenario legítimamente; pues, solo así consideramos que puede avalarse su valoración probatoria; tanto más si tenemos en cuenta que toda declaración previa responde a un contexto anterior al del juzgamiento, y como tal constituye un acto de investigación, inequivalente a una prueba preconstituida porque no tiene la característica de irreproducible, porque sí lo es; ergo, tiene una finalidad diferente; de ahí que debe ser exigible mínimamente un grado de corroboración en su contenido para proceder, como se ha hecho en algunos de los casos estudiados, a darle una estimación acreditativa de los hechos que fundan la acusación de fiscalía.
- i.** No hemos advertido que el Juez Penal observe debidamente el derecho a contradecir que tiene el acusado, como acto previo a su incorporación al plenario, sobre todo a través de su defensa, y esto por cuanto se decide la lectura de la declaración previa, sin correr traslado al abogado defensor del acusado para que observe, si fuera así, el contenido de la preguntas y respuestas que ofreció el acusado durante la investigación preparatoria.
- j.** En los casos que la declaración previa del acusado fue tratada como un medio de prueba, y que ingresó al plenario a solicitud del órgano persecutor del delito con fines de contradicción, no se evidencia que los jueces de juzgamiento hayan desarrollado,

en el razonamiento judicial, el por qué hicieron prevalecer la declaración previa por sobre la plenaria. Esto es, por qué la versión brindada en sede fiscal sería más fidedigna que la expuesta ante el órgano jurisdiccional bajo los principios de oralidad, publicidad e inmediación.

Capítulo IV. Discusión

Para el desarrollo de este capítulo, también hemos considerado necesario realizar una presentación estructurada y esquemática, para una mejor explicación y entendimiento, dividida en tres aspectos: **a)** qué fue aquello que nos motivó a realizar este trabajo, base de nuestro objetivo principal, y cómo lo hemos llegado a materializar; **b)** cuál es el grado de validez interna y externa de nuestra investigación; y, **c)** desarrollar de forma comparativa, nuestros resultados, con aquello que sirvió de antecedentes y base teórica de nuestro trabajo de investigación; además, en este mismo rubro, expondremos cuál es nuestra posición en torno al tratamiento probatorio que debe tener la declaración del acusado al momento de expedirse una sentencia.

4.1. Motivación inicial y objetivo principal

Cuando nos propusimos ejecutar la presente investigación, y lo hemos hecho, lo hicimos bajo la inquietud de conocer cuál es **el tratamiento probatorio que los juzgados de juzgamiento de Chiclayo, vienen otorgando a la declaración del acusado brindada en el acto de juzgamiento cuando ésta derivaba del uso de sus declaraciones previas con fines de contradicción**; pues, desde la concepción inicial que teníamos de la declaración del acusado, no concebíamos que la misma pueda ser utilizada como parte del acervo probatorio sobre cuya base se construya su propia responsabilidad penal; esto es, su uso contra reo.

Subyacen a tal posición, la pregonación de sus derechos a la no autoincriminación, a su defensa material, incluso a la presunción de inocencia [que motiva que sea fiscalía quien deba probar en juicio la responsabilidad del acusado con elementos distintos al de su versión], y al debido proceso.

Sostuvimos, además, que la importancia de nuestra investigación no solo estaba guiada por un propósito noseológico, sino también, práctico. En este sentido, la importancia estaba dirigida a las partes que concurren al proceso: fiscalía, actor civil, abogado de la defensa y, en esencia, el propio acusado; pues, consideramos de suma importancia que los sujetos procesales conozcan de antemano de los beneficios probatorios y de las repercusiones que pueden derivar de la declaración que el entonces imputado brinda en sede de investigación preparatoria, sin la presencia de un juez; aspectos que a la fecha pasan desapercibidos en la práctica y que pueden ser fundamentales en el juicio oral, en el que entra en pugna la finalidad probatoria propuestas por las partes en conflicto, y, por otra parte, el deseo de administrar justicia con estricto apego al derecho; así como el equilibrio adecuado entre el interés público (las necesidades de la acusación) y el derecho de defensa (interés del acusado).

4.2. Validez interna

¿Los resultados que hemos obtenido son válidos? En un plano objetivo y consciente consideramos que sí lo son. Y sí lo son porque el análisis de datos y fichaje, al que hemos recurrido como instrumentos de estudio, son válidos para una ciencia social como el derecho. Como también lo son los métodos que hemos utilizado para la interpretación y análisis de las teorías estudiadas y, sobre todo, de nuestra muestra, cuya explicación y análisis implicaban la realización de un cuadro que resuma toda la información relevante, y de tablas que cuantifiquen lo recabado según las guías de cotejo de información obtenidas de las propias sentencias.

Por lo tanto, el grado de confianza de lo obtenido, palpables a partir de los resultados expuestos, gozan de plenitud, pero solo en el ámbito de estudio al que nos hemos enfocado, cual es, los juzgados penales de juicio de Chiclayo.

La plenitud del grado de confianza que deriva de lo obtenido, fruto de este trabajo, resulta, incluso, de fácil corroboración a partir de un estudio y análisis de los extractos que de las mismas sentencias hemos recogido; elección que responde a las dos variables que marcaron nuestro estudio; esto es, con el tratamiento probatorio de la declaración del acusado en juicio, y el uso de las declaraciones previas del acusado para evidenciar contradicción.

4.3. Validez externa

Siempre en un plano objetivo, y más allá haber enfatizado sobre la validez interna de nuestro trabajo, somos conscientes que la posición jurídica-doctrinaria que hemos encontrado del estudio de las sentencias analizadas, responde a la de un operador jurídico; por tanto, no es inmutable. Esta no uniformidad –de los criterios encontrados- impide que nuestros resultados puedan ser validados en un plano generalizado; esto es, en ámbitos distintos del analizado; tanto más si la ciencia abordada –el derecho- es cambiante, responde a realidades sociales existentes a la época; y no existe duda alguna que lo mismo ocurre con las posiciones jurídicas que respecto una institución penal material o procesal presentan y defienden los doctrinarios, la jurisprudencia, y, de la mano con estas dos fuentes del derecho, los operadores jurídicos –jueces en estricto-.

De ahí que la confiabilidad de lo demostrado, tiene alcances focalizados, mas no generalizados. Es más, se llega al punto, dado lo cambiante de los criterios que giran en torno al modo de concebir una determinada institución procesal –por ejemplo, el tratamiento

probatorio de la declaración del acusado-, que, incluso, lo que hemos obtenido y demostrado, varíe con el paso del tiempo, sea por la rotación de las personas que a la fecha integran los juzgados penales de juzgamiento de la ciudad de Chiclayo, o por el cambio de concepción que a partir de la ley o de la jurisprudencia se tenga de una institución, tan pasional y delicada a la vez, como la declaración del acusado.

4.4. Análisis comparativo

Llegado a este punto, corresponde cotejar nuestros resultados con los que derivan de los antecedentes de nuestro estudio y con las bases teóricas que utilizamos para presentar nuestro capítulo II: Diseño teórico.

En ese sentido, Malabrigo (2017) defendió su trabajo de investigación sobre los criterios de valoración de la declaración del acusado, el cual tuvo como ámbito geográfico la Sede Central de la Corte de Arequipa, y temporal, el año 2014. El propósito buscado fue “*identificar la naturaleza jurídica de la declaración del acusado*”, coligiendo que los magistrados de la referida corte valoran la declaración del acusado de acuerdo a su voluntad, en la medida que para algunos jueces se trata de un medio de prueba, por tanto, útil para condenar, mientras para otros, de un medio de defensa, por tanto, inutilizable para emitir un fallo de condena [contra reo].

Si bien aquello no puede ser cuestionado a partir de los resultados que hemos obtenido, por la sencilla razón de que, lo analizado y estudiado como muestras, en ambos trabajos, responden a ámbitos jurisdiccionales distintos. Sin embargo, basándonos en la confiabilidad que merece dicha investigación, podemos afirmar que la dual concepción que existe en torno a la naturaleza jurídica de la declaración del acusado desborda nuestro ámbito de estudio;

pues, en ambos escenarios, salvando los ámbitos temporales, se aborda el tratamiento probatorio de la declaración del acusado desde dos perspectivas: **a)** como medio de defensa y **b)** como medio de prueba; y solo bajo esta última forma de concebirla se acepta, y se aplica, su uso contra reo; esto es, para dar por probada la acusación fiscal y, en consecuencia, emitir un fallo condenatorio.

Ahora bien, Malabrigo (2017, p. 76), en lo esencial, llega a sostener que la declaración del acusado debe ser tratada siempre como un medio de defensa, por tanto, no puede ser utilizada por los jueces de juicio para sustentar un fallo condenatorio. De ahí que sugiera la modificación, entre otros, del artículo 376 numeral 1 del Código procesal penal, en el sentido de prohibir que se oralicen las declaraciones previas del acusado aun cuando este ejerza su derecho al silencio. Asimismo, en el mismo sentido, en la página 84, postula que tampoco se pueden hacer uso, en el plenario, de las declaraciones previas que el acusado brindó ante el fiscal en la etapa de investigación preparatoria.

El mismo enfoque –negar la valoración de la declaración del acusado para fundar su propia condena- ha sido realizado por Ticoná (2018, pp. 116-118) y Edquen (2020, p. 112). Es más, Ticoná (2018) propone la modificación derogativa del artículo 376 numeral 1 del Código procesal penal; y la calificamos de derogativa por cuanto plantea que se sustituya por completo el texto existente a la fecha por una redacción que, en esencia, normativice que el acusado tiene derecho a declarar de forma libre; eliminando, así, cualquier autorización legal –que a la fecha existe- para que se hagan uso de las declaraciones previas en caso que el acusado ejerza su derecho a guardar silencio en el plenario. Y si esto es así, se teje un marco jurídico que niegue su valoración probatoria contra reo.

Lo mismo ocurre con Edquen (2020, p. 112), quien partiendo de la premisa de que la lectura dispuesta por el artículo 376.1 del Código adjetivo penal es inconstitucional, porque, señala, vulnera los derechos a la tutela procesal efectiva y, en estricto, al debido proceso del acusado, sugiere que se suprima la actual autorización que contiene la norma en comento, respecto de la lectura de las declaraciones previas del acusado cuando éste ejerce su derecho al silencio.

Ahora bien, las teorías que se han construido en torno a la naturaleza de la declaración del acusado, y que en extenso hemos desarrollado como parte de nuestra base teórica, nos permite sostener que el debate de si se trata de un medio de defensa o de un medio de prueba aún persiste a la fecha.

Así, la tesis que defiende la postura de considerarla como un medio de defensa, bajo la cual no es admisible que sea valorada contra reo, como la expuesta por Malabrigo (2017), Ticona (2018) y Edquen (2020), es asumida por autores como Mendoza (2020), Morales (2014, pp. 8-10), Quispe (s.f.), Clariá (2009, p. 303), Peña (2007, p. 360), y, Espinoza (2018, pp. 338-339).

Pero autores como Benavente (2015, p. 46), Hermosilla (2012), citado por Oré (2016, p. 288), Riego (2014, p. 12), y San Martín (2015, p. 522), han desarrollado una tesis sui generis –ya lo explicaremos por qué– en cuanto a la naturaleza de la declaración del acusado y su admisibilidad para ser tratada contra reo.

Hemos calificado de sui generis la posición de estos últimos autores, en tanto que parten aceptando que la declaración del acusado es un medio de defensa [**no discuten esta**

consideración legal y constitucional]; empero, a su vez, postulan que sí puede ser objeto de valoración probatoria contra reo. Para arribar a tal postura, sostienen que la naturaleza que ostenta el acto de declarar del acusado, **es evolutiva**; es decir, sufre una especie de metamorfosis procesal –que de ser un medio de defensa se convierte –evoluciona- en un medio de prueba propiamente dicho-, y esto ocurre, según sus líneas doctrinarias, cuando el acusado decide declarar de forma libre y voluntaria, y en consecuencia aportar datos a la investigación o al proceso que se le sigue en su contra. En ese escenario, nada impide al juez de juicio utilizar la información proporcionada como parte del acervo probatorio a utilizar para expedir un fallo condenatorio.

En suma, resulta claro que las teorías existentes en torno al tema planteado, sobre cuya base se construya la aceptación o no de ser utilizada contra reo, no es unánime a la hora de determinar si es un medio de defensa o un medio de prueba; menos a la hora de aceptar su valoración probatoria.

Hasta aquí, no ha sido ocioso dar a conocer la aún vigente discusión que existe en la doctrina, y en los trabajos de investigación mencionados, en torno a la naturaleza que ostenta la declaración del acusado; pues, nos ha permitido conocer que la idea de concebir a aquella como un medio de prueba no es exclusivo de un sistema procesal de corte inquisitivo, sino que aún subyace, y está presente, en un ordenamiento procesal reformado de corte acusatorio, como el Peruano, que admite la posibilidad legal de hacer uso de las declaraciones previas, y –partiendo de esa premisa normativa- de valorarla al momento de dictarse el fallo judicial contra reo.

Pero, en nuestro plano local, la discusión se ha vuelto mucho más interesante en la medida que existen pronunciamientos, recientes, expedidos por nuestra Corte Suprema de Justicia en torno a la naturaleza jurídica de la declaración del acusado y de su valoración probatoria -en su sentido lato-.

En ese sentido, en el R.N. N° 1666-2019-Lima, de forma expresa se sostiene que la declaración del acusado es un medio de defensa; lo mismo ocurre, aunque de forma implícita, en el R.N. N° 1879-2018-Lima, en la Casación N° 375-2011-Lambayeque, y en el R.N. N° 665-2017-Lima Sur. Sin embargo, en la Casación N° 1462-2017-Lambayeque, cuyo ponente es el maestro **César San Martín Castro**, se ha legitimado, implícitamente, la constitucionalidad del artículo 376 numeral 1 del Código procesal penal, al haberse sostenido, en el fundamento jurídico séptimo, que el ejercicio del derecho a guardar silencio en juicio oral no anula las declaraciones previas que éste hubiese brindado en instancia de investigación preparatoria –ante el fiscal-.

Por lo tanto, según este fallo casatorio, es constitucional y legítimo, que se dé cumplimiento a lo regulado en el artículo 376.1 del Código procesal penal; en consecuencia, se oralice las declaraciones documentadas del acusado en el supuesto de que éste haga uso de su derecho a no declarar en el juicio oral; enfatizando, la casación, que la doctrina recogida en la referida norma **no vulnera el derecho a la no autoincriminación**. Es más, considera a la declaración previa del acusado como **prueba documentada**.

El radio de alcance de la última postura jurisprudencial, aunque, en estricto, no de la Corte Suprema, se ha ampliado a partir Acuerdo plenario 03-2018-SPN emitido por los jueces superiores de la sala penal nacional que, con la participación en calidad de expositor del

magistrado supremo San Martín Castro, acepta la legalidad del uso de las declaraciones previas del acusado para evidenciar contradicción en el relato que aquel brinda en la etapa de juzgamiento.

La situación expuesta, conforme a los resultados que hemos obtenido y descrito previamente, es común e incuestionable, sea por los jueces o por la defensa técnica del acusado, en la práctica judicial de los juzgados de juicio de Chiclayo, donde, incluso, el tratamiento normativo –aunque no positivizado- otorgado a la declaración del acusado es el mismo que el previsto para un testigo o perito, en lo referente a los fines que encierra el uso de las denominadas declaraciones previas; esto es, para evidenciar contradicción y refrescar memoria.

4.5. Toma de posición

4.5.1. La declaración del acusado como medio de defensa sui generis

Una visión de los medios de prueba [esto es, aquello que sirve para probar -acreditar- los hechos que son objeto de atribución penal, así como la pena y la responsabilidad civil] que nuestro legislador ha previsto en el Libro Segundo, Sección II, Capítulos I al IX [artículos 160 al 241] del CPP de 2004, nos permite advertir que, a diferencia de la prueba testimonial, pericial, documental y material, la declaración del acusado como tal no se encuentra prevista dentro de la gama de medios probatorios expresamente reconocidos; se exceptúa la confesión sincera corroborada que, como ya lo hemos dicho, sí se encuentra regulada como un medio probatorio expreso.

Ello implica, en puridad, que la postura de nuestro legislador es considerar a la versión del acusado como un medio de defensa, antes que un medio de prueba; por lo tanto, si ello es así, el juez de juicio no podría sopesar la información que ingresa al plenario, menos para dar por acreditados el aspecto fáctico imputable. Sin embargo, esta línea legislativa encuentra oposición al permitir, a través del artículo 376.1 del CPP, el uso, la oralización, y consecuente introducción al plenario, de las declaraciones previas que el acusado brindó en sede fiscal.

Pero para poder conocer su naturaleza (de medio probatorio o de defensa material, o quizás de la existencia de una evolución conforme transcurre el iter del proceso penal), analicemos que, según su ubicación en nuestra norma adjetiva penal, la declaración **del investigado** [resaltado] está prevista en el artículo 86 y siguientes del CPP. Si nos dejamos guiar por su ubicación advertimos que dicho acto se encuentra ubicado dentro de la Sección Cuarta, Libro Primero, que regula, entre otros aspectos de carácter procedimental, los derechos y deberes de todos los “sujetos procesales”, llámese Ministerio Público [artículos 60 al 66], Policía Nacional [artículos 67 al 70], abogado defensor [artículos 80 a 85], el propio imputado [artículos 71 a 79, y 86 a 89], la persona jurídica [artículos 90 a 93, que también tiene la condición de imputada], la víctima [artículos 94 al 97], el actor civil [artículos 98 a 106], querellante particular [artículos 107 a 110] y, por último, el tercero civil responsable [artículos 111 a 113].

Entonces, por su ubicación dentro de nuestra legislación procesal, queda claro que se trata de un derecho: el imputado –denominación utilizada por el legislador- tiene derecho a declarar; lo que constituye expresión de su derecho de defensa en su dimensión material

[autodefensa], que como tal está estipulado en el artículo 39 numeral 14 de nuestra Carta Magna.

Si ello es así, asumimos la postura de que el testimonio del acusado es un medio de defensa que deriva del ejercicio de su derecho constitucional a la defensa material, y por extensión, a un debido proceso.

Ahora bien, el cómo debe ser valorada o si debe o no valorarse probatoriamente la declaración del acusado, constituye una disyuntiva muy debatible [como ya lo hemos advertido precedentemente].

En un plano de negación a aquel proceder -como posible opción- nos lleva a preguntarnos: **¿Qué sentido tiene que el acusado declare en juicio si su versión no sería valorada?**

Consideramos que no tendría sentido alguno reconocerle al acusado el ejercicio de su derecho a la defensa material [expresado en la oralidad que emana del propio sujeto procesal], si su relato se convierte en rutinario o, desde la óptica probatoria, inútil e invalorable por más contextualización corroborada que pueda tener en el caso en concreto, o también en un supuesto inverso.

En ese sentido, el hecho de que hayamos sostenido que la declaración del acusado no sea un medio de prueba, sino un medio de defensa material, no implica que desconozcamos su incidencia en el quehacer probatorio, base del fallo judicial. No existe, pues, una relación de

correspondencia indesligable entre la forma de concebir la naturaleza de la declaración del acusado y su tratamiento probatorio.

Estimamos más que válidas las posiciones de los autores Benavente (2015) y Riego (2014), que, si bien consideran a la declaración del acusado como un medio de defensa técnica, sin embargo, le otorgan cierta especialidad o mención *suigeneris* para avalar su valoración judicial.

Así, para Benavente (2015, p. 46) si el acusado decide declara de forma voluntaria, entonces, su versión, sin dejar de ser un medio de defensa material, se convierte en un medio de prueba; mientras que para Riego (2014, p. 15) se trata de un medio de prueba no regulado en la ley procesal, por tanto, valorable judicialmente. Esta posición mixta –asumir que es un medio de defensa, pero que cuando declara se convierte en un medio de prueba, por tanto, pasible de ser estimado en la decisión judicial-, también es acogida por el maestro San Martín (2015, p. 522).

Por lo tanto, consideramos –a partir de la pregunta que nos hemos formulado - que **no existe relación de incompatibilidad –cuanto menos teórica- entre validar a la declaración del acusado como un medio de defensa material, con admitir su valoración como fundamento de certeza positiva en el quehacer de los jueces de juzgamiento para sustentar juicios de responsabilidad penal**, tanto si, como lo explicaremos en las líneas siguientes, proceder en ese sentido no vulnera el derecho a la no autoincriminación, tampoco el derecho a su defensa material; **siempre y cuando se respeten sus derechos –en el proceso de obtención de su declaración-, y se le advierta –como acto previo a su declaración- de las ventajas y contras, de carácter procesal- que de ella pueden derivar.**

Es decir, nuestra postura no se agota en aquella consideración, sino que hace exigible que los operadores jurídicos ejerzan un control de legalidad de la declaración que ingresa al plenario, sobre todo aquella que deriva de la utilización de las mencionadas declaraciones previas, la que como tal tiene que someterse al principio de contradicción y legalidad.

Y sostenemos que el tratamiento probatorio contra reo no vulnera el derecho a la no autoinculpación, tampoco a su derecho a la defensa material por las razones que pasamos a exponer.

4.5.2. No autoincriminación y confesión

Cuando el presunto autor del delito -caso instado por denuncia de parte, de oficio o por acción popular-, es llamado a declarar en la sub etapa de investigación preliminar [delegable a la policía nacional] o en la sub etapa de investigación preparatoria propiamente dicha, tiene el derecho de quedarse callado o -renunciando al mismo- a dar su versión de los hechos en presencia de su abogado de libre elección. Las mismas potestades las ostenta en el desarrollo del juicio oral.

Por lo tanto, el derecho a declarar del acusado presenta dos aristas: una positiva y otra negativa. La primera es entendida como la determinación de aquel de responder -aceptando o negando- las imputaciones que le postula fiscalía-. Y la segunda, la voluntad de guardar silencio.

En ese marco, guardar silencio y declarar, siempre voluntariamente, son dos formas que el acusado tiene de materializar su derecho de defensa material, siempre en el marco del respeto de su derecho a la no autoincriminación. Su vinculación es clara; de allí que se habla de la interrelación que existe entre los mismos, y también con el derecho a la presunción de inocencia.

Bajo el segundo supuesto, la declaración del acusado –o procesado- puede ser: **exculpatoria**, esto es, asume una posición procesal negando su responsabilidad; o **autoinculpatoria**, es decir, aceptando responsabilidad, lo que en puridad es vista con su confesión sincera-.

La declaración autoinculpatoria para que sea tal, tiene, primero, que ser voluntaria, y segundo, encontrarse debidamente corroborada; caso contrario, por sí sola, no tiene efecto alguno.

Al respecto, por cuestiones de política criminal, afianzada en un derecho penal premial, nuestra legislación procesal penal premia hasta con la exención de pena la delación propia y también respecto del actuar de terceros –coimputados- cuyas conductas se encuentren ligados a ilícitos graves y no graves; pero debe tratarse, siempre, de una delación corroborada para que tenga validez probatoria.

Este tipo de actos libres y voluntarios de la persona, validan a la fecha la regulación del proceso especial denominado: **Colaboración eficaz**, que se ha constituido en un mecanismo para combatir la cada vez más sofisticada criminalidad organizada, cuya regulación la

encontramos en los artículos 472 y siguientes del CPP, y también en, su Reglamento, el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS.

Pero la delación no solo rige en el marco de un proceso de colaboración eficaz, sino también, bajo este supuesto, en un proceso común. Según lo estipula el artículo 160° del CPP, la declaración del acusado se constituye en un verdadero medio de prueba, que, valorado con los demás medios de prueba obtenidos a partir de su delación [ubicación del cadáver, del dinero hurtado o robado, por ejemplo], sirve de sustento a la sentencia condenatoria a expedir. **Aquí no hay discusión alguna sobre el carácter de medio probatorio que tiene la versión del acusado, y que, como tal, su uso resulta plenamente válido para sustentar un fallo judicial de condena.**

La discusión se presenta, lógicamente, cuando sus dichos –sin que impliquen una confesión en los términos del referido artículo o aun cuando lo sean, pero no producto de un sinceramiento premiado- son usados por el juez de juicio para dar por cierta la hipótesis acusatoria, sea en su aspecto medular o periférico, por tanto, sirve para emitir un fallo de condena.

El argumento al que se suele recurrir para oponerse a que se otorgue mérito probatorio positivo –para corroborar la acusación-, sea a la declaración plenarial del acusado o aquella documentada que se ingresa al juicio –las ya estudiadas declaraciones previas de aquel-, es el respeto del derecho a la no autoincriminación. Se sostiene que valorarlas contra reo, vulnera el aludido derecho constitucional y convencional en estudio; por ende, se dice, no deben valorarse de forma positiva. En base a tal argumento, sus defensores se oponen a que

los datos incorporados por el imputado –en la etapa de investigación- o acusado –en el juicio oral-, sean sujetos de valoración contra reo.

4.5.3. No autoincriminación y derecho al silencio

El artículo 87.2 del CPP impone una carga a la autoridad que dirige la declaración de la persona sujeta a una indagación. Así, la norma aludida le exige al funcionario –fiscal- que tiene que advertirle a la persona que fue citado –a petición propia o por decisión de la autoridad que lleva el caso- que tiene derecho a no brindar su testimonio y que tal decisión no juega en su contra.

Ahora bien, ejercer el derecho a abstenerse de declarar, como una de las formas que tiene para defenderse, es hablar en puridad del ejercicio de uno de los tantos derechos del investigado: guardar silencio.

Sobre el silencio, si bien es cierto que el TC, en la sentencia recaída en el expediente N° 03-2005-PI/TC, ha establecido que está prohibido que los órganos jurisdiccionales infieran una aceptación implícita de responsabilidad cuando el investigado o acusado decide callar; sin embargo, también lo es que los faculta a que den un “sentido interpretativo” al mismo, siempre y cuando sea útil para averiguar los hechos. De la posición del tribunal, podríamos inferir que el sentido interpretativo del silencio sí es válido, pero nunca para sostener culpabilidad.

Por lo tanto, el conocido adagio popular “el que calla otorga”, no aplica al derecho. Pero subsiste la pregunta: **¿qué sentido interpretativo de responsabilidad se puede inferir del**

mismo? Y la respuesta es ninguno. Una afirmación de certeza sobre la culpabilidad penal que se le atribuye a una persona, debe ser encontrado en elementos objetivos, y no en el comportamiento omisivo de aquel. Entonces, **¿el silencio, tienen algún sentido interpretativo?**

Sobre este aspecto, se ha abierto una discusión doctrinaria y jurisprudencial. La doctrina del profesor español Nieva (2010, p. 253), afirma que bajo ninguna óptica puede ser interpretado el silencio, menos para sustentar la responsabilidad de una persona. Enfatiza en que no puede ser un elemento de juicio para llegar a desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.

La posición de Nieva (2010, pp. 253-254) es una respuesta a la línea jurisprudencial de su país (expuesta por el Tribunal Español Supremo y en parte por el Tribunal Constitucional) que a su vez deriva – a nuestra consideración- de la posición que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentado con la denominada “doctrina Murray”, expuesta en el caso *Murray vs Reino Unido*, y cuya sentencia data del 8 de febrero de 1996, en el que se sostuvo que, si bien del silencio los jueces no pueden concluir la culpabilidad del acusado, sin embargo, por excepción sí lo podrán hacer, y esto aplica cuando las pruebas de cargo exijan una explicación de su parte, pero por abrazarse al silencio no lo hace, entonces, la conclusión del órgano jurisdiccional, respecto de los hechos, no puede ser otra que la inexistencia de explicación alternativa a la de su culpabilidad, y debe, en consecuencia, declararlo como tal, imponiendo sentencia condenatoria.

A nuestra consideración, la denominada doctrina Murray acogida por la Corte Europea es una herramienta para que los jueces puedan justificar su sentencia condenatoria, pero a

modo de “a mayor abundamiento”, es decir, como algo adicional a lo ya probado por otras pruebas actuadas en juicio, pero no se destaca que del silencio emane una autorización interpretativa de inferencia inmediata y aislada sobre la cual puede determinarse la responsabilidad penal de una persona.

Pero más allá de nuestra acotación, lo cierto es que la línea del TC peruano, expuesta en el expediente N° 03-2005-PI/TC, no acoge, por el momento y de forma expresa, la denominada doctrina Murray; pues, su postura solo autoriza que la inferencia que emane del silencio del acusado esté vinculada al proceso de averiguación de los hechos, pero no a la declaración de la culpabilidad de la persona.

A ello agreguemos que, jurisprudencialmente no se conoce fallo alguno en el que se haya otorgado valor probatorio al silencio del acusado para inferir su culpabilidad. Nuestra jurisprudencia sólo se ha pronunciado indicando que ejercer el derecho a guardar silencio en el acto del juicio oral, no cancela las declaraciones que previamente haya brindado el acusado –ante el Fiscal; y que la única vía para excluir su lectura en juicio, conforme lo prevé el artículo 376.1 del CPP, es su ilicitud; enfatizándose que esta doctrina no vulnera el derecho a la no autoincriminación²².

Sirva la doctrina y jurisprudencia expuesta, para dar a conocer el debate extenso que se puede generar en torno a si la valoración probatoria del silencio, a efectos de dar fuerza a las pruebas existentes que respaldan la tesis acusatoria, vulnera o no el derecho a la no autoincriminación del acusado. Por el momento, reiteramos, no existe un pronunciamiento expreso que califique al silencio como un argumento de “a mayor abundamiento”, o que

²² Casación N° 1462-2017/Lambayeque, del 15 de febrero de 2018, f.j. séptimo.

implícitamente, exija al acusado que explique las posibles inferencias incriminatorias que giren en su contra.

Para finalizar este punto, destaquemos que también existen posiciones que validan la expuesta por el Tribunal Europeo. En ese sentido, Duerto (s.f). La autora española efectúa un análisis jurisprudencial de las sentencias emitidas por el TEDH, el TC español, y el Tribunal español supremo, a partir de la cual, y bajo la denominada doctrina Murray, afirma que el silencio del acusado si es susceptible de valoración judicial cuando los indicios incriminatorios acreditados en su contra exigen de su parte una explicación. Basa su afirmación en, entre otras, la sentencia 297/2006, de fecha 4 de octubre de 2006, emitida por el Tribunal Supremo Español.

De otro lado, otro tema que gira en torno al principio de no autoincriminación, es si, sobre su base, el inculpado tiene o no derecho a mentir; y, al respecto, existe posición dual de la corte suprema. En ese sentido, destacan el R.N 1593-2014, del 26 de mayo de 2015, fundamento jurídico noveno, que tuvo como juez supremo ponente al doctor Príncipe Trujillo, y el R.N 3093-2013, del 22 de mayo de 2014, fundamento jurídico 2.8, que tuvo como juez supremo ponente al doctor Salas Arenas.

Sin embargo, dicho tópico no será abordado en el presente trabajo de investigación, por cuanto nuestro centro nos lleva a poner énfasis en la declaración que el acusado brindó en el acto de juicio oral y también en la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha, pues, son esos dos escenarios los que se vinculan, cuanto menos en potencial, con el uso del instituto de las declaraciones previas para advertir contradicciones en los argumentos que en su defensa expone en juicio.

4.5.4. No autoincriminación y valoración de la declaración del acusado

En las líneas siguientes, analizaremos, concretamente, si el derecho a la no autoincriminación impide que, desde el marco constitucional, las declaraciones del acusado sean objeto de valoración contra reo.

En principio, este tópico nos lleva a considerar hasta dos posturas que, en el contexto de su análisis, se pueden presentar. Una que sostenga la tesis de que valorar la declaración del acusado, sea la brindada en el juzgamiento oral, o la que, ante su posición a no declarar, derive del uso de sus declaraciones previas –sumariales- por aplicación del artículo 376.1 del CPP, no infringe el derecho a la no autoinculpación; y otra, que defienda la tesis de que obrar en el sentido expuesto sí vulnera el derecho a no confesarse culpable o no declarar contra sí mismo.

Para poder tomar postura por una u otra tesis, debemos determinar, primero, si el hecho que el imputado o acusado haya decidido declarar de forma voluntaria, en presencia de su abogado de libre elección, y advertido de las consecuencias y ventajas de su testimonio, es decir, respetándosele todas las garantías procesales, pone fin al ámbito de protección de su derecho a la no autoincriminación. Y, en segundo término, también corresponde determinar si el hecho de que el juez de juicio valore, para condenar o absolver, la información que ingresa al plenario a través de su declaración actual o previa, transgrede o no el referido derecho.

Siguiendo a Nieva (2010, pp. 236-243), partimos de la premisa de que no existe discusión alguna de que el acusado como tal -protagonista principal del proceso penal-, contiene

información relevante y de interés medular o periférico para otorgar, cuanto menos en líneas generales, solvencia a la acusación fiscal. Puede ir desde la aceptación de los cargos que se le atribuyen, hasta el aporte de ciertos datos informativos que contextualizados con el resto de actos de pruebas actuados en la etapa de juzgamiento permitan al juez por decantarse a amparar la tesis acusatoria.

Por ejemplo, afirmar su presencia en el lugar, día y hora de ocurrido el hecho; aceptar la existencia de rencillas previas con la víctima; o la aceptación de poseer el arma de fuego con la que se dio muerte a una persona, entre otros muchos datos informativos, sin que ello implique una aceptación de responsabilidad, importan al momento de evaluar la verosimilitud o no de la incriminación sostenida por fiscalía y que como tal se encuentra sujeta a corroboración.

Visto así el escenario, se trata de una información, cuanto menos en líneas generales, de interés potencial para otorgar solvencia a la teoría postulada por el Ministerio Público, sea en su aspecto medular o periférico.

Uno de los argumentos que se esbozan para oponer resistencia a la estimación de los datos incorporados por el propio acusado, se sostienen en el respeto de su derecho a la no autoincriminación. **¿Pero en verdad el derecho a la no autoinculpación impide que los órganos jurisdiccionales valoren la declaración del acusado como sustento para emitir una sentencia condenatoria?** Para poder dar una respuesta sustentada corresponde, primero, determinar cuál es el ámbito de prohibición que puede derivar de la pregonación de dicho derecho.

Si nos remontamos a los orígenes del derecho a la no incriminación, a cómo surgió o se llegó a positivizar, podemos denotar²³ que su construcción nace como una herramienta para poner fin a la violencia que se ejercía contra la persona imputada de haber cometido un hecho delictivo; para entonces, su confesión era la prueba reina del proceso y servía para fundar un juicio de responsabilidad en su contra; se habla, pues, de la noción plenamente inquisitiva del proceso.

Hoy en día, su dignidad proscribire el uso de dichos medios, y nuestra constitución así lo recoge en su artículo 2, inciso 24, literal h) al sancionar con **ineficacia probatoria** toda declaración que las autoridades puedan obtener haciendo uso de la violencia, en todas sus expresiones: moral, psíquica o física; la **tortura** o de inhumanos o humillantes tratos contra la persona.

En ese sentido, por su origen y como primera conclusión, sostenemos que el principio-derecho a la no autoincriminación, prohíbe que se otorgue merito probatorio a las declaraciones de la persona sujeta a investigación, sea la brindada en el marco de la indagación preparatoria o en el acto de juicio oral, obtenidas a consecuencia de actos de violencia psíquica o física sobre él, o que sean producto de tortura o inhumanos o humillantes tratos.

Si ello es así, el uso de los medios coercitivos y engañosos –atribuibles a las autoridades que tienen a cargo la indagación- sobre la persona del acusado sería lo único que prohíbe –

²³ Una visión a la jurisprudencia extranjera nos permite dar cuenta que, sobre la naturaleza y los orígenes del principio-derecho a la no autoinculpación, la Corte Constitucional Colombiana en la Sentencia C-102 de 2005 puntualiza y reconoce que se trata de una garantía civil de especial importancia en su proceso penal, y que se encuentra relacionada de forma directa con la **prohibición de la tortura**.

tal cual regla de exclusión probatoria- que se otorgue mérito probatorio a la información medular o periférica que a través de su declaración proporciona el procesado o acusado de un hecho delictivo; por ende, no puede utilizarse como parte del análisis probatorio, por constituir, ahora sí, transgresión del derecho a la no incriminación, y, en consecuencia, del proceso debido.

Lo explicado, en puridad y bajo una regla de exclusión probatoria, denota una prueba ilícita a consecuencia del procedimiento ejecutado para su obtención. **Es este supuesto lo que conlleva a excluirla del acervo probatorio**²⁴. Es más, sobre la tortura y los supuestos de exclusión probatoria, la CIDH ha establecido que darle valor probatorio a una declaración obtenida en los escenarios planteados infringen, además, el derecho a un justo o debido proceso²⁵.

Existen, pues, razones de peso –afianzadas por la jurisprudencia internacional- para prohibir la valoración de la declaración del acusado extraída haciendo uso de la violencia, en todas sus expresiones: moral, psíquica o física; la **tortura** o de inhumanos o humillantes tratos contra la persona.

Si lo expuesto se constituye en el único ámbito de protección del derecho en estudio, entonces, consideramos que su concreción **no se opone a que las declaraciones del acusado, emanadas de un acto libre y voluntario, sean objeto de valoración o formen parte del quehacer probatorio al momento de dar por ciertos los hechos que fundan el**

²⁴ En este escenario, son de aplicación el artículo 2 inciso 24 literal h) de la Constitución Política; así como los artículos VIII del TP del CPP; 155.2, 157.3, y 393.1 del CPP.

²⁵ Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, f.j. 167.

requerimiento acusatorio; pero esta aceptación no excusa al Ministerio Público de probar la responsabilidad penal del acusado.

Bajo nuestra postura, disentimos con las posiciones de Malabrigo (2017), Ticona (2018) y Edquen (2020) [**nuestros antecedentes de investigación**], y que es asumida por autores como Mendoza (2020), Morales (2014, pp. 8-10), Quispe (s.f.), Clariá (2009, p. 303), Peña (2007, p. 360), y Espinoza (2018, pp. 338-339), por cuanto no admiten que la declaración del acusado, sean las previas –ante fiscalía-, las ingresadas a viva voz por aquel en el desarrollo del juzgamiento, como también a aquellas que son oralizadas a consecuencia de su silencio, o para fines de contradicción o refresco de memoria, **sean valoradas contra reo**.

Consideramos que, prohibir que la declaración del acusado -brindada en el desarrollo del juicio oral o en las etapas procesales previas-, sea utilizada como fundamento de certeza positiva por los jueces de juzgamiento para sustentar juicios de responsabilidad penal, bajo el argumento de que obrar en ese sentido vulnera el derecho a la no autoinculpación, no se ajusta al ámbito de protección de dicho derecho.

Y es así, por cuanto, desde que el investigado o acusado brindó voluntariamente, **y con todas las garantías procesales**, su versión sobre los hechos que le atribuyen, renunciando así a su derecho a no declarar –derivado del derecho en estudio-, cesó el ámbito de protección de su derecho a la no inculpación.

Explicando. Si analizamos el instituto de la **confesión voluntaria corroborada** –única capaz de desvirtuar la presunción de inocencia a partir de lo declarado por el procesado o acusado-, advertimos que su aplicación no implica vulneración alguna del derecho a la

prohibición de autoinculpación, tampoco de la presunción de inocencia, defensa, o del proceso debido.

El ejercicio del derecho a la defensa, y la estrategia que se estructure, esto es, el cómo afrontar la acusación fiscal, predomina por sobre la prohibición de autoincriminación, por ello existe el derecho a autoincriminarnos pero voluntariamente. Y en ese sentido ya se ha pronunciado el TC nacional en la sentencia recaída en el expediente N° 03-2005-PI/TC.

La voluntad de declarar –libre de vicio alguno- sea negando los cargos o aceptándolos, **pone fin al derecho a la no autoincriminación**. Por lo tanto, solo el silencio (extendido a todo el proceso) y las declaraciones evocadas producto de actos de tortura o mediante el empleo de medios que distorsionen la voluntad del inculcado o acusado declarante, encuentran protección constitucional bajo el derecho a la no autoincriminación, que, a su vez, deriva de un justo proceso.

Después de su declaración voluntaria entra a tallar un derecho distinto al citado, que incluso coexiste con el derecho en estudio desde el inicio de la investigación hasta la existencia de una sentencia con la calidad de firme y consentida: **la presunción de inocencia**.

Por ello, en los términos expuestos, **la confesión voluntaria no corroborada** implica que la sola versión del acusado revestida de total voluntariedad y con todas las garantías procesales, por más de que implique una aceptación de responsabilidad penal respecto de un hecho socialmente aberrante [el asesinato de una mujer, por ejemplo], no es suficiente para enervar su presunción de inocencia; su validez probatoria exige corroboración, y si ésta no

existe, aquella, por si sola, no puede fundar una sentencia condenatoria en su contra; el camino es la absolución abrazada en el principio de presunción de inocencia, de cuya materialización se deriva, como regla procesal de nuestro código, que la carga de la prueba la tiene el acusador. Véase, pues, que aún en este contexto no se discute una posible transgresión del derecho en estudio.

Concluyendo, **es la decisión libre y voluntaria del acusado, depuesta con todas las garantías que nuestra normativa adjetiva penal prescribe –artículos 86 a 89 y artículo 376 numeral 2 del CPP, lo que pone fin al ámbito de protección de su derecho a la no autoincriminación;** aquí se agota su contenido y alcances. Reiteramos, es su decisión voluntaria de declarar en su autodefensa activa, y no otro supuesto, lo que **extingue el derecho en estudio.**

En consecuencia, una pretendida negación a la viabilidad de valorar la información proporcionada por el acusado, que ingresa al plenario a viva voz o vía la oralización de sus declaraciones previas, **debe ser vista desde otro enfoque;** la no incriminación ha sido superada.

A mayor abundamiento, nuestra postura se condice con una visión teleológica del derecho en estudio, y para ello nos hemos remitido a sus raíces –su historia-. Además, nuestra posición reafirma la tesis de considerar al acusado como un verdadero sujeto del proceso, y no como objeto del mismo, lo cual se materializa al no desconocerle voluntad plena de decidir sobre la forma en que ejerce su defensa.

Pero valga realizar una precisión. Admitir que la declaración del acusado pase a formar parte de la prueba que sirve de sustento de la sentencia judicial contra reo, no implica *per se* suplir la labor funcional que tiene fiscalía, esto es, la carga de probar la responsabilidad de aquel. Ésta se mantiene incólume, y es un principio sobre el cual se estructura nuestro modelo procesal.

Ello implica, pues, que la declaración del acusado –propiamente, la información que ingresa al plenario-, no puede ser valorada como aspecto central del fallo condenatorio, sino, únicamente, como corroborativo de aspectos periféricos de índole fáctico de la acusación fiscal que, vistos de forma individual y global, se complementen entre sí, bajo un razonamiento que se sujete a las reglas de una valoración libre pero racional, como modelo aceptable de valoración probatoria.

Otro de los argumentos que se han esbozado para exponer a una negativa a que el juez de juicio valore positivamente la declaración del acusado, es su derecho de defensa, en estricto, en su dimensión material.

Pero, **¿que el juez valore la declaración del acusado –en su perjuicio- vulnera su derecho a la defensa material?** Esta interrogante nos lleva a realizar un análisis sustancial sobre la vinculación o no que pueda existir entre la valoración de la declaración del acusado y el ejercicio a la defensa material activa.

4.5.5. La valoración contra reo de la declaración del acusado y el ejercicio de su defensa material

A diferencia del derecho a la no autoinculpación, el derecho de defensa se encuentra expresamente recogido en el artículo 139.14 de la Carta Magna, en cuya vigencia y reconocimiento, la persona investigada o acusada de haber cometido un hecho delictivo, tiene el derecho de ejercer su defensa.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 6260-2005-PHC/TC, de fecha 12 de septiembre de 2005, fundamento jurídico 3, se ha pronunciado sobre cuál es el contenido esencial del derecho de defensa, precisando que presenta una doble dimensión: **i) defensa material** y **ii) defensa formal** (también llamado defensa técnica). En virtud del primero, el propio imputado es quien ejerce su defensa. Mientras que el carácter formal o técnico del derecho de defensa implica el derecho de recibir asesoría y patrocinio eficaz por parte de un abogado durante todo el proceso.

Es importante destacar que ambos aspectos, precisa el Tribunal, componen el contenido constitucionalmente protegido por el derecho de defensa [también llamado núcleo duro del derecho tutelado]; por tanto, su vulneración importa protección por parte de la judicatura constitucional.

Ahora bien, a los efectos del presente trabajo de investigación importa centrarnos en el derecho de defensa en su versión material, por cuando lo que buscamos es analizar el tratamiento probatorio que se otorga a la declaración del acusado brindada en el juzgamiento

[variable independiente], más no el aspecto técnico o formal que encierra el mismo [propio del letrado].

En el proceso penal entran en juego dos situaciones: el derecho a declarar -negando o refutando los hechos incriminados-, o el derecho a guardar silencio. Ambas son formas de defenderse.

Implica, pues, que hablar en el juicio oral, o en las etapas previas, escenifica el derecho en estudio. Por su vigencia, el acusado se convierte en el actor principal. **Pero, ¿cuál es el contenido y alcances del derecho en estudio?**

A nuestra consideración, su ejercicio solo implica, en cuanto contenido y alcances, una conducta activa en el proceso, esto es, que, si lo desea, declare, sea escuchado, oído por el juez de juicio, y en la fase correspondiente, por fiscalía, pero no puede tener incidencia negativa en la valoración de la prueba. Su reconocimiento no conlleva a establecer un criterio de selección probatoria pro reo.

Por tanto, que el **juez valore la declaración del acusado contra reo no vulnera su derecho a la defensa material**. Su alegación no excluye cuanto dato informativo haya ingresado el acusado al plenario a través de su declaración -actual o previa-, aunque juegue en su contra, y que, en consecuencia, sirva como sustento de la deliberación de la sentencia de fondo.

Es más, la postura expuesta –de no vulneración de derecho alguno- ha llevado a la jurisprudencia, por ejemplo, a sostener que, como ocurre con los peritos y testigos por mandato del artículo 378.6 del CPP, sí se puede hacer uso de las declaraciones previas del acusado a los efectos de evidenciar contradicción en juicio [A.P. N° 03-2018-SPN, fundamento jurídico diecisiete].

En el mismo sentido, la jurisprudencia peruana ha negado que el ejercicio del derecho a guardar silencio en la etapa de juzgamiento, afecte la validez de las declaraciones previas brindadas por el entonces investigado; reafirmandose que esta doctrina no infringe el derecho a la no autoinculpación [Casación N° 1462-2017/Lambayeque, del 15 de febrero de 2018, fundamento jurídico séptimo]. Por tanto, en caso ejerza su derecho a guardar silencio, en la etapa de juicio oral, se procederá a dar lectura a sus declaraciones previas –si las hubieran-.

Razones que, sumadas a las ya expuestas, acentúan la posición que hemos desarrollado y sobre cuya base somos de la opinión de que el derecho a la no autoincriminación, así como el derecho a la defensa material no son afectados en el supuesto que el juez de juicio valore las información ingresada al plenario a partir de la declaración plenaria o indagatoria, ésta última introducida para evidenciar contradicciones en la defensa o refrescar la memoria ante el olvido alegado en juicio por el acusado declarante, o por aplicación del artículo 376 numeral 2 del CPP, a efectos de llegar a afianzar elementos fácticos de carácter periférico de la acusación fiscal, nunca lo medular.

Ello nos lleva a sostener que la naturaleza de la declaración del acusado, o del investigado, no necesita ser positivizada en nuestra legislación procesal penal, como lo sugiere Malabrigo

(2017), para rechazar su valoración probatoria; esto no es admisible por las razones que ya hemos expuesto. Pero, además, tampoco es necesaria la modificación total del artículo 376 numeral 1 del Código Procesal Penal, como lo sugieren Malabrigo (2017), Ticona (2018) y Edquen (2020), en la medida que su regulación no encierra viso de inconstitucionalidad alguno.

Sin embargo, en el marco de nuestro planteamiento, se debe, sí, prever normativamente la exigencia de controlar la legalidad como acto previo al que debe someterse a las declaraciones previas brindadas por el entonces investigado ante fiscalía, que se erigen a ser ingresadas al plenario –como documental- debido al silencio del acusado, o con el propósito de evidenciar contradicción en la defensa material del acusado o con fines de refresco de memoria. Y esta legalidad debe incidir en el respeto de los preceptos normativos regulados en los artículos 86 a 89 y 376 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal. Esta es la única incorporación que debería efectuarse a nuestra legislación adjetiva penal en lo referente al uso de las declaraciones previas del acusado, para, de esta forma, garantizar la vigencia y respeto de un debido proceso, y de los derechos de defensa material y no autoincriminación; propuesta de lege ferenda que la formularemos en las líneas siguientes.

4.6. Discusión de resultados

Expuesta nuestra posición, y luego de analizar las sentencias condenatorias que se estudiaron en el presente trabajo, así como realizar un análisis de validez interna y externa de los mismo, como también compararlos con los resultados obtenidos en los trabajos de investigación que sirvieron de antecedentes y de base teórica a nuestra tesis, consideramos

que la información recogida, en contraste con la normatividad pertinente de nuestro Código Procesal Penal, y a la que hemos hecho mención en el desarrollo de nuestro análisis, nos permiten establecer los siguientes aspectos:

a) El debido proceso como garantía de un proceso justo

En el cumplimiento del servicio de justicia, que el Estado está obligado a brindar, se debe privilegiar que se garantice siempre el debido proceso, lo que implica que los jueces penales en su afán de garantizar el acceso a la misma, deben procurar la igualdad de oportunidades procesales.

El juzgamiento es la parte más importante del proceso penal, y en dicha etapa deben ser realizados los derechos procesales que tienen las partes, para poder interactuar y poder demostrar sus pretensiones, de tal manera que ha de corresponder a los jueces observar y garantizar que a lo largo del juzgamiento, impere la norma, el aporte de la jurisprudencia y el actuar de los principios generales del proceso peruano, todo esto en su conjunto, en procura de la justicia y de una sentencia debida.

b) La garantía del derecho de defensa

Corresponderá al juez penal que dirige el juzgamiento garantizar de sobre manera que las partes puedan ser escuchadas, puedan expresarse, puedan comunicar sus pretensiones y la viabilidad de las mismas. Este principio ha de garantizar el uso racional de oportunidades, incluso así no lo haya previsto la norma procesal, que por cierto no puede considerar todos los casos, sino cuestiones generales que deben ser aplicadas por los jueces penales en cada suceso, claro está observando el cumplimiento de los principios y de las garantías que rigen el derecho procesal penal peruano.

Las oportunidades entonces para ser escuchados, consideramos que depende únicamente del trabajo director que ejerce y ostenta el juez penal de juzgamiento (Director de las audiencias), quien como tal está investido para garantizar que, frente a cada articulación procesal, antes de decidir, se deba previamente haber corrido traslado a las partes para que expongan lo que a su derecho corresponda, como expresión del ejercicio de su defensa.

c) El juzgamiento

Es la parte estelar del proceso penal, precisamente porque se produce la actuación probatoria como consecuencia del trabajo de las partes en las etapas anteriores del proceso. Frente a la naturaleza oral, contradictoria, pública, que caracterizan a este período, se resalta que aquí se escucha al procesado, agraviado, testigos, peritos, expertos, etc., se actúan los documentos que se hayan ofrecido como medios probatorios, se hacen alegatos, y como consecuencia de todo, y previa valoración de la prueba legítimamente incorporada al juicio oral, el juez emite la sentencia por la cual determina la situación de las partes del proceso, entre ellos, del acusado.

Sin embargo, corresponde también advertir la exigencia de la valoración de la prueba actuada según el criterio de la sana crítica, conforme lo establece el artículo 393.2 del Código Procesal Penal vigente, que debe llevar a considerar al juzgador el uso de todos aquellos mecanismos que le permitan apreciar la dimensión real y racional de la información que le procuran brindar los medios probatorios.

Precisemos que, acorde a lo expuesto en nuestra base teórica y a los resultados obtenidos, se puede hacer alusión a medios probatorios que sin tener el origen de actuación precisamente en el juicio oral, la norma y la doctrina consideran pertinente su actualización a fin de contrastar información, o de incluso formarse criterio con

respecto a la responsabilidad penal del acusado, esto es, específicamente en el caso de las declaraciones previas, y especialmente la declaración del acusado dada en sede del Ministerio Público.

d) Las declaraciones previas

En el juzgamiento oral del proceso penal resulta procedente que ante el silencio del acusado o para contradecir su versión de juicio o refrescar su memoria, se pueda introducir su declaración primigenia ofrecida durante la investigación preparatoria, ante el representante del Ministerio Público.

En el presente trabajo, como consecuencia del análisis realizado en las sentencias estudiadas, se considera que utilizar la declaración previa del acusado que no quiere declarar o que pretende hacerlo de manera diferente a como lo hizo en su primera manifestación oral, puede terminar lesionando derechos fundamentales, reconocidos en normas internacionales, por lo que a fin de que esto no ocurra debe apostarse por la viabilidad de dicha incorporación pero siempre bajo un control de legalidad realizado por el juez penal.

e) Supuestos para incorporar la declaración previa del acusado

Resulta ser legal que el Juez Penal acepte incorporar la declaración previa, por cuanto así está regulado en el Código Procesal Penal en el artículo 376.1; sin embargo, consideramos que cuando la norma puede terminar afectando derechos fundamentales, como resultado de la investigación, se debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

e.1. En el juzgamiento, si se decide incorporar declaraciones previas, debe garantizarse la vigencia de los principios de contradicción, publicidad e inmediación,

luego de ser leídas se le debe conceder al acusado la palabra para que, si lo desea, explique, aclare, refute o se pronuncie sobre su contenido.

e.2. Deberá tenerse en cuenta lo establecido en el Acuerdo Plenario N° 03 -2018-SPN, en cuanto a que la declaración del acusado debe incorporarse al juicio oral, siempre y cuando haya sido obtenida con las garantías que la ley prevé, de tal forma que se permita al juez penal formarse una convicción en función a una versión o versiones del acusado (valoración individual) y a los demás elementos de prueba corroborantes (valoración conjunta), conforme se advierte del contenido del fundamento 15 de la mencionada doctrina jurisprudencial.

e.3. La finalidad de incorporar la declaración del acusado, debe procurar incorporar una información de mejor calidad, que permita aclarar ambigüedades, que facilite se despeje dudas, de tal forma que incluso permita a las partes fundamentar de mejor manera su teoría del caso, y saber cuál va a ser el resultado del juzgamiento oral y qué depara a su patrocinado.

e.4. En principio, es una información de mejor calidad la que proviene de una declaración prestada en el juicio oral porque es posible excluir los problemas señalados, que se generan como producto de la mediación, y se pueden concentrar los esfuerzos de los litigantes y del tribunal en la valoración de la credibilidad de lo que el imputado afirma.

e.5. Corresponde al juez penal y a las partes, procurar la legalidad del control de las preguntas y de las respuestas de las declaraciones del acusado, fundamentalmente para establecer que se incurra en los supuestos de las preguntas inadmisibles establecidas por el artículo 376 numeral 2 del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 88 del mismo Código.

e.6. Para que la declaración del acusado, que es incorporada a partir de la declaración previa o espontánea a nivel del acto de juzgamiento, debe conllevar a efectuar un trabajo de corroboración de sus respuestas por parte del juez, a efectos, de solo así, ser elevadas a la categoría de medios probatorios, sea de cargo o de descargo. Esta es la única posibilidad de superar el problema de la afectación a la prohibición de la autoincriminación; toda vez que la sola declaración que se oraliza en el plenario no deviene en suficiente para que asuma la condición de prueba (**de medio probatorio**), por lo que la exigencia debe comprender la debida verificación de lo que el acusado en su declaración primigenia expuso.

e.7. Asimismo, antes de introducir la pregunta y la respuesta del acusado, se debe garantizar que el juez penal, escuche a la defensa del procesado si es que fue el Ministerio Público quien petitionó la declaración previa, e incluso debe admitirse las objeciones tanto a las preguntas como a las respuestas, por lo que debe garantizarse en todos los casos el derecho de defensa.

e.8. Incluso se debe exigir al Ministerio Público, como acto previo a su pedido de incorporación de la declaración previa, que precise cuál es la finalidad de la incorporación de la declaración previa del acusado; toda vez que no olvidemos que en tanto medio probatorio –calidad que le están confiriendo- con su introducción se dirige a probar una parte de la teoría del caso, por lo que siendo esto así, se debe diferenciar – como fines de su uso- el trato que puede otorgársele como medio probatorio, respecto de aquel que busca tan sólo contradecir o desvirtuar lo aseverado por el procesado.

e.9. La exigencia, entonces, es que el juez penal, conjuntamente con los aportes de las partes, sea quien controle la legalidad de la incorporación de la declaración previa

del acusado, buscando que se observen en toda su plenitud las exigencias formales, el control de legalidad del contenido de las declaraciones, así como también la observancia del debido proceso y la imposición del respeto por el ejercicio del derecho de defensa, y esto en la medida a que se trata de introducir como medio probatorio precisamente uno que es un acto de investigación –y que no califica de prueba preconstituida-, por lo que el rigor procesal debe ser tal que en efecto, no haya observaciones válidas que se formulen, y se pueda lograr el propósito de la justicia que se pretenda alcanzar.

4.7. Contrastación de la hipótesis

Luego de analizar cada una de las sentencias estudiadas, de procesar la información, de presentar la misma en el presente trabajo, corresponde establecer si es que la hipótesis de trabajo que se estableció, ha podido ser verificada.

En principio, cuando se formuló la hipótesis de trabajo, ésta se planteó bajo los siguientes términos:

Si la declaración del acusado en juicio oral es contrastada con su declaración previa para establecer contradicciones en los argumentos de defensa, entonces, probatoriamente es tratada como fundamento de certeza positiva por los juzgados de juzgamiento penales de Chiclayo para sustentar juicios de responsabilidad penal.

Al respecto, debemos precisar que, en efecto, de la revisión de las 20 sentencias analizadas, se puede concluir que el tratamiento que se da a la declaración previa del acusado es como si fuera el de un medio probatorio, esto es, la respuesta que en audiencia de juzgamiento oral se incorpora en el juzgamiento, es asumido por el Juez penal como prueba de la responsabilidad del procesado.

Esta forma de asumir el contenido de la declaración probatoria, origina que debe rodearse de las garantías máximas a fin de no afectar principios fundamentales como el debido proceso, el derecho de la defensa, la imparcialidad del juez penal, la prohibición de la valoración de la autoincriminación, la corroboración del contenido de las respuestas dadas durante la investigación preparatoria, por lo que la exigencia en la valoración debe ser mayor

si es que la versión incorporada es elevada a la categoría de prueba con certeza positiva, como viene ocurriendo, mayoritariamente, en la resolución de casos por parte de los juzgados de juzgamiento de Chiclayo.

Sólo de esta forma, entonces, es posible que no se limiten derechos fundamentales, y que los caminos de la justicia penal sean realmente coherentes, puesto que se trata de la determinación de la responsabilidad punitiva de un ciudadano, lo que va a traer consigo la imposición de una sanción penal que puede originar la privación de la libertad y por muchos años.

Por tanto, se considera que la hipótesis planteada en el presente caso ha quedado demostrada a partir del contenido de las sentencias condenatorias analizadas; base de la información obtenida y que nos permite realizar una propuesta de lege ferenda y las posteriores conclusiones.

4.8. Propuesta Lege Ferenda

Todo lo expuesto en este trabajo de investigación, lleva a proponer una modificatoria del artículo 376 del Código Procesal Penal, cuya redacción a la actualidad se presenta de esta forma:

“Artículo 376°.- Declaración del acusado

1. Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal.

2. Si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetará a las siguientes reglas:

a) El acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso;

b) El interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios para la medición de la pena y de la reparación civil;

c) El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles;

d) No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas.

3. El Juez ejercerá puntualmente sus poderes de dirección y declarará, de oficio o a solicitud de parte, inadmisibles las preguntas prohibidas.

4. El último en intervenir será el abogado del acusado sometido a interrogatorio.”

Pero en base a las razones que hemos expuesto en el presente trabajo de investigación, se propone la siguiente modificación al artículo mencionado, la misma que se expresa en letras negrita:

Artículo 376°.- Declaración del acusado

1. Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal. **Se le informará también de las ventajas que puede**

obtener si es que decide declarar aportando información relevante, conforme al artículo 161 del presente Código.

2. Si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetará a las siguientes reglas:

a) El acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso;

b) El interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios para la medición de la pena y de la reparación civil;

c) El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles;

d) No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas.

e) Estas mismas reglas se aplicarán también para garantizar la legalidad de la declaración total o parcial que se pretenda incorporar.

3. El Juez ejercerá puntualmente sus poderes de dirección y declarará, de oficio o a solicitud de parte, inadmisibles las preguntas prohibidas.

4. El último en intervenir será el abogado del acusado sometido a interrogatorio.

5. En todos los casos de incorporación de la declaración previa del acusado, se deberá garantizar el derecho de defensa, como también la explicación o uso de

la palabra que quisiera realizar el procesado después de oralizada su declaración.

Conclusiones

1. Los jueces penales autorizan la incorporación de las declaraciones previas que los acusados ofrecen durante la investigación preparatoria. Las declaraciones previas son oralizadas por el Ministerio Público, nunca por el abogado defensor, de tal forma que permite al Juez Penal advertir contradicciones y diferencias entre lo expuesto por el acusado en la etapa de investigación preparatoria y lo alegado en la fase del juicio oral. La declaración previa se introduce con la finalidad de desacreditar su argumento de defensa, y posteriormente, para ser utilizada como elemento probatorio y formar certeza positiva sobre la responsabilidad penal que se atribuye al acusado.
2. El tratamiento probatorio de introducir la declaración de la víctima al debate, se sustenta en el contenido del artículo 376 numeral 1 del Código procesal penal, el mismo que si bien es cierto ofrece garantías para establecer el génesis de dicho medio probatorio, lo cierto es que no abarca aspectos fundamentales que según nuestro criterio resultan fundamentales como considerar el debido proceso, garantizar el derecho de defensa, y establecer validación del contenido de la declaración previa, pero a partir de la debida corroboración con otros medios probatorios que se hayan actuado e incorporado legítimamente en la etapa de juzgamiento.
3. Siendo esto así, entonces queda claro que, como estrategia en la litigación, ya en el juzgamiento, el juez penal se debe obligar, ante un pedido de introducción de la declaración previa, de:
 - a) Establecer la legalidad de la declaración previa: con presencia de Fiscal Provincial Penal y con presencia del abogado defensor del acusado.
 - b) La garantía de pedir opinión al abogado defensor del acusado para obtener su punto de vista frente a las respuestas que se pretenden introducir.

- c) La observación de la legalidad en las preguntas y en las respuestas de la declaración previa que se pretende incorporar, vigencia en lo posible del contenido del artículo 376 numeral 2 y 3 del Código procesal penal.
 - d) La finalidad de la incorporación, y que se establezca qué es lo que se pretende demostrar, en el caso en el que se pretenda conferir valor probatorio al documento que se va a introducir en juicio oral.
 - e) La decisión motivada que adoptará el juez penal para dar respuesta a las observaciones que se ha hecho, con respecto al tratamiento de las declaraciones previas que se van a incorporar.
4. La necesidad de corroboración de lo declarado previamente por el acusado, resulta ser la exigencia mínima que se exige para que la misma sea considerada como prueba de cargo en el juzgamiento oral. Dicha exigencia supone, que el juez penal valore lo declarado en investigación preparatoria, pero a partir del contenido probatorio de las demás pruebas actuada en el contradictorio, de tal manera que el criterio de certeza positiva no se fundamente tan sólo en la versión de incorporación, sino sea el resultado de la interacción y valoración conjunta de todos los medios de prueba. Esto con la finalidad de poner a salvo el Principio de prohibición de la auto incriminación.
5. En las sentencias analizadas, se puede advertir que los jueces de Chiclayo valoran la declaración del acusado desde dos perspectivas: para contradecir la versión de defensa del acusado que decide declarar en juicio oral [*el refresco de memoria no es per se un acto de valoración*], y para formar certeza positiva sobre la responsabilidad penal del procesado. Sin embargo, en las sentencias estudiadas advertimos que no se garantiza debidamente el derecho de defensa del acusado a efectos de que pueda contradecir la incorporación de sus declaraciones previas; tampoco se brinda oportunidad para contradecir las preguntas y respuestas a ser actuadas en el juzgamiento oral, ni menos se expresa qué aspecto de la

teoría del caso se va a exponer, por lo que consideramos que la exigencia judicial para el tratamiento probatorio de la declaración del encausado, debe ser mayor, pues, se va a privar de la libertad ambulatoria a una persona, en el supuesto que se llegue a una decisión de ese tipo.

Recomendaciones

1. El estudio de los aspectos de la litigación oral referido a las incorporaciones de los elementos de convicción como son las declaraciones, deben merecer toda la atención del mundo académico. Esto fundamentalmente, porque el Código procesal penal no ha previsto una fórmula precisa que regule el procedimiento a seguir para incorporar la declaración primigenia sin alterar el debido proceso o el derecho de defensa técnica del acusado, por lo que consideramos que estos temas deben ser recomendados a la Escuela de Post Grado para que se reseñen como temas que deben formar parte de la currícula de estudios y de investigación.
2. La Escuela de Post grado en lo posible deberá fomentar el debate y la consolidación de los trabajos de investigación con la finalidad de que los temas de incorporación de medios probatorios calificados como elementos de convicción terminen siendo parte de los debates en los cursos de post grados, en los talleres y los seminarios que se implementen.
3. Considerar la propuesta de lege ferenda efectuada en este trabajo de investigación a efectos de dotar al juez penal de todas las potestades para controlar la legalidad de las preguntas y respuestas brindadas por el acusado en la etapa de investigación preliminar y preparatoria propiamente dicha, ante el Fiscal, que se pretenden ingresar al juicio oral por aplicación del artículo 376.1 del Código procesal penal y por ser esa la línea jurisprudencial más aceptada y vigente a la fecha.

Referencias Bibliográficas

1. ALARCÓN MENÉNDEZ, J. M. (2010). *La investigación preparatoria en el nuevo sistema procesal penal. Análisis dogmático y jurisprudencial de sus diversas actuaciones, etapas y plazos en el Nuevo Código Procesal Penal*. Lima: Grijley.
2. ALMANZA, F. (2015). *Técnicas de Litigación Oral*. Perú: Ara Editores.
3. AROCENA, Gustavo A. (2020) *¿De Verdad? Prueba, racionalidad y verdad en el procedimiento criminal*. Lima: ZELA.
4. ARMENTA DEU, T. (2012). *Sistemas Procesales Penales. La justicia penal en Europa y América ¿Un camino de ida y vuelta?* Madrid: Marcial Pons.
5. ARMENTA DEU, T. (2018). *Lecciones de Derecho procesal penal*. Madrid: Marcial Pons.
6. BENAVENTE CHORRES, H. (2015). *La construcción de los interrogatorios desde la teoría del caso*. España: Bosch editor.
7. CASTILLO ALVA, J. L. (2018). *La motivación de la valoración de la prueba en materia penal*. Lima: Grijley.
8. CASTILLO GUTIÉRREZ, L. (2014). *La prueba prohibida. Su tratamiento en el nuevo Código Procesal Penal y en la jurisprudencia*. Lima: Gaceta penal & procesal penal.
9. CLARIÁ OLMEDO, J. (2009). *Derecho procesal penal. Tomo VI*. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni.
10. DUCE J., M., y BAYTELMAN A. A. (2007). *Litigación penal, juicio oral y prueba*. Colombia: Ibáñez.
11. ESCOBEDO ESPINOZA, E., y PAUCAR BAZÁN, M. del P. (2014). *El uso de las declaraciones previas y de las actas levantadas por la policía y el fiscal en el juicio oral*. Tomo 62/Agosto. Lima: Gaceta Penal & Procesal Penal.

12. ESPINIOZA RAMOS, B. (2019). *Litigación penal. Manual de aplicación del proceso común*. Lima: Grijley.
13. FERRER BELTRÁN, J. (2007). *La valoración racional de la prueba*. Madrid: Marcial Pons.
14. GASCÓN ABELLÁN, M. (2010). *Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba*. Madrid: Marcial Pons.
15. JAUCHEN, Eduardo M. (2004). *Tratado de la prueba en materia penal*. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores.
16. MIRANDA ESTRANPES/CERDA SAN MARTIN/HERMOSILLA IRIARTE (2012). *Práctica de la prueba en juicio oral: su valoración y el estándar del “más allá de toda duda razonables*. Santiago: Librotecnia.
17. NEYRA FLORES, J. A. (2015). *Tratado de derecho procesal penal. Tomo I*. Lima: Idemsa.
18. NEYRA FLORES, J. A. (2015). *Tratado de derecho procesal penal. Tomo II*. Lima: Idemsa.
19. NIEVA FENOLL, J. (2012). *Fundamentos de Derecho Procesal Penal*. Madrid: Editorial Edisofer.
20. NIEVA FENOLL, J. (2010). *La valoración de la prueba*. Madrid: Marcial Pons.
21. ORE GUARDIA, A. (2016). *Derecho Procesal Penal Peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal. Tomo I*. Lima: Gaceta jurídica.
22. ORE GUARDIA, A. (2016). *Derecho Procesal Penal Peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal. Tomo III*. Lima: Gaceta jurídica.

23. PEÑA CABRERA FREYRE, A. R. (2007). *Exégesis del nuevo Código Procesal Penal*. Lima: Editorial RODHAS SAC.
24. REYNA ALFARO, L. M. (2015). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Lima: Instituto pacífico.
25. RIVERA MORALES, R. (2011). *La prueba: Un análisis racional y práctico*. Madrid: Marcial Pons.
26. ROSAS YATACO, J. (2018). *Derecho procesal penal. Doctrina, jurisprudencia y legislación actualizada*. Perú: CIEDES.
27. ROXIN, C. (2000). *Derecho Procesal Penal*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
28. SAN MARTIN CASTRO, C. (2015). *Derecho Procesal Penal Lecciones*. Lima: Editores INPECCCP y CENALES.
29. SOLÓRZANO GARAVITO, C. R. (2010). *Sistema Acusatorio y Técnicas del Juicio Oral*. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica.
30. TALAVERA ELGUERA, P. (2017). *La prueba penal*. Lima: Instituto pacífico.
31. TARUFFO, M. (2008). *La prueba*. Madrid: Marcial Pons.
32. TARUFFO, M. (2007). *Consideraciones sobre prueba y motivación*. Madrid.

Linkografía

33. CAMPOS ASPAJO, L., y SALAS PACHAS, R. K. (s.f). *Garantía de la No Autoincriminación. Análisis de su contenido en la legislación peruana y española*. Extraído de: <http://camposaspajo.com/pb/garantia-de-la-no-autoincriminacion-analisis-de-su-contenido-en-la-legislacion-peruana-y-espanola.pdf> (Recuperado el 10 de junio de 2020)
34. DUCE J. M. (2014). *DERECHO A CONFRONTACIÓN Y USO DE DECLARACIONES EMITIDAS EN UN JUICIO PREVIO ANULADO*. Extraído de:

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000100004

(Recuperado el 15 de junio de 2020)

- 35.** DUERTO ARGEMÍ, T. (s.f.). *Tratamiento procesal del silencio del acusado en el procedimiento del tribunal del jurado*. Extraído de:

<https://www.fiscal.es/documents/20142/276899/Ponencia+Teresa+Duerto+Argemi.pdf/00d1d08d-606b-781f-0629-6a578b7c15a4?version=1.0&previewFileIndex=> (Recuperado el 09 de agosto de 2020)

- 36.** QUISPE FARFÁN, F. S. (s.f.). *El derecho a la no incriminación y su aplicación en el Perú*.

Extraído de:

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/Human/Quispe_F_F/Cap1.htm#:~:text=La%20prohibici%C3%B3n%20de%20cualquier%20acto,derecho%20a%20la%20no%20incriminaci%C3%B3n. (Recuperado el 20 de agosto de 2020)

- 37.** MENDOZA AYMA, F. C. (2020). *El carácter de la declaración del imputado*.

Extraído de: <https://lpderecho.pe/caracter-declaracion-imputado/> (Recuperado el 05 de junio de 2020)

- 38.** MORALES BRAND, J. L. E. (2014). “*Defensa o Autoincriminación*”. Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales. Año VI N°. 12 julio-diciembre 2014. Extraído de:

<http://www.derecho.uaslp.mx/Documents/Revista%20REDHES/N%C3%BAmero%2012/Redhes12-07.pdf> (Recuperado el 05 de agosto de 2020)

- 39.** RIEGO, C. (s.f.). *La declaración del imputado en el juicio oral*. Extraído de:

<http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2378/ladeclaraciondelimputadoeneljuiciooral.pdf> (Recuperado el 01 de junio de 2020)

- 40.** TARUFFO, M. (2007). *Consideraciones sobre prueba y motivación*. Madrid. Extraído de:

http://www.fcjuridicoeuropeo.org/wp-content/uploads/file/jornada9/1_TARUFFO_1_2.pdf (Recuperado el 12 de junio de 2020)

Anexos

Anexo 1: Datos Básicos del Problema

1.1. Formulación del problema

¿Cómo es tratada probatoriamente la declaración del acusado en juicio oral, cuando al ser contrastada con su declaración previa permite establecer contradicciones en los argumentos de defensa, en los juzgados de juzgamiento de Chiclayo, año 2018?”

1.2. Objetivos de la Investigación

Objetivo General

- Establecer cuál es el tratamiento probatorio de la declaración del acusado en juicio oral, cuando al ser contrastada con su declaración previa permite establecer contradicciones en los argumentos de defensa, en los juzgados de juzgamiento de Chiclayo, año 2018.

Objetivos Específicos

- Determinar los criterios probatorios del tratamiento de la declaración en juicio oral del acusado.
- Precisar los mecanismos de litigación oral que permiten en juicio oral el empleo de las declaraciones previas.
- Consolidar criterios que permitan orientar el tratamiento probatorio en juicio oral de las declaraciones dadas en juicio y de las declaraciones previas del acusado.
- Analizar sentencias condenatorias en las que probatoriamente se haya tratado la declaración del acusado, casos penales 2018.

1.3. Justificación de la investigación

Justificación teórica:

El presente trabajo de investigación se justifica en la medida en que busca analizar cómo es que se viene tratando probatoriamente las declaraciones del acusado dadas en juicio oral. Esto implica revisar criterios teóricos, jurisprudenciales y doctrinales vinculados al principio y garantía constitucional de la prohibición de la autoincriminación, que supone que no se puede condenar a algún procesado a partir del reconocimiento de los cargos formulados ante el Ministerio Público, esto es, en base a las denominadas declaraciones previas.

Asimismo, en tanto toda sentencia condenatoria debe corresponderse con el contenido del artículo 139°.3 de la Constitución Política del Perú, esto es, la observancia total del debido proceso, también resulta importante conocer cuáles son los criterios teóricos, jurisprudenciales y doctrinales que giran en torno a la valoración probatoria de la declaración del acusado, sea la brindada en juicio oral, como aquellas previas que son introducidas al debate probatorio para establecer contradicciones en la defensa, y cuáles son los criterios de preeminencia de uno sobre la otra, o a la inversa.

Justificación práctica:

Desde el punto de vista práctico, el trabajo deviene en importante por cuanto aborda una parte fundamental del proceso penal como lo es el tratamiento probatorio de la declaración del acusado en juicio oral, pero también comprende el análisis –bajo ese contexto- de las garantías que se deben observar para formar criterios sobre el

tratamiento de las declaraciones previas, aspectos que a veces pasan desapercibidos en la práctica y que pueden ser fundamentales en el juicio oral, en el que entra en pugna la finalidad probatoria propuestas por las partes en conflicto, y por otra parte el deseo de administrar justicia con estricto apego al derecho; así como el equilibrio adecuado entre el interés público (las necesidades de la acusación) y el derecho de defensa (interés del acusado).

1.4. Limitaciones del estudio

- Escasa bibliografía vinculada al uso de las declaraciones previas y al tratamiento probatorio de la declaración del acusado en juicio oral; lo cual dificultó desarrollar el contenido teórico del tema a tratar.
- El tema de litigación oral muchas veces queda supeditado a criterios extranjeros y que son reproducidos en los pocos libros nacionales que sobre el particular existen.

Anexo 2: Instrumentos de Recolección de Datos

Guía de cotejos para el recojo de la información encontrada en las sentencias analizadas

Expediente judicial N°.....

Distrito Judicial de Lambayeque, Juzgados Penales de Chiclayo

Aspectos de investigación a recoger como datos:

1. Incorporación de la declaración previa del acusado por ejercicio de su derecho a guardar silencio
 - Se incorpora
 - Por uso de su derecho a guardar silencio
 - Por otro motivo
 - Observaciones.....
2. Control de legalidad, por parte del Juez Penal o de la defensa técnica del acusado, sobre la declaración previa que se ingresa al plenario por silencio, contradicción o refresco de memoria
 - Se controla legalidad de preguntas y respuestas
 - No se controla legalidad
 - Observaciones.....
3. Se corre traslado previo, a la defensa técnica del acusado, la declaración previa que será ingresada al plenario
 - Se corre traslado
 - No se corre traslado

Observaciones.....

4. Finalidad de la declaración previa

-Establecer contradicciones

-Refrescar la memoria

Observaciones.....

5. Explican la naturaleza del silencio del acusado y la relación con la declaración previa

-No explican

-Sí explican

Observaciones.....

6. Tratamiento probatorio de la declaración previa ingresara al plenario vía oralización

-Como medio probatorio

-Como medio de defensa

Observaciones.....

Anexo 3: objeto de muestra, estudio y análisis (20)

- 1.- Exp. 06499-2014-33-1706-JR-PE-08** - Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial De Chiclayo Y Ferreñafe.
- 2.- Exp. N° 3500-2017-28-1706-JR-PE-01** - Primer Juzgado Penal Colegiado De Chiclayo
- 3.- Exp. N° 02085-2018-4-1706-JR-PE04** - Noveno Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
- 4.- Exp. N° 3955-2015-86** - Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
- 5.- Exp. N° 1103-2017-53** - Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
- 6.- Exp. N° 972-2015-81** - Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
- 7.- Exp. N° 7369-2016-47** - Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
- 8.- Exp. N° 05688-2015- 40-1708-JR-PE-01** - Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
- 9.- Exp. N° 13112-2018-6-1708-JR-PE-01** - Segundo Juzgado Colegiado Penal de Chiclayo
- 10.- Exp. N° 0981-2018-91-1706-JR-PE-01** - Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
- 11.- Exp. N° 5357-2016-28-1706-JR-PR-01** - Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
- 12.- Exp. N° 10834-2018-21-1706-JR-PE-01** - Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
- 13.- Exp. N° 6794-2018-94-1708-JR-PE-01** - Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
- 14.- Exp. N° 9675-2018-55** - Juzgado Penal Colegiado Vacacional de Chiclayo
- 15.- Exp. N° 11712-2018-63-1706-JP-RE-08-** Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo
- 16.- Exp. N° 3911-2018-20-1706-JP-RE-08** - Segundo Juzgado Colegiado Penal de Chiclayo
- 17.- Exp. N° 4384-2016-52-1706-JR-PE-06** - Primer Juzgado Penal Colegiado Permanente de Chiclayo
- 18.- Exp. N° 1080-2017-75-1706-JR-PE-02** - Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo
- 19.- Exp. N° 8735-2016-94-1706-JR-PE-02** - Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo.

20.- Exp. N° 11703-2018-40-1708-JR-PE-01 - Segundo Juzgado Colegiado Penal de Chiclayo.